

JOSÉ ORTEGA

EL ABOGADO Y EL MAR

VOCABULARIO

DESLINDE	Procedimiento administrativo o judicial para delimitar lindes entre parcelas. Los deslindes pueden establecer límites entre propiedades particulares, sin son de derecho civil, o entre la propiedad privada y la pública, si son deslindes de montes, de ríos o de costas.
ZONA MARÍTIMO TERRESTRE	Espacio de la tierra bañado por el mar en su flujo y reflujo, o alcanzado por los temporales. Es un espacio de dominio público.
DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE	Concepto acuñado por la ley de costas de 1.988, que comprende el llamado dominio público natural (playas y zona marítimo terrestre) y el dominio público artificial (acantilados, terrenos ganados al mar, terrenos comprados para unirlos al dominio público, etc.).
RIBERA DEL MAR	Concepto acuñado por la ley de costas de 1.988. Dominio público natural, formado bien por zona marítimo terrestre o bien por playa o dunas.
DEMANIO	Conjunto de bienes de dominio público
BIENES DEMANIALES	Bienes de dominio público
APEO	Acto propio del expediente de deslinde, en el que se reúne a los vecinos para mostrarles la propuesta de delimitación.

INDICE

CAPÍTULO	PÁGINA
PREVIAMENTE	3
CARGANDO CONTRA LOS MOLINOS DE VIENTO	6
I DEFINICIONES IMPRECISAS	18
II ABUSOS	38
III REINOS SUBMARINOS	90
IV 1 = 0,5	103
V LA LAYA SIN CEMENTO	135
VI LA CIUDAD CONDENADA O	155
VII EL EXTRAÑO CASO LABARGA	
VIII LA PLAYA PARADÓJICA	184
IX NO MÁS PAELLAS	227
X DELICIAS CANARIAS	266
XI UNA DEL OESTE	304

PREVIAMENTE

TRES MOMENTOS PARA LA VERGÜENZA

Cuando estaba en la Universidad y tenía la dicha de vivir en un pueblo pesquero entre Murcia y Almería llamado Águilas (antes de que los reyes del ladrillo lo asolaran) solía ir a pasear con mis amigos a una zona de costa medio salvaje llamada el Pozo del Esparto, donde podías encontrar la naturaleza en estado más o menos original.

Un día vi que en el linde de la playa se estaba construyendo una vivienda y sabía que la construcción era ilegal, pues como mínimo estaba invadiendo la zona de veinte metros llamada entonces servidumbre de salvamento, donde la construcción estaba prohibida por la antigua ley de costas de 1.969.

Aún más tarde, acabada la obra, uno de mis amigos estaba paseando por la orilla cuando se le acercó un guardaespaldas muy bien vestido con traje de

chaqueta y lo echó, advirtiéndole que la playa era privada. El individuo había salido de la vivienda ilegal.

Tres momentos, y tres momentos para la vergüenza: mis paseos juveniles, la construcción clandestina y el abuso del guardaespaldas. Me sorprendió, o más bien me irritó que, mientras veía cómo semana a semana avanzaba la construcción, ni el vigilante de costas, ni la guardia civil, ni la policía local, ni el ayudante militar de marina de Garrucha (que tenía la responsabilidad directa) hicieran nada. Estaba al tanto de que la guardia civil de la zona lo sabía todo, pero la obra, con todo su ruido y su aparato, por lo visto no la vieron. Es dudosísimo que la vivienda tuviera licencia de obras, y, conociendo como conocía entonces a conciencia la ley de costas de 1969 y su práctica, sospecho que nunca habría obtenido la autorización especial para obrar en la servidumbre de salvamento.

Sólo después de la intervención estelar del guardaespaldas entendí que todos los vigilantes, policías, guardianes, funcionarios y autoridades se hubieran quedado de pronto ciegos, sordos y mudos. La casa debía pertenecer a uno de esos personajes para quienes la ley no vale más que un volumen de poesía autoeditado por su autor

Si no podemos y cuidamos un jardín, las malas hierbas lo arruinarán. Si no educamos a nuestros hijos, la civilización se extinguirá. Si no garantizamos con la ley y con todo nuestro esfuerzo el carácter público de las playas, las perderemos a manos de los señoritos y los poderosos. La barbarie siempre

tiende a volver y a comerse la civilización. Hay una inercia poderosa que nos devuelve a los inicios, cuando los fuertes señoreaban sobre los débiles con la única ley de su fuerza.

La ley es un instrumento de los débiles para prevalecerse de los abusos de los fuertes. Desde 1.880 las leyes en España han garantizado que la costa es de todos. De no ser por esas leyes, estos espacios estarían repletos de vallas, muros, advertencias, guardias jurados, perros adiestrados y guardaespaldas como el del Pozo del Esparto, y considero que es una suerte vivir en un país donde todo eso no es posible.

Sería horrible que alguien me confundiera con un asalariado del señorito de la casa clandestina. Este libro no tiene nada que ver con esa situación y preferiría que no se interpretase como una puesta en duda de que todos tenemos el derecho de disfrutar de la playa de manera libre y gratuita. Lo que aquí quiero denunciar son los abusos del otro extremo, cuando la ley se entiende como un instrumento de conquista y expolio, y cuando se confunde el poder con el derecho de hacer lo que uno quiera con la vida de la gente inocente

CARGANDO CONTRA LOS MOLINOS DE VIENTO

AQUÉL QUE LO HA VISTO TODO

Hay un mito sumerio, el poema de Gilgamesh, en el que el héroe hace un largo viaje en busca de la inmortalidad. El poema comienza con las palabras del narrador, *“aquel que lo ha visto todo...”*

Yo no puedo decir que lo haya visto todo, pero he visto mucho. Mucho de las miserias humanas, del lado oscuro, de los malos sentimientos que aguardan dormidos. No soy un abogado del tipo que la gente está dispuesta a esperar. Estoy contaminado de otras cosas ajenas al Derecho porque en realidad mi disciplina es la Historia, mi especialidad la Historia Antigua y Arqueología y mi vocación, los aspectos antropológicos de todo eso. Cuando ingresé en la Facultad de Derecho, el catedrático de Político lanzó una advertencia: en

aquellas aulas no tenían cabida quienes padecieran de sensibilidad literaria o de afición a desatinos como la poesía. El Derecho, decía, es un sistema, un bloque que lo comprende todo. Un bloque austero, me pareció entender, sin una palabra de más o de menos, lejos de las ensoñaciones de los poetas, que se recrean en el lenguaje sólo para complacerse en su sonido. Yo era todo eso: un aprendiz de poeta y un proyecto de escritor, así que desde el primer día me convertí en un intruso, y no creo que la situación haya cambiado.

Mis compañeros arqueólogos se convirtieron en profesores, catedráticos y directores de museos, y desde aquellos cargos se entregaron a esa vida dulcemente engañosa de los intelectuales ajenos al mundo. Sus vidas giran en torno a balsas de aceite como la cerámica griega de figuras rojas, el ritual funerario eneolítico o los estucos de las villas romanas. A mí, en cambio, mi título de abogado me condujo a la arena, a la lucha, al sudor, a esa escena cruenta donde nunca descansas, porque a un combate sucede otro combate, hasta que tanto sacrificio, tantas heridas, tantas lágrimas, te permiten un vislumbre del alma humana, y crees estar en esa situación del narrador del mito de Gilgamesh, *aquel que lo ha visto todo*.

Pero eso no me convierte en un abogado ortodoxo, porque me he traído conmigo a esta profesión la carga de humanismo con que me nutrí durante mi juventud.

LA IDEA DE LA JUSTICIA

Hay muchas motivaciones para ser abogado. Algunos se limitan a continuar la tradición familiar. Otros valoran el estatus social. Los hay interesados en los aspectos económicos, y les complace tantísimo estar en el mismo centro de esas operaciones urbanísticas tan lucrativas en torno a una recalificación. Yo nunca tuve una motivación coherente, ni la he tenido hasta comprender, con el paso de los años, la esencia de esta profesión, algo que no habría conseguido de no haberme dedicado durante largos años al estudio de la antropología. El psicólogo austriaco B. Bettelheim dejó escrito que el viaje del cuento popular, cuando el joven héroe deja su hogar y atraviesa el mundo en busca de un imposible, es en realidad la alegoría de un viaje en el tiempo, desde la juventud indefinida hacia la madurez, en la que al fin aflora nuestra auténtica y definitiva personalidad, quizás en el sentido propuesto por Unamuno en su expresión *conviértete en lo que eres*.

Ese viaje en el tiempo es un viaje iniciático que siguiendo el patrón del cuento maravilloso, nos sitúa a todos, o nos puede situar, a las puertas del castillo encantado, esto es, ante la necesaria madurez, a la que quizá podríamos llamar también *estado de héroe*. Pero esa conclusión no basta. Si queremos acceder al privilegio de una vida consciente tendríamos que ir más allá y preguntarnos qué significa ser héroe. Y la respuesta es sencilla: el héroe no es el que gana batallas, ni el que destruye enemigos, ni el que reparte mamporros, sino el que ayuda a los débiles. El cometido del héroe, lejos de lo que en la literatura francesa medieval se conoce como la *recreatio*, es decir la inactiva complacencia,

es el esfuerzo en favor de los necesitados. Entonces esa ansiada meta de la madurez, a la que se accede después de tantas zozobras, no es el fin del camino, sino el principio de otro mucho más estimulante, y la transformación del peregrino inseguro en auténtico héroe se revela como un instrumento para la solidaridad, la generosidad y la cohesión social.

En todo este discurso hay una palabra que resuena sin haber sido pronunciada. Es la palabra *justicia*. Quien lucha en favor de los débiles lucha por la justicia. Quien protege a los necesitados lucha por la justicia. Quien se rebela contra el tirano lucha por la justicia. Es el ideal de la caballería andante, pero el caballero andante es la reelaboración de figuras del mito, como Gilgamesh o Herakles, y estos últimos no son más que formas cultas del concepto del héroe joven y abnegado del cuento maravilloso, cuyas raíces se hunden profundamente en la prehistoria.

Es sólo que en nuestro mundo postmoderno a la justicia ya no se la sirve con la fuerza, sino con la palabra. Camilo José Cela nos pintó a un Pascual Duarte perfectamente rural, acostumbrado a resolver las discrepancias a bastonazos. Cuando emigró a una gran ciudad como Vigo, le llamó la atención que los hombres discutían, vociferaban, se insultaban, pero nunca se pegaban. Eran los nuevos códigos de una sociedad evolucionada. Hoy la fuerza no se usa como modo de promover la justicia, excepto en el cine, que no es más que una evocación del mito primitivo. En nuestros días, el método preestablecido para defender lo justo es el Derecho. Los abogados defendemos la justicia sin recurrir

a la espada, la pistola, el subfusil, la daga, el machete, la ballesta, el venablo, las piedras o la dentadura, como se hacía antes. Nosotros usamos la palabra.

Y así es como he llegado a descubrir por fin, después de bastante tiempo, cuál era mi motivación para convertirme en abogado. O, mejor, cómo he visto nacer una motivación que al principio no existía. Mi motivación es la lucha contra la injusticia y me es indiferente si esto suena *näive* porque de todo esto lo único que me importa es que ahora sé quién soy. Este proceso es común a todos los procesos iniciáticos. Al principio, el joven no sabe qué lleva dentro ni de qué es capaz. No conoce sus límites. Debe probarse, tantear. De hecho, muchas culturas primitivas creen que el niño que nace es un muerto que regresa a la vida y le dan un nombre provisional hasta que averiguan quién es él en realidad, lo que sólo tiene lugar con el tiempo, cuando su personalidad comienza a manifestarse. Entonces recibe como nombre definitivo el de su antepasado y de aquí el concepto de nombre-alma, es decir, el nombre como una de las cualidades espirituales de la persona.

Me he probado, he dudado y sufrido y por fin sé quién soy. Esta lucha, especialmente desde que fundé la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, me ha transformado, o quizá me ha hecho excavar un profundo túnel en mi propio interior para averiguar qué es lo que realmente había allí, de qué era realmente capaz, cuánto sufrimiento era capaz de soportar.

Siento contradecir a mi antiguo catedrático de Derecho Político, a quien admiraba y admiro, pero el experimento de un poeta metido a abogado parece

haber funcionado. Sin la carga filosófica que traje conmigo de la facultad de Letras, nunca habría conseguido ser consciente de todo esto. Y si sólo he logrado darme cuenta de ello con el lento transcurso de los años, probablemente esto tiene que ver con la advertencia que también hizo el primer día de clase aquel mismo catedrático: El Derecho es como la cerveza, amargo al principio y placentero una vez que uno se acostumbra. El Derecho ha llegado a ser placentero para mí, pero no porque me haya proporcionado estatus (voy a trabajar en bici), succulentas minutas (me he hartado a trabajar gratis para gente sin recursos) u oportunidades paralelas de negocio (las intrigas urbanísticas me provocan alergia), sino porque me ha permitido ayudar a personas que han venido a mí en busca de alivio y transformar el conocimiento acumulado en una herramienta para hacer el bien y pararles los pies a toda esa grey de poderosos que se complacen en abusar de los débiles.

LA ÉPICA EN EL DERECHO

El modo de proceder del Estado en sus relaciones con los ciudadanos es desalentador. El Estado es sin duda un gigante dotado de un ejército de asesores, de masas de funcionarios, de incontables técnicos. Tiene a su favor un presupuesto inagotable, una plantilla repleta, el Boletín Oficial del Estado y los mejores medios materiales, todo lo preciso para cumplir con su obligación constitucional de servir con objetividad los intereses generales. Y sin embargo muy a menudo las actuaciones administrativas resultan arbitrarias, ilegales,

caprichosas o erróneas. Se adopta, por ejemplo, una medida ilegal a sabiendas, condenando a los administrados a recurrir ante los tribunales en unos pleitos tan largos que cuando se dicte sentencia firme los responsables de la decisión administrativa ya estarán fuera de la Administración, dedicados a otra cosa, y nadie les pedirá cuentas.

El inmenso poder del Estado es como el inmenso poder del bíblico Goliat. Sus fortalezas, desde donde se deciden, con justicia o sin ella, los destinos de tantos ciudadanos, son a semejanza de aquellos molinos de viento que el ingenioso hidalgo confundiera con gigantes. Frente al Estado, los ciudadanos aparecen como liliputienses incapaces de perturbar su pesada inercia. Pero esos liliputienses tienen en su mano las herramientas de la ley y el Derecho. Es muy cierto que con ellas se puede derrotar al gigante, y con esto nos encontramos en pleno escenario épico. Cuando me enfrento a la Administración, soy consciente de que tengo en contra a una legión bien entrenada y pertrechada, pero también de que para ganar una batalla hace falta motivación y convencimiento, y dentro de la Administración, por regla general, estas cosas no abundan. Cuando una gran potencia invade un país pobre, se produce una lucha de este tipo. Sus soldados no saben por qué están luchando, están ahí porque son profesionales y es su trabajo. Su obligación es apretar el gatillo y poco más. Pero los resistentes saben muy bien por qué luchan. Los invasores tratan de hacer puntería empleando cosas mundanas como las manos y la vista. Los oprimidos emplean el corazón. Y eso es justamente lo que hago yo. Empleo el corazón.

EL DERECHO DE LAS COSTAS MARÍTIMAS

La administración de las costas marítimas está encomendada al cuerpo de ingenieros de caminos, canales y puertos, y por tanto a profesionales adaptados a la lógica de los números y el cartabón. Su formación les conduce en muchos casos a anteponer la eficacia a cualquier otra consideración, como pueden ser los derechos individuales o las formalidades del procedimiento. Con esto no quiero decir que los ingenieros sean incapaces de respetar la ley, pero he visto decisiones que denuncian una mentalidad muy ajena y muy lejana al concepto de los derechos civiles.

En todo caso, mi experiencia defendiendo casos de costas marítimas es la de un planteamiento redoblado de la lucha de los enanos contra el gigante, porque en demasiados casos los ingenieros se dirigen contra barrios y pueblos humildes cuyos ciudadanos son también las víctimas propiciatorias de una política de costas bastante poco clara, que al tiempo que se ensaña con la clase media, parece dejar caer un tupido velo sobre las grandes operaciones inmobiliarias.

Es importante que todo esto se sepa, porque la mayoría aún cree que cada derribo de una vivienda en la costa es un éxito de la civilización contra la barbarie. Si los ciudadanos conocieran la arbitrariedad y los abusos a los que se entregan los ingenieros de costas cambiarían de ideas, y es urgente que lo hagan, aunque sólo sea por servicio a la verdad.

Es difícil convencer a la sociedad de que una lucha contra la aplicación de una ley progresista como la ley de costas es una lucha honesta. Hoy no se entiende la honestidad social al margen del medio ambiente. Se aplauden los derribos en las playas, pero sin pensar, como en un acto reflejo. El hecho de derribar construcciones que se pretenden ilegales despierta un entusiasmo atávico vinculado con las frustraciones y la decepción ante un mundo pervertido y controlado por los especuladores y los políticos que se venden. Es como la venganza de los que no tienen nada.

Estoy luchando contra la aplicación de la ley de costas y sin embargo mi lucha es honesta. Tal vez deba entonces explicar cómo es que estoy tratando de impedir los derribos en las playas.

Todo abogado está condenado a defender, aunque sea ocasionalmente, causas injustas, pero en el tema de costas marítimas me he encontrado con que el gobierno no sólo no suele tener razón, sino que acostumbra, como he dicho, a aplastar a los humildes y desamparados. Y no se trabaja igual cuando estás defendiendo al que sufre. *El monje que vendió su Ferrari* nos cuenta la historia de un abogado que adquiere la iluminación espiritual después de dejar su profesión y pasar unos años en el Himalaya. Este abogado le cuenta a su antiguo compañero que si consigue ciertos dones espirituales a través del control y la disciplina de la mente, dejará de trabajar. Su compañero le pregunta si eso significa que se jubilará y él contesta que simplemente encontrará tal delicia en su trabajo, que éste dejará de ser trabajo. Yo no he pisado el Himalaya

ni he obtenido la iniciación espiritual, ni tampoco he tenido nunca un Ferrari, ni ganas, pero ayudar a las personas que sufren por culpa de los poderosos señores, para mí no es un trabajo, sino un placer que me hace sentir tan lleno y satisfecho como si saliera de un monasterio budista.

EXPERIENCIAS Y LÁGRIMAS

A menudo, especialmente en los últimos tiempos, cuando la lucha se ha agudizado y se ha transformado en guerra abierta, he sentido la cercanía de las lágrimas. Unas por la ternura de las personas a las que he ayudado: En un rincón más o menos remoto de Tenerife un grupo de mujeres entradas en años empeñadas en que soy un enviado del cielo rezan cada noche por mí, para que las fuerzas no me abandonen. En otro rincón aún más perdido, una viejecita cuya casa he salvado de la piqueta me dedica una poesía, lo que tiene un mérito doble, porque no sabe leer ni escribir. Otras veces las lágrimas vienen por las traiciones de los que estaban conmigo y no sólo me abandonaron por el camino, sino que se transformaron en enemigos mucho más feroces que el propio gobierno y sembraron el país de difamaciones contra mí, acusándome de todo: de corrupto, de sacacuartos, de no resolver nada, de ofrecerme a los afectados como vendedor puerta a puerta, de no haber ganado un solo litigio ni ser capaz de hacerlo, de haberme montado un negocio con la ley de costas y de muchas cosas más. De los imitadores *made in Taiwan* que han florecido a mi alrededor es mucho mejor que no cuente nada, pero los hay, y andan sueltos. Para toda esa

paranoia sólo tengo una explicación: Yo digo que la injusticia me ofende y la gente parece no creerlo. La consigna es demasiado simple, o demasiado juvenil. Ni el ideal de caballerías se adapta a los tiempos, ni mis congéneres parecen dispuestos a aceptar que yo carezca de móviles mundanos. Parece como si mis enemigos estuvieran investigando un motivo tan secreto como turbio y rabiaran por encontrar una verdad que no existe.

Fueron precisamente esos enemigos quienes me hicieron percibir una verdad oculta: Yo, aunque luchaba por las personas, en realidad iba sin saberlo más allá. Como impulsado por el imperativo categórico de Kant, ya no estaba peleando por un caso u otro, sino por la justicia, pero no la de un caso concreto, sino por la idea misma de la justicia. Incluso, llegado el caso, sin clientes, como un loco, un obseso o un iluminado. Conozco el peligro que esta actitud encierra. Dejar de ser un Alonso Quijano que se limitaba a leer libros en la sala de estar para salir y galopar por ahí montado en un caballo canijo y lanzando consignas dementes. Creerse tocado por Dios y en poder de la razón con exclusión de los otros, un reflejo de los monstruos que estoy intentando combatir. Pero la locura en pequeñas dosis es imprescindible para mover algo que no sea el cepillo de dientes. Nietzsche dejó escrito que *sólo quien lleva dentro el caos puede parir una estrella*. Yo no pienso parir nada, y mucho menos una estrella, que duele mucho, pero por lo menos he entendido la metáfora.

PLAN DE LA OBRA

Este libro está dividido en dos partes. La primera es un repaso general a las catástrofes que se producen cada día en aplicación de la ley de costas y un relato de mi lucha global contra ellas mediante la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas. La segunda consiste en un recorrido por las experiencias profesionales y humanas más interesantes que he vivido como abogado.

Todo el que tenga o haya tenido un problema con la aplicación de la ley de costas se sentirá acompañado en su sufrimiento y sobre todo estimulado al ver cómo es posible plantar cara a los todopoderosos señores. Mis compañeros de profesión quizá valoren algunos datos y procedimientos útiles para futuros casos, aunque es probable que encuentren el texto demasiado literario. El público en general podrá encontrar un ejemplo aleccionador de cómo la sociedad puede prevalecer frente al Estado y de cómo es cierto, muy cierto, que hay que luchar siempre, hasta el último minuto.

Así que este texto no es ni un manual técnico, ni un libro de memorias, ni un ensayo, ni mucho menos una novela. Es el libro que podría escribir un intruso como yo, un poeta metido a abogado, zarandeado por sentimientos semejantes a los que quitaron la cordura al ingenioso hidalgo y convencido de que es un caballero andante cuya espada es la palabra.

I

DEFINICIONES IMPRECISAS

El avión tocó tierra, el piloto metió el freno y mi ordenador portátil saltó del asiento y se deslizó pasillo adelante, como una tabla de surf electrónica. Mi culpa, por dejarlo a su suerte en el asiento de al lado, que iba vacío. Poco después salí al aeropuerto de Santiago de Compostela y me encontré con Enrique López Veloso, un tipo serio y responsable que trabaja en relaciones internacionales y vivía su particular infierno con los ingenieros de costas. Enrique me trasladó, bajo el incierto sol de los gallegos, a una playa en forma de arco cuyas arenas doradas terminaban en una zona boscosa. Allí es donde sus

padres tenían la casa, el jardín y el drama. Examiné los mojones pintados de blanco que señalaban el límite del dominio público. Estaban en medio del bosque. A un lado y al otro de los hitos podían verse las mismas hojas caídas por el otoño. Era un misterio por qué las marcas estaban ahí, donde aparentemente no señalaban ninguna frontera.

Enrique me señaló una zona arenosa justo delante de la finca. Había sido propiedad privada antes del deslinde. En tiempos, el Comandante Militar de Marina les había dicho a sus padres que debían dejarla expedita, por el pasillo de seis metros de la antigua servidumbre de vigilancia, y ellos habían obedecido. A pesar de que era parte de la finca, aquel espacio lo habían dejado fuera del vallado.

Mucho tiempo después, los ingenieros de costas hicieron en aquella playa una regeneración, es decir, que echaron arena traída en camiones. Por supuesto que el pasillo de seis metros recibió buenas cantidades y a continuación hicieron un deslinde en el que incorporaron al dominio público esa zona, justamente porque tenía arena. Es más: también descargaron los camiones en la zona boscosa junto a la propiedad. Cuando quedó trazada la línea del deslinde, los desafortunados propietarios se encontraron con que la mitad de la finca estaba dentro del dominio público. El motivo, que había arena junto a la casa, y, según un principio jurisprudencial, para determinar el carácter demanial o no de unos terrenos hay que estar a su composición mayoritaria. Esto no es algo que diga la ley. Lo dicen los jueces, pero es un principio que se ha impuesto. En este caso,

de forma tan imprudente como excesiva, se interpretaba que la composición mayoritaria era dunar porque alguien había echado arena en los terrenos de al lado. Se trata de una especie de broma pesada transformada en proceso totalmente serio. El silogismo es siniestro, por no decir idiota:

-Principio A: Los materiales sueltos de origen *artificial* son dominio público *natural* (contradicción intelectual que parece salida de la mente de un enfermo, pero muy propia de los procesos mentales patrios). Significa que si yo esparzo arena en una huerta, esa huerta queda automáticamente transformada en dominio público natural.

-Principio B: Para determinar el carácter demanial o no de unos terrenos hay que estar a su composición mayoritaria. Significa que si en medio de un arenal hay un edificio, el suelo que ocupa es también un arenal y por tanto dominio público.

-Fusión de principios A-B: En un bosque, una huerta o un hipermercado, los ingenieros de costas vierten arena procedente de cantera o de lo que Dios quiera, y los edificios de al lado pertenecen al dominio público porque a partir de ese momento la composición mayoritaria de los terrenos es demanial.

Algo parecido es lo que le sucedió a la familia de Enrique, lo que le habrá sucedido a muchos otros ciudadanos y lo que seguirá sucediendo en el futuro. Se trata de un ejemplo de las distorsiones que puede llegar a crear la aplicación de la ley de costas, lo que sugiere que gran parte de los problemas vienen de la propia redacción de la ley.

AMPLIANDO EL DOMINIO PÚBLICO

Las sucesivas leyes de costas han venido ampliando el dominio público costero. Primero (1880) solo tenía este carácter la llamada zona marítimo terrestre, consistente en el espacio bañado por el mar en su flujo y reflujo y el alcanzado por las olas en los temporales ordinarios. Más adelante (1969) se definió también como dominio público la playa o espacio de materiales sueltos con vegetación nula o escasa y característica. Finalmente la vigente ley de costas (1988) alteró las definiciones tanto de zona marítimo terrestre, como de playa, ampliándolas considerablemente.

En apariencia se trata de un proceso natural de proteccionismo creciente de los espacios costeros, un proceso que debía ser bienvenido por la sociedad que se beneficia de esos cambios. Pero en mi opinión los más recientes constituyen una iniciativa desacertada, un caso de poca finura jurídica y una fuente de problemas innecesarios.

CAMPO Y PLAYA

La primera definición de playa como espacio demanial (terrenos integrados por materiales sueltos con vegetación nula o escasa y característica) experimentó con la ley de 1988 una notable ampliación al ser sustituida por otra en la que prácticamente cabe todo (incluye los espacios de materiales sueltos con

vegetación o sin ella, “*formados por la acción del mar o del viento marino u otras causas naturales o artificiales*”). Además, al concepto de playa se adicionó la duna.

La vegetación característica de la playa es conocida y está bien identificada en los manuales. Por tanto la definición de 1969, aparte de ser razonable, era precisa y proporcionaba seguridad jurídica porque los límites de lo público eran sencillos de determinar: Tan pronto como hicieran su aparición especies vegetales no características, ya nos encontrábamos en un espacio distinto.

La actual definición de playa, obediente a la manía de expandir más y más el dominio público, no sólo se dirige contra la realidad científica (los espacios de materiales sueltos ocupados por especies vegetales no características, por ejemplo, por coníferas, no parece que sean una playa), sino que resulta un concepto jurídico indeterminado porque casi cualquier terreno, tanto de la costa como del interior, admite ser definido como *zona de materiales sueltos, con vegetación o sin ella*. Los campos de cultivo de las zonas costeras, con la tierra esponjada, oxigenada y suelta por el trabajo del arado, son una zona de materiales sueltos que cualquier desalmado, o cualquier tonto, podría sumar al dominio público.

La definición legal exige que los materiales sueltos se hayan formado como consecuencia de la acción del mar o del viento marino, lo que parece apropiado, pero a continuación añade la tenebrosa expresión “o por otras causas naturales o artificiales”, lo que nos sitúa ante el abismo o ante el capricho del funcionario de turno, o ante la posibilidad de unos bandazos judiciales que efectivamente se

han producido. De hecho, la estructura de la definición es boba. No entiendo por qué tantas precauciones para citar el mar y el viento marino cuando se cierra admitiendo cualquier causa, sea natural o artificial. Siguiendo la consigna de Baltasar Gracián (lo bueno, si breve, dos veces bueno), el legislador debía haberse ahorrado el discursito y haber cortado por lo sano, diciendo lo que realmente quiso decir, esto es, que el dominio público está formado por cualquier acúmulo de materiales sueltos, sea cual sea su origen. Lo que pasa es que hacerlo así es abrir definitivamente las puertas a la arbitrariedad.

Mi sentencia de la Audiencia Nacional de 28 de abril de 1998 sobre el deslinde de Oliva sugiere que los depósitos de materiales sueltos no son dominio público si no tienen origen marino, pero otra posterior se muestra indiferente hacia el origen de los materiales, e incorpora al demanio costero una zona de depósitos procedentes de un río. Cambios de criterio de los tribunales, que resultan de obligado cumplimiento porque los propios tribunales tienen dicho que sus cambios de criterio en la interpretación de la ley son legítimos si están justificados.

El legislador de 1988 creo que se confundió y se creyó por encima de la coherencia, de la naturaleza y de la medida cuando definió los depósitos de origen artificial como dominio público natural. El rey que encontró el Principito en un asteroide era mucho más razonable. Ordenaba solamente cosas posibles, como que el sol saliera por oriente y se pusiera por occidente. Pero nuestro legislador era mucho más creativo. Lo mismo que el rey Midas era

capaz de cambiar la naturaleza de las cosas con sólo tocarlas (y así trocaba en oro cualquier material) él se creyó capaz de transformar lo artificial en natural con solo decirlo. Existiendo, como existe, una clara distinción entre las leyes de las Cortes (por ejemplo, la ley de la renta) y las leyes de la naturaleza (por ejemplo, la ley de la gravedad), yo creo que el legislador, aturdido por la soberanía popular que representaba, quiso situarse a medio camino entre una y otra. Y con ello no sólo cometió un exceso que le habrían recriminado todos los filósofos vivos y muertos, sino que condenó a los ciudadanos a aguantar abusos incomprensibles por cualquier mente de capacidad mediana.

En cuanto al aspecto de la vegetación, la evolución de la jurisprudencia ha sido paralela. Una sentencia de 1996, intentando introducir racionalidad donde no la hay, afirma que si en una zona de materiales sueltos aparece vegetación propia de las áreas del interior, esos terrenos no son demaniales. No cabe duda de que con esa afirmación el tribunal en cierto sentido violenta el tenor literal de la ley, cuando define la playa como zona que pueden albergar cualquier tipo de vegetación, pero parece que la intención era establecer unos límites claros que el propio precepto no aporta, algo imprescindible para que la norma cumpla su función.

La *indefinida* definición legal de playa destruye la certeza jurídica de la ley anterior y pone en las peligrosas manos de la Administración un cheque en blanco para trazar la línea por donde le plazca. No sé si se trata sólo de pésima técnica jurídica o si todo se hizo con la finalidad de otorgar a los ingenieros de

costas ese poder sobre vidas y haciendas del que tan mal uso han hecho en los últimos tiempos. El caso es que una ley que no define y acota es como un coche sin ruedas, un velero sin palo mayor o una paella sin arroz. Tomen nota de que una zapatilla, un lápiz o una bolsa de espinacas precocinadas deben pasar un control de calidad, pero una ley no.

Sea como fuere, la obsesión por ampliar el dominio público ha conducido a un desafortunado traslado de la decisión sobre lo que es playa y sobre sus límites. Ya no es la ley, con sus conceptos hueros, la que determina una cosa y la otra, sino el funcionario público de turno. Circunstancias como su personal visión de cada tramo de costa, su sensibilidad individual, su estado de ánimo o las relaciones con su esposa deberían carecer de toda incidencia en la definición del dominio público, pero en la práctica quién sabe qué influencia pueden llegar a tener por culpa de la falta de precisión de la norma. Se trata de unas malas bases para la convivencia y por tanto considero que la ampliación del concepto legal de playa, con esa redacción difusa, fue un error al que se debe una buena parte de los problemas de arbitrariedad que sufrimos.

SI NOS MOJAMOS PERECEMOS

Hace mucho tiempo, me metí en el barrio viejo de San Sebastián en busca de una librería en particular, la librería Bilintx. Hacía tiempo que quería ir allí, desde que estaba en la Universidad, porque sabía que era uno de los pocos sitios donde podría encontrar la obra de José Miguel de Barandiarán, el padre

de la antropología vasca. Estaba un poco cohibido. Dentro de la librería todos hablaban euskera y aquél era un barrio reconocidamente abertzale. Pero nadie me miró mal por preguntar en mi idioma, encontré lo que buscaba y salí de allí muy feliz, acarreando un paquete de catorce libros.

Sí, el barrio antiguo de San Sebastián es un barrio abertzale. Y el día 13 de marzo de 2008 a este barrio le sucedió algo inesperado. Se mojó. Vino un temporalazo y se mojó. Esto habría exigido que los ingenieros de costas comparecieran por allí pintando marcas en el suelo para señalar el nuevo dominio público. Pero no vino nadie.

La ley de costas asigna el carácter de dominio público al espacio alcanzado por las olas en los mayores temporales conocidos, al que llama *zona marítimo terrestre*. Con esto rompió una tradición ininterrumpida de todas las leyes y reglamentos de costas desde 1.880, que establecían como dominio público el espacio alcanzado por los temporales *ordinarios*. A mi parecer esta novedad constituye un error aún mayor que el anterior, sin duda debido nuevamente a la obsesión por ensanchar el dominio público bajo la creencia simplista de que *cuanto más mejor*.

La anterior definición, que se remitía al alcance de las olas en los temporales ordinarios, proporcionaba la imprescindible seguridad jurídica, justamente porque todo el mundo sabe, o puede saber, hasta donde suelen alcanzar los temporales. En cambio, los mayores temporales conocidos son impredecibles, y para hacerlo aún peor, los ingenieros de costas, con ese punto de locura de

conquistador extremeño, ignoran el claro plural de la ley (*mayores temporales conocidos...*), y creen que para considerar que un área es zona marítimo terrestre es suficiente un único temporal. Esto significa que nadie podrá estar seguro en su casa de la playa, porque bastará un solo episodio de mal tiempo extraordinario, de los que se ven últimamente, para que todo lo que se moje se vuelva público y la propiedad privada se derrita como un helado al sol.

EL TEMPORAL EXTRAORDINARIO DE NOVIEMBRE DE 2001

En noviembre de 2001, un temporal de extraordinaria virulencia azotó la costa del levante de España. La Demarcación de Costas de Valencia se empeñó en que las olas penetraron en el casco urbano de Oliva (Valencia), lo que consideró más que suficiente para declarar todo el área como zona marítimo terrestre.

Cualquier conversación con los funcionarios responsables de aquel expediente terminaba siempre en el aparente lloriqueo de la impotencia. *Qué le vamos a hacer, si la ley nos obliga*, decían, presentando el asunto como un *hecho de Dios* frente al cuál no cupiera a propietarios y funcionarios, más que resignarse. Como si la naturaleza ejerciera su tiranía contra todos, y todos fueran igualmente víctimas, los vecinos al perder sus casas y los funcionarios al haber sido elegidos por el destino como instrumento del expolio, más o menos a la manera del bíblico Abraham, que no tenía más remedio que apuñalar a su hijo en un altar de sacrificio porque así lo había ordenado Yahvé.

Así pues, nada que hacer. Todos esclavos, sumisos y obedientes ante la extensiva definición de la ley de costas y la mala sombra de los temporales extraordinarios.

EL TEMPORAL EXTRAORDINARIO DE MARZO DE 2008

El 13 de marzo de 2008, violentos temporales saltaron con holgura los paseos marítimos de Gijón, Santander, San Sebastián y otras ciudades de la cornisa cantábrica, y el mar se introdujo por sus calles, comercios y viviendas sin que la Dirección General de Costas hiciera nada. Como ya he dicho, en mi rueda de prensa de aquel mismo mes ante los medios internacionales denuncié esta pasividad y advertí de forma directa que José Fernández no tenía problemas para meterse con los vecinos de Oliva, pero le faltaba valor para hacer lo mismo en aquellas ciudades del norte, y especialmente en Sebastián. La Dirección General de Costas no sólo no reaccionó después del temporal. Tampoco después de mi intencionada provocación pública. Parecían estar tan paralizados como un conejo sobre el que una cobra ha fijado sus ojos ardientes. Creo que temían incluso pestañear por evitar que un gesto involuntario desatara consecuencias incontroladas.

Pocas semanas después, ya defenestrado Fernández, un periodista alemán consiguió entrar en el despacho de Martín Fragueiro, el recién nombrado Secretario General del Mar, y le preguntó si su departamento iba a incoar expedientes de deslinde para declarar dominio público los espacios inundados

de Gijón, Santander y San Sebastián. Contestó muy decidido que desde luego que no, porque se trataba de cascos urbanos, y por tanto de excepciones a la aplicación de la ley.

Cuando escuché esta respuesta me quedé traspuesto. La especialidad de Martín Fragueiro es la merluza, no el régimen jurídico de las costas. Proviene del sector de la pesca de altura, fue Secretario de Pesca Marítima y la carambola de la remodelación ministerial de 2008, que hizo desaparecer el Ministerio de Medio Ambiente, con posterior fusión con Agricultura y Pesca, había puesto en sus manos expertas en redes y besugos una materia como la del régimen jurídico de las costas, sobre la que no sabía ni media palabra. Un poco más tarde, cuando le vine con lo mismo en la entrevista que mantuve con él el 4 de noviembre de 2008 (por qué aquí sí y allí no), se le ocurrió contradecirme aludiendo a que la configuración geomorfológica de San Sebastián era muy distinta de la de Oliva. Me quedé más tieso aún. No sabía a qué venía ese rollo sobre la composición del suelo, cuando de lo que estábamos hablando no era de suelos, sino de olas. Si tu casa se moja, deja de ser tuya y eso es todo.

La entrevista con el periodista alemán había cogido claramente a contrapié a Martín Fragueiro pero, bien pensado, su respuesta es un síntoma interesante de lo que puede opinar sobre el tema alguien que no sabe nada y que por lo tanto se limita a echar mano del sentido común. En efecto, nadie entiende que un temporal extraordinario, único y esporádico, pueda bastar para definir como espacios públicos una parte de las ciudades, y para que los carniceros se queden

sin su carnicería, las peluqueras sin su peluquería y los fruteros sin su frutería. Cualquiera lo entendería así, excepto los ingenieros de costas.

Y, desde luego, resulta sangrante que el nuevo jefe del asunto dijera que los cascos urbanos de las ciudades son excepciones a la ley de costas cuando en ciudades como Oliva, que también es un casco urbano, su departamento seguía empeñado en meter la ribera del mar por dentro debido a los dichosos temporales extraordinarios de 2001.

Ni que decir tiene que la respuesta de Martín Fragueiro fue un candoroso error técnico, pues la excepción a la que se refería nunca existió. Su departamento simplemente debía abrir expediente y declarar dominio público las zonas inundadas con el mismo fatalismo con que lo hizo en Oliva. Pero evitó hacerlo porque resultaba muy, muy inconveniente y porque esta inconveniencia no había sido prevista por los pasados de rosca que redactaron la ley. Tomen nota: En Gijón, Santander, San Sebastián y demás resulta inconveniente *cumplir la ley*. Vean cómo la ambición de esos teóricos que redactaron el precepto ha terminado por transformar en rehén al propio gobierno de España, que debería haber adoptado en esas ciudades unas decisiones que no deseaba ni estaba dispuesto a adoptar ni tampoco tiene sentido adoptar. A vista del precepto, ni Martín Fragueiro, ni el gobierno, ni el Rey, ni la curia romana son nadie para decidir si se abre o no un expediente de deslinde en esas ciudades. Como en la mili, deben renunciar a pensar y limitarse a hacerlo. Así de demencial resulta todo.

Pero la cosa va más lejos. Los ingenieros de costas y los tribunales se han aliado para sentar otro principio que puede estar muy bien pero que se las trae: el dominio público lo es por naturaleza, y no porque así lo declare un deslinde. El deslinde se limita a declarar una realidad que ya existe.

En tal caso, no cabe sino admitir que las partes inundadas de Gijón. Santander, San Sebastián y demás son ya y desde aquel día 13 de marzo de 2008, dominio público, lo queramos o no, nos guste o no y resulte políticamente correcto o no. Si la Administración fuera realmente imparcial y coherente, se comenzarían a tomar las medidas acordes con tal carácter demanial, como por ejemplo aplicar sanciones administrativas para los que se atrevan a pintar las fachadas de sus casas o mandar las palas para demoler determinados inmuebles. El reglamento de costas admite que un instrumento tremendo como es la recuperación posesoria de oficio, que siempre termina con un derribo, se ponga en marcha incluso antes de aprobarse deslinde alguno, siempre que los terrenos sean “indubitadamente” ribera del mar. Se ha hecho efectivamente uso de este peligroso instrumento en zonas no deslindadas, pero no en un espacio próspero y chic como las ciudades cantábricas, sino en un rincón tan remoto como miserable de otro San Sebastián, San Sebastián de la Gomera y en las carnes de un viejo carpintero jubilado con voz de locutor radiofónico y humor a prueba de bombas (a pesar de todo), a quien conozco bastante bien. Allí la Demarcación de Costas de Tenerife tuvo a bien echar abajo, en enero de 2008,

una construcción antigua, documentada y registrada, en un espacio donde no había ningún deslinde aprobado.

En Gijón, en Santander, en San Sebastián, esto podría hacerse también. El carácter de ribera del mar de los espacios que se inundaron es efectivamente *indubitado*. Nadie puede dudar de que las olas entraron en estos terrenos, puesto que los medios de comunicación difundieron la noticia a diestro y siniestro, y cualquiera puede ver incluso ahora las fotos en el Internet.

Por tanto, de acuerdo con la montañita formada por un puñado de preceptos y definiciones mal redactados y por otro puñado de principios interpretativos que se han sacado de la manga los tribunales, todos de lo más progre, la situación es tan grave como que los terrenos en cuestión son dominio público, lo quiera el gobierno o no, y se abra expediente de deslinde o no. Y, como quiera que la ley de costas consagra la acción pública para que cualquiera pueda exigir el cumplimiento de la legalidad derivada de la misma, cualquier pobre de solemnidad calzado con alpargatas y tonto perdido por más señas, podría poner en jaque al gobierno, a los ayuntamientos, a los partidos políticos y a los propietarios afectados simplemente con reclamar por escrito la apertura de expediente de deslinde o incluso para exigir que se reconozcan como dominio público esos espacios. La situación va de los esperpéntico a lo kafkaiano y viceversa.

Estas distorsiones no estaban previstas. Entre unos y otros han venido fabricando y afinando contra los ciudadanos una artillería cada vez más pesada,

sin darse cuenta de que al cañón podría pasarle lo que al ordenador central Hal, de 2001, *una odisea espacial*, es decir que se volviera contra sus creadores y les disparase en los morros, incluso sin necesidad de cantar el tema *Daisy, Daisy*. Y eso es justamente lo que está pasando en nuestro desafortunado país por culpa de unos legisladores irresponsables y de un gobierno que realmente no tiene ni idea de cómo manejar la situación.

Desde luego que esta circunstancia tan terrible, tan turbadora y tan comprometedora no habría sido posible con ninguna de las leyes de costas anteriores, que definían la zona marítimo terrestre como el terreno alcanzado por los temporales *ordinarios*, y esta enorme disfunción confirma que la ley, en lugar de servir para proteger el dominio público, es una fuente de problemas innecesarios, que si no se manifiestan en todo su esplendor es sólo a causa de la cobardía de un gobierno que no se atreve a cumplirla porque le da susto.

Pero al hacerlo así, es decir, al hacerse el tonto y mirar para otro lado en Gijón, Santander y San Sebastián, al mismo tiempo que hace lo contrario en ciudades modestas como Oliva, el gobierno está incurriendo en una arbitrariedad que simplemente repugna. Ni la democracia, ni el derecho, ni la constitución, ni la civilización, ni la dignidad, ni la decencia son compatibles con lo que nos están haciendo los ingenieros de costas: La misma ley, el mismo problema y unos ciudadanos privilegiados y otros castigados.

No sólo resulta imprescindible igualar a todos, sino modificar y adecuar esa inútil fuente de problemas que es la definición legal de zona marítimo terrestre.

LA DENUNCIA DE LOS CIUDADANOS

Como he dicho, la ley de costas consagra la acción pública para exigir su cumplimiento, lo que permite entre otras cosas que cualquier ciudadano que lea estas líneas denuncie la irregular situación de las zonas inundadas de Gijón, Santander o San Sebastián, para que la Administración abra el expediente de deslinde que en su momento se negó a abrir. El que lo desee puede probar, pero si quiere le adelanto lo que va a suceder: Nada.

Hay un pueblo llamado Puzol, al norte de Valencia, que conozco bien porque vivo cerca. Tenía una playa sin gracia ninguna, con pedruscos del tamaño de un puño, mezclados con escoria de los altos hornos de Sagunto, que quedan, o quedaban, solo un poco más allá. No, esa playa no valía nada. Pero el Estado estaba dispuesto a hacer algo al respecto. Pensaba quitar de en medio los pedruscos y sustituirlos por arena de cantera, esto es, piedrecita picada, para situar allí una playa en serio. Por supuesto, con paseo marítimo adicional.

Para proceder a ello, se echó abajo la primera línea de viviendas, que se encontraban dentro de la zona marítimo terrestre del deslinde antiguo. Hecho esto, los ingenieros de costas procedieron a regenerar la playa y a construir un paseo marítimo sobre aquella antigua zona marítimo terrestre (es decir, en zona prohibida por la ley de costas, como se verá en otro capítulo).

Poco antes del derribo efectivo, y desde luego antes de las obras, algunos de los propietarios de la moribunda primera línea acudieron a la zona en un día de

fuerte temporal y filmaron en video cómo las olas alcanzaban y sobrepasaban no solo sus viviendas, sino también las de la calle de atrás, esto es, las de la segunda línea, que no estaban dentro del dominio público. A continuación presentaron ante la Demarcación de Costas de Valencia un escrito acompañado de la filmación, solicitando que se incoara expediente de deslinde para que se declarasen dominio público las casas de atrás. Si los ingenieros de costas actuasen con objetividad, y si los expedientes de deslinde se limitasen a determinar de manera imparcial el alcance de los temporales, habrían tramitado la petición, puesto que las pruebas parecían no sólo contundentes, sino mucho más eficaces que las que suele emplear la Administración. Ahora bien, los trabajos estaban muy bien planificados, con su playa nueva y su paseo, y la denuncia trastocaba todos los planes, por lo que nunca se accedió a lo solicitado.

El ingeniero jefe de la Demarcación de Costas de Valencia tuvo que justificar con muchísimo esfuerzo dialéctico que los terrenos carecían del carácter de dominio público natural incluso aunque los temporales entraban por entre las viviendas. Creo que su informe es una obra de arte de la sutileza, más o menos como aquellos chistes políticos imperceptibles que Álvaro de la Iglesia solía publicar en *La Codorniz*. El documento dice así:

“Vistos los videos, se puede observar que el deslinde de 1994 se ajustó al límite de las olas en los mayores temporales conocidos. En los videos se oyen comentarios de hasta dónde corre el agua (del mar a tierra). El drenaje natural de la zona marítimo terrestre y

terrenos colindantes se realiza a través de la acequia Travesser, paralela al mar y por detrás de la línea de casas de la fachada marítima, y la transporta hasta dos golas. Cuando coincide un temporal de lluvia y de mar, estas golas no pueden efectuar el drenaje natural, ya que el nivel del mar está más elevado e impide la salida natural al mar de las aguas de lluvia, quedando la zona totalmente inundada. Al mismo tiempo, parte de la zona está ocupada por un vial y zona de aparcamientos y acceso delantero de vehículos que ha generado una compactación apreciable del terreno (menos permeabilidad) y una depresión respecto a la zona más alta del cordón y el límite interior del DPMT. Por esta razón, y cuando se producen esos episodios meteorológicos, el agua de lluvia y mar acumulada o embalsada en estas zonas, bajan o drenan de forma natural hacia la acequia posterior, Travesser, siendo ésta la explicación de las imágenes y comentarios que se pueden observar y escuchar, como que el agua corre en sentido opuesto.

Cuando el temporal va remitiendo y el nivel del mar también ha bajado de cota, los servicios municipales de limpieza comienzan a abrir zanjales transversales en el citado cordón de áridos o gravas, al objeto de permitir el vaciado total del agua restante que no ha podido ser drenada o vaciada naturalmente por la acequia citada.

El informe se hace extensivo a reconocer que las imágenes de la cinta de video “...son imágenes impactantes por cómo baten o han batido las olas sobre los paramentos y fachadas delanteras de las casas entonces sin demoler (...) confirmando que las mismas estaban en el DPMT”.

La Administración nunca tramitó la denuncia. Es lo que le pasará a los que

intenten hacer justicia en el Cantábrico. No les harán caso porque los ingenieros de costas se creen por encima de la ley.

II

ABUSOS

En enero de 2008 el Director General de Costas, José Fernández, como he comentado, salió a la prensa con el exclusivo fin de acusarme de buscar con la Plataforma lo que no podía conseguir ante los tribunales. Tenía razón. Aunque yo era el abogado que más veces los había vencido en juicio, desde hacía unos años no había nada que hacer, o casi. Ni para mí ni para nadie. Era como si los tribunales hubieran cerrado sus puertas a las quejas de los ciudadanos.

He seguido un proceso bastante desusado, de abogado a activista, sólo por mi afición a tener razón y mi correspondiente ansia de justicia. Empecé a tener una visión de conjunto de la aplicación de la ley de costas con mis primeros trabajos en Asturias, en los noventa. En 2006 comenzaron a llamarme de Canarias y mis horizontes se ampliaron. A partir de entonces pude tener una perspectiva envidiable que me abrió los ojos a una realidad que para la mayoría pasaba desapercibida. La mayoría miraba a la Dirección General de Costas y veía orden, responsabilidad y seriedad. Yo veía un cúmulo de calamidades. Sin esa

perspectiva, la lucha no habría sido posible y la Plataforma habría estado vacía de contenido. Se habría limitado a ser un saco de descontento con mucho ruido y ninguna capacidad de inquietar.

LEYES NATURALES Y LEYES DE CORTES

El Director General de Costas suele ser un ingeniero rodeado de ingenieros dentro de una torre de cemento (la de marfil pertenece a los poetas) poblada por ingenieros.

Como sucede a los militares, la divisa principal de los ingenieros es la eficacia. Ellos trabajan con unas herramientas extraídas de las matemáticas que nada tienen que ver con el derecho. Digamos que existe una diferencia sustancial entre las leyes de la naturaleza y las leyes de las Cortes. Las primeras son inmutables y necesarias, mientras que las segundas sirven a la convivencia en sociedad y se fabrican, se interpretan o se cambian en función de las circunstancias. Un robot, un ordenador, una máquina tragaperras o un cajero automático, adecuadamente programados, podrían calcular estructuras, diseñar puentes y desplegar alardes matemáticos relacionados con las inmutables leyes naturales, pero no sustituir a un juez en su valoración de la ley de los hombres y de los derechos de los ciudadanos.

Mi decepcionante experiencia es que la Dirección General de Costas ha venido aplicando las leyes de los hombres como si aplicara las leyes de Newton. Cuando mezclamos ese modo de proceder con una actitud robótica adobada

con arrogancia, el resultado es una Administración en guerra con los ciudadanos a los que debería servir (ciudadanos, sí. Nunca me gustó la expresión *administrados*. Sugiere un concepto de los adultos como niños necesitados de una fuerza superior que supla sus carencias).

Los políticos, quiero pensar que ignorando esta realidad, han dejado hacer y deshacer a los ingenieros de costas, y con el tiempo han permitido la formación de lo que parece un núcleo de poder autónomo dentro del Estado. Yo veo aquí un error fundamental del propio Estado, al no revisar lo que hacían estos ingenieros y sus consecuencias. Naturalmente que los gobernantes recibían con gusto sus estudios y estadísticas sobre los kilómetros de costa deslindados, las playas regeneradas y el dominio público recuperado, pero probablemente ignoraban que muchos deslindes se aprobaban arbitrariamente, que muchas playas no recibían un grano de arena y que algunas demoliciones resultaban caprichosas.

Los ingenieros de costas han ido modelando la realidad de las playas con la sensibilidad de una tostadora de pan, mientras (según pienso) los políticos se dedicaban a otra cosa creyendo que el asunto estaba en buenas manos y que todo iba como una seda. Imagino que con esto los ingenieros han llegado a convencerse de que podían hacer estrictamente lo que quisieran porque nadie los iba a controlar ni les iba a preguntar. Solo así puede explicarse el espectáculo de arbitrariedad en que se ha convertido la política de costas, una situación a la que sólo podía haberse llegado a través de la combinación de

unos políticos que bostezaban mirando para otro lado, unos ciudadanos tan ignorantes como inermes y una Dirección General de Costas abandonada en manos de una casta de ingenieros con ideas tan claras como rígidas.

Creo que estaban convencidos de que podrían continuar así indefinidamente, sin supervisión desde arriba y sin contestación desde abajo, manejando los hilos a su capricho y modelando el país como plastilina. La única forma de pararlos era verlos, conocerlos y estar al tanto de sus obras, es decir, tener perspectiva. Y a mí (perdón por el protagonismo) los aviones, los viajes y el estudio de los expedientes me habían proporcionado esa perspectiva. Y es más, estaba dispuesto a quemarme en una lucha desigual con la razón como única arma. Yo no tenía ni tengo una casa en la costa. Tampoco me resultaba rentable distinguirme en exceso en una lucha contra el gobierno. Pero tampoco tenía vocación de esclavo, títere o tonto, que es en lo que iba a convertirme si me limitaba a continuar la nueva rutina, perdiendo pleito tras pleito. Y sobre todo, nunca fui una persona práctica. Por eso, todo lo que sabía lo saqué y lo puse a trabajar en nombre de la razón. Ellos tenían el aplastante poder del Estado. Lo que tenía yo era eso, la razón. Era un alfeñique que decía la verdad y que por algún motivo no les tenía miedo.

Por supuesto que esto no es un ataque corporativo. Por suerte, en la Administración sirven excelentes funcionarios que pertenecen también a ese cuerpo de ingenieros y carecen de ojeriza contra los ciudadanos. Pero no son la casta dominante.

EL PAPEL DE LOS JUECES

Un día estaba en Prado del Rey, haciendo una entrevista en directo para Radio Nacional de España. Juan Ramón Lucas, el director y conductor del programa, estaba ausente. En ese momento volaba hacia Estados Unidos para contar en vivo la victoria electoral de Barak Obama. Las preguntas que me hacía su sustituto eran todas de lo más previsible hasta que Carlos Santos cogió el micro y me lanzó un dardo envenenado.

-¿Los pleitos se están ganando o se están perdiendo?

Definitivamente, los pleitos se estaban perdiendo, pero yo no podía reconocerlo sin más. No puedes presentarte en una radio, quejarte de los abusos del gobierno y después admitir que los tribunales están dando la razón a ese mismo gobierno al que tú acusas. La audiencia tendría razones para sospechar que lo que buscas no es justicia, sino privilegios. De hecho, en la visión de Enrique Climent, presidente de *Abusos Urbanísticos No*, la defensa de la ley de costas es un asunto vidrioso porque por ahí pueden colarse los especuladores. Cualquiera que se creyera listo podría pensar que la Plataforma no era más que una escenografía hueca y que yo podría ser en realidad un tapado del gran capital ladrillero, ansioso por construir en la arena. La hipótesis es coherente con un país en el que todo el mundo miente y en el que los grupos de presión extienden su influencia por canales insospechados. En un clima así, la sorpresa es que todo fuera limpio y puro, como en realidad era.

Pero yo tenía una respuesta para Carlos Santos. Y esa respuesta es lo que transforma toda esta lucha en un drama, porque en apariencia ni siquiera los tribunales pueden hacer nada.

En primer lugar, como acabamos de ver, la ley de costas es ambigua al extremo en sus definiciones del dominio público natural, lo que, a la hora de aprobar un deslinde, permite a menudo que sean válidas una interpretación de la ley y también la contraria. Esto sucede en especial con uno de los asuntos más conflictivos: los edificios construidos en terrenos que pasaron a ser dominio público solo después de la ampliación de definiciones de la nueva ley. Si los ingenieros de costas deciden adoptar la solución dura, la ley la ampara y los tribunales no tienen sino que confirmarla.

En segundo lugar, como ya he dicho en un capítulo anterior, las deficiencias de fondo no son revisables por los tribunales. La aplicación de la ley se rige por un principio según el cual nadie puede alegar la igualdad en la ilegalidad, lo que significa que yo no puedo pedir que me permitan hacer algo fuera de la ley por la única razón de que a otra persona en otro sitio se lo hayan permitido. Lo que yo había visto por las playas era desigualdad, arbitrariedad y agravio comparativo a mantas. Mi principal argumento era ese espectáculo de capricho en el que los ingenieros de costas hacían aquí una cosa y allí la contraria. Pero eso no podía contárselo a los tribunales. En tu casa el deslinde se introduce doscientos metros tierra adentro, ocupando todo lo que parecen materiales sueltos, y en la playa de al lado, aunque aparezcan esos mismos materiales

sueltos, la línea se queda mucho más cerca del mar. Si vas y le cuentas eso a los tribunales, te pedirán que no les hagas perder el tiempo con lo que sucede en la playa de al lado. Debes limitarte a demostrar que el deslinde de tu playa es incorrecto. Los únicos derechos que te quedan respecto a los vecinos es exigir el cumplimiento de la legalidad, lo que, como hemos visto, tampoco es posible en la práctica porque los ingenieros de costas te van a ignorar.

Por eso los pleitos se estaban perdiendo y a pesar de eso teníamos razón. No era cuestión de tribunales. Era cuestión de apelar a la razón y denunciar todo eso ante la sociedad, que es justamente lo que me había llevado a la radio aquella mañana.

PRINCIPIOS INTERPRETATIVOS E IMPROVISACIÓN

Como he dicho, las definiciones legales de ribera del mar son imprecisas. Para intentar dotarlas de precisión han ido floreciendo por ahí unos principios interpretativos que resultan peligrosos por bastantes motivos. Un motivo es que estos principios no se encuentran en la ley. Son creación de los tribunales en forma de improvisaciones y ayudas para buscar una concreción que en la ley no existe. Otro es que aunque estos principios puedan servir para resolver un caso concreto, producen distorsiones al ser elevados a un plano general. Aún otro es que los ingenieros de costas suelen combinarlos y agregarlos entre sí para conseguir resultados aún más efectistas contra la propiedad privada, lo mismo

que un ama de casa que no se resiste a la tentación de echarle a las lentejas un cubito de concentrado de carne.

Estos principios son los siguientes:

-La edificación sobre terrenos que por su naturaleza son demaniales no priva a éstos de tal carácter.

-Cualquier operación de dejar caer arena sobre una superficie sólida debe entenderse como creación de dunas artificiales, por lo que los terrenos pasarán a constituir dominio público natural.

-Para determinar el carácter demanial o no de unos terrenos hay que estar a su composición mayoritaria.

Veamos cuáles son estas distorsiones.

EL TRATAMIENTO DE LA EDIFICACION CONSOLIDADA

Una pregunta fundamental es qué sucede con las viviendas construidas sobre espacios dunares en momentos en los que la duna no era dominio público. El nuevo deslinde de la ley de costas de 1988 ¿deberá respetar su existencia (interpretando que la construcción histórica sobre esos terrenos dunares les ha privado de su carácter demanial), o bien incorporarlos al dominio público (interpretando que la duna sigue siendo duna)?

Una respuesta de los años noventa es mi sentencia de la Audiencia Nacional de 24 de abril de 1998, que reprochaba a la Administración haber incluido en el dominio público un espacio "no de playa, sino de calle sin asfaltar" y también

una acera y un camino asfaltado, conceptos ajenos a la playa. Esta resolución, creo que con buen criterio, se limitaba a observar lo que había y juzgar en consecuencia. No revisaba situaciones anteriores a la ley de costas ni hurgaba en el pasado. Se limitaba a reconocer cómo son las cosas.

Pero esta forma de interpretar la ley pronto cayó en el olvido.

ILUMINADOS DE CÁDIZ

En otoño de 2008, al revisar un expediente de deslinde del Puerto de Santa María (Cádiz), me encontré con el extenso informe de un ingeniero llamado Andrés Ortega, que era una soflama apasionada a favor de la aplicación retroactiva de la ley de costas. Estaba fechado en diciembre de 1990, muy poco tiempo después de la aparición de la ley, y contiene expresiones tan rotundas como ésta: *“la ley nueva declara retroactivamente esas características para playas y zona marítimo terrestre y dice que jurídicamente ya estaban incluidas esas dunas y esos temporales en las definiciones olvidadas del Código Civil”*. Seguidamente, y sin que al autor esto le parezca contradictorio, afirma *“Y no es que la ley de costas sea retroactiva, sino que se recuperan las definiciones más exactas del dominio que son tradicionales como se dijo antes en el Derecho antiguo, incluso el romano, y que por otra parte tienen carácter más científico al seguir las definiciones de la geomorfología, incluyendo los elementos que se forman por la acción del oleaje y del viento y los depósitos desde tiempos incluso geológicamente remotos como el periodo diluvial y aluvial de la era cuaternaria, bienes que son de los llamados naturales o formados por la*

naturaleza en el litoral, que tradicionalmente y físicamente nunca han sido susceptibles de apropiación privada". Más adelante, refiriéndose a unos bloques de apartamentos, se dice que "están contruidos encima de la playa (...) con permiso de dispensa de salvamento para edificar de la Comandancia de Marina; pero que ello no obsta para que esa primera fila se declare dominio público marítimo terrestre porque las características físicas subyacentes y anteriores son de playa". En cuanto a las acciones a emprender sobre los edificios ya contruidos: "se va a recuperar lo que toda la vida ha sido, de forma natural, ribera del mar".

Las referencias de la ley de costas al derecho romano y al Código Civil a las que se refiere el informe, están contenidas en su exposición de motivos: *"En las cuestiones de dominio, además de definir la ribera del mar de forma más acorde con su realidad natural, se vuelve a los orígenes de nuestra tradición, recogida en el Derecho romano y medieval, al reafirmar la calificación del mar y su ribera como patrimonio colectivo, siguiendo el mandato constitucional, en concordancia con el artículo 339.1 del Código Civil. La Ley cierra el paréntesis de signo privatizador que inició la Ley de Aguas de 1866 con un equívoco respecto a los derechos legítimamente adquiridos, que no deberían ser otros que los concesionales, continuado por las Leyes de Puertos de 1880 y 1928, así como por la Ley de Costas de 1969, a pesar de los graves problemas que ya existían en esta época y de la postura contraria y prácticamente unánime de la doctrina".*

La exposición de motivos de toda ley no es una norma, sino una explicación. En este caso, es también una lección de historia, muy útil e ilustrativa, pero sin

fuerza de obligar. Cuando leí el informe, cuajado de referencias legales y sutilezas interpretativas, creía que su autor era un abogado, pero me equivocaba. Era un ingeniero de caminos. Un ingeniero de caminos metido a jurisconsulto y a mi juicio metiendo la pata en cuestiones que no eran de su competencia profesional.

La ley debe ser comprensible para todos. Si cruzar semáforo en rojo está prohibido, cualquiera debe poder entenderlo. Pero saber leer una ley sólo indica que no somos analfabetos. Interpretarla en relación con los antecedentes históricos y las demás normas concurrentes es algo ligeramente diferente. Cuando estudiaba en la Facultad escuchaba mucho hablar de la ciencia del derecho. A mí el derecho nunca me había parecido una ciencia y la expresión me parecía pedante. Pero algo hay de científico en las complicaciones de la doctrina y en las elaboraciones de lo que se llama (también de forma pedante) la *dogmática jurídica*. Todo eso, perdonen, es inaccesible a los legos en derecho. Y los ingenieros de caminos, canales y puertos, aunque sean estrellas de las matemáticas, son legos en derecho. Siempre me ha asombrado la frivolidad con la que los periodistas divos disertan sobre temas legales. Pero al hacerlo no hacen daño a nadie. Los ingenieros de costas sí lo hacen. Sus errores han llevado el drama a muchas familias.

El documento de D. Andrés Ortega, con su impresionante despliegue teórico, viene a ser el cuerpo de doctrina de la aplicación retroactiva de la ley de costas. Se basa principalmente en la pretensión de que, en alguna forma no explicada,

el derecho romano sigue vivo y vigente (Incluso cuando se limitaba a afirmar el carácter público de las costas, sin especificar nada respecto a la duna o a los máximos temporales, lo mismo que el Código de las Siete Partidas).

Bajo las ramblas secas hay corrientes subterráneas de agua. Los ingenieros lo saben. No se pueden ver, pero están ahí. Quizá han pensado que el derecho romano era como una de esas corrientes de agua invisibles, y que durante estos dos mil años se ha mantenido en una especie de vigencia latente, atenuada, oculta, sutil, pero cierta. La caída del imperio y la abolición de su derecho parece que a los que piensan así los deja indiferentes. Y la realidad de que la vigencia de una norma es como el embarazo: o existe o no. Pretende el informe que toda propiedad privada en zonas arenosas es y fue siempre una mera ilusión, un error, un engaño de los sentidos, que las solemnidades notariales, el rigor de la ley hipotecaria, las certezas del Registro de la Propiedad, eran un sueño, o mejor, una broma pesada que el Estado había gastado a los ciudadanos y a sí mismo.

Desde los inicios, los ingenieros de costas se pusieron en marcha utilizando como arma esa peligrosa doctrina. Aprobaron en momentos tempranos deslindes retroactivos en El Puerto de Santa María, Barbate y la playa del Inglés (Gran Canaria) y los tribunales los respaldaron. Pero a continuación no sucedió nada, los afectados no salieron a la calle, nadie se soliviantó. El motivo, que los ingenieros de costas no tomaron ninguna medida restrictiva de la propiedad. El informe de D. Andrés Ortega impulsa la demolición de las viviendas para

recuperar la arena que había debajo. No se hizo tal cosa. El tiempo estaba quizá maduro para trazar un deslinde retroactivo, pero no para ir más allá, tirando las casas abajo, así que todo siguió igual. Con leyes anteriores, el deslinde no tenía efectos civiles sobre la propiedad y se limitaba al trazado de una línea. Después no sucedía nada, al menos cuando las propiedades estaban inscritas en el Registro. Lo que hicieron los ingenieros de costas fue, en apariencia, seguir la costumbre: trazaban una línea, se comían la propiedad y a continuación todo seguía igual. Esto fue lo que impidió las protestas. Los afectados estaban adormecidos. No sabían que en cualquier momento, cuando los tiempos sí estuvieran maduros, recibirían la visita de las palas mecánicas.

ARENALES DEL SOL

Los Arenales del Sol son una urbanización de diecinueve torres de apartamentos con ochocientas viviendas y locales comerciales, construidos en los

años setenta más allá del deslinde aprobado y por tanto sobre terrenos privados, aunque al parecer dunares.

En medio de circunstancias más bien turbias (ver el capítulo *La ciudad condenada*), el entonces Jefe de Costas de Alicante, Ángel Muñoz, elevó a Madrid una propuesta de deslinde en la que todos los edificios quedaban incluidos dentro del dominio público. Testigos cercanos me han contado que la

propuesta causó estupor en la casa, y me aseguran que ningún ingeniero se habría atrevido a aprobarla.

El Director General de Costas del momento, Fernando Marín Castán, no era ingeniero, sino abogado. Parece que con su profesión debía haber favorecido una interpretación de la ley de costas más respetuosa con los derechos de los ciudadanos, pero no fue el caso. Aprobó el deslinde de Arenales del Sol según la propuesta, y con esto facilitó a la corporación una especie de símbolo, ya que desde entonces los ingenieros de costas, en todas sus conferencias y seminarios, exponen el caso de Arenales del Sol como un ejemplo emblemático, aparte de virtuoso, de recuperación del dominio público.

Fernando Marín fue liquidado en su momento, pero Ángel Muñoz, bastante competente para prosperar bajo gobiernos de distinto signo, pasó a ocupar diversos cargos de relevancia en la Dirección General de Costas, siempre cerca del poder. No es difícil imaginar su influencia personal en la extraña política seguida en adelante, básicamente centrada en levantar la alfombra para ver qué hay debajo. Después de que los tribunales confirmaran el deslinde de Arenales del Sol, ya no hubo propietario de parcela, jardín, edificio o bosque a salvo de que los ingenieros de costas descubriesen que bajo su propiedad había una duna, una antigua duna, una duna prehistórica o una duna fósil. No importa que esa duna hubiera perdido definitivamente su anterior, primitiva, prehistórica o paleogeológica función en relación con la playa. Por todas partes, empleando como ganzúa (y la imagen no es casual) las sentencias que daban

por bueno el deslinde de Arenales del Sol, los ingenieros se dedicaron a investigar el pasado de cada palmo de costa, con el noble aunque me temo que poco realista objetivo de restaurar la realidad geomorfológica de los gloriosos tiempos de Adán y Eva en un país cuyas costas habían sido machacadas por constructores hiperactivos con amigos alcaldes, cuyos gobernantes, con renuncia a la industrialización, habían decidido transformarlo en un corral de agricultores subvencionados, albañiles de pelo en pecho y camareros de calamares de la romana, y cuya economía dependía de la construcción y el turismo. Precisamente en ese país los ingenieros de costas plantearon su desafío a la historia, metiendo el dominio público por detrás de las urbanizaciones y exigiendo su derribo para restaurar las antiguas dunas, como si fueran niños a los que su papá les hubiera regalado el juego *El pequeño ingeniero*. Y todo, según creo, manteniendo en la inopia a los preocupados ministros encargados de la economía, el empleo y el turismo, y responsables de que el dinero se siguiera moviendo, de que la lista del paro menguase y de que los turistas europeos portadores de euros siguieran aquí en lugar de marcharse a los nuevos paraísos de Croacia o el Mar Negro. A semejanza de ilusos con poder, los ingenieros de costas soñaban despiertos con un *país multicolor* que nunca existió, peligrosamente parecido al de la abeja Maya, y estaban dispuestos a todo para conseguirlo.

Este núcleo de poder casi autónomo empezó a sacudir de lo lindo en lo que me parece la época más virulenta, negra y abusiva de aplicación de la ley de costas,

que quedó inaugurada con el advenimiento al poder de esa tigresa de Bengala que fue Cristina Narbona.

Cuando Narbona llegó al Ministerio proclamó que su primer objetivo en materia de costas era limpiar el dominio público de ocupaciones ilegales, propósito sin duda loable y necesario que solo cabe aplaudir. Pero a continuación nombró Director General de Costas a D. José Fernández, otro que había estado pululando por la cúpula, y creyó por lo visto que dejaba el asunto en buenas manos. Fernández no era ubicuo, como Muñoz, sino socialista barbudo y convencido. Cuando era Jefe de Costas de Las Palmas, había sido puesto de patitas en la calle por Fernando Marín por adjudicar indebidamente una obra a la empresa de su padre. Sin duda que todos tienen derecho a rectificar sus errores del pasado, y Fernández parece que se volvió lo suficientemente virtuoso como para ser no sólo devuelto a la casa, sino designado su jefe supremo. Lo que sucede es que, a mi juicio, lo que él entendía por ocupaciones ilegales requeriría la urgente intervención de un médico, y así les fue a los pobres españoles y a los pobres ciudadanos europeos que habían elegido España para vivir.

El equipo de demoliciones había quedado conformado así: Ministra, Cristina Narbona. Director General de Costas, José Fernández. Subdirector General de Costas, Ángel Muñoz. Juntos se dedicaron a sembrar el pánico en todos esos terceros de buena fe que habían comprado una vivienda construida con sobrada legalidad antes de la ley de costas. Y para ello, de forma más o menos explícita,

emplearon como modelo el deslinde de Arenales del Sol, adecuadamente bendecido por los Tribunales, y considerado por lo tanto una verdad intangible.

CAMBIANDO LA LÍNEA EN EL SALER

La dehesa del Saler es un bosque mediterráneo junto a la albufera de Valencia. En los sesenta, el propio Ministerio de la Vivienda, junto al Ayuntamiento, decidió impulsar una urbanización de lujo en ese lugar. Dejando al margen la evidente mala pata de la iniciativa, la realidad es que los terrenos fueron subastados por el Ayuntamiento en convocatoria sujeta al compromiso de que los adjudicatarios de una de las parcelas construyeran en ella un hotel de cuatro o cinco estrellas y los de la otra una urbanización de viviendas. Los adjudicatarios cumplieron, y construyeron el hotel Sidi Saler y la vecina urbanización Casbah. Más tarde, las críticas sociales obligaron a abandonar el proyecto y los edificios se convirtieron en islas en medio de terrenos que ya habían sido talados, desbrozados y explanados.

Pasó el tiempo, entró en vigor la ley de costas y se inició un expediente de deslinde que pretendía incorporar al dominio público los terrenos tierra adentro de la playa, que se decía eran un campo dunar. En 1995 se propuso una línea que se llevó al apeo en 1997 y cuyo trazado confirma el desconcierto y el caos de la Dirección General de Costas. Después de que en años anteriores se hubieran aprobado ya los deslindes retroactivos del Puerto de Santa María, Barbate y la playa del Inglés, trazando la línea por el interior de los edificios, en

el Saler se llegó a una solución no retroactiva: la línea retrocedía, pero rodeaba los edificios, respetándolos y manteniéndolos por tanto en propiedad privada. Hace poco hablaba con un ingeniero de costas que me decía que esa solución no le extrañaba, porque en 1997 la Dirección General de Costas aún no se atrevía a ciertas cosas. Puede que en aquellos momentos les pareciera fácil meterse con los propietarios de la clase media andaluces y canarios, pero se tentaban las vestiduras antes de hacer lo mismo con un hotel de cinco estrellas y una urbanización de lujo. Puede, porque lo que sucedió a continuación parece confirmarlo: Una vez hecho el apeo y redactado el llamado proyecto de deslinde, en lugar de dictar resolución aprobatoria, los ingenieros de costas lo guardaron en un armario y lo dejaron allí durante ocho años. Sí, sí... Vivimos en un país donde la seriedad, el rigor y el respeto a los ciudadanos no son más que una leyenda urbana. Los ingenieros de costas pueden hacer incluso esto: confundir un expediente con una bandeja de champiñones y dejarlo en la oscuridad de un armario para sacarlo cuando les parezca y continuar la tramitación. Y creo que en efecto lo hicieron porque entonces no se atrevían a una acción dura contra aquellos afectados pero tampoco a aprobar una línea que resultaba contradictoria con las andaluzas y canarias. Creo que esperaron con paciencia hasta que los tiempos estuvieran maduros y la política de deslindes agresivos estuviera lo suficientemente consolidada por los tribunales.

Y no sólo los tiempos maduraron, sino que la casa se dotó de un capitán lo bastante aguerrido como para meterles mano sin pestañear a los vecinos del

Salas. Ocho años después, ese aguerrido capitán, José Fernández, ordenó abrir el armario, continuar la tramitación y cambiar la línea, metiéndola por dentro y comerse el hotel y la urbanización. Esto sucedió el día 3 de febrero de 2006. Disipando cualquier duda sobre el origen de su inspiración, el Sr. Fernández aclaró en el mismo escrito que el cambio se hacía a fin de seguir el precedente de Arenales del Sol. Comprobado: los ingenieros de costas estaban dispuestos a emplear la obra de la vida de Ángel Muñoz como una especie de sello de caucho para aplicar el deslinde retroactivo a cada playa (a cada playa que les pareciera, no a todas, como veremos).

El drama de todo esto, lo contradictorio, lo inaceptable, consiste en que la primera propuesta de deslinde, la que respetaba los edificios, era legal y podía ampararse en decisiones previas de los tribunales, y la segunda también. No se trata sólo de dos interpretaciones distintas de una misma ley, sino contradictorias entre sí. Y sin embargo ambas igualmente válidas.

¿Qué país puede permitirse una ley susceptible de ser interpretada y aplicada en un sentido y también en el contrario? ¿En qué país es posible mantener una birria de ley, con arreglo a la cual los edificios afectados por un deslinde pueden quedar tanto fuera como dentro del dominio público, y cualquiera de las soluciones será legal? Fácil: En esa España que insiste en su modernidad mientras no sólo no se olvida de seguir arrojando cabras desde el campanario de la iglesia, sino que permite que la política de costas la decidan unos ingenieros de caminos carentes de formación jurídica.

MUCHO SUSTO EN EL PERELLÓ

El compañero, un abogado experto y tranquilo a pesar de los expedientes apilados que ocultaban su mesa de despacho, me enseñó una hoja de papel. Era un plano donde se veían grafiados unos edificios y tres líneas que corrían de norte a sur, con distintos colores y trazados. Era la propuesta de deslinde elaborada por la empresa pública TRAGSATEC para el deslinde del Perelló (Valencia), y confieso que en mi vida yo no había visto una cosa igual. La Dirección General de Costas había desarrollado la saludable costumbre de encargar estudios geomorfológicos para averiguar la composición geomorfológica de los terrenos y recibir, como consecuencia de esos estudios, una propuesta de delimitación. Se supone que el trabajo de estas empresas externas es puramente técnico. Deben hacer fotos, realizar calicatas, estudiar la sedimentología, aportar el mapa geológico y todo eso. Como consecuencia, se propone una línea.

El caso es que la hoja de papel que estaba viendo contenía una propuesta de delimitación triple, a elegir. Una línea discurría totalmente por detrás de los edificios, la otra totalmente por delante de ellos y una tercera los iba rodeando.

En ese momento, primavera de 2009, el Parlamento Europeo acababa de condenar a España por aplicación retroactiva de la ley de costas y parece que el temblor había alcanzado incluso a la inalterable realidad geomorfológica. Aquel plano era el testimonio de que los ingenieros de costas estaban asustados. Los

tiempos, que aún no estaban maduros en 1997, cuando el primer apeo del Saler, y que lo habían estado en 2006, cuando la bravuconada de José Fernández, habían vuelto a cambiar. La historia estaba describiendo una especie de arco.

La confirmación llegó cuando poco tiempo después la Dirección General de Costas hizo su elección. Y la línea elegida fue la que iba rodeando los edificios, Es decir, la misma que quedó establecida en el apeo del Saler de 1997 y fue posteriormente desechada por demasiado tímida.

¿Cómo puede un gobierno hacer algo así? ¿Cómo puede aplicar la ley de forma tan caótica y falta de igualdad? El deslinde del Perelló puede ser la culminación de un camino de ida y vuelta, el fin de un proceso imperial de los ingenieros de costas y por eso, visto en la perspectiva histórica, tiene una explicación y una lógica. Lo más delirante, que carece de explicación y no tiene lógica alguna, no estaba en el Perelló, sino en Canarias.

SORPRESA EN FAMARA

A principios de mayo de 2009 volé a Lanzarote. Unos vecinos estaban muy preocupados porque el nuevo deslinde remetía al interior la línea de dominio público nada menos que novecientos metros, hasta dejarla al pie de los volcanes, y por supuesto que hacía desaparecer su propiedad.

El cliente quería que viera algo y me trasladó a una urbanización extensísima, de diseño, llamada Los Noruegos. Se extendía por la ladera de una loma que descendía suavemente hasta el mar y terminaba en plena playa, en una zona de

dunas. Quería que yo viera una casa en particular, que pertenecía, según me dijo, a un personaje importante. Vi la casa, la fotografié, y a continuación me di una vuelta por la parte de la urbanización más cercana al mar. Y al hacerlo me quedé atónito. Aquello era un auténtico campo dunar, con las rizaduras típicas del transporte eólico. Los acúmulos de arena eran tan grandes que habían sepultado los muros y ocupaban por completo alguno de los jardines. Pude ver cantidades inmensas de arena a sotavento, es decir, en las partes de la vía pública opuestas a la playa, lo que indica que esa parte de la urbanización estaba justamente en el corazón de un campo dunar activo. Esto me interesó mucho, porque una de las excusas que los ingenieros de costas habían empleado para tragarse los edificios del Saler era que éstos se encontraban en un campo dunar activo e interrumpían el transporte eólico.

Al día siguiente me apresuré a visitar la pequeña oficina de costas del Puerto del Rosario, ya que ardía en deseos de saber si esas zonas invadidas por las dunas habían sido declaradas o no dominio público. La respuesta fue negativa. Y no sólo eso. La línea entraba al interior, pero al llegar a la urbanización volvía hacia el mar, rodeándola, lo mismo que se había hecho con la primera delimitación del Saler.

Teniendo en cuenta los procesos históricos que he descrito arriba, pensé que el deslinde sería antiguo, probablemente de los noventa. Cuando leí la orden ministerial aprobatoria vi que no era así. Había sido firmada el 22 de noviembre de 2006. Y quien la firmaba era naturalmente José Fernández, el mismo

personaje que unos meses antes, el 3 de febrero del mismo año, había ordenado desechar la línea que rodeaba los edificios del Saler y trazar otra, más o menos recta, que los incorporase al dominio público.

No cabe actuación más contradictoria, ni más arbitraria. He dicho antes que probablemente el gobierno no sabía bien qué hacían los ingenieros de costas en sus despachos y este deslinde es la confirmación. No creo que ningún gobierno hubiese aprobado esta conducta tan dispar. En el Saler no existe transporte eólico. No se dan las condiciones porque la playa es estrecha y los vientos no superan el umbral de 20 Km. /hora, imprescindible para levantar la arena del suelo. A pesar de eso, José Fernández insistió en que los edificios interrumpían la formación de dunas a través del transporte eólico. En Famara existe un auténtico anexo del desierto del Sahara, con dunas en movimiento que amenazan tragarse los edificios. A pesar de eso, José Fernández aprobó una línea que deja estos edificios fuera del dominio público. Decisiones contradictorias adoptadas en el transcurso de tan sólo unos meses.

Mis clientes estaban muertos de miedo. Me decían que en aquella urbanización vivía gente muy importante y muy influyente de la política y los negocios. Nunca me dieron sus nombres, pero sí supe quién era el dueño de la vivienda que fotografié. Dueño aunque no figure a su nombre en el Registro de la Propiedad. Era José Fernández.

¿Quieren saber más? El apeo de Famara tuvo lugar dos días después de que yo tomara el avión de vuelta y los vecinos no lo podían creer: los mismos

ingenieros de costas que habían subido la línea novecientos metros, la volvieron a bajar ochocientos cincuenta metros de vuelta al mar. Las casas ya no estaban afectadas.

Creo que esto retrata con bastante fidelidad el horror, el espanto y el caos de la política de costas: La línea de Famara con el dominio público novecientos metros tierra adentro era legal. La línea que regresó ochocientos cincuenta metros hacia la costa también lo era. En el Perelló, cada una de las tres líneas que TRAGSATEC dio a elegir eran supongo que igualmente legales. En el Saler, era legal la línea de 1997, que salvaba los edificios, y también la ordenada por Fernández en 2006, que se los comía.

Estamos todos en manos del capricho, de la arbitrariedad, de la rapacidad, de la oportunidad, de los bandazos políticos, de la conveniencia del momento, de una locura, de una corruptela. La ley de costas es un instrumento con una ambigüedad a medida para que los ingenieros de costas sean dueños y señores de nuestras vidas.

INSTRUCCIONES SECRETAS

Una vez abierta de par en par la puerta a los deslindes retroactivos, los ingenieros de costas no sólo tuvieron vía libre sino que, como en toda secta, creo que se dictaron normas de conducta. En nuestro caso, instrucciones para que en cada playa se buscasen pruebas de que los terrenos construidos antes de la ley de costas habían sido en algún momento una duna. No conozco tales

instrucciones, ni puedo confirmar que existan, pero como buen arqueólogo, soy capaz de deducir su existencia por la impronta que dejan en los expedientes, lo mismo que el *cardium edule* deja su traza en la cerámica del neolítico o los helechos de los bosques miocénicos en los pedruscos formados en esa era.

En el expediente de deslinde de Bellreguard (Valencia) la Jefa de Costas de Valencia lanzó una propuesta que no se puede explicar si no hubiera acudido a un previo cursillo de adoctrinamiento en técnicas de desposesión. Se le ocurrió afirmar que un sector del casco urbano era dominio público no solamente porque en fotografías aéreas de los años cincuenta allí se veía una mancha blanca que le pareció una duna, sino porque el nombre que se daba al pasaje en los mapas antiguos estaba relacionado con la arena. Estaba empleando como prueba la toponimia. Propuestas de esa agresividad no se le ocurren a un funcionario por pura inspiración. Debe haber sido previamente adiestrado.

La propuesta era tan demencial que fue desestimada en Madrid por insuficiencia de pruebas, pero la Administración siguió incluyendo en sus propuestas todo tipo de medios de investigación de la realidad retrospectiva, incluyendo no sólo las fotografías aéreas de los años cincuenta, sino también el propio mapa geológico y por supuesto los informes técnicos a la carta, todo tendente a descubrir la realidad física anterior a la ley de costas.

En el subsiguiente régimen de terror nadie podía ya sentirse seguro. Bastaba que en aquella zona una foto hecha en la época franquista mostrara una mancha blanca, un geólogo declarara que en alguna era allí hubo una duna o incluso

que en algún plano antiguo el lugar se llamase montañar de la arena, o arenal de algo, para que la propiedad se perdiera o pudiera perderse.

A IMAGEN Y SEMEJANZA DE ARENALES DEL SOL

Los ingenieros de costas la emprendieron con Playa Lisa y Gran Playa, en Santa Pola. Según me dijeron, porque estaba tan cerca de los Arenales del Sol y el caso les parecía tan semejante, que una solución distinta les habría hecho quedar fatal. Y, en efecto, el caso era el mismo. Un deslinde antiguo, cuando los terrenos eran puro campo, el trazado de una línea que separaba lo privado de lo público, y la construcción en los terrenos confirmados como privados.

Este expediente se había tramitado durante *dieciocho años* antes de archivar en abril de 2005 por una caducidad que nunca existió (la institución de la caducidad no era aplicable a los deslindes de esa época). En la misma fecha fue incoado expediente nuevo que se archivó nuevamente por caducidad en junio de 2008. Una vez más, en la misma fecha los ingenieros de costas volvieron a intentarlo, abriendo otro expediente con la misma finalidad. En total veintinueve años largos de tramitación, manteniendo a los afectados en vilo. Como ya hemos visto, ésta es la forma que tienen los ingenieros de costas de entender los principios de celeridad y eficacia que rigen el procedimiento administrativo, y así es como interpretan los derechos individuales, incluyendo el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Para ellos el tiempo no existe. De hecho, la Administración es inmortal. Los ciudadanos, en cambio, nacen, crecen, se

reproducen y mueren. Y muchos de ellos pasan toda una vida de pleitos con costas simplemente a causa de la indolencia de los todopoderosos señores.

LA DUNA DE LA PLAYA DE OTUR

En Otur, una hermosa playa del concejo de Valdés, en Asturias, yo había conseguido anular el deslinde a final de los años noventa. Esperaron mucho para volver a intentarlo, unos nueve años. Y cuando lo hicieron, vinieron pertrechados por el nuevo método retroactivo, con una propuesta que incluso ampliaba la anterior, para tragarse zonas habitadas bajo pretexto de que se encontraban sobre una duna. No importa que esa duna fuera invisible, que estuviera sepultada bajo tres metros de derrubios caídos del acantilado a lo largo de los siglos y que en parte los terrenos afectados fuesen un bosque que incluía vegetación de helechos. Los ingenieros de costas, ayudándose del estudio hecho por la Universidad de Oviedo, pretendían que ese bosque, esas zonas habitadas y esa espesa capa de derrubios eran una duna y por tanto dominio público.

Recuerdo lo que sucedió después de que formulé alegaciones de defensa. Me contestaron con nada menos que tres informes bien densos y rezumando sabiduría. Uno de ellos redactado por el asesor jurídico junto con un abogado externo. Otro por una abogada externa y otro por la propia Universidad de Oviedo. Fue un honor comprobar cómo el Estado se gastaba una pasta sólo para

contrarrestar mi escrito de alegaciones. Fue entonces cuando me di cuenta de que me tenían miedo.

Y así fue sucediendo por toda España. Escarbando en busca de arena.

Por cierto, que este expediente sí entró en caducidad. El artículo 12 de la ley de costas quedó reformado en 2002, de manera que a partir de entonces todo procedimiento de deslinde debía quedar concluido dentro del plazo de veinticuatro meses. En los primeros momentos a la Administración, acostumbrada a tramitaciones de hasta dieciocho años, le costaba llevar este ritmo. Y en Otur recurrieron a un procedimiento sensacional. Primero, el 6 de septiembre de 2006, iniciaron las actuaciones, y un poco más tarde, el 27 de septiembre, dictaron la providencia de incoación. Todo en un intento idiota de fingir que la tramitación había comenzado más tarde de lo que había comenzado en realidad. Esto nos da una idea, nuevamente, del concepto que tienen los ingenieros de costas de la objetividad a la que la Constitución les obliga.

La Administración no pudo cumplir los plazos y notificó la orden ministerial aprobatoria después del 6 de septiembre. Cuando formulé recurso contencioso administrativo y, según la costumbre, la Dirección General de Costas remitió el expediente administrativo, comprobé que faltaba una parte. No me pareció casual que esa parte precisamente fueran los acuses de recibo de la orden ministerial, es decir, los documentos que demostraban que el expediente había

entrado en caducidad y la resolución era por tanto nula. Una nueva muestra de objetividad e imparcialidad.

El Estado tiene derechos que defender, pero no puede portarse como una mafia, ni siquiera como un particular, incluso cuando va a un pleito. Pero creo que en el caso de los ingenieros de costas, se trata de un caso perdido.

LA COMPOSICIÓN MAYORITARIA DE LOS TERRENOS

No sé a quién se le ocurrió acuñar la doctrina de que para determinar el carácter demanial o no de unos terrenos hay que estar a su composición mayoritaria. Imagino que fue a la Audiencia Nacional, que para eso tiene competencia única sobre los deslindes. Significa este principio que si tenemos construida una casa en mitad de un arenal o un campo dunar, se presume que fue construida sobre arena y por tanto esos terrenos construidos son demaniales.

Creo que la introducción de esta doctrina tan novedosa en su momento pudo ser una improvisación para salvar deslindes como los de Arenales del Sol pretendiendo no incurrir en una aplicación retroactiva de la ley de costas. Es evidente y todo el mundo entiende que si llevamos la aplicación de la ley a momentos anteriores a su entrada en vigor (a los años setenta, cuando se construyeron los edificios) la estoy aplicando retroactivamente, y esto está prohibido por la Constitución. Para evitarlo, pero al mismo tiempo convalidar

el deslinde, se trae a colación este principio sobre la composición mayoritaria de los terrenos y asunto resuelto.

Los Arenales del Sol no son una manzana cerrada, sino un conjunto discontinuo de bloques. Entre unos y otros se mantienen los espacios libres y esto es lo que propició que la Audiencia Nacional aplicara, y probablemente inventara, el principio de la composición mayoritaria de los terrenos. No es que los terrenos fueran un cordón dunar activo en los años setenta, antes de la ley de costas, sino que lo son aún hoy día, decía el tribunal, fijando su atención en aquellos espacios libres.

Este principio de invención jurisprudencial no tiene apariencia disparatada, pero ha dado lugar a una molesta paradoja: La costa del levante peninsular tiene la primitiva duna ocupada por construcciones. En esa zona se ha edificado con tanta intensidad y método que no queda un palmo libre y por tanto, aunque debajo de las viviendas se conserve la duna, la composición *mayoritaria* de los terrenos no es dunar. Ergo no puede afirmarse que dichos terrenos sean dominio público. Conclusión: Quienes han construido todo el espacio dunar resultan premiados. Quienes construyeron sólo un poco, dejando zonas testigo, reciben un castigo. La Audiencia Nacional no pensó en esta desafortunada consecuencia, y esta disfunción marca la diferencia entre resolver un caso aislado, como hacen los tribunales, y procurar una aplicación de la ley igualitaria, sin contradicciones ni incoherencias, que es lo que corresponde a los responsables políticos, y lo que desde luego no están haciendo.

¿Y esto cómo se resuelve ahora? Evidentemente, no con esa forma de trabajar, abandonando toda la cuestión a unos funcionarios públicos tan engrandecidos por el inmenso poder depositado en sus manos como ignorantes de las exigencias de coherencia interna del ordenamiento jurídico, y sobre todo indiferentes ante los problemas humanos y sociales. La ley exige, para su correcta aplicación, algo más que leerla como si fuera la revista *Hola*. Si alguien cree que para aplicar adecuadamente la ley basta con haberla leído, quizá también deba proponer la sustitución de los jueces por licenciados en filología hispánica.

PASEOS MARITÍMOS ILEGALES

-A usted, que es responsable del deslinde de Arenales del Sol, le debería doler que ahora mismo esté tramitándose en esta casa un expediente de Alboraya donde se dice que el paseo marítimo es una obra que priva a la arena que hay debajo de su carácter de dominio público natural.

Mientras decía esto miraba fijamente a Ángel Muñoz, entonces Subdirector General de Costas. Estaba tratando de convencerlo de que el deslinde del Saler era abusivo. Por supuesto, en vano. Debajo de su abundante pelambrera, su cerebro debía estar elaborando alguna especie de respuesta mental, pero nunca la pronunció. Permaneció impasible, creo que porque lo que le decía era demasiado cierto y demasiado impertinente. Su guardaestandarte salió al quite.

-Sí, pero los terrenos del paseo siguen siendo dominio público artificial –objetó.

Lo miré, también a los ojos. El argumento no me había hecho gracia.

-Estoy hablando de ribera del mar –respondí.

De todos los principios interpretativos que he citado antes, el principal y el más usado es el de que la construcción sobre el dominio público natural no priva a éste de su carácter. Significa que podemos alzar desde una choza a un centro comercial sobre la arena y a pesar de eso seguirá siendo arena, y por tanto dominio público.

La Dirección General de Costas está convencidísima de este principio, que aplica a la menor ocasión. Lo que sorprende es que simultáneamente esté aplicando el principio contrario, esto es, el de que la construcción sobre terrenos que son dominio público natural priva a éstos de tal carácter. Se trata de un hermosísimo fraude mantenido en el tiempo y transformado en costumbre por estos ingenieros de costas acostumbrados a modelar la realidad a su gusto.

La ley de costas prohíbe que los paseos marítimos discurran por la ribera del mar, y sugiere que el trazado apropiado es la llamada servidumbre de tránsito, o espacio de seis metros de anchura contados tierra adentro de la ribera del mar. Pero desafortunadamente, este espacio suele estar ocupado por edificios anteriores a la ley, y la Dirección General de Costas, para no complicarse con expropiaciones y sobre todo para no tener que pagarlas, ha venido durante todos estos años haciendo lo que está prohibido y construyendo los paseos marítimos sobre la arena de la playa, es decir, en la ribera del mar.

¿Cómo es posible una cosa así? La Dirección General de Costas es precisamente el órgano encargado de hacer cumplir la ley ¿cómo va a incumplirla ella misma? Aunque quizá sea mejor plantear la pregunta de esta otra forma: ¿quién vigila a los policías?

Los ingenieros de costas infringen la ley acudiendo a una maniobra fraudulenta para que no se note. Lo que sucede es que la maniobra para ocultar el fraude implica un nuevo fraude, aunque más borroso a simple vista. Ciertamente que la ley prohíbe que los paseos discurran por la ribera del mar, pero cierto también que quienes construyen los paseos, es decir, los ingenieros de costas, son los mismos que tienen el monopolio de decidir dónde empieza y dónde acaba la ribera del mar. Cuando construyen un paseo sobre la arena, saben perfectamente que se trata de una obra clandestina. Por eso, nada más terminarla, se apresuran a tramitar una modificación del deslinde para que los terrenos ocupados por el paseo ya no sean ribera del mar, quedando efectivamente como dominio público artificial. Tan simple como indecente. Este tipo de actuaciones se ha venido repitiendo a vista de todos, bajo la luz del sol, sin que los políticos responsables supieran una palabra (imagino), y sin que los incautos ciudadanos pudieran sospechar que los operarios que echaban el cemento, colocaban las losas e instalaban las farolas, estaban cometiendo una infracción administrativa grave por cuenta del mismo Estado responsable de reprimirlas.

Sí. El máximo responsable del respeto a la ley de costas, el encargado de velar por su cumplimiento, el que no repara en sancionar a los ciudadanos al menor descuido, es el mayor infractor de todos. Si se hiciera una estadística, la Dirección General de Costas sin duda aparecería como el más descarado, reiterativo y persistente de todos los que incumplen la ley.

Ahora bien, esa maniobra correctora que siempre introducen los ingenieros de costas para borrar las huellas de su crimen, modificar un deslinde para que los terrenos ocupados por el paseo no sean ya ribera del mar, necesita una justificación. Y esa justificación es justamente que la construcción sobre la arena priva a ésta de su carácter demanial, y por tanto se hace preciso poner el límite de la ribera del mar por el borde exterior del paseo, es decir, por el límite de la obra artificial. Es, como he adelantado, el principio inverso del que Muñoz usó en Arenales del Sol y del que los ingenieros de costas están empleando aún en toda España para quitarles a los ciudadanos sus viviendas y propiedades. Nunca me había tropezado con una pieza de cinismo enlatado de tan alto nivel: Cuando la cuestión es quitar sus casas a las familias, se aplica el principio A. Pero cuando se trata de hacer paseos, se aplica en cambio el principio B.

Puedo imaginarme que Ángel Muñoz ya conocía el principio B y la turbulenta forma en que la Administración ha venido construyendo paseos marítimos, y lo mismo Fernando Marín. Cuando el primero propuso y el segundo aplicó una línea de deslinde que incluía en el dominio público las ochocientas viviendas de los Arenales del Sol, debían saber ya de la contradicción. Estaban aplicando el

principio A contra los ciudadanos al mismo tiempo que se aplicaban el principio B a sí mismos. Visto así, Arenales del Sol no fue entonces un ejercicio de aplicar la ley de forma especialmente severa, sino un acto de cinismo de antología.

Pero esto no es únicamente historia. No es que un antiguo vicio de los ingenieros de costas usando el criterio B en el pasado afee su conducta actual, cuando se aplica a todos el criterio A. Es que hoy mismo, en este momento, como si no existiera ni ley, ni moral, ni decencia, continúan aplicando ambos principios simultáneamente. Esto es lo que la Dirección General de Costas hizo en un deslinde aprobado en septiembre de 2008 en Alboraya (Valencia), donde existe un paseo marítimo. El estudio geomorfológico contiene una antología de perlas cultivadas como las siguientes:

Página 49: *“En el resto del tramo la playa queda interrumpida por un paseo marítimo”;*

Pág. 59: *“Este paseo marítimo se asienta sobre los terrenos que se habían catalogado en*

las fotos anteriores como parte de las dunas”. Pág. 65: *“Entre las edificaciones*

construidas destacan el gran paseo marítimo que discurre paralelo a la línea de costas,

asentado sobre terreno de playa”. Pág. 66: *“Como consecuencia de la construcción del*

*paseo marítimo sobre terrenos del dominio público, estos terrenos **han perdido sus***

características naturales, haciendo necesario separar la ribera del mar por el

límite interior de la playa”. Pág. 70: *“Es el paseo marítimo asentado sobre la playa*

el que delimita el deslinde propuesto y la localización de la ribera del mar, situándose el

deslinde en el límite interno del paseo, y la ribera en el límite exterior del mismo”.

Como se ve, la desvergüenza que manejan estos ingenieros es total. No es que digan que van a cambiar de sitio la ribera del mar, sino que afirman que tal cosa es algo “necesario”. Qué contentos habrían quedado en el Saler, Arenales del Sol, Seselle, Playa Lisa-Gran Playa, Otur, Barbate, Puerto de Santa María, Playa del Inglés y otros parajes del infortunio si a los técnicos a sueldo les hubieran pagado para decir eso, en vez de pagarles para decir lo contrario.

En aquella entrevista, Ángel Muñoz terminó diciendo que la reunión era para hablar del deslinde del Saler, no de los otros. Claramente no le había gustado mi exposición y claramente esto es lo que no les va, lo que les provoca alergia, lo que les resulta mortal, que los pongan ante sus propias contradicciones. Ahí no saben qué responder ni qué hacer porque de tanto actuar a su bola han creado una red que los tiene atrapados. Lo hecho está hecho. Y está mal hecho. Sólo cabe reconocerlo y pedir perdón a la sociedad o la huida hacia adelante. Adivinen cuál fue su opción.

Algo parecido sucede con el paseo marítimo actualmente en trámite en Punta Larga (Candelaria, isla de Tenerife), que se proyecta sobre la ribera del mar, y al que se le ha cambiado el nombre, seguramente con una finalidad estratégica. Ahora ya no se le llama paseo marítimo, sino senda peatonal. Los paseos marítimos, como he dicho, están prohibidos por la ley de costas en la ribera del mar, pero las sendas peatonales no. Es genial poder resolver los problemas sólo con cambiar el nombre a las cosas. En el jardín del Edén, Adán puso nombre a los animales, y así obtuvo poder sobre ellos. Los ingenieros de costas también

adquieren poder poniendo nombre a las cosas, o cambiándolo. No puedo pasar con semáforo en rojo, pero lo que he hecho es pasar por una linterna gigante o un faro pequeño. Vean cómo los ingenieros de costas luchan con todas las armas disponibles, incluyendo no solo el Boletín Oficial del Estado, las palas mecánicas, la policía y demás, sino también el lenguaje. Cuando no se entretienen en emplear la toponimia como catapulta contra el pueblo, se protegen con el escudo de una semántica manipulada.

Otro paseo actualmente en trámite, que discurre sobre la ribera del mar, es el que pretende construirse en la playa del Carregador, término municipal de Alcalá de Chivert (Castellón). No se trata de historia pasada y olvidada, sino de expedientes vivos. De nuevo encima de la arena. De nuevo una obra prohibida.

El colmo de esta aventura podría ser el paseo marítimo de la playa de la Hornilla, de nuevo en Candelaria. Se construyó sobre la playa, arrojando sobre la misma escombros para nivelar el paseo a la cota +5, pero aquí no hizo falta mover hacia el mar la ribera del mar, porque el espacio que ocupa, pese a ser una playa, nunca tuvo ni siquiera la calificación de dominio público. Y sin embargo uno de los pecados mortales de las costas es depositar escombros sobre el dominio público. Esta conducta es prohibida, censurada y perseguida excepto cuando es la Administración la que la observa. En Vegadeo (Asturias) se pretende transformar en pública una inmensa superficie de terrenos privados porque la Administración dice que se formaron echando escombros en los brazos del río Eo. En Alboraya se aprueba un deslinde que declara ribera del

mar la pretendida arena que hay bajo unos supuestos escombros procedentes del dragado de un barranco.

En unos sitios sí y en otros no. Ésta es su ley.

Sería estupendo aplicar aquí, nuevamente, el principio de que el dominio público lo es por naturaleza, sin necesidad de ningún deslinde, y así poder considerar que todos los paseos marítimos contruidos mediante este procedimiento fraudulento están de modo cierto y efectivo en la ribera del mar, por lo que tendrían que retirarse inmediatamente. Pero los ingenieros de costas son muy valientes para aplicar este principio a personas inocentes de todo mal y jubilados indefensos, como el tantas veces nombrado Valeriano Rodríguez, y ni se les ocurre aplicárselo a ellos mismos, que de inocentes no tienen nada, y que infringen la ley cuando les parece y con rutina.

Hay incoherencia, hay injusticia y hay cinismo. Pero todo eso no habría sido posible si el poder político hubiera puesto una lupa de al menos cien aumentos para ver qué es lo que hacían en realidad los ingenieros de costas cuando nadie los veía.

BARRERAS

Hoy día el transporte eólico, es decir, las partículas de arena movidas por el viento, ha pasado a ser un bien protegido por los mismos motivos por los que la duna ha pasado a considerarse dominio público: Existe, o se cree que existe, una asociación playa-duna en la que una y otra se intercambian arena para que

el conjunto permanezca a salvo de los temporales y la erosión. Cuando sopla fuertemente el viento del mar, la arena más superficial de la playa es transportada hacia el interior, y se supone que se deposita en la duna, formando montículos. Cuando el viento cambia de dirección, la arena regresa a la playa.

La presencia de edificios que interrumpan el transporte eólico ha pasado a considerarse uno de los peores males imaginables, pues aparentemente inutiliza todo ese delicado equilibrio. Hoy día cualquier traza de interrupción del transporte eólico resulta una bochornosa falta contra el medio ambiente y el edificio responsable puede tener los días contados.

Todo esto es así excepto en el caso de los paseos marítimos, que efectivamente interrumpen el transporte eólico sin que nadie levante la voz. Pero no sólo eso. Los paseos marítimos también contienen el avance del mar en los temporales, produciendo un efecto barrera. El tratamiento en los tribunales del efecto barrera frente al avance del mar es semejante al del efecto barrera frente al transporte eólico: Se considera que la barrera constituye un obstáculo artificial, por lo que se la tiene por no puesta y se declaran demaniales los terrenos situados más al interior. Así sucedió en el deslinde de Las Playetas, en el término municipal de Oropesa de Mar, donde los propietarios de un edificio de apartamentos habían construido una especie de plataforma-paseo. El deslinde situó el límite interior de la ribera del mar bastante más al interior de esta plataforma-paseo, sobre una ladera verde, y los tribunales confirmaron que la

línea estaba correctamente situada, porque la obra obstaculizaba el alcance natural de los temporales.

Ahora bien, la obra en cuestión es en todo semejante a un paseo marítimo de los que construye la Administración. Si no se le aplicó la doctrina usual de los paseos marítimos es porque los autores eran simples ciudadanos. En cambio, cuando los paseos los hacen los ingenieros de costas, ni la Administración ni los tribunales se paran a pensar que pueden también contener el alcance natural de la ola. Y eso es precisamente lo que sucede (en el mejor de los casos, ya que a menudo la ola sobrepasa el paseo).

Un ejemplo es nuevamente el paseo marítimo de la playa de la Hornilla (Candelaria, isla de Tenerife). En determinados sectores, la playa es tan extremadamente estrecha que resulta imposible que los temporales no alcancen su muro exterior e incluso lo sobrepasen. Por cierto, que la configuración del paseo de la Hornilla recuerda enormemente el de la plataforma peatonal de las Playetas. También ésta última parece estar construida sobre la playa. No obstante, una y otra estructura han recibido de la Administración un tratamiento no ya distinto, sino totalmente inverso.

Parece evidente que si se aplicaran al paseo marítimo de la playa de la Hornilla, en Candelaria, los mismos criterios que se aplicaron al deslinde de las Playetas, con su plataforma-paseo, se habría tenido que situar la ribera del mar bastante tierra adentro, englobando el propio paseo, lo que desde luego no se ha hecho.

APLICACIÓN RETROACTIVA

Cuando nació la Plataforma y se publicó mi *informe sobre aplicación abusiva, retroactiva y arbitraria de la ley de costas*, la Ministra Narbona insistió día y noche en que la ley no se aplicaba retroactivamente.

Pero es tanto el entusiasmo en la nueva doctrina, que algunos funcionarios se permiten el lujo de teorizar sobre el asunto, afirmando sin tapujos, tabúes ni fórmulas indirectas que la ley de costas es una ley retroactiva, y de paso contradiciendo a la que fue su jefa suprema.

Ya hemos visto lo que opinaba al respecto D. Andrés Ortega. Más recientemente, el entonces jefe de documentación administrativa de la Demarcación de Costas de Oviedo, en un informe dice lo siguiente: *“la ley de costas ha implantado un sistema de retroactividad global en lo que atañe al catálogo de los bienes de Dominio Público Marítimo Terrestre caracterizados por su inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad”*. Y a continuación añade: *“Además ello no opera solamente respecto a lo que sea deslindado como Dominio Público Marítimo Terrestre a partir de la entrada en vigor de la ley, pues automáticamente ha de entenderse comprendido en su seno la totalidad de los terrenos que hubieran sido ya objeto de algún deslinde, al igual que los que no lo hayan sido aún y cualquier duda sobre ello quedaría disipada con las reglas enunciadas en las distintas disposiciones transitorias de la ley, particularmente la primera, que confirman el régimen de retroactividad dirigido a clarificar la naturaleza de los títulos que los particulares pueden ostentar respecto a tales terrenos”*.

En otro apartado se afirma lo siguiente: *“El deslinde aprobado en el año 1981 nunca pudo recoger los bienes de Dominio Público Marítimo Terrestre que como tales se definen por la ley de costas vigente, y tampoco podría haber incluido dentro del dominio público las porciones de playa y mucho menos de dunas, que no estuvieran a su vez dentro del concepto entonces manejado (cfr. meditado artículo 1º de la Ley de Costas de 26 de abril de 1969 en cuanto a la definición legal de playas).”*

Esto lo dice el funcionario incluso después de que las sentencias más de moda, las de los Arenales del Sol, dejaran claro que la ley de costas no es una ley de aplicación retroactiva.

Narbona perdió una oportunidad de oro de tirarle de las orejas a este funcionario que la estaba dejando en ridículo, aunque para eso tendría que haber sabido lo que pasaba dentro de su Ministerio. Claro que para ridículo el deslinde de Tzacorte y los Llanos de Aridane, en la Palma, donde los ingenieros de costas, como en una pista de circo, llegaron al más difícil todavía trasladando la aplicación de la ley a catorce mil años atrás, como cuento en el capítulo *Delicias Canarias*.

TEMPORALES HISTÓRICOS Y PASADOS

En una zona llamada la Marina de Rafalcaid, en Gandía, el Jefe de Costas observó la zona hasta donde llegaban los temporales y fijó allí el límite interior de la ribera del mar. Algo más adentro existía una línea de zona marítimo terrestre aprobada en un deslinde de la ley anterior. Cuando se produce una

situación como ésta, con terrenos que han perdido su primitivo carácter de zona marítimo terrestre o playa, la ley dice que estos terrenos seguirán siendo dominio público, pero ya no con el carácter de dominio público natural, sino como el llamado dominio público artificial. Así es como quedó establecido en aquella propuesta de deslinde.

Pero cuando la propuesta llegó a Madrid, el Director General de Costas mostró su desacuerdo. Vio que había una línea de zona marítimo terrestre antigua, aunque desfasada, y se le ocurrió un razonamiento que a mí, modestamente, me parece desafortunado. Dijo que aquella línea era una prueba de que los temporales en algún momento habían llegado hasta aquel lugar. Y como la ley habla de los mayores temporales conocidos, la ribera del mar debía marcarse coincidiendo con la antigua zona marítimo terrestre.

El autor de esta floritura no era el Gran Inquisidor de Aragón, como parece, ni tampoco un ingeniero lego en derecho, sino de nuevo D. Fernando Marín Castán, sesudo abogado y primer Director General de Costas del Partido Popular. Su pretensión desatendía el reconocimiento de la mismísima ley de que puede haber terrenos que hayan perdido su primitivo carácter de zona marítimo terrestre.

Lo que estaba haciendo este apasionado letrado era nuevamente aplicar la ley de forma retroactiva. Hubo unos temporales, sí. Se marcó la primitiva línea, es cierto. Pero una cosa y la otra habían sucedido antes de la ley de costas de 1988. No es legítimo aplicar las definiciones de una ley nacida en 1988 según

acontecimientos que tuvieron lugar antes de esa fecha. De nuevo cualquiera puede verlo, excepto los de la casa.

PARQUES Y PLANETARIOS

Un día acudí a la Demarcación de Costas de Castellón, situada en la playa del Pinar, y la vi cercada por obras y socavones. Hice preguntas y me enteré de que los ingenieros de costas estaban sacando arena de la antigua duna, que había sido enterrada en los sesenta, para dársela a la playa. Esto fue suficiente para meterme entre legajos antiguos a ver qué pasaba allí. Así me enteré de que todo aquello era un inmenso campo dunar que había sido desafectado hacía cuarenta años. Esta desafectación únicamente indicaba que los terrenos no eran necesarios para ser sumados al dominio público de la ley de 1969 y a mi juicio carece de validez una vez que ese espacio, formado por dunas, ha pasado a ser dominio público merced a las nuevas definiciones de la ley de costas de 1988. Lo que tendría que haber hecho la Dirección General de Costas es retirar la tierra que ella misma había depositado sobre la duna, y a continuación restaurarla debidamente, lo mismo que pretende hacer en tantos otros extremos de España. Pero es que en este caso los perjudicados no habrían sido los ciudadanos, sino el Ayuntamiento de Castellón, a quien los terrenos habían sido entregados después de su desafectación. Así que simplemente no lo hicieron. En vez de eso la Generalitat Valenciana consiguió dinero de Bruselas para hacer en esa zona un parque marítimo con montones de cemento. No está

mal que al mismo tiempo que en Arenales del Sol, el Saler y tantas otras playas se declaren demaniales unos terrenos dunares a pesar de que los mismos fueron contruidos cuando la duna no era dominio público, en la playa del Pinar la propia Administración construya sobre terrenos que por su naturaleza son indudablemente demaniales. Pero no hay problema, que los ingenieros de costas lo pueden todo. De igual forma que usan en el fraude de los paseos marítimos su monopolio para decidir qué es y qué no es ribera del mar, en el Pinar estaban usando sus maquinarias de obras públicas para llevarse la arena de la duna y que de esta manera ya no fuera una duna.

Durante mis visitas podía ver perfectamente cómo la arena transportada por el viento formaba montículos nuevos en la zona que entonces estaba en obras, pero toda la grave doctrina que consideraba el transporte eólico un dogma medioambiental casi sagrado no era válida aquí. Si los propietarios o los impulsores de la obra hubieran sido los particulares, se les habría caído el pelo por poner cemento sobre la duna. Pero unos y otros eran la Administración, se burlaron de la ley e hicieron lo que quisieron. Dos realidades, dos mundos, dos varas de medir. Y de nuevo dos Españas, la de los ciudadanos abrumados por todo el peso de la ley y la de los políticos metidos a dioscecillos que se ríen, con la complicidad de los ingenieros de costas, de la ley, el orden y la justicia.

El parque marítimo de la playa del Pinar fue inaugurado oficialmente en verano de 2007, con discursos, prensa y contento general. El viento aún quiere formar

nuevas dunas en los espacios donde siempre las formó. Pero los ingenieros de costas no se lo permiten.

Más aún. En la misma zona se edificó, después de la ley de costas, nada menos que el Planetario de Castellón, un edificio que se encuentra fatal e inevitablemente sobre la arena del antiguo campo dunar, y que por lo tanto es ilegal y debe ser demolido. La obra no es ni siquiera legalizable, puesto que la ley advierte de que en el dominio público únicamente se permitirán obras que no puedan tener otra ubicación, y naturalmente hay muchos otros sitios donde situar un planetario. Por tanto, el destino del edificio es, conforme a la ley, la pala y el buldózer, y esto aunque no haya deslinde aprobado. Recordemos una vez más que el dominio público lo es por naturaleza y no porque así lo declare un deslinde.

En enero de 2008 formulé ante la Dirección General de Costas, en nombre de unos cuantos miembros de la Plataforma, una solicitud motivada y razonada de deslinde en la playa del Pinar, para que se incorporasen al dominio público los terrenos de la antigua duna. Los ingenieros de costas hicieron lo que saben hacer: Esconder el escrito en un cajón. Claro que la ley les obliga a resolver, pero esto a ellos les da igual. Algo no muy distinto sucedió cuando pedí un deslinde en la calle de la Arena, en Candelaria, donde las casas están construidas sobre la playa. Y en la Plaza de la Basílica, toda entera sobre la arena (la consistencia arenosa de los terrenos hizo imposible la construcción de un aparcamiento subterráneo). Nuevamente la ley no va con ellos: Ni la que

obliga a abrir deslinde a instancia de los ciudadanos, ni la que obliga a declarar dominio público los terrenos arenosos, ni la que obliga a resolver las solicitudes que se dirijan a la Administración. Ellos son inmunes, están al margen, como si la ley no fuera más que un invento para meter en cintura al pueblo.

Esto es lo que sucede cuando los ciudadanos creen que la ley los ampara y es para todos, y cuando se creen ellos mismos algo más que los tornillos mudos y sordos de una maquinaria, desposeídos tanto de su libertad como de su dignidad por unos dirigentes mezquinos.

EL PROTOCOLO MARAVILLOSO

Como he comentado, me enteré por casualidad de que un deslinde en Ribadesella había terminado de forma anormal y muy bien para los vecinos, y decidí investigar esa maravilla porque me olía a chamusquina.

En aquella localidad la propuesta de delimitación del deslinde ocupaba para el dominio público enormes cantidades de espacios urbanizados, divididos en dos sectores: Uno correspondiente a terrenos de antiguas marismas desecadas y dadas en concesión por 99 años, y el otro, llamado de Astursella, ocupado por 172 viviendas construidas sobre terrenos de dominio público. En este último caso incluso había abierto un expediente sancionador.

Pero los ingenieros de costas por lo visto no pudieron practicar el apeo. Los afectados lo impidieron más o menos por la fuerza y después de que los primeros se volvieran a Oviedo con el rabo entre las piernas, los paisanos

empezaron a mover el suyo, y se acercaron a un asturiano de la mayor reputación, que en ese momento estaba empleado como Vicepresidente del Gobierno y se llamaba Álvarez Cascos. No sé qué le dieron a beber o cómo le explicaron su caso para convencerlo de que hiciera lo que hizo, pero lo hizo. Decidió que eso no podía ser y que a los vecinos había que arreglarles el problema. Estupendo, pero incompleto: Hacer lo mismo para todos los ciudadanos habría sido mejor que hacerlo sólo para los coleguillas que compartían con él el gusto por la gaita, la sidra y los *praos*.

La cosa fue así:

-El deslinde, que se había incoado por autorización de 27 de marzo de 1.991, en trámite se archivó por Resolución del Director General de Costas de fecha 3 de septiembre de 1.997.

-Se firmó por varios departamentos ministeriales un llamado *Protocolo de Intenciones para el deslinde de Ribadesella*, que incluía la posibilidad de revisar la ribera del mar anteriormente propuesta y también la de desafectar terrenos, y que era propiamente la plasmación documental del pasteleo.

-Se abrieron cinco nuevos procedimientos de deslinde, que abarcaban el ámbito territorial del antiguo deslinde único, procediéndose, de un lado, a la declaración de desafectación por concesión de 99 años de los terrenos de marismas desecadas, y de otro, a la desafectación de los terrenos de Astursella. De esta manera, todos esos terrenos dejaron de estar englobados en el dominio público.

La memoria explicativa de las actuaciones es gloriosa y contiene párrafos que deberían pasar a la historia de la arbitrariedad no por sí, sino al compararlos con los demás casos a los que me he estado refiriendo.

Se habla por ejemplo de zona *edificada y desnaturalizada*, lo que nuevamente sugiere que la edificación sobre terrenos demaniales priva a éstos de su primitivo carácter, un principio que en ese momento estaba oficialmente proscrito (excepto para paseos marítimos y parece que para los amigos del Vicepresidente). Se afirma que *“con el propósito, sin embargo, de no perjudicar a los adquirentes de buena fe de sus viviendas, se ha diseñado el Convenio entre los Ministerios antes citados con el único fin de legalizar su situación”*, con una solución que consiste en trazar deslinde recogiendo *“como dominio público marítimo-terrestre únicamente aquellos bienes que en la actualidad conserven sus características físicas determinantes de tal calificación, y sean necesarios para la protección del litoral”*. Sin titubeos se añade que *“Aquellos terrenos antiguamente calificados como dominio público marítimo-terrestre (incluidos en la primera línea) que han perdido sus características naturales (entre los que se encuentran los ocupados por las viviendas y viales de la urbanización de Astursella) serán declarados innecesarios para la protección del dominio público marítimo-terrestre, solicitando la Dirección General de Costas su desafectación y su incorporación al Patrimonio del Estado, conforme a lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley de Costas”*. Esto implica nuevamente la pecaminosa conclusión de que la edificación sobre el dominio público natural desnaturaliza a éste y lo priva de su carácter. El *protocolo maravilloso* concluye afirmando que todo esto se

hace para respetar *“los derechos consolidados que sobre tales bienes corresponden a los afectados”*, es decir, los derechos que por lo visto se consolidan al construir dentro del dominio público natural, lo que no sólo es una novedad extraordinaria, sino contrario a la constitución y a la ley que se han aplicado al resto de los ciudadanos con el razonable y machacón principio de que es absolutamente imposible consolidar ningún tipo de derecho sobre espacios demaniales, ya sea construyendo en la playa o en La Cibeles.

El documento concluye con mucha complacencia que *“con ello se pretende dar una solución justa a un largo conflicto social que hasta ahora no había sido capaz de resolver la Administración”*, es decir, que si alguien construye sobre el dominio público y se le tramita un expediente sancionador, la culpable es la Administración, por crear un conflicto social y no saber resolverlo.

Lo que transforma este caso en inaceptable no es que el gobierno haya decidido poner solución a un problema de los vecinos, incluso con ese peregrino enfoque. Es que el protocolo maravilloso es sólo unos meses posterior a la aprobación del deslinde de Arenales del Sol. Fernando Marín, el mismo Director General de Costas que fue tan duro con esta localidad, tragándose toda una urbanización de ochocientos apartamentos en base al principio de que la construcción sobre el dominio público no priva a los terrenos de su carácter demanial, apenas unos meses más tarde firmó el archivo del expediente de Ribadesella con la intención de una posterior solución basada en el principio inverso, es decir, que los terrenos habían quedado desnaturalizados por la

construcción en ellos. Unos sí y otros no. A unos de esta manera y a otros de la contraria. Unos a celebrarlo y a comer fabes alegremente y los otros condenados a que la paella no les pase ni por la garganta. Creo que habría que viajar mucho en el espacio (quizá hacia la república independiente de Guinea Papúa, cuyos dirigentes creo que aún van semidesnudos) o en el tiempo (puede que hasta los caprichos de los señores feudales, incluyendo el derecho de pernada) para ver un comportamiento comparable. Pero si además la Dirección General de Costas insiste en que vivimos en un Estado justo, moderno, europeo y civilizado, todo esto sobrepasa la simple injusticia y adquiere la categoría de mascarada.

Tal vez sea didáctico comparar el tratamiento dado a Ribadesella, especialmente Astursella, con el recibido por los vecinos de Arenales del Sol, Playa Lisa-Gran Playa, Seselle y el Saler:

-En Astursella se construyó en zona prohibida, habiendo abierto contra los responsables de la edificación un expediente sancionador, y a pesar de esto se les desafectó el terreno y se les liberó del dominio público marítimo terrestre.

-En los Arenales, Playa Lisa-Gran Playa, Seselle y el Saler se construyó en zona libre del dominio público, con todos los permisos y autorizaciones exigibles, y a pesar de esto los terrenos ocupados por las obras se califican de ribera del mar.

Creo que esto da una idea de nuestro nivel como sociedad y como país. Barniz de cultura sí, pero la capa es delgada. Apariencia de civilización, de acuerdo, pero apariencia vacía. En el fondo se remueve aún el caciquismo ancestral. Perder o conservar el fruto del esfuerzo de toda una vida de ahorro, aquí no

depende de la ley, sino de la suerte, o del capricho de los señores investidos de poder.

III

REINOS SUBMARINOS

BÚSQUEDA SIN FRUTO

Unos afectados me pidieron que defendiera un terreno que pertenecía a su familia y que estaba en el dominio público en la localidad de Moncófar (Castellón). Acudí al lugar una mañana de invierno junto con uno de los propietarios, pero después de dar varios paseos arriba y abajo, el interesado no conseguía encontrar la parcela y nos tuvimos que marchar a casa. Al día siguiente me telefoneó para decirme que por fin la había localizado. Estaba bajo el agua. El mar se la había tragado y su familia se había quedado sin tierra y sin patrimonio. Pero la pérdida de esta riqueza no se debió a los procesos

geológicos naturales, ni a la fatalidad que todo lo puede, sino a la torpeza del gobierno.

Moncófar como su vecina, Nules, como muchas otras localidades mediterráneas, está literalmente desapareciendo por culpa de una Administración entre indolente y atontada, que envía misiones diplomáticas a Londres para recuperar el pedrusco de Gibraltar al mismo tiempo que no hace nada para detener la extinción de una parte de España que el mar se está tragando. Una extinción propiciada, para que sea más excitante, por el propio gobierno.

EL CAMINO DE LA ARENA

Imaginemos un paisaje de montaña con desniveles y un río salvaje donde caen los pedruscos que mueven la lluvia y el viento. El río los va rodando, transportando y moldeando hasta reducirlos a pequeñas partículas. Estas partículas son atrapadas por la corriente marina que en el Mediterráneo discurre norte-sur. Al mismo tiempo que las redondea y uniformiza, el mar las va repartiendo por diversos puntos de la costa, alimentando y manteniendo estables las playas. La principal fuente de sólidos es el Ebro. Las playas situadas al sur se benefician, o se beneficiaban, de estos aportes y se mantenían saludables, vistosas y espaciosas.

Este mecanismo, perfecto en su armonía natural, se ha detenido y ha dejado de funcionar. Los ríos ya no llevan agua. En los que aún existen, la construcción de

embalses detiene el transporte fluvial de materiales, y las partículas sólidas que tendrían que llegar al mar precipitan y se quedan retenidas en los pantanos, colmatándolos y privándolos de su capacidad de almacenaje.

Por si esto fuera poco, los escasos materiales que por fin pueden llegar al mar encuentran todo tipo de obstáculos inesperados. Cada espigón y cada puerto del Mediterráneo constituye una barrera que se interpone en el camino de la corriente, siempre con las mismas consecuencias: Acumulación desmesurada de arena en el lado norte del obstáculo y desaparición primero de la playa, después de los huertos y más tarde de lo que sea, en el sur.

Este fenómeno se repite de modo predecible y machacón con cualquier obstáculo. Se pierde tierra firme en Nules, Almenara y Moncófar, al sur del puerto de Burriana, en Pinedo y el Saler, al sur del puerto de Valencia, en Bellreguard y demás pueblos de la comarca de la Safor, al sur del puerto de Gandía, en los Arenales del Sol, al sur del puerto de Alicante, en el Marenyet y el Brosquil, al sur de los espigones de encauzamiento de la desembocadura del río Júcar y en Guardamar, al sur de los contrueros en la desembocadura del Segura.

El retroceso de la tierra firme por culpa de estas obras públicas de la Administración tiene una clara influencia en la delimitación del demanio costero. Cuando el mar avanza sobre la tierra, la zona marítimo terrestre avanza sobre los terrenos privados. Es un proceso mecánico.

Este fenómeno era ya conocido en 1988, cuando se aprobó la ley de costas. Su exposición de motivos lo reconoce así:

“La disminución de los aportes sólidos de los ríos y arroyos ha ocasionado la regresión del 17 por 100 de línea de costa, debido a que por los embalses construidos y las repoblaciones forestales realizadas, el 80 por 100 del territorio nacional, que incluye los terrenos abruptos y, por tanto, los principales suministradores de sedimentos, ya no aporta áridos a aquélla, a lo que hay que añadir en otros casos su reducción por la disminución de caudal, debido a las captaciones de agua. A este olvido de que los áridos son un recurso escaso, con un largo o costoso proceso de renovación, hay que añadir la destrucción de dunas litorales, las extracciones abusivas de áridos y, en muchas ocasiones, la ejecución de obras marítimas sin tener en cuenta sus perjudiciales efectos, con barreras que bloquean el flujo de arena a lo largo de la costa”.

Sin embargo, y de forma paradójica, la ley no contiene ninguna previsión al respecto y estos casos en los que el mar penetra en la tierra firme por culpa de las obras públicas no constituyen, como deberían, una excepción al régimen general de la definición del dominio público. Así pues, los ingenieros de costas, tan insensibles y tan indiferentes como la propia ley, se limitan a constatar que la tierra desaparece y que la ola ha entrado en las propiedades particulares y eso es todo. Si se moja es dominio público, así que ya saben.

La costa del Mediterráneo está cuajada de núcleos costeros tradicionales que fueron construidos bien lejos del mar y que hoy constituyen puros rompeolas, como las Casas de Queralt, en Sagunto, incorporadas al dominio público en

2008 por culpa de la regresión de la tierra firme originada por el puerto de Burriana. A estos ciudadanos no les queda sino constatar que se han quedado sin nada.

DEJANDO QUE TODO SE ECHE A PERDER

Para hacerlo aún más grave, los ingenieros de costas no sólo se limitan a trazar mecánicamente la línea por las zonas mojadas, sino que además trabajan con una consigna. Aunque su obligación es defender la costa, la consigna consiste en no mover un dedo en las playas donde hay situaciones irregulares o construcciones que ellos reputan ilegales, porque creen que regenerarlas y adecuarlas constituye un regalo inmerecido para los usurpadores. Como teoría no está mal, pero enseguida chocamos con el defectuoso concepto que los ingenieros de costas tienen de lo que deba considerarse irregular o ilegal. En nuestra espantosa práctica administrativa, irregular o ilegal es todo lo que a ellos no les gusta.

De nuevo los Arenales del Sol. Sus diecinueve torres de apartamentos quedaron atrapadas en el dominio público en 1997 y los ingenieros de costas tenían decidida su demolición, pero después de once años no lo han conseguido, porque los vecinos están amparados por el derecho de concesión especial que la ley otorga a los antiguos propietarios, lo que resulta mucho más claro después de que la Audiencia Nacional dictara una sentencia sobre el particular que no deja lugar a dudas y que fue como un terrón de azúcar en el

carburador de cada una de sus palas y bulldozers, que como quien dice ya se preparaban.

Pero incluso así la Administración se empeña en no reconocer este derecho. No importa que el reglamento de costas le obligue a otorgar la concesión de oficio. Lleva doce años mirando para otro lado.

Entretanto, el efecto barrera del puerto de Alicante se come la playa y el mar queda cada vez más cerca de los edificios. Con esto lo que se va consiguiendo poco a poco es una escenografía artificiosa para poder lanzar la proclama de que los Arenales del Sol son un desastre paisajístico, un atentado ecológico y una calamidad urbanística, que los edificios están a unos metros del mar y que es preciso proceder a su demolición por motivos incluso de seguridad. Es decir, para burlarse de la ley de costas, del derecho de los ciudadanos a la concesión y de la Audiencia Nacional que tan explícitamente reconoció y engrandeció este derecho como pago por la expropiación.

Se puede llegar muy lejos en la bajeza manejando el poder, condicionando las apariencias y modelando la realidad física a capricho, incluso por omisión, y creo que es lo que aquí sucede. Es la Administración, al construir el puerto de Alicante, la responsable de la desaparición de la playa en los Arenales del Sol. Es la Administración la que, sea cual sea la causa, debe defender la costa y regenerar las playas en peligro. Es la Administración la que debe mantener a los antiguos propietarios en sus viviendas, otorgándoles la concesión especial, incluso aunque ellos no la soliciten. Los incumplimientos, faltas, traiciones y

pecados de la Administración son masivos. Es la Administración la que incumple la ley con una alevosía que preocupa.

Los vecinos de Arenales del Sol no son culpables de nada. Hasta ahora sólo han recibido bofetones y desplantes. La Administración, que crea el problema y se resiste a solucionarlo, que fuerza al mar a conspirar con ella contra los ciudadanos, presenta en los Arenales del Sol un comportamiento típico de la mafia.

EL VIEJO Y EL MAR

La conducta de la Administración deja mucho que desear en Arenales del Sol, pero resulta perversa en San Sebastián de la Gomera, donde los ingenieros de costas se atrevieron a hacer contra un ciudadano solo, desamparado y pobre, del que ya he hablado, lo que no se atreven a hacer en otras partes. En las cercanías de la playa de la Punta, en el propio casco urbano de la capital y dentro del puerto, existía una propiedad dedicada a carpintería, perfectamente documentada y registrada desde los años veinte. A alguien se le ocurrió tender espigones para cerrar aun más el recinto portuario y con esto toda la playa quedó, más que cerrada, encerrada en su interior. A partir de ese momento la corriente que traía los áridos ya no podía llegar allí, pero los fenómenos erosivos continuaron. El resultado es que la playa fue desapareciendo hasta que el edificio quedó contiguo al mar.

El Estado no pidió disculpas a los propietarios por transformar su carpintería en una estación marítima. En lugar de eso los castigó porque su propiedad se había transformado en una estación marítima, reservándoles el terrible destino de los descreídos que construyen en la playa porque les da la gana.

La Demarcación de Costas de Tenerife, en una actuación que parece onírica, acusó a los propietarios de estar en el dominio público y tramitó contra ellos un expediente de los llamados de recuperación posesoria para derribar el edificio. En este mundo imaginario, que sólo existe en la mente de algunos funcionarios, la falta imputable a la vivienda era *existir*. No fue el viejo Valeriano el que tendió los espigones, ni quien acercó el mar al edificio, ni tampoco llamó al diablo para que en una noche le moviera la casa y la pusiera a un palmo del mar, como sucede en las leyendas populares, pero a pesar de ello fue declarado culpable y le derribaron el edificio porque tiene la desgracia de vivir en un país como España, de ser ciudadano modesto de un rincón apartado cuyas soledades evocan la ley del salvaje oeste y porque le tocó padecer la arrogancia de unos funcionarios capaces de eso y de más.

Quizá la Dirección General de Costas está esperando pacientemente a que la situación se vuelva igual de grave en los Arenales del Sol. A lo mejor estos doce años sin hacer nada tienen como objetivo que el Mediterráneo empiece a corroer los cimientos de las viviendas. Tiempo habrá de regenerar la playa después de los derribos, o de que las viviendas se caigan solas. La Administración, a diferencia de las personas, es inmortal.

EL BROSQUIL

El Brosquil es una zona situada en Cullera, al sur del río Júcar, cuya desembocadura ha sido encauzada con espigones a fin de facilitar su navegabilidad y el acceso al puerto situado en su interior. El resultado de este tendido de espigones fue mortífero en las tierras costeras del sur, que simplemente pasaron a ser el imperio de los cangrejos y las almejas.

Los vecinos, viendo cómo el mar los venía a ver, se vieron obligados a rascarse el bolsillo para disponer una escollera que les defendiese de la inundación. En la zona existen unas treinta viviendas unifamiliares que están todas ellas incluidas en el dominio público según propuesta de deslinde de un expediente que lleva varios años en trámite. En la Demarcación de Costas dicen que esta línea es inevitable porque un día la ola entró en el interior de las propiedades, y por lo que veo a nadie se le ocurre pensar si esto tiene que ser así, es decir, si es correcto que una obra artificial del gobierno transforme mi casa en una balsa de patos y que a continuación el mismo gobierno me quite la casa acusándome de que es una balsa de patos. La actitud de estos ingenieros de costas es como la que desplegaría un autómatas hecho con piezas de poca calidad y con un microprocesador extraído de un ordenador barato. Las personas no hacen eso. Las personas piensan y razonan. Excepto que con motivo de su ingreso en una secta les hayan extirpado esa capacidad.

BELLREGUARD

Bellreguard es un municipio situado al sur de la ciudad de Gandía y por lo tanto del puerto de Gandía, en la comarca llamada de La Safor, que está toda ella encogiéndose como la ropa mala puesta a lavar. El motivo es que el mar se la come. Se la come debido al efecto sombra del puerto.

Pero Bellreguard es un municipio turístico. Para él su playa es tan importante como para otras localidades sus comercios o su polígono industrial. Es la playa lo que mueve una parte muy importante de su economía, pero la playa se iba perdiendo por momentos. Y un día no hubo más remedio que acudir a una operación de cirugía mayor. Lo mismo que un enfermo al que le cortan una pierna para salvar su vida, el municipio tuvo que sacrificar un vial público para la rebuscada operación de remeter la playa al interior. La calle desapareció y sobre ella se instaló el paseo marítimo. Donde antes estaba el paseo se hizo la nueva playa.

Como maniobra de emergencia resulta pasable, aunque extrema. Ahora bien, este movimiento general de todo el sistema originó la necesidad de un deslinde para declarar dominio público los nuevos espacios ocupados por la arena, lo que a su vez necesitó retrasar la servidumbre de protección, que por primera vez alcanzó a los edificios situados al otro lado del paseo. Para que todo resulte aún peor, los tribunales están haciendo una interpretación de cuidado de la

afección de esta servidumbre: si un edificio está incluido en ella un poco, aunque sólo sea un palmo, está afectado en su totalidad. Esto significa que incluso en la parte del edificio que queda fuera de la servidumbre no se podrá ampliar ni hacer obras de mejora, exclusivamente de mantenimiento y previa autorización especial. Los edificios de Bellreguard que por primera vez habían quedado afectados eran en su mayoría esas típicas torres de apartamentos de la urbanizadísima primera línea mediterránea. El resultado: La peluquería del lado del edificio opuesto al paseo marítimo no puede cambiar el rótulo sin pedir una autorización especial. Ni la pizzería que está a veinte o treinta metros de la servidumbre de protección puede cambiar la cocina sin licencia de Costas. Ni el vecino cuyo piso da al poniente, ajeno a la fachada marítima, puede cerrar el balcón. Extremo grotesco pero real que muestra hasta dónde se puede llegar mediante esa mezcla de abulia, inercia y mal hacer.

VILLANÍA FINAL

Así pues, la Dirección General de Costas se porta como un perfecto villano al meter la línea por dentro en áreas donde los vecinos son víctimas de las aberraciones de la Administración, y en otros sitios deja intencionadamente que la situación se deteriore al límite. Pero esto no es todo. Como corolario de esa sesgada forma de hacer, ellos, los ingenieros de costas, en espacios como las casas de Casas de Queralt (Sagunto), en los que el motivo del deslinde era el avance del mar, una vez que han puesto la línea por dentro, y sólo una vez

hecho esto, se arremangan dispuestos a regenerar la playa. Es decir, una vez que han instrumentalizado el motivo del deslinde (el avance del mar) y se han servido de él para quitarles a los ciudadanos su propiedad, proceden a eliminar ese mismo motivo. Esto es justamente lo que la Demarcación de Costas de Valencia se puso a preparar en la playa donde están las Casas de Queralt, nada más aprobar el deslinde que había remetido la línea al interior, incluyendo la totalidad del caserío.

¿Se dan cuenta del timo? La Administración es culpable de la regresión del mar a cuenta de sus puertecitos y espigones. La Administración es culpable de no regenerar ni defender las playas porque (en algunos casos) se niega a hacerlo. La Administración nos dice *qué pena, tenemos que meter la línea hacia adentro y dejarle a usted sin su casa*. Y la Administración se pone a reparar la situación únicamente después de consumado el expolio.

No es que no haya razón, es que no hay decencia. Se necesita una intensísima labor de desinfección para que la Dirección General de Costas se ponga a trabajar en términos aceptables y evitar que el mar se tragara una parte no pequeña del país. Entretanto podríamos quedar en Algeciras para gritar todos juntos *Gibraltar español*.

IV

$$1 = 0,5$$

VERDADES IMAGINARIAS

La inmortal (y actual) novela de G. Orwell *1984* concluye con la enunciación de una falsa igualdad matemática, $2 + 2 = 5$. Cuando el héroe de la historia asume ese enunciado como una verdad cierta y fuera de toda discusión, sabemos que todo ha terminado. Ha sido asimilado, el sistema se ha tragado su dignidad y la autoridad competente ha sido capaz de imponer su verdad paralela a la verdad verdadera. A partir de ese momento se anulan los límites para la creación de una realidad inexistente en la que creer a pies juntillas como muestra de la más completa sumisión.

$2 + 2 = 5$ es el símbolo de la obediencia absoluta, que nace ya en la mente y responde al principio, tan conocido en publicidad, y tan utilizado por D. José Goebbels, de que cualquier mentira puede transformarse en verdad sólo con repetirla. Todos los tiranos, megalómanos, líderes de sectas y dictadores imponen por diversos medios su igualdad inexacta.

En materia de costas marítimas se ha abierto paso una fórmula parecida, que comparte principios y filosofía con la concebida por G. Orwell y que podría expresarse así: $1 = 0,5$. Todo el poder del Estado se ha puesto a trabajar en pro de esa falsa igualdad. Y no me refiero únicamente al gobierno, sino a los tres poderes: El legislativo, al darle sanción legal, el ejecutivo, al obligar con toda su fuerza, incluyendo a la policía, a cumplirla, y el judicial, al confirmar en sus sentencias que es cierto y queda más allá de toda duda que $1 = 0,5$.

Es sólo que no hay aquí, como en la novela, una policía del pensamiento coaccionando a la gente para que confiese que la mentira es verdad. El ciudadano medio no se entera porque el tema no va con él. Ni siquiera la mayoría de los afectados se dan cuenta de qué va la cosa en realidad. Hace falta un esfuerzo de análisis para hacer el desafortunado descubrimiento de que estamos viviendo en una sociedad capaz de sustentar solemnemente como cosa cierta una falsedad y de hacer que los ciudadanos se sometan a ella como si fuera verdad.

DESLINDES Y PROPIEDAD PRIVADA

Si pasamos por Ibiza y queremos darnos el dudoso gusto de ver a algún personaje rico y famoso, debemos ir, según dicen, a Cala Salinas. Este tipo de personajes se oculta en mansiones de lujo, yates ostentosos y discotecas exclusivas, todas esas cosas que no están al alcance de la gente común. Pero si lo que desean es ir a la playa, para ellos no hay ni refugio ni santuario posibles. En verano, es la playa el paraíso de los *paparazzi*. Allí los ricos-famosos son accesibles. No les queda más que mezclarse con la gente porque en España las playas privadas están prohibidas, y esto es una conquista democrática que viene de antiguo y que la actual ley de costas se encarga de garantizar. Si no fuera así, encontraríamos muchas vallas, barreras y carteles de prohibido el paso cerrándonos el acceso a las playas, que hoy por hoy son inimaginables. Como se estudia en la facultad de derecho, entre el rico y el pobre, entre el fuerte y el débil, entre el inteligente y el simple, la ley libera y la libertad esclaviza. La ley es un instrumento de los débiles para defenderse del poder de los fuertes. Existe en la sociedad una inercia que tiende a que los fuertes prevalezcan sobre los débiles y abusen de ellos (lean *El señor de las moscas*). Al menor descuido, a la menor relajación, si bajamos la guardia, los ricos-famosos comprarían las playas más limpias y bonitas, y expulsarían de ellas al resto de los ciudadanos. Por este motivo considero que los principios que informan la vigente ley de costas, y también las anteriores, son un éxito de la sociedad que debemos valorar y conservar.

Aunque existen precedentes remotos (el Código de las Siete Partidas y otros textos legales), la primera vez que con toda claridad se declararon las costas como espacio público fue en 1880, y desde entonces, para distinguir lo público de lo privado se practican unos expedientes administrativos llamados deslindes, cuya principal función es trazar una línea de delimitación. Ahora bien, la declaración de un espacio como público crea un conflicto evidente con los propietarios que hasta ese momento eran dueños de los terrenos.

¿Qué sucede con estas personas? Con las anteriores leyes de costas, las propiedades que quedan al interior de la delimitación pasaban a formar parte del dominio público, pero de forma solamente nominal. Para que de modo cierto y efectivo los particulares perdieran su propiedad se hacía preciso que después de quedar aprobado el deslinde, el Estado los venciera en juicio ante los tribunales civiles, algo que raras veces sucedía, porque el Estado se organizaba tan mal que ni siquiera se molestaba en formular esas reclamaciones. Por causa de esa dejadez, durante más de cien años España vivió en la contradicción de tener señalados como públicos determinados bienes, y que sin embargo el Estado no pudiera hacerlos suyos. Es decir, que eran y al mismo tiempo no eran públicos, o que eran simultáneamente públicos y privados, lo que sin duda constituye un alarde de equilibrio muy propio de un país que tan devotamente ha sabido mantener el foso entre las llamadas España real y España oficial.

Todo cambió con la ley de costas de 1988, que introdujo la dramática novedad de asignar efectos civiles al deslinde aprobado, es decir, que ya no hacía falta la previa intervención de un juez para que los particulares perdieran la propiedad. Desde entonces el mero y simple hecho de la aprobación del deslinde por orden ministerial tiene por sí la consecuencia de evaporar la propiedad de los particulares.

INGENIEROS METIDOS A JUECES

España es un país de contrastes cuyos hijos hemos nacido con una especial tendencia a los extremos inútiles. Con la nueva ley pasamos de una situación en la que el dominio público costero era, por parálisis de la Abogacía del Estado, prácticamente ilusorio, a otra nueva en la que lo que se transformó en ilusión fueron la propiedad privada y las posibilidades de defenderla de modo efectivo frente al avasallamiento de la Administración.

La competencia para aprobar un deslinde y por tanto para pulverizar la propiedad privada ya no está, como he dicho, en manos de los jueces, sino de la propia Administración. El órgano competente es el Ministro, lo que al menos y en teoría aporta cierto rigor, puesto que este órgano es la cabeza de la pirámide administrativa y está rodeado de una corte de los milagros de asesores y técnicos, pero desde antiguo las competencias para aprobar deslindes están delegadas en la Dirección General de Costas, órgano a cuyo frente, salvo excepciones, suele estar un ingeniero de caminos, canales y puertos. Estos

titulados están dotados de una formación idónea para diseñar sensacionales autopistas, maravillosos canales y puertos excelentes, pero por desgracia son legos en derecho, es decir que carecen de formación para resolver conflictos jurídicos, como son los derivados del derecho de propiedad y para entender las sutilezas de una tramitación administrativa donde lo que se ventila es ese importante derecho. Con la nueva ley de costas, y a pesar de los fantásticos cambios que ésta trajo en relación a los efectos del deslinde sobre la propiedad privada, al gobierno no se le ocurrió introducir algún cambio orgánico para añadir más rigor, precisión, responsabilidad, seriedad o atención en orden a la tramitación de los deslindes, o simplemente para adecuar el entendimiento de los responsables a las gravísimas consecuencias de su aprobación, que, como queda dicho, consisten en la extinción por siempre jamás de la propiedad privada.

El gobierno no se dio cuenta del lío que estaba a punto de montar simplemente por no fijarse en que los ingenieros que podían ser estupendos para trazar la rayita podrían resultar unos mastuerzos de cuidado a la hora de tramitar un expediente a cuya virtud pueden perderse patrimonios cuyo valor global suma cantidades inimaginables. Se limitó a dejar, de forma digamos indolente, que la materia continuara en manos de la Dirección General de Costas y de su equipo de legos en derecho, y con esa falta de previsión el gobierno acababa de poner las bases para transformar a los ingenieros en jueces oficiosos.

Para entender esta observación habría que repasar expedientes de los años cincuenta, sesenta, setenta u ochenta, es decir, anteriores a la ley de costas actual. Verían, en el acta de deslinde, que se reúnen las autoridades competentes, muchas de las cuales tenían una idea sólo aproximada de lo que se estaba hablando, y el ingeniero jefe de costas señalaba el lugar por donde iba la línea, enlazando con una palmera, con la esquina de una casa o con un pedrusco que había allí. Ese trazado debía tener un motivo, sin duda, pero el motivo nunca aparecía. Ni en el acta ni en el resto del expediente quedaba prueba, justificación o motivación de ninguna clase. A los ingenieros de costas les decían que tenían que trazar una línea y ellos la trazaban y se quedaban tan anchos. Y como normalmente esos deslindes no afectaban a la propiedad, es decir, que los propietarios no perdían sus viviendas incluso aunque la rayita les pasara por encima, poca gente se iba a reclamarle a los jueces, y así vivíamos en el país de Alicia, donde todos eran felices, el gobierno con su línea inútil, y los propietarios conservando sus propiedades a pesar de todo.

Pero la cosa cambia cuando lo que está en juego son patrimonios costosísimos que efectivamente se pueden perder. En tal caso el procedimiento, con sus pruebas, motivaciones, explicaciones y justificaciones debería ser exquisito hasta el extremo de parecerse lo más posible (y dentro de lo que cabe) a un juicio civil. Veamos una comparación: Si tengo un coche, deberé pasar la ITV cada cierto tiempo. Pero si soy un campeón de la Fórmula uno las revisiones serán cada dos minutos, por así decir. Sigue siendo un coche, pero la finalidad

de uno y otro es distinta y las exigencias también. Antes y después de la vigente ley de costas, sigue siendo un expediente de deslinde, pero la finalidad de uno y otro es distinta y las exigencias también.

Pero con la nueva ley la Dirección General de Costas se limitó a arrastrar sus vicios anteriores, y durante los primeros años se puso a tramitar la línea como siempre, y así siguió haciéndolo durante los primeros diez años de la aprobación de la leyⁱ, hasta que el día 24 de abril de 1998 despertó de su sueño. Con esa fecha conseguí de la Audiencia Nacional una sentencia que fue como un toque de diana. Conforme a mis argumentos, el tribunal reprochaba a la Administración no haber hecho estudio alguno para justificar el trazado de la línea, y por ese motivo tan simple anuló el deslinde.

A partir de ahí los modos de la Dirección General de Costas cambiaron, pero no la esencia. En adelante la aportación de un estudio geomorfológico se convirtió en una liturgia de todo expediente, pero por desgracia estos estudios no resultaban ser más que justificaciones más o menos artificiosas de decisiones ya tomadas de antemano. Si los ingenieros de costas hubieran intentado con ellos investigar la realidad de modo franco, el mismo concepto de los estudios sería distinto. En especial, las comprobaciones se prolongarían bien tierra adentro, tanto como fuera preciso hasta marcar científicamente la frontera entre lo público y lo privado. Si por ejemplo lo que se busca es arena cubierta por edificaciones y asfalto, como suele suceder, los ingenieros de costas, o los de TRAGSATEC, no tendrían que escatimar las calicatas, sino hacer todas las

posibles, explorando los terrenos del interior hasta que las muestras obtenidas denunciasen que ya no aparece más arena, y marcar ahí la frontera. Pero no es esto lo que hacen. Primero se reúnen en un despacho de Madrid, donde estudian un plano y señalan sobre el mismo una frontera convencional, que suele coincidir con un vial público. A continuación hacen agujeros para buscar arena escondida sólo en el espacio que ellos han decidido que tiene que pasar al dominio público, no en el resto, aunque verosíblemente pueda pensarse que más allá aparecería arena también. Ejemplos clásicos son los deslindes del Saler (Valencia) y Playa Lisa-Gran Playa (Santa Pola) y de nuevo Arenales del Sol. En todos ellos la frontera entre lo privado y lo público se situó de forma caprichosa en un vial, y en todos ellos se renunció de antemano a investigar los terrenos situados más allá. Como se ve, con esta práctica es dominio público no lo que dice la ley, sino lo que les parece conveniente a los ingenieros de costas.

LOS ARENALES DETRÁS DE LOS ARENALES DEL SOL

A veces la frontera convencional que se establece entre lo público y lo privado resulta además sospechosa. En Arenales del Sol (Elche), los terrenos al interior de la línea eran clamorosamente arenosos. Para comprobarlo ni siquiera hacía falta una calicata porque estaba a la vista, y sin embargo no sólo quedaron fuera del dominio público, sino que en los años siguientes al deslinde unos empresarios muy diligentes construyeron en prácticamente toda su superficie una serie de bonitas viviendas.

¿Qué sucede con estos terrenos, que son arenosos, están contruidos y no han sido incluidos en ningún deslinde? Como ya he comentado, numerosas sentencias insisten en que el dominio público lo es por naturaleza, ya que el deslinde se limita a declarar una realidad que ya existía previamente. Por tanto, los terrenos arenosos son demaniales, con deslinde o sin él. Teniendo en cuenta que la propia Audiencia Nacional admitió que los terrenos más allá de la línea de Arenales del Sol eran efectivamente arenosos y podían ser declarados demaniales en un expediente posterior, el balance final de lo que se consiguió con esas actuaciones fue hacer posible la construcción masiva en unos terrenos que por su naturaleza geomorfológica son efectivamente demaniales y por tanto pertenecen a todos los españoles.

No sólo eso. Tras aprobarse el deslinde (incluso antes) los ingenieros de costas pusieron en marcha, o lo intentaron, un plan muy serio para derribar las diecinueve torres de apartamentos que efectivamente habían quedado dentro del dominio público deslindado. Planes a mi juicio sorprendentes, puesto que, como ya he dicho, los antiguos propietarios de estas viviendas tenían derecho a la concesión especial de la Disposición Transitoria primera, apartado primero, de la ley de costas, para permanecer en sus antiguas propiedades, como concesionarios, por un periodo global de sesenta años, y la Administración estaba obligada incluso a otorgar la concesión de oficio.

¿Por qué motivo a los ingenieros de costas se les metió entre ceja y ceja derribar unos inmuebles que la ley dice que no se pueden derribar, incluso

aunque hayan quedado en el dominio público? Hay quien ve aquí un plan intencionado en el marco de la típica operación de especulación inmobiliaria en la que la Administración desempeña el acostumbrado papel de pelele de las constructoras. Se edifican masivamente los terrenos situados tierra adentro, que por su naturaleza son demaniales, y el derribo de la antigua urbanización refuerza el valor de la nueva, que de esta manera queda en primera línea. Los ingenieros de costas justifican el sueldo al aprobar un deslinde que se comía la urbanización antigua, pero incluso después del derribo las cosas continuarían más o menos igual, con una primera línea de terrenos arenosos construida masivamente. En el camino, alguien habría hecho un extraordinario negocio enladrillando la arena y pateando las costillas de los terceros de buena fe que compraron los apartamentos de la antigua primera línea.

No puedo afirmar que haya pucherazo, pero las apariencias son sugerentes, y no sería la única vez que los responsables se dejan enredar por las empresas del ladrillo. En 2007 el Jefe de Costas de Alicante dijo a la prensa, muy ufano, que su Ministerio acababa de comprar por unos 400.000 euros un chalé en primera línea de una playa de Denia, a fin de derribarlo y limpiar el dominio público, como así se hizo. La realidad era muy distinta, según se publicó. Fue la gran urbanización de detrás la que compró el chalé, para que no tapara las vistas y el complejo pudiera quedar en primera línea. Por tanto, lo que había era una operación especulativa que se pretendió vender como piadoso acto al servicio del medio ambiente y de los intereses generales.

Esto no es más que un ejemplo de lo que es capaz de hacer la Dirección General de Costas cuando la dejan sola para decidir por dónde tiene que ir la línea del dominio público. Cualquier gesto, debidamente dirigido, puede crear oro para unos y hacer germinar el infortunio para otros. En todo caso, no es ésta una obra dedicada a denunciar una corrupción que no puedo de ninguna manera dar por confirmada, sino a llamar la atención sobre los simples abusos en la aplicación de la ley, un defecto menos escandaloso, pero que afecta a muchas personas.

TRIPLE DEGRADACIÓN

El caso es que con la ley de costas de 1988 el tratamiento de las cuestiones de propiedad sufrió una degradación doble, o si se quiere triple: En primer lugar la decisión ejecutiva sobre si alguien retenía o perdía su propiedad pasó de los jueces a la Administración. En segundo lugar, dentro de la Administración la materia continuó delegada en un órgano inferior al que la tenía y la tiene aún hoy señalada, y en tercer lugar, este órgano inferior, el Director General de Costas, solía tener titulación de ingeniero y ser un completo ignorante del derecho.

No cabe duda de que la Dirección General de Costas tiene asesores jurídicos, y de que éstos deben ser excelentes. Pero cuando a un jefe se le mete entre ceja y ceja una idiotez, especialmente cuando el jefe se considera un elegido del

destino, no hay asesores jurídicos que valgan, en especial cuando éstos no son funcionarios públicos, sino personal contratado, y creo que ya me entienden.

Los españoles (y demás ciudadanos y convecinos extranjeros implicados) perdieron entonces la garantía de que fuera un juez el que decidiera sobre su propiedad, y se vieron obligados a admitir que la cuestión fuera resuelta por un ingeniero de caminos, canales y puertos (O, en algunos casos, un licenciado en geografía o en ciencias medioambientales, lo que no cambia las cosas). Como originalidad no está mal. La imagen de España como cuerpo extraño dentro de Europa ya no es la de una pareja de guardia civiles torvos con mostacho, capa y tricornio, sino la de un ingeniero haciendo de juezⁱⁱ.

LA COMPENSACIÓN POR LA PÉRDIDA DE LA PROPIEDAD

En todo caso, con la ley de costas en vigor, cuando se aprueba un deslinde, la propiedad preexistente queda extinguida (al nacer la Plataforma, en enero de 2008, el discurso oficial pretendía tranquilizar a la sociedad diciendo que lo que se producía era un simple *cambio de titularidad*, lo que de nuevo se convierte en un uso muy fino del lenguaje para denominar a lo que no es más que un despojo). Puede que este concepto resulte difícil de asimilar. Una vez un regidor del Ayuntamiento de Barcelona me sonreía condescendiente ante esta idea.

-Pero hombre... La propiedad se transmite, se modifica, pero no se extingue - me decía, con candor, porque simplemente no podía concebirlo.

Ante un efecto tan contundente, la propia ley, y sobre todo su reglamento, previó un mecanismo compensatorio consistente en la conversión de la antigua propiedad en un derecho de uso y disfrute mediante una concesión administrativa gratuita y de duración extensa.

Compensar la pérdida de la propiedad con una concesión es compensar insuficientemente. El derecho de propiedad vale, aquí y en todas partes, más que el derecho de concesión, y dedicar tiempo a explicarlo es perderlo, pues cualquiera lo entiende. Cualquiera menos los que mandan, claro está.

La ley de costas fue llevada al Tribunal Constitucional bajo la acusación de violar la Constitución en su regulación del derecho de propiedad. Como todo el mundo sabe, la Constitución dice que nadie podrá ser privado de su propiedad si no es por motivo de utilidad pública o interés social, y mediante la pertinente indemnización. La demanda llevada al Tribunal Constitucional acusaba a la ley de dar lugar a una expropiación sin indemnización. Usted me quita la propiedad y no me da nada a cambio, venía a decir.

El tribunal desestimó la pretensión, negando que nos encontrásemos ante una expropiación sin indemnización y aduciendo que cabía más bien hablar de una expropiación con una indemnización que se daba no en dinero, sino en especie, y consistente en la concesión especial de la Disposición Transitoria primera, apartado primero, es decir, el derecho a quedarse en casa durante un periodo global de sesenta años sin pagar canon. De hecho, el tribunal, consciente de que la ley caminaba por el filo de la navaja, propició una interpretación

generosamente extensa de la Disposición Transitoria en cuestión, para abarcar bajo su paraguas salvador al mayor número posible de afectados.

EXPROPIACIÓN SIN INDEMNIZACIÓN

Nos encontramos ante una expropiación con una indemnización en especie, dijo el Tribunal Constitucional, muy convencido. Esto ha resultado en la práctica completamente falso, no porque los jueces se equivocaran, sino porque a los ingenieros de costas no les pareció oportuno cumplirlo. Durante los primeros años de la ley, la inercia de los ingenieros se extendió a todos los ámbitos. No sólo omitían toda justificación del trazado de la dichosa línea, sino que actuaban como si el derecho de concesión especial, elevado por el Tribunal Constitucional a la categoría de superderecho, no existiera. En la Dirección General de Costas son expertos en emplear la resistencia pasiva. El no hacer, no tramitar, no informar, se transforma a menudo en sus manos en arma demoledora. Para hacer polvo la vida de las personas, no les hace falta enredarse con argumentos falaces. Les basta con hacerse los despistados.

El primer modo de usar la resistencia pasiva en este campo fue ignorar a todos los efectos la existencia del derecho de concesión. En los primeros años de la ley, y hasta mediados de los noventa, cuando se aprobaba un deslinde, ellos no informaban a los afectados de este derecho. Por lo visto confiaban en que cada contable, zapatero, pastor, parado, bombero, entomólogo, dependiente, profesor de literatura y otros de los que acababan de perder sus casas fuera un

fiera del derecho, y conociera las disposiciones transitorias de la ley y el reglamento de costas hasta el extremo de enterarse de que tenían derechos por ahí escondidos. No le decían a nadie ni media palabra. Aprobaban la línea, miraban para otro lado, como silbando, y dejaban que se pasara el tiempo, en la esperanza de que los afectados se limitaran a llorar por las esquinas

Esta táctica adquiriría una dimensión superlativa en el caso de los deslindes en los que no se modificaba la línea de dominio público ya existente. En esos casos se tramitaban unos expedientes llamados de ratificación del deslinde anterior, cuya existencia no se notificaba a nadie. Evidentemente, si consideraban que no era necesario que los vecinos a los que les quitaban sus propiedades se enterasen de ello, menos se iban a preocupar por advertirles que podía corresponderles un derecho de concesión.

Pero como esto no podía durar para siempre, algunos afectados defraudaron las esperanzas de los ingenieros de costas al no ser ni tan tontos como para ignorar sus derechos ni tan mansos como para resignarse, y acudieron a los tribunales reclamando lo que era suyo. Una vez que la Administración tuvo que enfrentarse a la evidencia de que debía otorgar las concesiones, comenzó a hacer lo que debía haber hecho desde un principio, introduciendo en la parte dispositiva de cada orden ministerial aprobatoria de deslinde un párrafo en el que se advierte a los interesados que pueden reclamar la concesión especial en el plazo de un año. Este apartado se ha transformado en una cláusula de estilo de todas y cada una de las resoluciones aprobatorias de los deslindes, aunque la

medida no se aplica con efectos retroactivos, es decir, que los ingenieros de costas mantienen en la perfecta inopia a todos aquellos afectados por deslindes anteriores, a los que no se les dijo ni mu. Se trata de una forma muy rara e incompleta de rectificar errores, que deja *in albis* a miles de ciudadanos.

LA ÉPOCA FERNÁNDEZ

La siguiente fase se corresponde con el mandato de D. José Fernández como Director General de Costas. Hasta donde sé por mi experiencia profesional, cuando un ciudadano, superando las anteriores dificultades de forma que podríamos calificar de heroica, se acercaba a la Dirección General de Costas para reclamar motivadamente y por escrito la concesión especial, lo único que conseguía era que las amables manos de un funcionario metieran la reclamación dentro de un cajón, caja, armario, depósito, papelería o guardamuebles, junto con docenas, cientos o miles de otras peticiones semejantes. Puedo afirmarlo así tranquilamente después de haber presentado hace ya años varias solicitudes sin que los ingenieros de costas muevan un solo papel.

Recuerdo un pasaje de *La conjura de los necios*, cuando su incomparable protagonista, Ignatius Ralley, en su etapa de oficinista, tenía la responsabilidad del archivo: iba dejando caer los documentos en un cajón que a la larga era indistinguible de un vertedero. Algo parecido debe suceder con las solicitudes de concesión que llegan a la Dirección General de Costas. Creo que debe haber

un sótano particularmente sórdido en algún rincón de la Plaza San Juan de la Cruz, al que van a parar las solicitudes, con sus documentos adjuntos y las ilusiones de los solicitantes. Como el archivo de Ignatius Ralley, pero más grande. Y siempre teniendo en cuenta que el héroe de *La conjura de los necios* era un gordo seboso absolutamente marrano y medio imbécil, mientras que los que mandan en la Dirección General de Costas son perfectos caballeros, limpios, bien vestidos y mejor educados.

Hay un precepto en la ley que beneficia este modo de proceder: El silencio administrativo es un mecanismo para evitar el atasco definitivo de los procedimientos. La Administración está obligada a resolver, sí. Pero si no lo hace, o si se retrasa, el interesado puede entender que el silencio es una decisión negativa y formular el recurso que corresponda. Pero con la regulación actual ese silencio ya no se puede hacer valer ante los tribunales cuando a uno le parezca, sino dentro del plazo de seis meses desde que debió dictarse resolución expresa. Esto quiere decir que la espera no puede ser indefinida: Antes de que venza el plazo los afectados deben irse a un recurso judicial porque en caso contrario pasarán a un limbo por lo demás desgraciado, en el que esperarán en vano una respuesta. La ley, como he dicho, obliga a la Administración a resolver todas las peticiones que se le dirijan, pero cuando los ciudadanos piden la concesión, la Dirección General de Costas no contesta ¿Y qué sucede? Nada ¿Por qué? Porque la ley, que tan ostentosamente establece esa obligación, no establece un correlativo castigo para su incumplimiento. Los

españoles somos buenos con las formas y decepcionantemente torpes con el fondo. Nos gusta el diseño y nos fascinan las apariencias. Nuestra historia está saturada de pintores, imagineros y artesanos de las formas y vacía de científicos atentos al contenido. Somos estupendos para poner cosas rimbombantes, altisonantes, solemnes y buenísimas en la ley, y un fracaso para conseguir que esas cosas se cumplan. Al final levantamos el velo y somos los mismos de siempre, como si el decepcionado Mariano José de Larra estuviera aún aquí, para escribir más o menos lo mismo que escribió en su día.

Sea como fuere, asistimos a una de las estafas colectivas más grandiosas de los tiempos modernos. Los magistrados del Tribunal Constitucional establecieron un equilibrio muy sutil entre el derecho de propiedad y la integridad del dominio público, tan sutil como un castillo de naipes, sólo para que los responsables de la Dirección General de Costas dieran al traste con todo por el simple procedimiento de la negación y la indiferencia.

Los ingenieros de costas tienen una justificación para esta conducta. Afirman que carecen de personal suficiente para tramitar los expedientes de concesión. Un lote de reclamaciones masivas, por ejemplo, ochocientos escritos de los propietarios de Arenales del Sol, paralizaría el funcionamiento de la Administración, según se pretende.

La excusa es algo más que sorprendente. Lleva incluida, además, una confesión implícita. La de que la Dirección General de Costas tiene dinero, medios humanos, materiales, energía y tiempo suficiente para trazar la línea, llevando

así la desgracia a las familias afectadas, pero en cambio no tiene ni dinero, ni medios humanos, ni materiales, ni energía ni tiempo para reparar esos perjuicios en la manera prevista en la ley. Es más, Cristina Narbona anunciaba a diestro y siniestro su intención de adquirir terrenos contiguos para añadirlos al dominio público, y esto en la época de las vacas gordas del mercado inmobiliario. Debía tener un cofre con muchísimo dinero. Una forma de verlo es ésta: El Estado está aplicando el 100% de sus recursos a trazar la línea y el 0% a tramitar las concesiones, siendo ambas cosas igualmente obligadas. Es como si se dijera que la Agencia Tributaria tiene medios y personal para recaudar el impuesto sobre la renta, pero carece de medios y personal para tramitar las devoluciones de las declaraciones negativas. O como si cualquier Administración nos expropiara un campo de naranjas necesario para una autopista, pero nos dijera que no nos puede pagar el justiprecio por falta de personal.

José Fernández se ufanaba de haber deslindado tantos y tantos kilómetros de costas. Nunca, que yo sepa, mostró reparos por haber dejado el trabajo a medio hacer, ya que aprobar deslindes y no resolver la situación de los interesados así creada es dejar las cosas sin resolver. Un Director General de Costas que se pone la camisa limpia y una corbata bien planchada para vanagloriarse ante los periodistas de los muchísimos kilómetros de costa que se han deslindado y pasa un oscuro velo sobre las demás tareas no hechas (no hechas porque no ha querido hacerlas) es como un joven que se presenta en una noche de fiesta

guapo, limpio, duchado, peinado y perfumado, pero se ha dejado su habitación hecha un completo desorden y oliendo a pies sucios. Y así es como huele la Dirección General de Costas: A pies sucios. Allí los derechos se pudren, como fruta espachurrada por el calor del verano.

Nadie, que yo sepa, les ha dado licencia a los Directores Generales de Costas para creer que sólo con trazar la rayita ya han cumplido con sus obligaciones. A ellos les gusta eso, trazar la rayita, algo que tiene que ver con las mesas de dibujo, con los gráficos y el autocad. Lo otro, enfrascarse con cuestiones legales referidas a los derechos de propiedad para estudiar a quién le corresponde la concesión y a quién no, es por lo visto una lata y un incordio, además de impropio de ingenieros.

Y es cierto. Yo no sé qué pintan los ingenieros de caminos, canales y puertos (y otros licenciados en cosas que nada tienen que ver con el Derecho) tramitando expedientes de concesión en los que todo se centra en el examen de los anteriores títulos de propiedad y en la aplicación de conceptos jurídicos como por ejemplo la prescripción adquisitiva del dominio, que está regulada en algo que ellos ni saben que existe, como es el Código Civil. En esos expedientes y en esas decisiones no hay ni un solo elemento de conexión con la ciencia de la ingeniería, y por tanto me parece inapropiado que un órgano corporativamente acaparado por los ingenieros deba retener esta competencia.

¿Creen que la ley admite tonterías de este tipo con el derecho de concesión especial? De ninguna manera. Para evitar despistes, olvidos y salidas de tono, el

reglamento de costas tiene establecido que en el caso de que los interesados no reclamen este derecho dentro del plazo de un año desde la aprobación del deslinde, la Administración lo tendrá que otorgar de oficio. Y para espantar cualquier duda final, añado que el único caso en el que se perderá este derecho será el de renuncia expresa de los interesados. De manera que toda la fuerza del Estado, desde el Tribunal Constitucional, con sus interpretaciones extensivas y generosísimas de la transitoria hasta el mismo reglamento de costas está volcada en la atención a las personas que han tenido la mala sombra de que una rayita en un plano les haga perder su casa.

EXPROPIANDO LA INDEMNIZACIÓN POR LA EXPROPIACIÓN

Pero esto no es todo. Pasen y vean, que hay más.

¿Por qué la Constitución y la ley establecen que toda expropiación será compensada con una indemnización económica, mediante justiprecio, pero en materia de costas no es así? Porque la expropiación forzosa es un instrumento de uso ocasional que se pone en marcha sólo cuando el Estado necesita determinados terrenos, mientras que la afección de propiedades por los deslindes de costas no tiene nada de excepcional. Al contrario, es masiva y se deriva de la aplicación ordinaria de la ley. El Estado tiene capacidad económica suficiente para expropiaciones ocasionales, pero desde luego no puede pagar todas las propiedades de la costa que deberían desaparecer con motivo de los deslindes. Por eso la ley de costas articuló ese raro sistema de expropiación con

indemnización en especie, para que los propietarios privados de sus viviendas pudieran permanecer en ellas por un periodo global de sesenta años. Es lo único que el Estado, con sus limitados medios, era capaz de darles a sus víctimas.

Pero esto implica que los edificios permanecerán donde están por ese extensísimo periodo de tiempo. Al paisaje le da igual que el ladrillo esté allí en propiedad o en concesión. Estará de todos modos. Cuando la gente vea la costa con el dominio público ocupado por edificios, no sabrá ni les importará si éstos están en régimen de propiedad o de concesión. El caso es que están y estarán. Si la desaparición de los edificios tuviera que cumplir alguna función para la regeneración del dominio público, esta función evidentemente no se podrá cumplir porque los edificios siguen ahí. Y antes de que hayan pasado sesenta años, la fórmula se repetirá con terrenos situados aún más al interior, si el nivel del mar sigue subiendo.

En resumen: Sea bajo propiedad o bajo concesión, durante sesenta años seguirá habiendo viviendas o barrios enteros dentro del dominio público, ya que ésta es la única fórmula que le quedaba al Estado para hacer compatible la regularización del dominio público con sus limitados medios económicos. Pero esto exige un requisito por parte del Estado, y es la paciencia. Paciencia para esperar a que pasen sesenta años antes de ver las playas limpias de ocupaciones. Debido a la imposibilidad de pagar con dinero, éste ha tenido que ser el trato y éstas son las reglas.

ROMPIENDO LAS REGLAS

José Fernández no tenía paciencia y rompió o tuvo la intención de romper las reglas. En sus años de Director General se pusieron de moda el cambio climático, la subida del nivel del mar y un concepto nuevo llamado el *esponjamiento de la costa*, que partía de la asociación playa-duna y de la idea de la duna como banco de arena de la playa y por tanto como elemento imprescindible para su supervivencia. Según una opinión expresada en la reunión en la Delegación del Gobierno en Valencia, en primavera de 2008, a la que antes me he referido, Fernández creía que el quitar de en medio los edificios hechos en la duna era más eficaz para luchar contra la regresión de la costa que tender espigones o regenerar las playas.

La Ministra Narbona también disfrutaba advirtiendo de la necesidad de retirarse tierra adentro ante la subida del nivel del mar. Pero naturalmente que la supuesta ferocidad del cambio climático no estaba prevista cuando se redactó la ley, incluyendo sus disposiciones transitorias, por lo que esta señora, al justificar el éxodo de las playas para evitar que el mar del deshielo inundase los edificios, estaba introduciendo cuestiones nuevas que en todo caso debían haber requerido una ley nueva. Claro está que la mención era puramente oportunista.

El principio del esponjamiento de la costa y la consiguiente necesidad de derribos masivos (con edificios por en medio no hay esponjamiento que valga) chocaba frontalmente con el derecho de los antiguos propietarios a mantener

sus viviendas bajo régimen de concesión. Imagino que éste fue el motivo de que Fernández se convirtiera en patrocinador de una idea de singular tosquedad: Las concesiones que fuera necesario otorgar al amparo de la transitoria primera se otorgarían, pero serían inmediatamente rescatadas y los inmuebles demolidos.

Después de oír de su propia boca esas ideas, leí un documento del propio Fernández que contenía su pretendida justificación. Era un informe de 1994 referente a los Arenales del Sol. En aquella época José Fernández ocupaba una Subdirección General y escribió que en los casos estrictamente precisosⁱⁱⁱ, a los propietarios de Arenales del Sol habría que reconocerles el derecho a la concesión, para a continuación rescatárselo mediante la aplicación de la Disposición Transitoria decimocuarta del reglamento de costas. Tan improcedente como grotesco, puesto que esta norma está prevista para casos que nada tienen que ver. Afirma que se podrán rescatar las concesiones anteriores a la ley de costas que se hubieran otorgado para usos prohibidos en ella (por ejemplo el de vivienda). Se trata de una norma razonable para resolver situaciones heredadas e incompatibles con la ley (que las hay, y resultan anacrónicas), pero que nada tiene que ver con el derecho de concesión previsto para quienes pierden su propiedad por culpa de un deslinde, porque esos casos son una excepción a la prohibición de la ley de viviendas dentro del dominio público, y una excepción establecida por la propia ley, cuando afirma que la concesión será con mantenimiento de los usos existentes hasta ese momento.

Teniendo en cuenta la antigüedad de este documento de 1994, la doctrina parece una idea personal de José Fernández. Si es así, resulta absolutamente notable que los puntos de vista personales, además de extraviados, de un único ingeniero de caminos, canales y puertos, pueda prevalecer sobre la decisión de los juristas más notables del país, constituidos en altísimo Tribunal. Desde luego que todo el mundo tiene derecho a opinar, incluso sobre temas que no son de su especialidad, pero no me imagino a los jueces del Tribunal Constitucional reunidos para construir un puente. Si fuera así, preferiría cruzar el río a nado. Y sin embargo nadie se sorprende de que un especialista en puentes, cambiando el casco de la obra por un birrete virtual, se meta a juez y se permita el lujo de contradecir a los jueces de verdad.

Imaginemos, según una comparación anterior, que tenemos un terreno y nos lo quitan porque va a pasar por ahí una autopista. Se tramita un expediente de expropiación forzosa y nos lo quitan, pero la Administración nos dice que no puede tramitar la parte del expediente que se refiere al justiprecio y pago de la indemnización porque no tiene personal suficiente, ya que el disponible lo tiene todo empleado en la tarea de quitarnos la casa. Imaginemos que no estamos de acuerdo y ponemos un pleito y lo ganamos, y que la Administración, obligada por la sentencia, nos paga el justiprecio, pero al día siguiente nos tramita otro expediente (para el que también tiene personal disponible) en orden a que le devolvamos el importe. Esto es exactamente lo que está haciendo la Dirección General de Costas.

A principios de septiembre de 2009 el diario El País publicó un sorprendente reportaje en el que la Ministra Elena Espinosa anunciaba un llamado programa de reconocimiento de derechos de los afectados por la ley de costas, que sin embargo consistía simplemente en el otorgamiento de concesiones que tenían que haber sido entregadas años atrás, es decir, en la subsanación de todos los errores a los que me he referido en este capítulo. En el mismo reportaje de prensa la Directora General Alicia Paz hizo una confesión escalofriante: Hasta la fecha sólo se otorgaban las concesiones cuando se las iba a rescatar para hacer una obra pública, como un paseo marítimo o una regeneración dunar. Esto era algo que yo ya venía advirtiendo y denunciando, y que dejaba en mantillas los torvos propósitos anunciados por José Fernández. No era ya que la Administración otorgara a regañadientes las concesiones para rescatarlas por un procedimiento y con una justificación legalmente inviables (la disposición transitoria decimocuarta del reglamento de costas), sino que sólo se otorgaban cuando se tenía previsto rescatarlas. Por eso, cuando había avisos o rumores de que se iba a otorgar la concesión de oficio, yo advertía a mis clientes del peligro. Así sucedió en la playa del Inglés, en Maspalomas, cuando el mismísimo José Fernández, ahora desde una responsabilidad distinta en el Cabildo de Gran Canaria, puso en marcha un plan para quitar de en medio noventa locales comerciales del llamado Anexo II. Muy pronto, y por una feliz casualidad, alguien dijo a los interesados que en unos meses tendrían otorgada de oficio la concesión de la disposición transitoria primera. La Dirección General de Costas

había conseguido lo imposible: Hacer que este derecho concesional, en lugar de ser sinónimo de tranquilidad y seguridad jurídica, lo fuera de derribo.

En cuanto al precio del rescate, el propio Fernández se había cuidado de anunciar que comprendería solo el valor del ladrillo, no el del suelo, ya que éste es público. Con esto los damnificados podían darse por contentos y felices al tener garantizado que la Administración les pagaría bastante menos del cincuenta por ciento del valor de su propiedad.

Como vemos, los derechos de propiedad iban convirtiéndose progresivamente en un chiste a medida que unas expropiaciones se iban encadenando a otras, y las correspondientes indemnizaciones iban teniendo menos valor compensatorio. En primer lugar se arrebató la propiedad y se entregó a cambio una concesión, algo de bastante menos valor. A continuación se quitó también la concesión y se pagó por ella un precio en el que el valor del suelo (superior al 50% del total) ni siquiera se contabiliza.

En los noventa hubo un ministro del interior llamado Corcuera, que patrocinó aquella nueva ley de seguridad ciudadana que permitía a los policías entrar en un domicilio sin autorización judicial cuando se presumiera racionalmente que en su interior se estaba cometiendo un delito. El proyecto no salió adelante porque la oposición puso el grito en el cielo invocando los derechos individuales, pero quedó ya para siempre en la memoria colectiva como la *ley de la patada en la puerta*.

La ley de la patada en la puerta era un atajo. Un atajo que partía del prejuicio de que los funcionarios siempre tienen razón frente a los ciudadanos. La fórmula de rescatar la concesión especial era como la patada en la puerta de las costas, otro atajo que pretendía suprimir trámites innecesarios, en este caso tener que esperar sesenta años para limpiar el dominio público y devolverlo al arenoso esplendor del paleolítico.

LA LUCHA POR LA DIFERENCIA DEL VALOR

El Tribunal Constitucional dejó bien sentadas las cosas con su sentencia sobre la ley de costas. La propiedad se transforma en concesión y esta última constituye la indemnización por la expropiación. Las disposiciones transitorias de la ley de costas contienen numerosas advertencias de que aquél que no se sienta satisfecho con las indemnizaciones recibidas, podrá acudir a los tribunales civiles. El Tribunal Constitucional también lo dijo así: La ley no vulnera el derecho de propiedad y no es inconstitucional porque el que se considere insuficientemente pagado puede acudir a los jueces civiles. Personalmente me cuesta entender el razonamiento, porque el papel de una ley es regular, precisar y establecer derechos y sus límites, y no aventar la indeterminación diciendo que el que no esté de acuerdo que se vaya al juez ¿Qué va a hacer el juez? Los jueces deben decidir con arreglo a la ley dada. Y si la ley dada es la ley de costas, más vale que en vez de irnos al juez nos vayamos al cine, al teatro o a la playa.

Pero el caso es que pretender que el derecho de concesión constituye una justa compensación por la pérdida del derecho de propiedad es como pretender que un SEAT 600 es justa compensación por la pérdida de un Ferrari, como equiparar una gallina con un águila, o al *Código Da Vinci* con la *Divina Comedia*.

Sostener esa igualdad, lo diga la ley, el Tribunal Constitucional o el Papa, es sostener una falsedad. Se trata de la invención de una verdad imaginaria, que no tiene más valor porque la pronuncie un magistrado. Si la propiedad tiene un valor convencional, pongamos de 1, la concesión nunca podrá valer lo mismo, pongamos que su valor sería de 0,5. Pero el Estado, con toda su irresistible fuerza, pretende convencernos, o, mejor, imponernos, que $1 = 0,5$, lo que es una forma postmoderna de convencernos de que $2 + 2 = 5$.

El Tribunal Constitucional dio la fórmula por válida, pretendiendo salirse de rositas mediante la pintoresca fórmula de que el que no esté de acuerdo se vaya al juez civil. Probablemente en esta suerte de válvula de escape quede sugerido el convencimiento (secreto) del propio tribunal de que la pretendida igualdad es una completa idiotez, e implícita su intención de que sean otros jueces (los civiles) los que tengan que enfrentarse al muerto.

Como era de esperar, las únicas personas que están convencidas de que propiedad = concesión son los que están instalados en alguna u otra rama del poder. El resto, es decir, la totalidad de los ciudadanos españoles y europeos, ni siquiera lo entiende. Por eso muchos hicieron lo que tan entusiásticamente (y creo que con cierto sentimiento de culpa) sugería el Tribunal Constitucional:

Acudir al juez civil para quejarse de que el Estado les había robado y a fin de que lo condenase a abonar la diferencia de valor entre la propiedad y la concesión. Es decir, para escribir la ecuación correcta, que debía ser $1 = 0,5 + 0,5$, es decir: propiedad = concesión + indemnización compensatoria.

El resultado de estas reclamaciones es una sentencia que invita a creer que no estamos en realidad despiertos, sino soñando un sueño disparatado en el que la inteligencia ha quedado sustituida por el desvarío, el lenguaje por el balbuceo y la lógica por el capricho, y donde los jueces han sido transformados en fregonas disfrazadas y cantantes de boleros abrigados con togas.

La sentencia desestima la reclamación bajo pretexto de que "toda expropiación lleva aparejada cierta dosis de sacrificio". No, no he confundido la cita. Es el Tribunal Supremo el que ha dejado escrita una cosa así.

Cuando la Constitución regula el derecho de propiedad, garantiza que nadie puede perderlo si no es mediante indemnización. Y la ley de expropiación forzosa tiene dicho que la indemnización consistirá en un importe económico al que no por casualidad llama justiprecio, palabra compuesta que claramente indica que el precio deberá ser justo, y no injusto. No existe en nuestro ordenamiento ley, decreto, reglamento, orden o circular que pueda avalar esa apelación del Tribunal Supremo al sacrificio personal, más propia de los flagelantes de Semana Santa que de los ciudadanos que creen tener derechos frente al Estado.

Se trata del hito final de un asunto muy mal resuelto desde el origen. Mal resuelto en la ley, mal resuelto en la sentencia del Tribunal Constitucional y desde luego muy mal resuelto en esta sentencia del Tribunal Supremo, cuya frase lapidaria podría ser propia del código de honor de una secta integrada por zoquetes dispuestos a todo, pero no de los repertorios de jurisprudencia.

Creo que todo rezuma provisionalidad y torpeza. Cuando la ley no es clara y contundente en la regulación de los derechos, todos estamos expuestos a que un funcionario los niegue o incluso a que los jueces hagan lo que hemos visto. En cualquier caso, el balance va mucho más allá de lo que pueda ser una chapuza encadenada con otras chapuzas peores. Los tres poderes del Estado se han conjurado para crear en contra de los ciudadanos una realidad imaginaria, un mundo virtual que nunca existió ni existirá. Pretenden convencernos de que una gallina vuela como un águila, de que un SEAT 600 se come la carretera como un Ferrari, que el *Código Da Vinci* inspira como la y que una simple concesión administrativa vale lo mismo que la propiedad de toda la vida. Y si alguno de estos ciudadanos se rebela, nuestro más alto, digno y sabio tribunal saca de la nada la pretendida obligación que tenemos de sacrificarnos, de doblegarnos, de aguantarnos y fastidiarnos, aunque estas reglas no son propias de la convivencia entre personas dotadas de dignidad, sino de los grupos que niegan el pensamiento y exigen sumisión y sacrificio.

LA POSTCIVILIZACIÓN

Ésta es la tarjeta de presentación de España en el mundo, y especialmente en Europa, impregnada con el aroma de esa tradicional incompetencia que nos distinguió durante el siglo XIX y una parte del XX.

Queremos vivir del turismo. A nuestros congéneres ingleses, franceses, alemanes, suizos, holandeses, belgas, austriacos, escandinavos, los animamos a comprar una casa en España pero no les advertimos de que la operación puede ser un error que marque sus vidas y del que se arrepentirán mientras tengan memoria.

Pasaron las épocas de la barbarie, del régimen feudal, de la monarquía absoluta, pero también de las revoluciones burguesas que se iniciaron en 1789. Esas revoluciones que instalaron al hombre, a su grandeza y a sus derechos en el centro de la sociedad, que conformaron la auténtica civilización y dieron forma a la sociedad justa y libre en que creemos vivir, están perdiendo gas ante el gigantismo de un Estado que, bajo pretexto de la legitimación democrática, tiende a volver a los antiguos modos de la caverna, cuando los fuertes dominaban a los débiles. A esta fase de la historia hacia la que nos precipitamos la llamo *postcivilización*, un estado de descomposición de los derechos propiciado por un Estado transformado en la sociedad del Gran Hermano de cuya llegada ya fuimos advertidos hace bastante tiempo.

V

LA PLAYA SIN CEMENTO

NIEBLAS Y ARENA

Raras veces la Dirección General de Costas se ha llevado un bofetón como el que recibió en una playa pequeña y poco famosa, en el occidente de Asturias, llamada Otur. Paseas por esa playa y puedes captar toda la fuerza de la naturaleza de una forma mucho más intensa que en el urbanizado Mediterráneo. Está situada al pie de poderosos acantilados pizarrosos cubiertos de bosques. Un río va a desembocar allí, abriendo grietas limpias en la arena, y las neblinas suelen cubrirla incluso en verano, proporcionándole un aire de vaporoso mito celta, como si de pronto pudiera aparecer en la lejanía, dentro de una armadura oxidada, un caballero extraviado en su búsqueda del Santo Grial.

En la playa de Otur hay también unas pocas viviendas, situadas al pie del acantilado, y bien lejos de la orilla. Se edificaron sobre antiguos terrenos de cultivo, en una zona que hoy día contiene manchas de bosque sobre un tapiz verde y húmedo en el que he visto crecer setas. Tiempo atrás, el propietario de los terrenos fue segregando parcelas y vendiéndolas a unos terceros ahorradores, que después construyeron sobre ellas sus viviendas, y lo hicieron con todas las licencias exigibles. Algunas parecen casitas de Blancanieves en mitad del prado, rodeadas de verjas de madera verde y flanqueadas de macizos de hortensias de color azul pálido.

Excepto estas pocas casitas, todo sigue más o menos como lo parió la naturaleza. Una carretera empinada desciende desde los terrenos superiores hasta la playa, donde se esfuma. No hay cemento a la vista, ni asfalto, ni nada que se pueda parecer a un paseo marítimo. El encuentro con la playa de Otur no es el encuentro con feos bloques de cemento, sino con un entorno prácticamente intocado que resulta un privilegio en sí mismo.

Una vez di una conferencia en Águilas, una ciudad mediterránea que en aquella época estaba a punto de vender su alma al diablo de la especulación urbanística y de ese crecimiento bestial que se puso de moda con el cambio de milenio. La conferencia era para presentar mis novelas *La Piedra Resplandeciente* y *El Príncipe Pálido*, muy inspiradas por sus playas casi vírgenes, así que dije algunas cosas sobre el paisaje, y en particular advertí que con la llegada del ladrillo la ciudad estaba dando la espalda a su auténtico tesoro, que no era

precisamente una dosis de chalés pareados que la igualase en vulgaridad a cualquier otra localidad turística, sino su antigua autenticidad de espacio con carácter fuerte y propio. Algo así es lo que seguramente iba a pasar en Otur. No porque se estuviera planeando un plan parcial en la arena, desde luego, pero sí porque la Demarcación de Costas se disponía a adornar el entorno con una buena cantidad de hormigón a cuenta de hacer unos accesos asfaltados, un restaurante, unos baños, un gran aparcamiento, y todo ese tipo de iniciativas destinadas a un mejor uso del dominio público por parte de chicos y grandes. Creo que el proyecto estaba ya dibujado cuando estalló el conflicto y los vecinos me llamaron. O mejor dicho, el proyecto fue el detonante de todo, porque, como era de prever, la presencia de aquellas viviendas de verano, rodeadas de vallas de madera verde y flanqueadas de macizos hortensias azul pálido, era incompatible con los planes de la Administración. De hecho, los aparcamientos públicos y demás modernidades debían situarse, al parecer, donde entonces estaban las viviendas.

Por suerte no soy Jefe de Costas (ni jefe de nada), y no me ha tocado nunca decidir en un asunto así. No voy a caer en el extremo de acusar a la Administración de cementera compulsiva, cuando es posible que sus planes fueran el modo oportuno de conseguir un uso racional de la playa. Pero personalmente, como viajero y como ciudadano con derecho al paisaje, prefiero la playa de Otur tal cual era y por suerte sigue siendo aún. Como fue siempre, en los tiempos de los que la vecina puerto de Vega era un enclave ballenero

cuyos hijos gastaron su juventud en medio del Atlántico sin apenas ver tierra firme. Ya sé que es un análisis hecho con las tripas, pero así es. Sí al mar y al viento. No al ladrillo y al hormigón.

En la playa de Otur había un deslinde aprobado en 1.983, bajo la ley de costas de 1.969, y después se aprobó otro, en 1.996, ratificando el primero. Los dos habían incluido las viviendas en el interior del dominio público, que alcanzaba hasta el pie del acantilado gris, excepto un rincón en la parte oeste. A pesar de ello, hasta entonces nadie se había metido con las casitas, pero, como suele suceder, el proyecto de urbanización se convirtió en el motor de una serie de reformas que incluían como primera providencia la expulsión de los vecinos y el derribo de sus viviendas.

La Demarcación de Costas de Oviedo les practicó requerimientos para que solicitasen una concesión o se quitaran de en medio para siempre, bajo apercibimiento de practicar expedientes de recuperación posesoria. Estos últimos son unos procedimientos muy sumarios, previstos en la ley de costas al exclusivo fin de combatir las ocupaciones ilegales del dominio público. En ese tipo de procedimientos apenas hay espacio para la defensa. Únicamente ocho días para formular alegaciones, y después todo se acabó. Aunque puede que los haya, no conocía entonces ni conozco hoy ni un único caso de recuperación posesoria en la que los vecinos hayan conseguido parar a la Administración. Son tan privilegiados los poderes que la ley pone en sus manos, que la defensa

es prácticamente imposible. Usted está en el dominio público y se tiene que marchar, eso es todo.

Desde luego la doble opción del requerimiento era una trampa. Cuando lo recibieron, los vecinos no sabían más que lo que ponía el papelito. Más tarde, al oír hablar del proyecto de obras, se hizo evidente que la concesión no era una opción auténtica, sino un cebo para garantizar que los vecinos hicieran mutis por el foro. De manera que nos encontrábamos ante una opción falsa. Si se marchaban por las buenas, estupendo. Pero en caso de pedir la concesión, lo más normal es que ésta, si se otorgaba, les fuera rescatada a los cinco minutos por razones de interés público. Esta es la única interpretación con sentido, si tenemos en cuenta que el motor de todo lo ocurrido fue el proyecto de obras y que la Administración no iba a estar dispuesta a abandonarlo simplemente porque a los vecinos les diera el capricho tonto de elegir la concesión.

EL ALMA DEL GIGANTE

Los vecinos me llamaron por boca de Brígida, una mujer madura, resuelta, nacida por lo visto para organizar, que dirigía una agencia de publicidad en Oviedo. Su padre, después de recorrer en moto una cala tras otra del occidente de Asturias, había elegido la playa de Otur para construir allí una vivienda de verano, y había comprado, como los otros, un cuadro de terreno al propietario de toda la franja que quedaba al pie del acantilado.

Acepté el caso y al hacerlo me enfrenté a una de esas situaciones que en el futuro me iban a ser tan familiares, los asuntos imposibles. La defensa de aquellas casitas condenadas al derribo era el típico encargo que todo abogado en su sano juicio habría rechazado por no ser realista. Por más señas, yo ya había llevado antes unas recuperaciones posesorias en Canet de Berenguer (Valencia), y la defensa no había salido bien. Pero no acepté por ser temerario, ni por razones económicas, sino porque en aquella época conservaba una especie de fe ilimitada en el Derecho. Probablemente esa fe me hacía sentir, como leí una vez, *una sana indiferencia hacia lo imposible*.

Por lo demás, estrené estrategia: discutir los requerimientos discutiendo que los terrenos sean dominio público. Así que, como suelo hacer, en lugar de gastar tontamente energía tratando de oponerme a los requerimientos (que era tan inútil como oponerme a unas recuperaciones posesorias efectivas), cambié el foco de atención y concentré mi interés en algo muy distinto, como era el expediente de deslinde.

Los cuentos populares del tipo *el alma externada* contienen una enseñanza parecida. El héroe se da cuenta de que haga lo que haga no puede derrotar al gigante y cree que todo está perdido, hasta que se entera de que el alma de su enemigo está fuera de su cuerpo, escondida en un lugar secreto. Por eso no puede nada contra él. Para vencerlo, en vez de agotarse enviándole inútiles lanzazos o inoperantes pedradas, lo que debe hacer es quitarse de en medio y viajar lejos, hasta encontrar su alma y apoderarse de ella.

Yo también viajé lejos. No presté atención a los requerimientos de desalojo y me fui a buscarles el alma. Y su alma estaba encerrada en el expediente de deslinde. Si allí encontraba errores, había una oportunidad. Claro que con eso podría no conseguir más que un atracón de teoría inútil, porque había además una dificultad seria: un deslinde del dominio público marítimo terrestre es un acto administrativo que puede impugnarse sólo dentro de los plazos previstos en la ley, en este caso dentro del plazo de dos meses desde que se notifica a los interesados. La iniciativa de dirigirme contra el deslinde, aunque fuera ingeniosa, no serviría de nada si no era capaz de romper esa otra barrera, la de los plazos. Así que no sólo debía encontrar defectos de grueso calibre en la tramitación, sino también algún error mayúsculo que me permitiera impugnar el deslinde incluso pasados varios años de su aprobación.

CHURROS Y CHAPUZAS

Y lo conseguí. Pero el mérito no es mío, sino de las sobresalientes chapuzas del contrario, como en un partido de tenis donde pierde el que pega más golpes inútiles a la red. Mi único mérito fue arriesgarme e investigar, y me encontré con la suerte de que el deslinde en vigor era una de esas calamidades llamadas por aquel entonces *ratificación del deslinde anterior*, que sin ningún reparo puedo calificar de atajo intolerable, error de bulto y abuso manifiesto.

La ley de costas de 1988 obligó a deslindar de nuevo la totalidad de la costa, lo que a los responsables debió parecerles una lata, sobre todo porque al final del

siglo XX los españoles ya habían dejado de ser aquel pueblo sumiso e ignorante de la postguerra, que se dejaba trastear sin levantar la voz. Había aprendido a defenderse y a formular alegaciones extensas, fundamentadas y pesadas de leer y contradecir, así que cada procedimiento de deslinde, lento como un caracol y gordo como una vaca, se había convertido para sus responsables en un calvario con el que no había más remedio que convivir. Los ingenieros de costas debieron pensar que la nueva ley había venido a transformar su labor en una especie de tela de Penélope, que nada más acabada se desbarataba para volver a empezar, y, puestos ante el abismo de tener que empezar de cero, es decir tener que deslindar de nuevo toda la extensa costa de España, a algún funcionario que creía tener la mente despejada se le ocurrió una solución para economizar tiempo y energía: Cuando la línea que define el dominio público no se iba a mover del sitio donde la había fijado el deslinde anterior, en lugar de tramitar un expediente nuevo, la Administración se limitaría a ratificar lo que ya había. Esto apenas necesitaba una declaración de un par de folios que, por lo demás, no era preciso notificar a nadie y que guardada en un cajón estaba muy requetebién. Nada de seguir el procedimiento mandado por la ley de costas, nada de actos de apeo multitudinarios y chillones, de inacabables notificaciones a los vecinos, de molestos trámites de vista y audiencia. Una propuesta, un plano y un documento de aprobación. Esto es, desde luego, eficacia.

Los ingenieros están acostumbrados a la certeza de que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Pero la ciencia exacta se da de bofetadas con

el Derecho, donde a veces la distancia más corta entre dos puntos no es precisamente la línea recta, porque existen rodeos necesarios, aunque a algunos les puedan parecer demasiado sutiles. De nuevo la fracasada *ley de la patada en la puerta*. Si se busca la eficacia, echaremos la puerta abajo. Pero si se quieren tener en cuenta los derechos individuales, es otra cosa. Si marcamos un punto donde están los policías, a un lado de la puerta, y otro donde están los sospechosos, al otro lado, sin duda la línea más corta es la recta, y por tanto la puerta va al suelo. El Derecho propone un rodeo, que pasa por la oficina del juez, a fin de dotarse los señores guardias de una autorización de entrada en lugar cerrado.

Ellos, como buenos ingenieros, buscaban la eficacia rectilínea y simple. Por eso inventaron ese engendro incombible llamado la *ratificación del deslinde anterior*, que se siguió masivamente en toda la costa sin que los vecinos afectados protestaran puesto que no sabían ni media palabra del asunto. Es justamente el caso contrario de *El Proceso*, la obra de Kafka, que nos muestra la perplejidad de un ciudadano ante el proceso abierto contra él. Un proceso inacabable, tramitado por causas que ni conoce ni nadie le explica. Aquí, en Otur, los ciudadanos ni estaban perplejos ni se agobiaban, porque no sabían que alguien, en un despacho, había tomado contra ellos, sin procedimiento, sin notificaciones, sin avisos, una decisión de efectos devastadores.

Vi con complacencia que el deslinde vigente en la playa de Otur era una simple ratificación del anterior, de 1983. Esa fue mi suerte, y la de los vecinos.

Mi fe en el Derecho se reafirmó aún más, y me convencí de hasta qué punto el ejercicio correcto e instruido de los derechos individuales puede ser más mortífero que un ejército bien pertrechado y armado hasta los dientes. Y me puse al asunto.

ENGAÑO MASIVO

Lo que parecía imposible se iba volviendo posible, incluso probable. Impugné los requerimientos, basándome en que los terrenos no eran dominio público, como se pretendía, ya que el deslinde era ilegal. Este era el calificativo más cortés que podía dedicarse a unas actuaciones que se habían tramitado de espaldas a los interesados e incumpliendo una por una, todas las normas posibles de procedimiento, como si los responsables hubieran participado en un concurso para ver cuántas leyes era posible vulnerar de una sola vez. El ingenioso funcionario que había parido aquel mal atajo no había reparado en aspectos quizá demasiado sutiles para su capacidad de análisis. En su pensamiento, como ya he dicho, la ratificación se basa en que como la línea no va a moverse, da igual que los vecinos colindantes se enteren o no. Pero es que aunque se ratifique una mera línea sobre el plano, los efectos de la nueva son distintos y tienen mucho más alcance que los de la antigua. Por ejemplo, en detalles nimios como que la nueva delimitación, al aprobarse con las consecuencias de la ley de 1988, destruye el derecho de propiedad, mientras que la antigua tenía efectos sólo administrativos. Así que lo que estaba

haciendo la Administración era ni más ni menos que quitarle a los ciudadanos sus propiedades sin tan siquiera decírselo, de forma que la gente creía tener casa, pero en realidad no era así, y creían tener su propiedad inscrita en el Registro, cuando lo cierto es que las inscripciones habían sido canceladas por orden del Jefe de Costas. Suena escalofriante ¿verdad? Pues así es como ha estado funcionando, y no sólo en Otur. Es como si un tercero cualquiera, sentado a su mesa de despacho, decidiera un día que esa o aquella casa son tuyas, y su mera decisión fuera suficiente para dejar en la calle a sus propietarios.

Hay unos brujos africanos de los que se cuenta una hazaña espeluznante: le roban el alma a sus paisanos, que sin embargo continúan vivos hasta que por ciertos indicios, o porque se lo dice un entendido, se dan cuenta de la sustracción. Es entonces cuando mueren. De la misma manera, los propietarios despojados por la Dirección General de Costas han venido creyendo ingenuamente que tenían vivienda, chalé o apartamento, cuando en realidad no tenían más que una ilusión. Puesto que esta situación apenas ha sido destapada en unas pocas playas, la ignorancia continúa esparcida por todo el litoral, donde miles de conciudadanos han sido objeto de este expolio, y el día que se den cuenta, el susto será de muerte.

Otros efectos distorsionadores de la *ratificación del deslinde anterior* son no menos impertinentes. Por ejemplo, el deslinde fija la servidumbre de protección y la servidumbre de tránsito, que son dos conceptos nuevos, introducidos por la

ley de costas. Por tanto, conceptos que no estaban presentes en el deslinde anterior, y que por eso no se pueden considerar ratificados, sino introducidos por primera vez por el deslinde nuevo. Eso entre otras muchas cosas que se podrían decir. Yo creo que esquivar la tramitación de un deslinde seguido por el procedimiento establecido, y sustituirlo por un engendro sin procedimiento, es una bestialidad que cualquiera puede entender como tal, al menos cualquiera que no pertenezca a la Abogacía del Estado, porque desde ese cuerpo me llevaron la contraria una y otra vez en mis sucesivos recursos, empeñados en que todo se había hecho de maravilla y recordando a los tribunales que habría sido una tarea ímproba deslindar todo el litoral siguiendo el procedimiento establecido (es decir, que habría sido una tarea ímproba que la Administración cumpliera la ley).

Ni que decir tiene que la Dirección General de Costas desestimó todas mis alegaciones y recursos. Ellos, que aún se estaban congratulando de lo listos que habían sido al parir la dichosa fórmula, no podían consentir que se abriera una brecha. Sabían que si se admitía la nulidad de uno solo de esos expedientes, todo se vendría abajo como un castillo de naipes. Así que se mantuvieron en sus trece y me obligaron a acudir a los tribunales, algo cotidiano cuando reclamas contra el Estado.

Presenté una petición de nulidad del deslinde y también de los requerimientos. La Audiencia Nacional entendió perfectamente que el recurso se interpusiera algunos años después de la aprobación del deslinde, puesto que éste último

nunca se había llegado a notificar a los vecinos, y por tanto no hubo problemas con su admisión a trámite. El Estado continuó oponiéndose con sus mismos argumentos gastados, pero yo gané el pleito. No completamente, porque había querido asegurar al máximo impugnando también el deslinde de 1983, y ésta petición fracasó. Pero había conseguido mi objetivo. La anulación de la delimitación más reciente bastó para anular también los requerimientos y diez años más tarde los vecinos continúan felizmente en sus casitas de la playa.

El Abogado del Estado interpuso un recurso de casación y lo perdió. El Tribunal Supremo incluso dijo en su sentencia que no tenía yo que preocuparme por anular también el deslinde de 1983, sugiriendo que mientras no se aprobase válidamente uno conforme a la ley de costas de 1.988, no sería posible ejercer recuperaciones posesorias.

Y de esta manera lo imposible se había hecho posible.

Años después coincidí en Madrid con ciertos altísimos funcionarios de la Dirección General de Costas y el tema de Otur salió en la conversación. Me pareció muy singular escucharles decir que en su opinión la ratificación del anterior no era la forma correcta de tramitar un deslinde. Me hubiera gustado saber dónde estaban cuando hacían falta, es decir, cuando los vecinos padecían aquella zozobra y de la Demarcación de Costas sólo venían exabruptos. Y aún más: ellos saben que hay multitud de deslindes tramitados por ese erróneo procedimiento, y por tanto multitud de casos de ciudadanos a quienes se les ha arrebatado su propiedad sin que ni siquiera lo sepan, por un procedimiento que

podríamos calificar de medieval, pero no hacen nada al respecto. La ley proporciona instrumentos para revisar y anular de oficio todos esos deslindes, y sin embargo la Administración, más muda que un loro de escayola, lo deja correr, incluso cuando, como ya he dicho, los interesados pueden tener derecho, como compensación por la pérdida de sus propiedades, a una concesión de sesenta años, que sin embargo no pueden solicitar porque ni siquiera saben que han perdido sus viviendas. Visto así, no es éste el retrato de una Administración que cumple con el mandato constitucional de servir con objetividad los intereses generales, sino el de un grupito de ingenieros de costas indiferentes a las sentencias de nuestro más altos tribunales, como si las leyes, los jueces, los códigos, los derechos individuales, todo eso no fueran más que interferencias que perturban la contemplación de esa gran realidad según la cual la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta: ésta es una ley física, y por tanto una auténtica ley de Dios. Lo demás son leyes mundanas.

La cosa quedó así. Los paisanos de Otur continuaron y continúan aún en sus viviendas de verano. La Administración se vio obligada a archivar sus planes de obras. De un sólo golpe les había echado abajo el proyecto de urbanización, los apercibimientos de desalojo y el deslinde, obligándolos a empezar de nuevo, desde el principio y con la debida paciencia.

TODO CAMBIA

Panta rei, decían los griegos. Todo cambia, nada permanece. El viejo Barandiarán, el respetado antropólogo y sacerdote vizcaíno, informaba de que los viejos campesinos vascos, que se pasan el día sentados en un banco mirando al horizonte, están convencidos de que las montañas se mueven y crecen.

La seguridad necesita estabilidad. La seguridad jurídica necesita estabilidad jurídica. Si un juez dice *eso está mal* sabemos que eso está mal y que en el futuro seguirá estando mal, por lo que no hay que hacerlo. Pero a veces los jueces dicen un día *eso está mal* y otro día *eso está bien*. Cuando evocaba la expresión *aquel que lo ha visto todo*, me refería a todo, incluyendo esos incomprensibles cambios de orientación de los tribunales que nos quitan la tierra bajo los pies y hacen explotar por los aires la seguridad jurídica al decir que está bien algo que antes habían dicho que estaba mal.

La playa de la Almardá, en Sagunto, es un paraje de aguas verdes e incipientes formaciones dunares, amplia y solitaria incluso en agosto. Allí, en 1994, se aprobó un deslinde que no solo se había tramitado como ratificación del anterior, sino que contiene errores importantes, puesto que, aunque se pretende que la línea se limita a ratificar la zona marítimo terrestre antigua, de 1.946, lo cierto es que en algunos tramos el límite interior de la ribera del mar no coincide con el límite interior del dominio público marítimo terrestre, por lo que el límite interior de la servidumbre de protección (que se cuenta a partir de la ribera del mar) tampoco coincide con el límite interior de la antigua

servidumbre de salvamento (a la que sustituye), y de aquí que en estos tramos no puede hablarse de verdadera ratificación, sino de ciertas alteraciones que habrían precisado la consulta a los vecinos.

Las sentencias de Otur eran claras y contundentes. Se podría pensar que con ellas cualquier abogado podría conseguir la anulación de cualquier deslinde de ratificación del anterior. Pero no.

Cuando años más tarde reclamé la nulidad del deslinde de la playa de la Almardá, en la Audiencia Nacional me dijeron que no tenía razón, que el expediente estaba muy bien tramitado y que incluso yo mismo reconocía en la demanda que el procedimiento estaba compuesto de tres folios, y no podía dudarse de que tres folios son un procedimiento. Como persona abnegada que soy, no me queda más remedio que acatar esta sentencia, aunque mi confusión es total. Nadie puede acostarse un día recomfortado por la certeza de que las cosas son de una manera y levantarse al día siguiente viendo que son totalmente distintas, como el protagonista improvisado de una historia de fantasía que de pronto amanece en el medievo, o en Marte, o en un mundo imaginario donde alguien, desde dentro, se está encargando de hacer trizas el Derecho.

La Audiencia Nacional había dado un giro radical y ya no era posible discutir allí un deslinde de costas. Ni siquiera con el precedente de Otur. Ni siquiera cuando el inexistente procedimiento era una burla.

OTROS CASOS

La forma en que se multiplican los problemas derivados de este modo de proceder demuestra que a los ingenieros de costas es mucho mejor no dejarlos solos. En el barrio de la Barceloneta unos particulares adquirieron un edificio con la intención de rehabilitarlo e instalar en el mismo un restaurante, pero sin saber, ni compradores ni vendedores, que estaba en el dominio público. Nunca pudieron llevar su proyecto a buen fin, porque la Demarcación de Costas de Barcelona les negó la autorización para hacer las obras, habida cuenta de que el inmueble formaba parte del demanio costero. Pues bien, este deslinde ratifica otro anterior aprobado en 1.923, cuando la zona era, supongo, un arenal. Pero posteriormente se instaló sobre ella un auténtico barrio y el entorno está totalmente urbanizado. El deslinde nuevo se aprobó poco antes de la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, y parece que la prisa pudo influir en el desafortunado procedimiento empleado (es decir, en el hecho de que no se empleó ningún procedimiento. El expediente más ágil y rápido es el que no se tramita nunca). En cualquier caso, la ratificación de la línea de 1.923 carecía de sentido, puesto que en la época del deslinde nuevo ni los temporales alcanzaban la zona ni allí había rastro alguno de arena, al ser la Barceloneta un área carente de todo rasgo demanial e integrada en la malla urbana de la ciudad. Si el procedimiento se hubiera tramitado con audiencia, los vecinos nunca habrían tolerado que se volviera a poner la ribera del mar por dentro del

barrio. Pero como no se enteró nadie, los ingenieros de costas volvieron a hacer lo que les vino en gana.

El deslinde de la playa de Venecia, en Gandía, contenía, además de errores graves de replanteo de la línea anterior (al dibujar la línea del deslinde que se trataba de ratificar, resultó trasladada seis metros al interior, perjudicando a los vecinos), una determinación totalmente ilegal respecto a la servidumbre de protección. La zona se encuentra a la espalda del puerto comercial de Gandía. Cuando se deslinda un recinto portuario, el borde de la ribera del mar se sitúa justamente en el pretil del muelle, sin que se establezca servidumbre de protección porque la misma carece de sentido en la zona de servicios del puerto. Pero en este deslinde se fijó la ribera del mar, de forma totalmente errónea, no en el pretil del muelle, sino en el muro de cierre del puerto, y con esto se estableció una absurda e ilegal zona de servidumbre de protección que afectaba a las viviendas vecinas. El error nunca se habría podido producir si en lugar de tramitarse el expediente por el procedimiento de ratificación del deslinde anterior, es decir, en secreto, se hubiera hecho con audiencia de los interesados, ya que éstos lo habrían hecho ver.

Más aún. En Candelaria (Tenerife), la Dirección General de Costas aprobó en 2006 un deslinde híbrido, con una línea que en parte ratificaba y en parte se separaba de la zona marítimo terrestre antigua. Por extremo que pueda parecer, los ingenieros responsables decidieron que a los colindantes con la línea ratificada no había necesidad de notificarles nada, así que tramitaron un

procedimiento cuyo acto de apeo, vista y audiencia y todo lo demás, se les notificó sólo a los vecinos que colindaban con la línea que alteraba la anterior. A los demás no les dijeron ni una palabra.

Aunque esto sea increíble, aquí se daba un nuevo y reiterado error, como si cada vez que los ingenieros de costas deciden actuar entre las sombras fuera para esconder algo. En este caso el error era el trazado de la zona marítimo terrestre antigua, que en realidad discurría mucho más hacia el mar. Y por este motivo la ratificación misma no era tal, es decir, que todo era una nueva metedura de pata. Los ingenieros de costas se estaban empeñando en que las dos líneas eran la misma, cuando en realidad habían remetido al interior la nueva, por lo que no había ratificación, sino alteración. Y de nuevo, si los interesados hubieran podido tener acceso al expediente, lo habrían hecho ver. Pero no les dejaron.

Para acabar de hacerlo mal, a continuación de aprobar el deslinde con aquellos errores de bulto, a los ingenieros de costas se les ocurrió la brillante idea de tramitar un expediente de recuperación posesoria contra un vecino de los que habían sido mantenidos a dieta de información. Se pueden imaginar la desazón de esta familia, cuando habían construido fuera de la zona marítimo terrestre antigua y de pronto les caía encima un paquete con el siguiente contenido: La edificación se había hecho en parte sobre el deslinde antiguo (era falso). Se había aprobado en 2006 un deslinde que confirmaba que esos bienes pertenecían al Estado (era ilegal). Y por eso se los vamos a quitar y a demoler

(era un crimen). Y ellos en la inopia simplemente porque los ingenieros de costas responsables no estaban capacitados para entender el concepto de los derechos individuales y las garantías de defensa.

Once años más tarde, la Dirección General de Costas reproducía la calamidad de la playa de Otur. Incluso habiendo dos sentencia por en medio diciendo que estaba mal hecho. Estos chicos no aprenden.

Como vemos, este erróneo modo de proceder no sólo es un vicio en sí mismo, sino que la Administración, de forma consciente o no, se ha servido del secreto y la ausencia de controles para incurrir en inexactitudes y errores de todo tipo. Estas inexactitudes y errores justifican la necesidad del llamado principio de participación de los ciudadanos, que es una versión genérica del derecho de vista y audiencia de los interesados, y que significa que todos tienen derecho a opinar en la toma de decisiones que afectan a todos. Los ingenieros de costas, pendientes de líneas y cartabones, ignoraron masivamente ese principio y con esto crearon un grueso y desafortunado apartado al margen del derecho.

VI

LA CIUDAD CONDENADA O EL EXTRAÑO CASO LABARGA

DIECINUEVE TORRES

El entorno era soberbio. Diecinueve torres junto al mar, en total ochocientos apartamentos, algo así como dos o tres mil habitantes. En las plantas bajas, comercios y restaurantes. Toda una pequeña ciudad en una estrecha cinta paralela a la playa. Toda una ciudad cuyo destino era ser dinamitada, echada al suelo y desaparecer. La decisión estaba firmemente tomada por la Dirección General de Costas, ratificada por la Audiencia Nacional y confirmada por el Tribunal Supremo.

Estos edificios, que estaban ya en el corredor de la muerte, esos hogares condenados, esa ciudad destinada a ser borrada de la memoria, es la que me

pidieron que salvara. Ya no quedaba un sólo trámite por hacer, ni un recurso que interponer, excepto el de amparo, sobre el que apenas había esperanzas. La sentencia estaba dictada, y, por así decir, las máquinas calentaban motores, los artificieros preparaban los explosivos y todo había terminado. No había nada que hacer. Ochocientas familias que habían comprado con esfuerzo y paciencia sus viviendas, iban a quedarse sin ellas.

Y sin embargo los habitantes de la ciudad condenada se negaban a rendirla. En un pasaje de la adaptación cinematográfica de *El Señor de los Anillos* vemos una ciudad de los hombres, acosada por un ejército de criaturas de la tierra, negras y crueles, de dientes afilados y ojos inyectados en sangre. Sólo un puñado de hombres tras los muros de la ciudad asustada, y un niño, que también ha preparado su espada, se lamenta a uno de los defensores:

-Todos dicen que no tenemos esperanza.

El defensor guarda silencio mientras examina con atención la espada del niño y, después de una pausa reflexiva, concluye con una frase simple, pero plena de significado:

-*Siempre hay esperanza.*

Este tipo de metáforas encierra el peligro de llevar el debate a un extremo irreal, y así considerar a la Administración tan corrompida en sus designios como el ejército de los orcos, y a los vecinos como espejos de florida virtud. Es evidente que no es así, pero con el paso del tiempo, al comprobar la incapacidad de la Dirección General de Costas para concebir cosas como los derechos

individuales, y a sabiendas del exceso, he llegado a representarme la defensa de los vecinos como la lucha entre un ejército de hombres de carne y sangre contra otro formado por especie de robots, metálicos e insensibles, con circuitos eléctricos en vez de alma, fórmulas matemáticas en lugar de lenguaje y runruneo mecánico en lugar de pensamiento. Y el caso de la ciudad condenada no era precisamente el peor.

Siempre hay esperanza. Los defensores de la ciudad lo creían así, sobre todo por necesidad. Había sido decepcionante perder recurso tras recurso y ver cómo se iban al diablo unas viviendas que se habían construido con escrupuloso respeto a todas las normas, y que habían costado a sus propietarios un buen dinero y no pocos sacrificios. Primero se enfrentaron a la perplejidad de que algo así pudiera pasar, y que les pasara a ellos. Después, a la evidencia de que los recursos prácticamente se habían acabado, y por tanto al abismo.

Siempre hay esperanza. Bajo esa consigna, dejando al margen al gran bufete de Madrid que había llevado el asunto, buscaron una solución extraordinaria.

Visitaron en primer lugar un despacho de gran prestigio, cuyo primer espada era un profesional reconocido. No hubo suerte. Les dijo que no podía hacer nada, que había sentencia del Tribunal Supremo de por medio y que el caso era como el de un enfermo de cáncer, al que se puede prolongar y hacer algo más plácida la agonía, pero no librarlo del desenlace fatal.

Aún y así, los defensores de la ciudad aún no estaban convencidos. La fuerza de la desesperación, ese coraje rebelde de los desahuciados que a veces aflora

incluso en personas sin temple, los impulsaba a no resignarse, a seguir buscando. La imagen de los edificios viniéndose al suelo por efecto de los barrenos era demasiado intolerable, demasiado inconcebible. En cierto sentido, era una imagen irreal, como escapada del cómic, o del cine, o de la leyenda. Algo procedente de una especie de universo paralelo, al que no se podía permitir la entrada en el universo real.

PRIMER ENCUENTRO

Yo acababa de conseguir una importante sentencia del Tribunal Supremo confirmando la anulación del deslinde de la playa de Otur, y había publicado en prensa un artículo llamado *Costas Marítimas: la victoria de los ciudadanos*. El artículo llegó a las manos de los responsables de la asociación de vecinos, que eran como el puñado de defensores de la ciudad condenada, y me llamaron.

Estoy acostumbrado a los asuntos difíciles, les dije. Si fuera médico, podría decir que los enfermos que me traen son todos moribundos. Pero en esta ocasión la imagen se quedaba corta. El enfermo que me traían no era ya un moribundo, sino un moribundo que se acababa de lanzar de un avión sin paracaídas y además se había tomado una cucharada de cianuro.

Aún así no dudé, ni di el asunto por perdido antes de saber más. Aunque el Tribunal Supremo hubiera dicho no, alguien, en alguna fase del expediente, podía haber cometido un error que nadie hubiera detectado. De hecho, los jueces dictan sus sentencias en función de las demandas que les son

presentadas, por lo que sus decisiones sobre Arenales del Sol no significaban que el deslinde fuera perfecto. Las demandas podrían haber incurrido en algún olvido y no haber denunciado algún vicio de procedimiento. Así que sentía curiosidad por saber si podía conseguir que la enfermedad de aquel moribundo que me habían traído remitiera, se abriera el paracaídas y el enfermo vomitara el veneno.

Me reuní con mis nuevos clientes un día de octubre de 2005, en un restaurante de la propia ciudad condenada. Pero, como suelo hacer, antes había procurado informarme. Leí y estudié las numerosas sentencias dictadas sobre el caso, no sólo las originadas por reclamaciones de la asociación de vecinos, sino también a demanda de otros propietarios que habían formulado recursos por su cuenta, y del Ayuntamiento de Elche, en cuyo término estaba (y continúa estando en el momento en que escribo) la ciudad condenada. En estas sentencias comprobé hasta qué extremo la empresa era difícil, pues todas y cada una de ellas coincidían en una declaración de hechos probados que era como el gancho de un campeón del mundo del peso pesado en la mandíbula de un oponente flacucho: Los edificios se habían construido sobre un cordón dunar activo. Una y otra vez se repetía este dato que hacía ya imposible toda rebeldía. Para hacerlo aún peor, algunas defensas fueron poco afortunadas, algo con lo que acostumbro a encontrarme. En varios casos se había reconocido el hecho de que las viviendas se habían construido sobre terrenos arenosos. Una de las demandas pretendía sacar algo denunciando que también eran arenosos los

terrenos situados más al interior, que sin embargo habían escapado a la calificación demanial. Es un tipo de estrategia errática, con la cual ni siquiera el que la emplea sabe qué quiere conseguir, y sobre todo una fórmula envenenada, a la que podríamos llamar la fórmula del *sí pero*. Sí, es cierto que hay arena, *pero* también la hay en otras partes que no están dentro de la delimitación. Sí, es cierto que llegan los temporales, *pero* también llegan a la casa de mi vecino, que se ha quedado fuera del dominio público. Sí, es cierto que las olas me entran en casa, *pero* es porque usted no ha regenerado la costa, porque un puerto causa regresión marina, porque la desaparición de los algares perjudica el equilibrio de la playa. Los abogados, atónitos ante los amplísimos poderes que la ley da a la Administración para fijar la ribera del mar, suelen acudir a estas fórmulas, que son todas ellas fracaso seguro, no porque sean ineficaces, que lo son, sino especialmente porque implican un reconocimiento de hechos que releva a la Administración, muy gentilmente, de todo esfuerzo probatorio. Decir *sí pero* implica decir sí. Y desde que lo hacemos estamos comprometidos, o, mejor, *perdidos*. Después del sí, los peros no importan. Los peros a la derecha son, por así decir, como ceros a la izquierda.

Lo peor es que estas fórmulas no se limitan a que abogado y cliente pierdan el pleito, sino que, al afectar el deslinde a un colectivo, perjudican gravemente a otros abogados y otros vecinos. De nada servirá que el abogado A se esmere en poner en duda las pruebas aportadas por la Administración si el abogado B se

le ha adelantado con ese regalo navideño fuera de fecha que es la fórmula del *sí pero*.

En fin, que las defensas descaminadas habían sido más letales para los vecinos que el más torvo Jefe de Costas rumiando en la penumbra el modo de amargarles la vida. Por tanto, todo lo que leí en aquellas sentencias parecía cerrarme las puertas sin una grieta por la que colar una defensa de última hora. Pero, junto a ello, también hubo algo que me llamó la atención, algo que desde el primer momento me pareció raro y que ni me encajaba ni me convencía. Algo que ya desde entonces me había resuelto a investigar.

El presidente de la asociación de vecinos era un hombre joven, metido en el mundo, profesor de Macroeconomía en la Universidad de Alicante, aficionado a la buena conversación y abrumado por una fuerte perplejidad intelectual ante el devenir de los acontecimientos. El tesorero, un empleado de banca prejubilado, serio, taciturno, delgado y con ese aspecto inofensivo y confiable de los buenos banqueros. Más tarde conocería al secretario, joven y vital empresario con excelente humor, inmejorable cordialidad y un carácter emprendedor de buen comerciante. Otro miembro de la junta directiva era un empresario entrado en años con aspecto de hombre mediterráneo comedido, tranquilo y moderadamente feliz.

El presidente anterior había fallecido a causa de un infarto, y todos estaban convencidos de que la amarga lucha por las viviendas había tenido mucho que

ver. Los defensores de la ciudad condenada estaban experimentando su desventura como un drama muy vivido y muy sufrido por dentro.

Me enteré de que en la asociación había dos pareceres. Unos querían buscar una solución donde fuera, incluso con un francotirador como yo, mientras que otros deseaban permanecer fieles al mismo bufete que había estado llevando el asunto. La junta directiva estaba en el primer grupo, pero necesitaba argumentos bien fundados para entregarle a un desconocido el asunto que hasta entonces llevaba un despacho de renombre. Hay perros con pedigrí, que frecuentan la peluquería canina y perros callejeros, despeinados, de raza dudosa y sin historial edificante. Si en vez de ser personas fuéramos perros, los catedráticos y abogados que habían intervenido en el asunto tendrían pedigrí certificado, y yo, aunque sin pulgas, sería el chucho de la calle. Difícil, por tanto, triunfar donde otros mucho mejores habían fracasado.

EL DRAMA DE LOS ARENALES DEL SOL

Durante la comida me enteré de la dramática historia de Arenales del Sol. En los años setenta los propietarios de los terrenos, pensando en construir, pidieron un deslinde de la zona marítimo terrestre, que se resolvió en 1974. A partir de ese momento, y con todas las bendiciones legales, levantaron el complejo residencial más allá de la línea de deslinde, en terrenos cuyo carácter privado era ya incuestionable. De hecho, algunos pidieron a la jefatura de costas autorización para edificar y obtuvieron la lógica respuesta de que no había

nada que autorizar, pues los terrenos habían quedado fuera del dominio público.

Sin embargo, el deslinde tramitado con posterioridad, después de la ley de costas de 1988, había declarado dominio público toda la zona ocupada por los edificios, y ello con carácter retroactivo, aludiendo al carácter que habían tenido los terrenos no en el momento de tramitar el deslinde, sino veinte años atrás, antes de la aprobación del anterior. Tuvo que acudirse a esta extraña fórmula de retroactividad, puesto que era evidente que los terrenos, en el momento del segundo deslinde, ya no eran una playa, sino una ciudad. Yo ya conocía algunos casos de zonas declaradas dominio público en deslindes antiguos, que posteriormente a esa declaración se habían ido colonizando hasta dar lugar a esos fastidiosos divorcios entre el Derecho y la realidad: una ciudad que es una playa, o viceversa. Pero era la primera vez que me enfrentaba a la situación contraria: una ciudad levantada en terrenos que no son dominio público y que se declaran como tal después de acabada la obra. Nuevo divorcio entre la realidad y el derecho, pero bastante más grave. Y más raro.

Los abogados que habían llevado el asunto habían sido quizá víctimas de una confianza más que entendible en la doctrina judicial imperante hasta aquel momento, en especial la contenida en la sentencia que yo mismo había obtenido en el deslinde de Oliva (tramo sur), ya que son escasísimas las resoluciones judiciales que en España han anulado un deslinde de la ley de costas de 1988, y por tanto los precedentes en los que basar una defensa.

Mi sentencia de Oliva, como comento en otro apartado, reprochaba a la Administración haber incluido dentro del dominio público una acerca o un camino asfaltado. Con esto, los jueces estaban diciendo que los terrenos sobre los que se ha hecho una obra artificial han perdido su primitivo carácter de zona marítimo terrestre o playa.

Poco después, en las sentencias de Arenales del Sol, los mismos jueces habían decidido lo contrario hasta el extremo de declarar dominio público terrenos constituidos no ya por una simple acera, sino por toda una ciudad. El Tribunal Supremo tiene dicho que los cambios de criterio de los jueces, mientras sean unánimes y den curso a una corriente interpretativa clara, no atentan contra la seguridad jurídica ni contra ningún otro derecho, así que, por más perplejidad que pudiera causar, era preciso aceptar la nueva situación. Pero desde luego, los precedentes judiciales pueden explicar que los abogados que me precedieron estuvieran convencidos de que iban a ganar el caso. A mí me hubiera pasado igual. Habría comparecido en la Audiencia Nacional más o menos confiado, con mi sentencia de Oliva como arma principal, y me habría llevado un bofetón histórico.

Pero el carácter retroactivo del deslinde no era porque sí. Se basaba en una cuestión de hecho que era justamente aquella que desde el principio me había parecido rara: La orden ministerial decía que el deslinde anterior era incompleto porque había definido sólo la zona marítimo terrestre y no la playa, y eso justificaba que el nuevo entrase a delimitar ésta última e incluyera así las

viviendas, que pretendidamente se habían construido sobre la arena. Por tanto, el deslinde reciente, de 1997, justificaba su agresiva (y retroactiva) entrada en la propiedad privada como especie de subsanación de defectos y deficiencias del anterior. El mismo extraño argumento lo repetían todas y cada una de las sentencias, y todo eso no me convencía. Yo había trabajado con deslindes de la ley antigua y no solían ser defectuosos ni dejar al margen la playa. En la ley de costas de 1.969 las playas ya estaban consideradas dominio público, así que simplemente no podía imaginarme un deslinde que se hubiera olvidado del tema, como si sus responsables se hubieran vuelto tontos de repente.

Durante la comida tuve ocasión de escuchar una teoría conspirativa sobre el origen del problema. La explicó extensísimamente cierto comensal (que era su autor y al mismo tiempo el único que creía en ella), y versaba sobre chantajes, alta política, grandes negocios frustrados y una venganza personal. Unos señores muy poderosos que querían comprar los espacios aún libres de Arenales del Sol para construir en ellos, un propietario obstinado en no vender y una amenaza. Observé que el conferenciante tendía a divagar y a construir mundos virtuales con tan poca consistencia como esas frágiles pompas de jabón de las que hablaba Machado. Y sobre todo, que estaba convencidísimo de lo que decía. Era el típico afectado obsesionado que trae consigo una carpeta llena de documentos históricos, la mayoría de ellos inútiles, y que analiza la realidad con cierto desenfoque. Al cabo de un rato me di cuenta de que estaba perorando. No era así como Arenales del Sol iba a salvarse. Puede que aquel

caso necesitara una labor de detective, pero no precisamente en el estilo de videojuego que sugería el autor de la teoría de la conspiración, con un paisaje de alta investigación propia del agente 007, incluyendo alguna chica Bond a la que también aludió. El caso requería al más modesto y callado Hércules Poirot.

Por lo demás, recibí muchas preguntas, y la principal era si yo pensaba que el caso tenía defensa. Advertí que las reiterativas y unánimes declaraciones de hechos probados de los tribunales nos condicionaban terriblemente, porque impedían que pudiera revisarse o replantearse la principal cuestión de hecho, es decir, si las viviendas habían sido construidas o no sobre la arena. La única forma de atacar el deslinde era buscar un error grave que afectase al procedimiento administrativo, algo que yo sabía que no era imposible, más bien al contrario, si debía juzgar por mi experiencia. Y para eso tenía que estudiar el expediente, sólo entonces estaría en condiciones de dar una opinión. Así que, conspiraciones aparte, todo dependía de lo que yo fuera capaz de encontrar en los legajos.

DE NUEVO EL ALMA DEL GIGANTE

Sin embargo, el día en que viajé a Alicante a ese fin, mi objetivo principal no era la carpeta que contenía el expediente (en realidad eran veinte cajas de documentos), sino otra distinta, justamente la del deslinde anterior, al que con tanta unanimidad los papeles y las sentencias acusaban de defectuoso. Como en otras ocasiones, en lugar de enfrentarme directamente al gigante, iba busca de

su alma, que estaba fuera de él, oculta en algún rincón que yo debía encontrar. Es lo que hizo Odiseo al verse atrapado en una cueva con un cíclope de tres metros, caníbal y muerto de hambre: No plantarle cara, sino buscar un rodeo.

El motivo por el que quería ver el expediente anterior era simple: necesitaba comprobar si era cierto que se había tramitado de forma tan incompleta como se decía, y que, efectivamente, los responsables hubieran sufrido trastorno mental transitorio hasta el extremo de haberse olvidado de la playa. Y allí estaba, en la Jefatura de Costas de Alicante, sentado ante el expediente, ansioso en mi demanda de lo imposible, en mi búsqueda de la llave que me permitiera salvar contra pronóstico la ciudad condenada. Para conseguirlo debía ser ante todo un detective eficiente y triunfar donde los mejores expertos del país habían fracasado, aspiración por lo demás presuntuosa, pero qué le vamos a hacer. No le tenía miedo a nada.

Cuando estaba en la Facultad no esperaba llegar a vivir aquellas sensaciones. El Derecho siempre me había parecido una lata, algo así como un conflicto permanente, un paquete de cosas anodino y de color gris, sin interés. En mi aburrido aprendizaje había debido reclamar judicialmente el pago de cheques y romperme la cabeza con las abstracciones de la letra de cambio, y no sólo encontraba que una vida dedicada a eso era una plasta, sino que temía que iba a ser así para siempre.

Y sin embargo aquel día de otoño estaba mirando aquella carpeta gastada, de color caramelo, con la curiosidad de un científico al borde de un nuevo

descubrimiento, la excitación de un cazador que tiene a tiro a su presa y la pasión de un pirata ante el mapa de un tesoro. Estaba dispuesto a rastrear cada punto y cada coma, con esa curiosidad fatal que condujo al primate hasta el homo sapiens, en manos del pensamiento. En algún rincón más o menos remoto de aquella carpeta debía estar el alma del gigante. Así que me preparé para una larga búsqueda.

La abrí, leí el primer párrafo de la primera página. Estaba allí. El secreto, la solución, la fórmula. Tan simple y tan a la vista. Nada de buscar fatigosamente durante horas, nada de interpretar datos dudosos ni de darle vueltas y vueltas a páginas apergaminadas. Fue como prepararse para la pelea con un contrincante que de pronto se da a la fuga, como ganar una batalla sin disparar un sólo tiro. La Orden Ministerial aprobatoria del deslinde de 1974, ése al que se tachaba de incompleto por haber olvidado la playa, decía con una claridad meridiana que el deslinde era de la zona marítimo terrestre y *de las playas*. Sin más. El deslinde anterior no era incompleto, sino completo, y por tanto la Orden Ministerial aprobatoria del deslinde de 1.997, que condenaba a Arenales del Sol, se apoyaba en una gran mentira, y la Dirección General de Costas no sólo había engañado a los vecinos sino también a los jueces, haciéndoles creer que aquel deslinde de 1.974 delimitaba únicamente la zona marítimo terrestre, y los había hecho caer en el ridículo al fundamentar sus sentencias en hechos completamente falsos. Realmente las proporciones del engaño eran monumentales, pero lo que más me maravilló fue haber encontrado tan rápidamente la solución. Los vecinos

llevaban más de diez años defendiéndose y formulando recursos, pero no se les había ocurrido revisar aquel expediente porque se fiaban de la buena fe de la Administración, sin sospechar que ésta les estaba mintiendo en escritos con sello y membrete oficial. Y yo, en cambio, había tardado como diez segundos, el tiempo preciso para darle la vuelta a la cubierta y leer el primer párrafo del primer documento, como si todo el tiempo aquella declaración hubiera estado allí, clara y contundente, impaciente por que alguien la descubriera.

Todo lo que leí a continuación no fue más que una confirmación de lo anterior. El expediente antiguo no sólo deslindaba la playa, sino que era un procedimiento modélico, en el que se amojonó la zona marítimo terrestre con hitos que tenían escrita la expresión MT y la playa con otros identificados con una letra P. Lo nunca visto en precisión y profesionalidad. Era el deslinde de la ley de 1969 mejor hecho con el que me había encontrado nunca. Apenas podía entender qué especie de locura era la que había llevado al Director General de Costas a la extraña afirmación de que era incompleto y de que había olvidado delimitar la playa. Pero así era, todo un complejo montaje, con unas consecuencias dramáticas, basado en algo que no era cierto.

Tenía, pues, lo que necesitaba. Pero entonces dejé a un lado aquella especie de Santo Grial en que se había convertido el procedimiento de 1974, y puse delante de mí una de las carpetas del más reciente. Nada de triunfalismos, nada de exceso de confianza y nada de enfermar de teoría. Lo que había encontrado podía estar bien para dar una conferencia o escribir un artículo, y en cambio ser

insuficiente para ganar un pleito. Como estaba en el duro mundo real y todo lo que argumentara debía ser aceptado por los jueces, sabía que lo importante no era presentar una fórmula ingeniosa, sino una convincente. No me bastaba con dar, como perrito juguetero, dos o tres empujones al contrario y dejarlo atontado: necesitaba acabar con él siguiendo la consigna de Robert de Niro en *El Cazador*: Un sólo disparo.

EL MISTERIO DE LABARGA TEJADA

Por eso abrí el otro expediente, el reciente, para buscar nuevas causas de nulidad. Y las encontré. O más bien encontré datos cuya interpretación fui madurando en los días que siguieron, hasta convencerme de que podían ser fórmulas de impugnación. El procedimiento era muy antiguo y se había tramitado durante muchos años. En ese tiempo había sido sustituida la ley de procedimiento administrativo por otra nueva, y también las leyes y reglamentos de costas. Los responsables de la tramitación, por pura mecánica, y creo que de forma inconsciente, habían venido adoptando las nuevas normas de procedimiento, de forma que el expediente se había seguido en una fase según unos preceptos y en otra fase según otros distintos. Esto está prohibido por el ordenamiento jurídico, y en teoría ahí tenía un nuevo triunfo, pero de nuevo la diferencia entre teoría y práctica: Ciertamente que está prohibido, pero cierto también que la simple vulneración de la prohibición, sin más, no conduce a nada. Para que se anulen las actuaciones es preciso que el empleo de la norma de

procedimiento incorrecta haya producido distorsiones concretas con consecuencias prácticas sobre el derecho de defensa. Pero comprobé que esas consecuencias y distorsiones efectivamente se daban. Por tanto, no solamente había encontrado el motivo de nulidad en el que desde el principio había estado pensando (el relativo al carácter completo, y no Incompleto, del deslinde anterior), sino dos motivos más.

Hojeando el expediente también me enteré de ciertos detalles que hacían de aquel deslinde un caso único. La propuesta inicial se limitaba a ratificar el anterior de 1974, y por tanto discurría mansamente al pie de los edificios sin conflictos y sin aventuras. Su autor era el entonces jefe de Costas de Alicante, el Sr. Paton. Así que en los tranquilos comienzos todo estaba destinado a desarrollarse sin problemas, respetando los edificios y naturalmente sin oposición y sin ningún tipo de conflicto social. Todos estaban contentos, la Administración y los vecinos. Pero se produjo un incidente inesperado que no sólo iba a dar al traste con aquel idilio, sino que también iba a transformar el caso de Arenales en una novela negra además de convertir la vida de los vecinos en un infierno.

La ley de costas de 1969 regulaba una llamada comisión de deslinde, formada por todos los ministerios y organismos afectados junto al jefe de costas. Todos ellos debían aprobar la propuesta de deslinde más o menos de común acuerdo. De esa comisión debían formar parte el Ayuntamiento, el Ministerio de Defensa, el competente sobre la navegación marítima y el encargado del

turismo. El día del reconocimiento sobre el terreno, al que debían asistir los representantes de todos aquellos organismos, y contra todo pronóstico, el Jefe de Costas no estaba. Nadie explicó nunca el motivo de su ausencia. Simplemente no estaba allí. Y no sólo eso. En el lugar se presentó un ingeniero que decía representar al Ministerio de Obras Públicas (en esa época era el competente para los deslindes), pero que no pertenecía a la Demarcación de Costas. Se llamaba Labarga Tejada y se le admitió en la comisión sin aparente problema, lo que ya es raro. El no venía, en apariencia, a sustituir a Paton, para eso estaba el ingeniero jefe de dominio público de la Demarcación de Costas (que tampoco había venido).

Labarga Tejada tenía preparada una sorpresa. El confiado ingeniero jefe Paton había elaborado la propuesta inocua que he mencionado arriba, con una línea que ratificaba la anterior, y por tanto respetaba las viviendas, pero en aquel acto Labarga soltó la bomba. Tomó la palabra y expresó su parecer de que en tiempos anteriores la zona de materiales sueltos, es decir, la playa, se prolongaba hacia el interior, donde en aquel momento estaban las viviendas. He trabajado en muchos deslindes de costas y nunca había visto nada igual. Los miembros de la comisión pueden hacer observaciones, pero suelen ser mudos y simplemente no osan oponerse a la propuesta de deslinde elaborada por la Demarcación de Costas. Pero allí estaba, un señor que ni siquiera formaba parte de la comisión desafiando la propuesta oficial.

Creo que la cosa no habría pasado de mera anécdota de no ser porque la observación de Labarga Tejada iba mucho más lejos de un simple comentario para el debate. Su actitud obedecía a una decisión firme y a un plan bien definido: el de impedir que se aprobase la propuesta del ingeniero jefe y por tanto el de conseguir el traslado de la línea al interior. Y lo creo así porque al día siguiente el Sr. Labarga entregó al Jefe de Costas un plano con la delimitación alternativa que él proponía, que, en efecto, englobaba la totalidad de las viviendas dentro del dominio público marítimo terrestre, poniendo de esta manera la semilla del gran conflicto jurídico y social en que se ha convertido el deslinde de Arenales del Sol.

Nunca podré saber a qué se debió esta sorprendente iniciativa. Mientras leía, recordé por un momento la teoría de la conspiración, pero, aunque seguí sin darle crédito, reconozco que lo sucedido carece de parangón -que yo conozca- en la historia de los deslindes de costas en España, lo que me impulsa a pensar que efectivamente había algo anormal, quizá algo turbio. Algo que no sabemos y nunca llegaremos a saber. Puede que Labarga y Paton tuviesen algún problema personal, que el primero lo hubiera tenido con los constructores de alguna de las torres, o con el propietario de los terrenos libres o simplemente (aunque menos creíble) que fuera una persona comprometida con el medio ambiente y espantada ante la visión de tantos edificios contruidos aparentemente sobre la arena. Sea como fuere, el daño quedó hecho, pero quienes lo sufrieron no fueron los primitivos propietarios de los terrenos, ni los

que construyeron en ellos, sino los terceros de buena fe, que compraron con toda inocencia y nada sabían, ni les importaba, de la historia de los deslindes anteriores.

EL MIEDO DE PATON

Un abrumado ingeniero jefe Paton se encontró con dos planos sobre su mesa. Uno era el que él había elaborado y propuesto a Madrid con el inicio del expediente, por delante de las viviendas. El otro, la desafiante alternativa de Labarga Tejada. No es difícil sospechar que no sabía qué camino tomar. Eso quedó patente por lo que hizo a continuación, que fue elevar consulta a la Dirección General de Costas, exponiendo lo sucedido y reclamando una directriz, es decir, que le dijeran cual de los dos planos debía proponer oficialmente. Pero en Madrid le dieron de lado con un oficio bastante frío en el que le advertían que el Jefe de Costas era él, y era él quien debía decidir.

Paton debió sentirse muy solo. La vida de cada uno de nosotros es una incesante serie de decisiones personales que conforman lo que Paul Sartre llamó la cárcel de la libertad: la esclavizante obligación de formular decisiones a cada momento. Decisiones que, al elegir uno de los términos, siempre nos obligan a rechazar el otro. Decisiones de las que no podemos escapar. Pero la decisión que hubo de tomar aquel jefe de costas iba a ser mucho más comprometida y más frustrante que una mera opción personal, porque estaba destinada a afectar no sólo a los vecinos de Arenales del Sol, sino también al resto de España, si

tenemos en cuenta el valor ejemplarizante y de precedente judicial que después han tenido las sentencias relativas a aquel deslinde.

Aunque cualquier comparación entre un ingeniero de caminos y una mariposa carece de sentido, la inusitada ocurrencia de Labarga Tejada fue como el movimiento de alas de una mariposa, capaz de ir movilizandofuerzas, primero sutiles más tarde poderosas, hasta producir cataclismos naturales y daños irre recuperables. Ya nada iba a ser igual en España después que aquel ingeniero desconocido se atreviera a echar su órdago.

Paton se arrugó. Cogió su propuesta de deslinde, su plano y su memoria y los echó a la papelera para aceptar sumisamente el planteamiento de Labarga. Hizo un plano nuevo y una propuesta nueva, que significaban la inclusión de las viviendas dentro del dominio público, y a partir de ahí vinieron los sustos y los conflictos. Justo es reconocer que uno de los primeros en vivir ese susto fue el propio Abogado del Estado, que emitió un informe en el que se lee el horror ante la nueva propuesta, pero que no consiguió cambiar el curso de la historia.

¿Por qué aceptó Paton el plano alternativo? ¿Por qué decidió tragarse el suyo? ¿Por qué se rindió tan pronto? ¿Se produjo algún tipo de presión? En el expediente no hay ni datos ni argumentos que respalden la revolucionaria propuesta de aquel aparente intruso que era el Sr. Labarga. En vano buscaremos informes, pruebas o alegaciones en que basase su iniciativa, y que pudieran convencer a Paton. Entonces ¿cuáles fueron los motivos de aquella mansedumbre del Jefe de Costas? La propuesta de Labarga no era mejor que la

de Paton, ni estaba mejor fundada. Se limitaba a aquella conjetura de que *quizá* anteriormente la zona de materiales sueltos llegaba más al interior. Conozco a los ingenieros de costas. Suelen ser inflexibles. No los mueven del sitio ni las alegaciones, ni las pruebas, ni los argumentos bien fundados. Entonces ¿Cómo iban a bastar un *quizá*, un *puede ser*, un *quién sabe* o un *a lo mejor*, que en apariencia es lo único que aportó el misterioso Labarga?

Tuvo que haber algo más, una razón poderosa y por lo visto secreta. Las pruebas vinieron después. Lo mismo que en algunas formulaciones pseudocientíficas, primero se elabora la teoría y después se buscan las evidencias que les sirvan de base. Y en Arenales del Sol parece haber sucedido algo así. Sólo después de que Paton claudicase se puso la Jefatura de Costas, con furor de coleccionista de sellos, a recopilar fotografías históricas anteriores a 1974 para demostrar que los terrenos que entonces se habían dejado fuera formaban parte de la playa.

LA GRAN IMPOSTURA

Los abogados, puestos ante un caso difícil como éste, debemos ser como el agua, que siempre encuentra un camino. Esto es lo que suelo decir a mis clientes. Cuando me preguntan qué posibilidades hay de anular un deslinde, nunca me comprometo, pero a menudo les digo que *hay un camino*. El despliegue de ingenio y atención necesario para encontrar ese camino suele

depender de la dificultad del asunto. Y como aquél era un asunto muy difícil, mi atención era máxima.

A menudo los errores más graves en la tramitación de los expedientes son en realidad tan groseros que pasan desapercibidos. En el caso de Arenales del Sol, el error era de cuidado, y afectaba de lleno a Labarga Tejada y sus novedosas propuestas. Todo el mundo había aceptado su intervención en la comisión de deslinde, y ni abogados ni tampoco magistrados hicieron observación alguna al respecto con motivo de las reclamaciones judiciales. Algunas sentencias llegaban incluso a proclamar que el expediente era formalmente irreprochable, lo que debe achacarse al romo planteamiento de los diversos recursos, ninguno de los cuales opuso una sola causa de nulidad por motivos de forma.

Y la cuestión es que aquí también había un error grosero, porque la presencia de Labarga Tejada en el acto de deslinde es, a mi parecer, como la canción de Mecano que dice *allí me colé y en tu fiesta me planté*. El no estaba invitado a la fiesta, no debía estar allí, ni por tanto podía presentar un plano alternativo ni una propuesta nueva. La comisión de deslinde debía estar integrada por los organismos públicos afectados y predeterminados en la ley de costas, y es claro que uno de ellos era el ministerio de Obras Públicas, donde prestaba servicios el interesado, pero no era de recibo que el ministerio enviase a un representante, por la simple razón de que la Dirección General de Costas estaba en esa fecha integrada en el ministerio en cuestión, y de aquí que el único y genuino representante del mismo era por definición el propio ingeniero Jefe de Costas y

nadie más que él. Por tanto, Labarga era un intruso y su presencia en la comisión, un fraude. Y, francamente, esto me hace sospechar aún más. Ya es raro que el ingeniero jefe Paton accediera a ponerse de rodillas, pero más raro aún es que lo hiciera a sabiendas de que su contrincante era un polizón que se había colado sin billete.

Sospechas al margen, la ley prevé para estos casos la nulidad de todas las actuaciones posteriores al momento en que se produjo el vicio, y eso me venía muy bien, porque cambiaba el paisaje del deslinde de forma no sólo dramática, sino ajustada a las necesidades de los vecinos como el traje confeccionado por un sastre. Así pues, me había vuelto cirujano. Anular las actuaciones posteriores al vicio significaba amputar el procedimiento de la intervención de Labarga, y esa operación con bisturí, que obliga tanto a cercenar lo enfermo como a conservar lo sano, nos dejaba de nuevo con la inofensiva propuesta de Paton, que ponía la línea mansamente al pie de los edificios.

Así que, si se aceptase la nulidad, la Administración se vería además forzada a trabajar sobre su misma propuesta inicial de deslinde. No se podía pedir más.

EL AYUNTAMIENTO ENTRA EN ESCENA

El otro motivo de nulidad afectaba también al acto del deslinde sobre el terreno. Si se hubiera practicado éste último con arreglo a las normas correctas de procedimiento, se habría reunido la llamada comisión de deslinde, pero para cuando se continuó la tramitación, ya asumiendo el nuevo plano, se habían

publicado la vigente ley de costas y su reglamento, y los actos posteriores se tramitaron -erróneamente- siguiendo sus normas. Por eso la comisión de deslinde y el acto de reconocimiento sobre el terreno, que habían dejado de existir con la normativa nueva, desaparecieron del expediente en favor del llamado *apeo*, un acto en el que el único funcionario participante es el propio Jefe de Costas. Y de aquí que los diversos organismos afectados, como el Ayuntamiento de Elche o la autoridad de Turismo, hubieran visto limitado o trastocado su derecho a pertenecer a la comisión y por tanto a aprobar la propuesta de delimitación de forma colegiada. Pero éste era un nuevo motivo de nulidad, ya que el apeo sin participación de órganos afectados se había producido al usar una norma inapropiada de procedimiento.

La jurisprudencia tiene dicho que el empleo de un procedimiento distinto al establecido, es lo mismo que no emplear procedimiento alguno, y produce por sí nulidad de pleno derecho. Pero esta jurisprudencia es antigua. Los tribunales, quien sabe si a vista de la inmensa cantidad de pleitos que la Administración perdía, han ido estrechando la interpretación de las causas de nulidad de pleno derecho, de tal forma que hoy día no es suficiente que se dé una de esas causas, sino que se exige además que su aparición haya causado lesión de derechos individuales. En este caso se daba efectivamente tal lesión, pero el problema era que la misma afectaba a los organismos privados de protagonismo, no a los vecinos. Ciertamente que el perjuicio causado al Ayuntamiento también afecta a sus

ciudadanos, aunque de forma indirecta, pero los tribunales tienen dicho que las violaciones de derechos solamente pueden ser alegadas por quienes las sufren.

Todo aquello aconsejaba un pacto con el Ayuntamiento de Elche, para que el mismo se sumase al recurso extraordinario que yo me disponía a presentar contra el deslinde. Si no era así, pudiera ser que los jueces admitiesen la irregularidad, pero considerasen a los vecinos simples terceros no legitimados para alegar aquella causa.

En todo caso, mi investigación había dado resultado y los motivos de nulidad habían aparecido. Y sin embargo todo eso no me tranquilizaba. Si fuera un profesor universitario o un teórico de cualquier clase, me habría conformado, pero el Derecho tiene un fin práctico. Los abogados deben resolver los problemas que les presentan los clientes, no hacer un discurso lindo. En la cátedra hay exposiciones inteligentes y razonamientos interesantes. En la arena hay sudor, miedo y sangre. Y yo estaba en la arena.

UN BUEN CONSEJO

Entre ochocientos propietarios de Arenales del Sol había de todo, incluyendo unos cuantos buenos profesionales del Derecho. Algunos de ellos habían retozado en los expedientes como yo, en busca de una solución extraordinaria, y habían detectado, como yo, que el primer deslinde era intachable, y por tanto que el segundo y definitivo se apoyaba en hechos falsos (en cambio, nadie había detectado los otros dos motivos de nulidad, que eran bastantes más técnicos).

Uno de ellos era un importante jurista que tiempo atrás se había lanzado a la misma aventura que yo, formulando un recurso extraordinario que acabó en los tribunales. Y acabó mal, porque ni la Audiencia Nacional ni el Tribunal Supremo escucharon sus argumentos. Un día me encontraba haciendo uso de la palabra en una asamblea de vecinos, cuando se recibió una llamada de este importante jurista, que pidió hablar conmigo. Me puse al teléfono, sólo para vivir una situación irreal. El jurista, cuya voz flojita denunciaba disnea de esfuerzo, me glosó en pocas palabras sus desgracias ante los tribunales, me anunció que pensaba recurrir a Estrasburgo (que es como la cueva de Lourdes de las causas perdidas) y sobre todo me advirtió que no merecía la molestia que yo siguiera adelante con recursos nuevos, supuesto que el camino que yo me disponía a recorrer, creyendo ser el primero, por así decir ya tenía sus huellas.

Conclusión: algo así como que como él ya había fracasado gloriosamente, un novato como yo podía ahorrarse el bochorno. O, dicho al modo castizo, *yo de ti no lo intentaría*.

Me quedé tan patidifuso como requería la equívoca situación. Quien me daba tan amigables consejos ni siquiera sabía de qué iba lo mío, y pensaba -desde luego apresuradamente- que yo no tenía otra cosa que hacer más que imitar sus fracasados planteamientos. Ni se le ocurría sospechar que hubiera podido ver cosas que a él le hubieran pasado desapercibidas, como así era, porque lo único que él había detectado era lo fácil, que el deslinde de 1.974 era completo, pero no lo demás.

Fui amable, procuré simular que era medio bobo, le di las gracias por su gentil llamada y su valioso consejo, y regresé a la reunión completamente pasmado. Poco después me llegó una fotocopia de su sentencia, y allí pude ver la traza de una demanda bastante plana. Digamos que el gran descubrimiento de que el deslinde anterior era completo constituía un tesoro, pero un tesoro sólo potencial, a semejanza de los talentos de la parábola. Que ese tesoro se transformase de modo efectivo en la gran solución, dependía de cómo se lo administrase, y aquel jurista, a mi entender, lo había administrado pobremente.

El deslinde anterior fue completo ¿y qué? ¿A dónde nos lleva esto? ¿Cómo puede ese dato producir la nulidad del deslinde nuevo? En su análisis, la consecuencia era que sólo por eso la Administración está deshabilitada para abrir un expediente nuevo.

Se trata del planteamiento que habría hecho un estudiante de primero de carrera al que su mamá aún le preparase los bocadillos. Se habían formulado docenas de recursos basados en ese mismo argumento, y los tribunales estaban verdaderamente hartos de rechazarlo una y otra vez, porque la Administración puede iniciar un deslinde nuevo siempre que lo crea conveniente y eso es indiscutible. En nuestro caso, por lo demás, no se había tramitado ningún deslinde de la ley de 1988, y eso sólo era ya motivo suficiente. Así que el notable jurista me sugería que renunciase a mi recurso porque él había hecho *eso*. Ramón Trecet, cuando comentaba los partidos televisados de la NBA y algún jugador tiraba un pedrada que ni tocaba el aro, no perdía el tiempo en

describir el error. Se limitaba a decir, literalmente: "*Fulanito hace eso*". Algo así podría decirse de aquel recurso, que tampoco había tocado el aro.

Tranquilité a mis clientes, que estaban preocupados creyendo que el fracaso del compañero podía anunciar el nuestro. Mis argumentos eran muy distintos: Los actos de la Administración gozan de presunción de legalidad. La delimitación de la playa hecha en 1974 goza de esa presunción de legalidad. La Administración no puede entrar a delimitar la playa con la excusa de que en 1974 esto no se hizo, porque de esa manera violenta la presunción de legalidad del deslinde antiguo. Más o menos de eso iba la cosa.

En todo caso, la aparición de un ramillete de recursos extraordinarios defectuosos (había otros que iban por el mismo camino) era algo que nos podía perjudicar. Por así decir, ensuciaba la esencia del planteamiento. Y además cansaba a los jueces, que después de atender a unos cuantos recursos desesperados, tendrían poquísima gana de tomarse en serio otro nuevo, en apariencia igual.

Por tanto, la pureza de mis argumentos originales se mantuvo sólo mientras fue simple teoría. Había comenzado a contaminarse muy pronto, al cruzarse con la realidad. Fue así como me presenté en la Audiencia Nacional, en otoño de 2006, con mucha esperanza y ninguna certeza.

VIII

LA PLAYA PARADÓJICA

LA CIUDAD EN LA PLAYA Y VICEVERSA

Este libro es una recopilación de algunos de los horrores de la Dirección General de Costas. No porque esa institución sea incapaz de actuar como Dios manda, sino porque los casos que a mí me ha tocado defender son todos ellos errores y desaciertos donde los vecinos han sido víctimas que pasaban por allí y la Dirección General de Costas verdugo abusón y arbitrario.

Pero también conozco un caso distinto, en el que la Administración jugó el papel de dama virtuosa, y algunos vecinos el de monolitos de la sinrazón con el cráneo más o menos relleno de serrín.

Si visitan el poblado marítimo de Oliva (Valencia), lo que verán será un entorno urbanizado, con calles asfaltadas, bonitos restaurantes y hasta una iglesia. Pero la visión es engañosa. A los ojos de la ley todo eso es una playa. No importa que no queden a la vista ni la arena, ni las sombrillas, ni las olas. Se trata de una playa. Y tampoco importa que todos esos edificios tengan sus respectivos propietarios y correspondientes hipotecas. Para la ley, todo es dominio público. Cualquiera podría, por tanto, entrar en el salón de una de esas viviendas y echarse una siesta en el sofá, o cosas peores. De hecho, algo de esto sucedió no hace mucho tiempo en una zona de chabolas situadas en el dominio público en el término de El Puig (Valencia), cuando una pareja de ocupas se adueñó durante varios días de una de las más que castizas viviendas. Los propietarios quisieron echarlos, pero ellos se negaron con firmeza, y de forma impertinente, aunque ingeniosa, pidieron ver la escritura de propiedad. No existía tal escritura, así que los dueños reclamaron la presencia de la policía local, que sin embargo tampoco pudo hacer nada contra aquella pareja que alegaba, con razón, estar en un espacio accesible al público en general, y recordaba que permanecer en la chabola era, ante la ley, como hacerlo en la playa o en la plaza del pueblo.

Los polizones se quedaron hasta que les vino en gana, ignorando los mohines de los vecinos y permaneciendo indiferentes cuando les negaban el saludo. Se trata de un ejemplo extremo, pero real, de las contradicciones y paradojas que

se producen en la costa, en parte porque la Administración tiene muchas situaciones pendientes de resolver.

PLANES SALUDABLES

Ya desde antiguo, el Ayuntamiento de Oliva venía llamando la atención sobre estas contradicciones, y reclamando un deslinde que liberase las viviendas de su calificación de dominio público costero.

Manuel Reyes Nadal era a principio de los años noventa ingeniero jefe de la demarcación de costas de Valencia. Otro Manuel, de apellido Fernández Arribas, era jefe de dominio público. Como personas de buen sentido, a ambos les pareció que la situación de Oliva, parte de cuyo casco urbano estaba declarado zona marítimo terrestre desde 1947, no se podía prolongar por más tiempo, y creyeron oportuno resolverla proponiendo una línea de ribera del mar que discurría por la frontera natural entre las viviendas y la arena, dejando juiciosamente al margen asfalto, pizzerías, viviendas, bares y también la casa del Señor. Decisión oportuna y plenamente ajustada a la realidad geomorfológica y sobre todo a la verdad material.

Esto, sin embargo, no producía por sí ningún efecto liberador en las viviendas, porque la ley de costas dice que los terrenos que hayan perdido su primitivo carácter de zona marítimo terrestre o playa, continúan siendo dominio público marítimo terrestre (constituyendo el llamado *dominio público artificial*). Pero los terrenos que ya no sean necesarios para el dominio público se pueden

desafectar. Aquella propuesta de trazado de la ribera del mar por donde efectivamente debía discurrir (el borde de la playa) era el primer paso para proceder a una declaración de no necesidad para el dominio público de los terrenos sobrantes, y su posterior desafectación, que los dos Manueles también proponían. Una vez desafectados, los terrenos, previo paso por el Patrimonio del Estado, serían transmitidos al Ayuntamiento, que, por fin, habría de venderlos a los vecinos por un precio simbólico. Esquema complicado pero inexcusable si hablábamos de devolver los terrenos a sus dueños. Así es como se había hecho otras veces, y así es como se tendría que hacer también en Oliva. Claro que todo esto lleva una trampita incluida, porque la ley no admite que los terrenos desafectados se dediquen a fines privados. Pero era de esperar, supongo, que algún funcionario ingenioso encontrase la fórmula para salvar este escollo, llegado el caso.

HÉROES SUPERFLUOS

Este razonable plan es el que la Administración de costas, de la mano de Manuel Reyes Nadal y Manuel Fernández Arribas, trató de poner en marcha, y todo habría salido a pedir de boca de no haber sido porque un desafortunado accidente se cruzó en el camino. Un desafortunado accidente encarnado en forma de forastero que se puso con entusiasmo a combatir los saludables y justos planes de la Administración. Esta persona que obraba de forma tan rara no era un vecino irresponsable, ni un afectado majareta. A decir verdad no era

ni vecino, ni afectado, ni propietario. Ni tan siquiera vivía en Oliva. Era un señor que un día vino de Valencia y se puso a predicar contra los Manueles. Su triunfo puede ser un buen acicate para directores comerciales, agitadores políticos y creativos de publicidad, porque demuestra que se puede vender cualquier cosa. No estoy hablando de colocar neveras a los esquimales, porque a un esquimal cualquier nevera, aunque le resulte inútil, no le hace daño. Digamos que se la trae al fresco, y nunca mejor dicho. Lo sucedido en Oliva en aquellos años es más parecido a esa hipnosis colectiva de las sectas, que puede inducir a los miembros no sólo a ceder su patrimonio con una sonrisa idiota, sino, llegado el caso, al suicidio en equipo.

Cuando este señor se introdujo en Oliva, su discurso fue simple e inflexible: la propuesta de deslinde era un engaño. Como he dicho en anteriores capítulos, la técnica de repetir constantemente una mentira, aunque sea una mentira evidente, hasta que la gente la crea como cierta, no es algo ni nuevo, ni raro, ni misterioso. Está perfectamente estudiada y divulgada como procedimiento hipnótico. Da igual que el mensaje sea que la culpa de todos los problemas del país la tienen los judíos, o que un deslinde planteado como solución para los vecinos es en realidad un problema para los vecinos. El caso es que funciona.

Aquel señor, que regentaba con métodos autoritarios una asociación de afectados, era como un cazador emboscado tras los arbustos y armado con abundancia de munición. Aunque la licencia fuera para cazar patos, él le disparaba a todo: patos, gaviotas, perdices, gorrones o una mula perdida. Lo

importante era disparar. En su caso, ya sin metáfora, lo importante era anular un deslinde, tanto daba si estaba bien hecho o no, ya que su asociación nunca había conseguido ganar nada para los afectados.

Así que consiguió convencer a unos cuantos vecinos, más bien incautos, de que la mentira era verdad, la Administración un nido de farsantes y los dos Manueles una pareja de insensatos peligrosos, y de que por tanto urgía oponerse al deslinde con uñas y dientes. En la Demarcación de Costas no podían hacer más que tragarse los infundios y lamentarse en silencio. Había realmente poco que se pudiera hacer, excepto explicar una y otra vez una propuesta que realmente era lo mejor para los vecinos y que estaba tan clara que resultaba incomprensible que alguien no lo entendiera así.

Por suerte, a pesar de todas estas interferencias, el deslinde se aprobó como estaba previsto. Pero el inquieto señor llevó su sinrazón a los tribunales, donde formuló recurso contencioso administrativo en nombre de los incautos antes nombrados, que, sin ver la realidad, le otorgaron poderes.

Este recurso, no obstante, estaba destinado a fracasar. Lo llevaba, según me contó el propio líder social, una abogada que se había dado de baja en la profesión durante la tramitación del juicio, sin que nadie se hubiera molestado en buscar sustituto. Así que todo iba a salir bien para los vecinos. El plan de los Manueles saldría adelante y las quejas de aquel forastero, que gustaba de calificar su asociación como ONG, se las llevaría el viento y serían olvidadas.

SALVADO POR LA CAMPANA

Pero entonces sucedió algo que no estaba en el programa. Corría el año de 1998, la Audiencia Nacional estimó mi demanda contra el deslinde del tramo sur del mismo municipio de Oliva y la prensa se hizo amplísimo eco de lo que pasó por ser una sentencia histórica.

Estas noticias no pasaron desapercibidas al señor aquel, que, como primera y urgente providencia, pretendió públicamente que yo había llevado el asunto en nombre de su asociación, lo que era rigurosamente incierto. En mis primeros años de ejercicio había colaborado efectivamente con ella, pero lo había dejado porque no me convencían ni los modos, ni la estrategia, ni la política recaudatoria de su presidente, así que la asociación no había tenido nada que ver con mi recurso. Pero era tanta el hambre de éxito del señor, que llevó el asunto a la prensa por su cuenta. Me quedé de una pieza al leer en un periódico sobre la *victoria de la asociación* y el *abogado de la asociación*, en un artículo donde el asunto principal era una entrevista con el líder vecinal, que se tomaba la inaudita libertad de glosar mi sentencia como si fuera suya, pretendiendo, con desacierto sin duda estudiado, que aquel éxito constituía la prueba de que la ley de costas era abusiva y había que cambiarla. Esto no era cierto hasta el extremo de que, como debe ser, yo había basado mi defensa en la propia ley de costas, usándola mejor que la Administración, y había obtenido una sentencia en la que los jueces reprochaban al Estado el incumplimiento de la propia ley. Así que la ley de costas había sido mi sostén, todo lo contrario de lo que él decía. Su

interés era, creo yo, colocar un discurso populista que lo consagrara como especie de adalid de los derechos civiles.

Remité un desmentido a la prensa advirtiéndole que la asociación nada tenía que ver con mi sentencia, casi al mismo tiempo que el interesado me invitaba a participar en una gran asamblea de sus asociados de Oliva. Me negué, porque sabía que con ello no pretendía sino perfeccionar y llevar al extremo el secuestro de mi éxito. Si lo hubiera dejado trastearme, estoy seguro de que mi responsabilidad en el asunto habría entrado en fase de disolución, y yo mismo habría acabado disipándome en el aire, como un dudoso ectoplasma, mientras que en la memoria colectiva aquel éxito permanecería para siempre asociado a su persona.

Otra cosa que hizo fue pedirme copia de la sentencia y apresurarse a presentarla en la Audiencia Nacional, imagino que después de haber designado nuevo abogado. El sorprendente resultado fue que con esto ganó un pleito que tenía perdido. El porqué y el cómo forman ya parte de la historia paradójica de los tribunales. En mi demanda, yo había puesto en entredicho las conclusiones de la Administración porque carecían de base probatoria. La Audiencia Nacional me había dado la razón, y, aunque reprochaba incluir en el demanio caminos y aceras, había anulado el deslinde basándose en que éste no estaba justificado con estudios geomorfológicos, es decir, que el motivo de nulidad era puramente formal. Cuando un acto administrativo se anula por motivos de forma, no hay ya lugar al análisis del fondo, y por tanto, tratándose de un

deslinde, no se puede valorar si cada uno de los hitos se ha colocado donde se debía con arreglo a la ley. Es decir, que la anulación por motivos formales no prejuzga la decisión sobre el trazado de la línea del dominio público, que podría ser estúpida de la muerte.

Mi deslinde carecía de estudios técnicos y era desacertado y nocivo para los vecinos. El deslinde del casco urbano, en el que había intervenido el señor, tampoco contaba con estudios técnicos, pero en cambio era acertado y beneficioso para los vecinos. La Audiencia Nacional, al resolver su asunto, se vio extremadamente condicionada por mi sentencia (que afectaba a otro tramo del mismo término municipal, por tanto ambos expedientes eran primos), y se sintió obligada a anular su deslinde por los mismos motivos que el mío, es decir, debido a la ausencia de estudios técnicos. De hecho, el texto de su sentencia se remite continuamente a la mía.

Fue un accidente más bien penoso que causó la nulidad de un deslinde certero, perfectamente bienintencionado y además necesario. Por fin tenía el hombre aquel el éxito que tanto había buscado y que él creía que iba a permitirle comparecer ante sus asociados presentes y futuros como el héroe popular que siempre había querido ser. O parecer.

LA ADMINISTRACIÓN REACCIONA

Con esto los vecinos de Oliva, sin embargo, no vieron su problema resuelto, sino notablemente agravado. La prueba está en lo que sucedió unos años más

tarde, cuando la Administración, recuperada del susto, puso de nuevo en marcha la maquinaria, y esta vez cumpliendo con los requisitos establecidos por los jueces, es decir, incorporando los pertinentes estudios geomorfológicos.

Sólo que ahora se habían terminado los cariñitos. Si los vecinos, acaudillados por aquel valedor de los indefensos, querían guerra, guerra iban a tener. La nueva propuesta de deslinde no iba ya por donde la habían puesto los Manueles, sino que se arrastraba alevosamente tierra adentro hasta llegar a ratificar y repetir la de 1947, que aún estaba en vigor. Y ésa era la medida exacta de lo que aquel héroe de los derechos civiles había conseguido para los desesperados vecinos de Oliva: había arruinado sus vidas, había sentado las bases para que perdieran la propiedad y les había asegurado una existencia amargada por unos conflictos con la Administración que no sólo no tenían fin, sino que se agravaban por momentos.

No cabe duda de que la Administración no debería haber actuado de esa manera, sino que se tendría que haberse limitado a repetir el deslinde anulado, porque la Audiencia Nacional nunca declaró que su propuesta fuera ilegal o inidónea: Sólo reprochó que estaba insuficientemente justificada. Por tanto, para cumplir con la sentencia, la Administración tenía que limitarse a resolver un problema de formas, aportando estudios técnicos que apoyasen la misma propuesta de deslinde. Pero en lugar de eso, lo que hizo fue cambiarla. Yo presumo que por despecho. La Administración insiste en que cuenta con un motivo muy objetivo, como son los graves temporales que habían azotado la

costa en los últimos años, especialmente en noviembre de 2001. Pero estos temporales no justifican que la nueva línea ratificase al milímetro la de 1947, que era una línea con extraños quiebros y ángulos. Cuando las olas avanzan sobre la costa, su alcance máximo no describe una línea quebrada ni en dientes de sierra, esto cualquiera lo sabe. Es como si estuviéramos sentados en la arena y las olas vinieran a morir a nuestros pies, pero a nuestro compañero (o compañera) de baño, que se sienta a nuestro lado, el agua le llegara por la cintura.

Y, por lo demás, el estudio geomorfológico contenía una calicata hecha en pleno casco urbano, hecha con la intención de averiguar si lo que había bajo el asfalto era arena. Quien resulta víctima de un hecho de Dios, como es el temporal extraordinario, no anda por ahí, haciendo agujeros en la calle, forzando una evidencia que funde sus intenciones. La calicata demuestra que había un propósito preconcebido y creo que ese propósito tenía raíces puramente emocionales que estaban ancladas en las tripas de los ingenieros que habían recibido una humillación a cambio de sus buenas intenciones. No ya los Manueles, que estaban uno de ellos jubilado y el otro apartado, sino los ingenieros de la casa.

Cuando yo era un niño, un primo dos años mayor que yo me hizo un pretendido truco de magia. Cogió un paño de cocina y lo escondió enganchado en el cinturón, bajo la cadera derecha. A continuación, muy solemnemente, pronunció las palabras mágicas: "pasa, pasa, pasa... ¡Pasa!".

-El trapo se ha movido hasta aquí -anunció, señalando a su oculta cadera izquierda-. Pero ahora, más difícil todavía: lo voy a hacer regresar a donde estaba antes. Y de nuevo las palabras mágicas. Se levantó el jersey para mostrar que el trapo estaba, efectivamente, de vuelta en su cadera derecha.

Al deslinde de Oliva le pasaba igual. La línea de 1947 se había fijado tierra adentro y mostraba unos quiebros injustificados. Años después, el deslinde de Reyes y Fernández viajaba en dirección al mar y se situaba de manera muy adecuada al borde de la playa, por cierto sin quiebros. Pero en la última edición, como en un mal truco de magia, la línea hacía un viaje de regreso a tierra, hasta coincidir con la primera. El hecho de que mi primo no hiciese fortuna como mago, sino como periodista, nos indica que su pase mágico era una birria. Tan birrioso y tan ficticio como el movimiento pendular que seguía la línea de deslinde en Oliva.

LOS VECINOS SE ORGANIZAN

Así estaban las cosas cuando me llamó por teléfono un prestigioso abogado de Barcelona, José Martí Deveses, que era uno más de los damnificados por la anulación del deslinde y sus consecuencias.

Nacido en Oliva, Martí Deveses se había puesto al frente de una nueva asociación de vecinos que estaba tratando de salvar lo salvable, y que sobre todo ansiaba que los conflictos jurídicos tuvieran un fin. Se acababa de jubilar. Era un hombre sagaz, experimentado y con las ideas claras, al que se le

notaban los años de pelea. Me recibió, junto con otros miembros de la junta directiva, la jovial empresaria Isabel Bolinches y Juanmi, arquitecto local, serio y riguroso, en su caserón familiar de Oliva, en primera línea de aquella playa de las angustias. En lo más crudo de noviembre, la casa estaba fría y desacogedora. Era uno de esos días lluviosos del otoño mediterráneo, cuando Dios suele conceder con carácter retroactivo toda el agua que los paisanos le han venido reclamando en todo un año de sequía.

Celebramos en aquella misma casa nuestra primera reunión de trabajo y supe que los clientes no querían ya más tropiezos ni más parches. Aspiraban a una solución definitiva que acabase con tantos años de conflicto y les permitiera saber por fin qué podían hacer y qué no podían hacer con sus viviendas. Y esto incluía no sólo una solución para aquella nueva propuesta de deslinde, con su desagradable sorpresa de una ribera del mar por detrás de las viviendas, sino también un tratamiento eficaz contra el auténtico problema de fondo, la antigua calificación de dominio público que arrastraba parte del casco urbano desde el deslinde de 1947. Martí Deveses era un excelente abogado, conocido en toda España como especialista en Derecho Mercantil. Y era exigente. Se atrevía a pedir una solución extraordinaria para un problema imposible, como era aquella antigua calificación que databa de las nieblas de la postguerra. Si la ley dice que siguen siendo dominio público los terrenos que hayan perdido su primitivo carácter de zona marítimo terrestre o playa, eso simplemente es así y hay que resignarse. Se trata de un techo que es preciso aceptar, sin que quepa

más que luchar por una futura desafectación. Y, por otro lado, si la ley dice que un acto administrativo sólo puede impugnarse ante los tribunales dentro de los dos meses siguientes a su notificación o publicación, igualmente ésta es una realidad que es preciso aceptar, y por tanto una decisión administrativa que data de sesenta años atrás resulta inatacable. Pero mis clientes, con una indiferencia inquietante, se limitaban a rechazar estas realidades.

Y tenían razón, ya que por más éxito que pudiera yo tener enderezando el deslinde en trámite, los efectos del anterior perpetuarían de forma insidiosa la calificación de dominio público. Por tanto, tener éxito en la defensa del deslinde en trámite era inútil en la práctica. La cosa era así de dura.

Mis clientes también tenían razón en su deseo de una solución definitiva. No sólo porque los pleitos se sucedían sin resultado, sino porque el régimen jurídico del deslinde de 1947, que resultaba indefinidamente prorrogado, los mantenía en un limbo permanente en el que sufrían gran parte de los perjuicios de la ley de costas de 1988 y no disfrutaban ninguna de sus ventajas. Por ejemplo, no podían transmitir sus viviendas, porque para ello se exige un certificado de que el bien transmitido no invade el dominio público. O por ejemplo, la Demarcación de Costas no toleraba obras en los inmuebles a menos que se le pidiera una autorización especial, y que los trabajos fueran de estricto mantenimiento. He visto la aberración de un expediente sancionador a una familia, con orden de derribo, simplemente por poner un tabique divisorio en el patio. En cambio, la permanente provisionalidad impedía a estas mismas

personas aprovechar ventajas de la ley de costas, como el derecho a una concesión administrativa que hubiera puesto orden y seguridad, pero que aparentemente no podía reclamarse hasta después de que se aprobara el deslinde.

EPÍSTOLAS Y SILENCIOS

Así que me tuve que preparar para luchar en dos frentes: uno el del deslinde en curso, y el otro el de complacer la necesidad de mis clientes de liberar las viviendas de forma definitiva, lo que sólo podía conseguirse anulando el deslinde de 1947, es decir, abrazando una empresa imposible.

Pero mi primera intervención no fue propiamente de defensa jurídica, sino de relaciones públicas. Yo estaba completamente convencido, como he dicho, de que la nueva propuesta era tan agresiva porque había de por medio un motivo pasional. Para tratar de deshacerlo escribí una carta al Director General de Costas, en la que daba a entender que los afectados no querían ni oír hablar del líder vecinal que lo había estropeado todo y reclamaba la rehabilitación del ya famoso deslinde de Reyes y Arribas. Solicité audiencia en Madrid y me recibieron el Subdirector General de Costas, José Luis Gutiérrez, y el entonces Subdirector General de Actuaciones en la Costa, Ángel Muñoz. Gutiérrez era un viejo conocido con buenos motivos para guardarme rencor, porque, cuando era Jefe de Costas de Oviedo, había arruinado sus planes de urbanización de la playa de Otur, anulado sus requerimientos de desalojo de las viviendas y

reducido a cenizas el deslinde (ver el capítulo *La playa sin cemento*). Ángel Muñoz había sido el Jefe de Costas de Alicante, y el cocinero principal del deslinde de Arenales del Sol, como ya sabemos.

Explicué mis intenciones a mis ilustres interlocutores, y les entregué la carta. No obtuve ningún compromiso en el acto, ni ninguna respuesta nunca jamás. La Administración continuó adelante, imperturbable, y las cosas se pusieron peor con el cambio de gobierno que tuvo lugar en 2004. Primero, por el advenimiento a la más alta magistratura del Ministerio de Medio Ambiente de Cristina Narbona, que pronto iba a dar muestras de su convencimiento de que la dinamita y la maquinaria pesada de obras públicas podían ser buenísimos aliados del ecologismo. Narbona era además la compañera sentimental de José Borrell, el padre intelectual de la ley de costas, y su primer brazo ejecutor. Por tanto, aunque fuera con carácter consorte, con Narbona la ley de costas volvía a su esencia.

Segundo, porque la nueva Ministra no tardó mucho tiempo en destituir a varios Jefes de Costas de la región de levante, según se dijo entonces, para prevenir que no respaldasen con informes favorables -o más bien amigables- sus proyectos de desaladoras. Tras la jubilación de Reyes, Fernández Arribas había quedado como Jefe de de Costas de Valencia. A los pocos meses del desembarco de Narbona fue fulminado y confinado en un despacho de la Demarcación de Carreteras, donde no está claro si la experiencia de toda una vida dedicada a las costas le fue útil para sus nuevas actividades de

papiroflexia. A Fernández Arribas le sustituyó una funcionaria que llevaba unos pocos años destinada en la Demarcación, y con la que hasta ese momento yo había mantenido una relación correcta. Frente al viejo dinosaurio, curtido en mil batallas y dotado de ese lúcido escepticismo que da la experiencia, Lidia Pérez rozaba los treinta años y rebosaba vitalidad y ganas de demostrar a todos, incluyendo a sí misma, que podía hacerlo igual de bien que los viejos señores.

Con Lidia se acabaron para mí los tiempos dulces en que, aunque fuera caminando en la cuerda floja, podía hacer compatible mi trabajo como abogado con mi buena amistad con ingenieros y administrativos. A partir de entonces comencé a ser visto como un enemigo al que se atendía con ese trato cortés pero frío reservado a quienes se desea ver bajo el agua, con una bola de hierro atada a los pies.

El empeño personal y el celo profesional de Lidia Pérez condicionaron la evolución y el resultado no sólo del expediente de Oliva, sino de muchos otros. Siempre me había preocupado poder mantener mi actividad profesional al margen de las cuestiones personales, pero ya no me iba a ser posible.

Por tanto, ni se me ocurrió volver a preguntar por mi cartita, que, por razonable que fuese, dentro de aquel contexto parecía una carta a los Reyes Magos. Cuando imaginaba a la Ministra Narbona leyéndola, no podía evitar que se formara en mi mente el retrato de Úrsula, esa gorda mujer pulpo que es a mi juicio uno de los supervillanos mejor conseguidos de Walt Disney. Úrsula leyendo la carta con incontenible sarcasmo, dándola a comer a sus dos

barracudas mal encaradas y después mirando a cámara para soltar, con ojos de villano (en este caso villana), alguna consigna malévola sobre el destino de los vecinos de Oliva.

AGUA EN LAS CALLES

Por tanto, tuve que olvidarme del género epistolar y entregarme a lo que he definido como una doble tarea jurídica, defender a los vecinos del deslinde en curso y al mismo tiempo tratar de inventarme una maravilla para impugnar el anterior.

Incluso la primera parecía insuperable. Hay que tener en cuenta que, después de la anulación del deslinde de los Manueles, la Administración aspiraba a rectificar sus anteriores errores de procedimiento con un expediente primoroso. Y ya que el reproche de los magistrados era la ausencia de todo estudio geomorfológico, se había procurado para la ocasión uno bien espeso, confeccionado por la omnipresente empresa pública TRAGSATEC, que como saben los del mundillo lo mismo vale para un roto que para un descosido.

Y allí lo tenía, delante de mí, aquel informe técnico grueso y amenazante, y suponía que rebosante de razones intachables para la nueva propuesta. Lo normal habría sido inquietarse, pero no lo hice. Tantos años de trabajo me habían amputado para siempre, no el respeto, pero sí el temor reverencial al poder público. Y como sabía bien que los ingenieros de costas suelen meter la pata, lo mismo que sus obedientes amigos de TRAGSATEC, decidí posponer

toda lamentación hasta haber estudiado el documento y comprobado si era tan riguroso como cabía temer, o si tenía más agujeros que un colador, como bien podía ser.

En realidad, pese a su apariencia temible, era sorprendentemente malo y falto de rigor, como un monstruo de feria hecho con globitos. Es desalentador comprobar cómo todo un equipo de profesionales apoyado por personal técnico y secretarías en abundancia, dotado de una flotilla de ordenadores, escáneres, plotter, lapiceros, transportadores de ángulos, sacapuntas, manuales de consulta, un entorno con muebles de diseño y bomba de calor, con la máquina del café siempre a mano, y una dosis de dietas, seguros sociales y pagas extra, podía hacerse responsable de un informe de medio pelo como aquél, en el que para demostrar que las olas habían alcanzado el casco urbano, se aseguraba haberse hecho una encuesta entre los vecinos, sin que la pretendida encuesta estuviera unida al estudio ni quedara constancia de la identidad de uno sólo de los encuestados. Su existencia, lo mismo que su contenido y su rigor científico, eran una cuestión de fe, y por lo tanto carecía, a mi parecer, de todo efecto jurídico, que es lo que les sucede a todas las pruebas invisibles y fantasmagóricas.

Encontré también defectos en las calicatas, y en los análisis químicos de sus resultados, así que cogí toda aquella información y me despaché a gusto con un escrito de alegaciones en el que señalaba con detalle las carencias del informe.

Pero esto no era suficiente, porque poco después aparecieron dificultades adicionales que no venían de la Administración, sino de los propios vecinos.

Como ya he comentado, a menudo me encuentro en la defensa de los deslindes con el mismo problema: como se trata de asuntos que siempre afectan a colectivos, hay o puede haber varios abogados discutiendo y defendiendo lo mismo, y sus diferentes criterios pueden interferir entre sí. Viví una situación de esta clase con una de mis primeras defensas, un conjunto de siete recuperaciones posesorias. Cuando llegó el momento de formular recurso contencioso administrativo, una de las afectadas advirtió que no pensaba sumarse a la defensa común, sino encargarla a su hijo abogado.

Puesto que las resoluciones combatidas facultaban a la Administración para el derribo de las viviendas, era de la mayor importancia obtener durante el juicio la suspensión cautelar, es decir, que hubiera que esperar a la sentencia para ver si se derribaba o no. Existe una cierta laxitud entre los abogados a la hora de pedir la suspensión. A menudo no fundamentan suficientemente la petición, sino que se quedan en la cita simple y comodona de que la ejecución puede causar perjuicios de imposible o difícil reparación, sin más. Yo formulé una solicitud de suspensión cautelar extensa y razonada, y como consecuencia obtuve un auto que estimaba la petición. Como suele suceder, el Abogado del Estado recurrió, pero ese recurso, que debía resolver la misma Sala que había dictado el auto, tenía pocas posibilidades.

En paralelo, el hijo abogado había formulado reclamación judicial para su madre, y había pedido también suspensión cautelar, no sé si con mucho o poco acierto, pero el caso es que la Sala se la rechazó. Presentó recurso de súplica, que le fue desestimado, y ése era el fin de su camino. Ya no podía hacer nada, así que el tema iba a quedar de esa manera: yo obtendría suspensión cautelar, y él no. Las viviendas que yo defendía permanecerían en pie durante la tramitación del procedimiento y la de su madre, en cambio, sería derribada. Pero entonces a este compañero mío, que había quedado fatal con su propia mamá y debía estar mordiéndose los puños, se le ocurrió la inaudita iniciativa de presentar un escrito al margen del procedimiento, una queja en la que más o menos reprochaba a los jueces que a mí me habían dicho que sí y a él que no, siendo la cuestión era la misma. Y la reacción de la Sala fue salomónica, además de catastrófica: como ya no podía hacer nada por la vecina solitaria, estimó el recurso del Abogado del Estado en mi asunto, es decir, revocó mi suspensión cautelar, y con esta decisión consiguió igualar a todos los litigantes, pero en el infortunio. Las palas excavadoras les pasaron por encima a todas las viviendas por igual y las redujeron a escombros iguales e indiferenciados mucho antes de que se dictara sentencia. Y, desde luego, una vez desaparecido el objeto del pleito, había ya poco que discutir, así que el recurso fue desestimado.

Cuando la Administración abre un nuevo expediente de deslinde, es bastante común que en los primeros compases, no ya los abogados, sino los mismos vecinos redacten y presenten sus propios escritos de defensa, causando de esta

manera desastres diversos. En el caso de Oliva, andaba circulando por ahí un modelo de alegaciones que reconocía que la ola había entrado por las calles del pueblo, pero denunciaba que las consecuencias jurídicas habían sido muy distintas según qué calles, porque algunas habían sido incluidas dentro de la ribera del mar por este hecho, y otras no. De hecho, esas diferencias obedecían a los dientes de sierra de los que he hablado antes.

Este escrito, que fue presentado por varios afectados, resultaba una completa calamidad al reconocer que el temporal había alcanzado el casco urbano, y no podía aportar ninguna ventaja y sí muchos perjuicios a los vecinos: lo único que se podía haber conseguido es que el dominio público se extendiera a otras calles. Se trata de la desafortunada fórmula del *sí pero*, y al mismo tiempo de una típica petición de igualdad en la ilegalidad, repetidamente rechazada por los tribunales y tan usada en todas partes por esos legos en derecho que invocan para todo y con una autoridad ridículamente aplastante el artículo 14 de la Constitución.

El caso es que aquel escrito echaba al traste todas las observaciones que yo había hecho al estudio geomorfológico. Ya daba igual que aquel estudio no contuviese pruebas serias del alcance del temporal si los propios vecinos se avenían a echar una mano a la Administración, supliendo su falta de pruebas mediante el simple procedimiento de reconocer los hechos.

Y así estaban las cosas: Si el alcance de la ribera del mar coincide con el alcance del temporal y éste último ya había sido reconocido por los vecinos, en apariencia no había defensa. No había nada que se pudiera hacer.

ÁLVAREZ ACUDE AL RESCATE

Pero lo había. La respuesta se llamaba Pepe Álvarez, un ingeniero de caminos experto en costas, a quien ya había contratado para otros asuntos. Puesto que los problemas venían derivados de la pretensión de que el agua de mar había resbalado por las calles, le pedí un estudio llamado de cota de inundación, que es el instrumento científico por excelencia para averiguar el máximo alcance de las olas. Para confeccionarlo se ayudó de Juanmi, que tomó las cotas de varios puntos de la playa, lo que en la jerga técnica llaman "acribillar los puntos". El informe se convirtió en la llave perfecta para salvar la situación, porque no sólo dejaba constancia científica de que el mar no alcanzaba las viviendas, sino que al mismo tiempo justificaba perfectamente que se hubiera visto agua discurriendo por las calles. Según Pepe Álvarez, esto se debía a que la propia Demarcación de Costas había rebajado ciertas dunas para facilitar el acceso a la playa desde las calles adyacentes. La arena formaba acúmulos que quedaban bastante más altos que el pavimento de las calles y actuaban como una barrera. Parece ser que el Ayuntamiento pidió a Costas que removiera parte de esa arena y esta obra modificó el perfil de la playa, dejando cotas que frente a las calles eran inferiores que frente a las casas. Por este simple motivo la ola tenía

un alcance selectivo: Frente a las viviendas la cota era lo bastante alta como para impedir su avance. Frente a las calles, en cambio, la marejada podía llegar a resbalar hacía el interior. Así que los charcos en el asfalto no significaban, como se podría pensar, que el temporal alcanzase las viviendas, y que éstas hicieran de barrera artificial contra su avance, en cuyo caso habría sido adecuado situar la ribera del mar tierra adentro, sino que la ola, como un ciudadano más, entraba en la ciudad usando civilizadamente los viales públicos.

Presenté ante la Administración este estudio junto con un nuevo escrito de alegaciones. La novedad debió gustar poquísimo a la Jefa de la Demarcación de Costas, que elaboró un prolijo contrainforme para desmontar el mío, o para intentarlo. Entre otras cosas se mostraba indignada ante mi alegación relativa al rebaje de la duna. Por algún motivo que no puedo comprender, se lo había tomado como una acusación contra la Demarcación de Costas de destruir o perjudicar el dominio público.

Lo más sorprendente del contrainforme era que proponía el archivo del expediente, pero desde luego no para dejar en paz a los vecinos, sino para abrir un procedimiento nuevo al que la Administración pudiera incorporar nuevas pruebas. Ellos están acostumbrados a sacar sus proyectos adelante, aunque sea con el ruido de fondo de un coro de vecinos que murmuran (o patalean). Ruido de fondo, música ambiental, obligada escenografía; todo eso suelen ser para los ingenieros de costas las alegaciones de defensa de los interesados. Mi crítica al informe de TRAGSATEC podía considerarse más o menos dentro de esa

categoría, cositas ingeniosas que escriben los abogados porque de algo tienen que vivir. Pero el informe de Álvarez era otra cosa, porque significaba discutir con ellos, hacerlo mejor y ganarles la partida, todo en su propio lenguaje. A mi parecer, el estudio de cota de inundación les había quitado la tierra bajo los pies y, para impedir una derrota en los tribunales, habían decidido ni más ni menos que romper las reglas del juego, como entre los niños pequeños, cuando el que sabe que va a perder protesta chillando que *eso no vale*, y se inventa reglas nuevas.

¿Qué es un procedimiento administrativo? Un cauce para garantizar que las decisiones de la Administración se dicten con audiencia de los interesados. Es, sobre todo, un sistema de garantías y desde luego tiene unas reglas. En nuestro caso las reglas son claras: la Administración presenta unas pruebas, y los interesados podrán aportar otras que las desvirtúen. Si lo consiguen, se deberá dictar un acto administrativo en consecuencia. En caso contrario, la Administración prevalece. Lo que no se podrá hacer será archivar el expediente con la intención de abrir uno nuevo con unas pruebas nuevas, obtenidas con el único fin de destruir las previamente aportadas por los interesados. Esa manera de proceder no es más que un fraude. Y es lo que proponía aquel informe.

EL COMANDO AUDIOVISUAL

Yo creía que Lidia era muy sincera, muy honesta y muy recta en su contrainforme. Creía además que actuaba en cumplimiento de su deber. Pero creía también que no tenía razón.

Presenté un nuevo escrito de alegaciones, que bien puede calificarse de contra-contrainforme, y que creo que debió enfadarla aún más. De hecho, elevó a sus jefes un oficio en el que dejaba constancia de su renuncia a informar una vez más mis alegaciones, ya que no podíamos contradecirnos indefinidamente.

En mi escrito, aparte de oponerme al archivo y reclamar la continuación de la tramitación, lancé una carga de profundidad molesta sacando unos trapos sucios de los que ya he hablado en un capítulo anterior al hablar del alcance de los temporales. En Puzol, después del derribo de la primera línea, los propietarios de la segunda se iban a convertir en los reyes del mambo, y unos cuantos de los damnificados querían guerra y la hicieron filmando en video cómo el temporal alcanzaba las casas de atrás. Pidieron un deslinde porque la ola entraba hasta la trasera de las casas, pero la Demarcación de Costas no hizo caso. En cambio, querían meter la ribera del mar por el interior del casco urbano de Oliva porque la ola, según pretendían, entraba también hasta la trasera de las casas. Denuncié la contradicción, e imagino que esto debió poner de los nervios a los funcionarios, aunque únicamente a los más jóvenes. Los viejos y experimentados creo que sólo bostezaban, como un perrazo ante los ladridos histéricos de un caniche.

Nunca recibí respuesta.

LA ADMINISTRACIÓN SALE HUYENDO

Pasó y pasó el tiempo, y no había noticias. Mucho tiempo más tarde, en enero de 2007, estudié el expediente en la Dirección General de Costas. Cuando abrí la carpeta pude comprobar que se había dictado una resolución acordando el archivo en marzo de 2006, es decir, hacía ya diez meses. Ni un informe para valorar mis alegaciones, en las que pedía la continuación de la tramitación. Ni una sola duda sobre si la medida se ajustaba a derecho, ni una consulta al servicio jurídico. Digamos que ni un pestañeo antes de firmar el archivo. Aquello era un diálogo sólo para ingenieros, un mundo de ingenieros, donde las decisiones se tomaban con tiralíneas, y del cual los profesionales del derecho estábamos excluidos. Todos ellos parecían como máquinas programadas a las que se les hubieran borrado todos los datos sobre los derechos civiles. El archivo se había acordado en una reunión, Lidia lo había propuesto por escrito y los jefes lo transformaban en ejecutivo. Para quienes estábamos en desacuerdo ni siquiera se había reservado la falsa tramolla de una consulta jurídica, ni se había escenificado la posibilidad de que ellos no tuvieran razón y nosotros sí. Eficacia de escuadra y cartabón, eso es lo que ellos buscaban.

La decisión incurría en incoherencia de forma hiriente. Se notaban sus razones ocultas. El expediente se archivaba porque por un tiempo prolongado no se había practicado diligencia alguna y entretanto podían haberse producido

cambios de titularidad, y también porque ahora, de pronto, a los responsables les parecía que en el tramo deslindado se podían distinguir dos zonas con caracteres distintos.

Si éste hubiera sido mi primer contacto con un expediente de deslinde, me habría dejado llevar por ese cuento chino con apariencia razonable. Pero con lo que llevaba auestas, era como si en el documento se encendiera un letrero en luces de neón que dijera: *están mintiendo*.

Los ingenieros de costas acostumbraban a necesitar muchos años para tramitar los deslindes. Normalmente en torno a diez. La posibilidad de cambios de titularidad en las propiedades afectadas durante ese plazo nunca había sido un problema. Unas veces, cuando llevaban un montón de años con el expediente en marcha, volvían a pedir al catastro una nueva relación actualizada de titulares. Otras seguían adelante con su ya legendaria indiferencia. El expediente de Playa Lisa y Gran Playa en Santa Pola, se había tramitado durante dieciocho años. El de la playa de Corinto, en Sagunto, había tardado trece. En Vegadeo (Asturias) otro expediente llevaba quince años en marcha. El del Golfo, en Lanzarote, como diecisiete. Ninguno de ellos se archivó ni por el tiempo transcurrido ni tampoco por un pretendido problema con la relación de titulares. Frente a todos ellos, el de Oliva, en cambio, sólo llevaba en marcha tres años. Era ridículo archivarlo por ese motivo.

Y en cuanto a los tramos con problemática distinta, resultaba evidente que el motivo era un infundio. La mayoría de los expedientes de deslinde presentaban

problemas y caracteres distintos sin que esto hubiera sido nunca obstáculo para su tratamiento en un único expediente. El deslinde de Alboraya, por ejemplo, comprende dos tramos totalmente diferentes, uno urbanizado con torres de apartamentos, paseo marítimo y enorme centro comercial de capital francés, el otro ocupado sólo por campos de chufa. El de Alcocebre, en Castellón, cubría todo el término municipal, casi seis kilómetros, con variedad geomorfológica y situaciones muy diferentes, desde urbanizaciones agobiantes al borde del mar hasta tramos de bosque mediterráneo. El de Ares, en Coruña, se extiende a lo largo de dieciséis kilómetros, entre los que se contaban zonas de playa, de acantilados, casco urbano con un puerto y una rada de pescadores, sectores cada uno con problemas y caracteres bien diversos, que sin embargo no habían conducido a fragmentar el expediente en varios distintos. Resultaba, por tanto, ridículo pretender que en Oliva las supuestas diferencias de caracteres en el tramo aconsejaran el archivo y vuelta a empezar con dos expedientes distintos.

La decisión de archivar no era más que la consumación por la Administración de esa deslealtad extrema que consiste en romper las reglas del juego para fabricar otras a su medida. Ellos tenían miedo del informe de Álvarez. Tenían miedo de perder. Y no de perder por ingeniosidades de leguleyos, sino a manos de uno de su propia raza, que hablaba su mismo idioma y seguía sus mismos procedimientos. Creo que para ellos perder un asunto porque un abogado descubre un defecto de forma, no es más que la prueba de que los abogados son una desgracia con la que hay que convivir.

Pero perder a mano de uno de los suyos es como un balazo el corazón. En el primer caso, significa que alguien tuvo un descuido tonto. En el segundo, que ellos no tienen razón. Y, según creo, esto último es algo que les cuesta concebir.

Aún peor: De manera tan ilegal como estudiada, la orden de archivo no se había notificado a los vecinos. La notificación de las decisiones que afecten a los intereses de los ciudadanos es una obligación indiscutible de la Administración, y ellos lo sabían. Nadie es tan torpe para discutir eso. Creo que faltaron a esta obligación porque estaban avisados de que yo me oponía al archivo, y temían que lo revolviera todo formulando un molesto recurso. Ya puestos a vulnerar la ley con una resolución injusta, por lo visto daba igual hacerla más injusta aún por el procedimiento de ocultarla, para que esos mismos vecinos que tienen todo el derecho a conocer su contenido, permanecieran como bobos, creyendo que el expediente aún seguía en trámite y viviendo en Babia sólo porque eso convenía a la estrategia del Director General de Costas. De hecho, en diciembre de 2006 había recibido la consulta de otro preocupado grupo de vecinos del mismo tramo, que, por carecer de facultades paranormales, ignoraban que el expediente llevaba ya nueve meses archivado.

Todo esto no tenía que ver con los simples errores, ni con una interpretación más o menos desafortunada de las normas, ni la cosa podía despacharse concluyendo que la resolución infringía la ley, ni me encontraba ante un molesto error, sino ante una operación muy pensada y tramada para burlar los derechos de los vecinos. De nuevo la ley como plastilina moldeable.

LA PLAYA DE LAS PARADOJAS

Mi intervención en el deslinde de Oliva fue una victoria silenciosa. Cierta, efectiva e indudable, pero poco brillante, además de cargada de oscuros presagios. La Administración había salido huyendo, sí, pero para volver engrandecida y mucho más peligrosa. Es como si Oliva fuera la playa de las paradojas, donde las victorias se tornaban derrotas. Así había sucedido con la sentencia de la desafortunada ONG, y así también aunque por causas distintas, me había sucedido a mí.

Aquella playa era también como el lugar donde la Administración no acababa de encontrar el sitio. Dos derrotas seguidas podían parecer un hito valioso, pero yo no lo veía así. En mi memoria, Oliva me hacía pensar en Ítaca, la isla donde Penélope tejía y destejía eternamente el mismo tapiz, en espera de Ulises. El tapiz de los pleitos también volvería a tejerse una vez más.

ARQUEOLOGÍA JURÍDICA

He dicho que mi cliente José Martí Deveses era exigente y no sólo me pedía una solución definitiva para el deslinde, sino para el problema. Y el problema no quedaba resuelto mientras continuara en pie el deslinde de 1947.

Dicho así parece sencillo, y sin embargo era una de esas empresas que personas de bien, ciudadanos prudentes y profesionales cuidadosos rechazarían por utópica. Pero como por lo visto yo no entraba en ninguna de esas categorías, en

lugar de dar el asunto por perdido, quise hacer un viaje en el tiempo y estudiar el expediente en cuestión, por ver si de entre las tinieblas del pasado pudiera encontrar algo censurable que llevarme a la boca. Lo examiné en la Dirección General de Costas y recuerdo que en aquella ocasión me pareció todo muy normal: Unos edictos anunciando el deslinde, un reconocimiento sobre el terreno y una resolución. Sin un sólo escrito de alegaciones en contra y sin un sólo recurso. Era difícil leer entre líneas y encontrar ahí un error, pero aún tenía que pasar mucho tiempo hasta que mis ideas maduraran. Tiempo y nuevos requerimientos de mi cliente, que continuaba exigiéndome lo imposible.

Volví a examinar el procedimiento en Valencia, unos meses después. Entonces pensé que, pese a su apariencia saludable, no debía darlo por bien tramitado hasta confirmar que la instrucción se había ajustado a las normas entonces en vigor. Según el documento de aprobación, dichas normas se habían reducido a una Real Orden, identificada como "de julio de 1905". Mi misión era comprobar, casi sesenta años después, si la tramitación efectivamente se había ajustado a aquella norma.

Puede parecer muy voluntarista, pero ésta era mi forma de trabajar: no dar nada por supuesto, sospechar siempre y no dejarme llevar por una simple apariencia de legalidad. La apariencia de legalidad administrativa tiene mucho de tren de la bruja: sólo asusta si estás predispuesto a asustarte.

UNA LEY FANTASMA

Desde aquel día concentré toda mi iniciativa en localizar la Real Orden de julio de 1905. Creía que sería coser y cantar y que iba a resolver el tema de un tirón, para bien o para mal, pero estaba muy confundido.

En la biblioteca del Colegio de Abogados de Valencia se guarda la legislación histórica, perfectamente ordenada por tomos anuales. Qué cosa más fácil que ir al tomo de 1905, buscar el mes de julio, leer la Real Orden y confrontarla con la tramitación del deslinde.

Todo simple, excepto por el pequeño problema de que no estaba allí. Le di mil vueltas, busqué en el índice analítico, en el cronológico, volví a empezar, pero fue inútil ¿Cómo era posible que la norma estuviera en vigor y se hubiera aplicado pero estuviera ausente del repertorio de legislación? Probé, sin mucha esperanza, en los tomos del año anterior y posterior. Nada. Tenía esa curiosidad febril de los arqueólogos y los detectives y la verdad es que fue frustrante. Como tantas otras veces en mi vida profesional, me encontraba ante un no rotundo, en apariencia inapelable, con un camino cerrado a cal y canto, y como tantas veces, no estaba de acuerdo. Quería recorrer ese camino prohibido. Ardía en deseos de saber. Ya no por el encargo de mi cliente, ya no porque la anulación del deslinde de 1947 fuese la solución definitiva para toda la playa, todo eso había quedado atrás frente a aquel desafío que acababa de transformarse en una aventura personal.

Editorial Aranzadi había sacado en tiempos ya históricos una recopilación monumental llamada el Nuevo Diccionario de Legislación, que en el invierno de 2004, cuando yo investigaba, no tenía ya nada de nuevo. Eran montones de volúmenes con la legislación vigente en aquel momento, por estricto orden alfabético. Seguramente allí podría rastrear la Real Orden, buscando en la voz "deslindes". Pregunté por el Nuevo Diccionario, pero ya no estaba. Lo habían dado de baja. Me encontraba en una biblioteca jurídica de las mejor equipadas de España, literalmente rodeado de libros y repertorios de legislación, y no era capaz de encontrar la Real Orden, así que una vez más mi gozo en un pozo. Me quedé sin comprender un misterio que crecía ante mis ojos, y conforme crecía el misterio, así mi curiosidad.

Volví bastantes veces a la Biblioteca, para husmear en la legislación histórica, con los mismos resultados. De nuevo los caminos cerrados y de nuevo yo no estaba dispuesto a resignarme. Pero entonces ¿Qué hacer?

Había una forma. Podía enterarme de las normas sobre deslindes que eran de aplicación en 1947. Incluso sin necesidad de consultar ni el índice alfabético del Nuevo Diccionario Aranzadi, ni tampoco uno por uno en los tomos anuales de legislación histórica. La clave era la jurisprudencia de la época, que debía citar las normas de aplicación a los deslindes. Y así fue. Busqué sentencias sobre deslindes en torno a 1947 y encontré lo que buscaba, con unos resultados muy reveladores, porque, según leí, aquellas normas de aplicación distaban mucho de limitarse a la RO de julio de 1905: Había además otras dos, y la de mayor

rango era el reglamento de montes, realmente antiguo, de 1865. Por fin había conseguido averiguar algo importante: En 1947 no había normas específicas sobre deslindes de zona marítimo terrestre, y por eso se aplicaban de forma subsidiaria las del deslinde de montes.

Pero el reglamento de montes de 1865 no aparecía citado en la aprobación del deslinde de 1947, que sólo se remitía a la ya famosa RO de julio de 1905. Por tanto, lo que debía hacer a continuación estaba claro: era urgente localizarlo y estudiarlo, para comprobar si sus preceptos y garantías habían sido observados en la tramitación del deslinde.

VOLVIENDO A CASA

Pero ya no iba a buscar más en el Colegio de Abogados. Sabía de un lugar insospechado, fuera de todo circuito jurídico serio, donde aún se guardaba el Nuevo Diccionario Aranzadi. Yo conocía bien ese lugar. La obra estaba guardada en una antigua vitrina de madera maciza con motivos tallados y hojas de cristal, que encerraba además otros libros cubiertos de polvo y que a nadie interesaban. Una vitrina que ya nadie abría, que probablemente nadie había vuelto a abrir desde hacía quince años. Era justamente la pequeña colección de libros jurídicos del Juzgado Marítimo de Valencia, mi antiguo despacho. Después de marcharme yo, en 1990, ya no había vuelto a ser ocupado. Las competencias de mi juzgado habían sido asumidas por el de Cartagena, así que todo estaba más o menos como lo dejé, sólo que extrañamente solitario y

silencioso, como si faltaran voces familiares y el claqueteo de aquellas antiguas máquinas de escribir que ahora se veían arrumbadas a un lado, como los carros de combate inutilizados que se oxidan en parajes de guerras pasadas.

Volví a abrir la vieja vitrina por primera vez en tanto tiempo. Busqué y encontré con facilidad en el Nuevo Diccionario las normas históricas sobre deslindes y las fotocopie todas, incluyendo el antiguo reglamento de montes, pero la RO de julio de 1905 tampoco estaba allí.

Absolutamente increíble. Era una norma fantasmagórica que, de no ser por el documento de aprobación del deslinde, nadie diría que había existido. Algo así como Santa Klaus, muy conocido por sus obras, pero a quien nadie ha visto nunca.

Y sin embargo, al fijarme mejor, encontré una pista. El Nuevo Diccionario tenía una nota a pie de página que contenía por fin una referencia, pero al leerla me quedé listo, porque se limitaba a decir que al compilador de Aranzadi le había pasado como a mí, o sea, que no la había encontrado. Literalmente decía "la orden de 1 de julio de 1905 no la hemos visto publicada". Así que el misterio volvía a crecer. Lo que al principio me había parecido sólo una discordancia se había transformado en enigma y luego en una especie de secreto que imperiosamente debía desvelar.

Cuando trabajaba en excavaciones arqueológicas y aparecía el extremo de un objeto enterrado, la curiosidad se transformaba en ansiedad. Sólo pensaba en una cosa: que sería el primero en ver y tocar ese objeto desde hacía dos o tres

mil años, y ya no podía parar. Más o menos ésta era la sensación que tenía al recibir el esquivo mensaje de que la RO al mismo tiempo existía y no existía, al atisbar aquel pequeño fragmento de su existencia, como una ruina enterrada.

¿Podía ser que efectivamente no se hubiera publicado nunca, como sugería el compilador de Aranzadi? Y si era así ¿cómo es que se había aplicado en el deslinde de Oliva? Eso no hubiera sido posible hoy día. El Código Civil actual garantiza que las normas jurídicas deben publicarse en un diario oficial, de lo contrario carecen de fuerza de obligar. Siguiendo el curso de este pensamiento, llegué a la conclusión de que la orden debía ser una especie de circular o algo parecido, y, por primera vez, me convencí de que el deslinde era ilegal al haberse tramitado con arreglo a una norma que carecía de tal carácter por no haberse publicado. Pero era como investigar un homicidio sin cadáver. Hasta que no aparece el cuerpo no estamos seguros de que el difunto no se ha fugado a Río de Janeiro con una bailarina.

Entonces ¿Qué hacer? Como el título preliminar del Código Civil vigente era posterior al deslinde, lo primero que debía hacer era asegurarme de que en 1947 también era cierto que las normas deben estar publicadas para tener fuerza de obligar.

Volví a abrir la vieja vitrina y saqué el tomo que contenía la letra C, para buscar el antiguo Código Civil, que databa del siglo XIX. Allí comprobé que efectivamente la regulación era comparable a la actual, es decir, que en 1947 (bajo la vigencia de aquel antiguo Código Civil), una norma que no hubiera

sido objeto de publicación no era obligatoria, y por tanto no era tal norma, lo mismo que ahora.

Salí de mi antiguo despacho de juez y volví a mi despacho de abogado, cargado con un buen fajo de fotocopias y con muchas ganas de leer. Estudié con detenimiento el reglamento de montes de 1865 y resultó que estaba lleno de garantías para los interesados y regulaba una tramitación exigente que ni por casualidad se parecía a la que se había seguido en Oliva.

Por ejemplo, exigía notificación personal para cada trámite, incluyendo el apeo, mientras que en el expediente la Administración se había limitado a publicar la incoación y la aprobación por medio de edictos. Por tanto ya podía decir que el deslinde no se ajustaba a derecho y era impugnabile, ya que los vecinos no se habían enterado de nada y habían quedado indefensos. Únicamente necesitaba aclarar qué diablos era aquella esquivia Orden de julio de 1905, y de qué hablaba.

Ya no podía seguir buscando en las compilaciones de leyes. Las había ordeñado a conciencia, y había sacado de ellas todo lo que se podía sacar. Pero con respecto a la misteriosa Real Orden, estaba en un punto muerto, y, por más alentadoras que fueran las perspectivas, no podía confiarme hasta encontrarla, leerla y entenderla.

Sospechaba que el documento buscado era una circular que languidecía, amarillenta, en algún archivo penumbroso; uno de esos documentos de los que ya nadie se acuerda ni es capaz de dar razón. Eso si es que no se la habían

comido las ratas, se había perdido en algún traslado o alguien la había empleado para envolver un bocadillo.

Decidí escribir a la Administración. Hice la consulta al Ministerio de Medio Ambiente, pero también al Ministerio de Agricultura, puesto que sospechaba que el documento podía tener que ver con el deslinde de montes.

Después de unos meses, encontré en mi buzón un sobre del Ministerio de Agricultura y allí estaba la respuesta. En su interior, la fotocopia de una antigua publicación conteniendo circulares internas, incluyendo la dichosa Real Orden. Así pues, era cierto que nunca había sido objeto de publicación oficial, y por tanto no era una norma jurídica. Pero en cuanto a su contenido, vi que su incidencia en la regulación del procedimiento era irrisoria. Se limitaba a dictar instrucciones a la Abogacía del Estado para el caso de que los colindantes alegasen derechos de propiedad. Es decir, que no regulaba los trámites a seguir, sino unos consejos cuyos destinatarios no eran los ciudadanos, sino los funcionarios. Y a pesar de ello, era la única norma de procedimiento en que se basaba el documento de aprobación del deslinde de 1947.

Por tanto, al fin podía decir que el deslinde no sólo no se había ajustado a derecho, sino que constituía una auténtica calamidad. Su tramitación había sido esquemática, por no decir esquelética. Se publicaron unos edictos dando cuenta de la existencia del expediente, no se enteró nadie y eso fue todo.

Sólo un vecino acudió al Ayuntamiento a formular una oposición verbal, que le fue desestimada "*por improcedente y antirreglamentaria*". De hecho, en aquellos

duros tiempos de postguerra, creo que tuvo suerte de que no le partieran la cara. Ni siquiera se le recibió por escrito el contenido de su alegación (como debería haber sucedido, incluso porque la queja se presentó en el Ayuntamiento, que desde luego no era órgano competente para resolverla).

Estoy seguro de que los rígidos funcionarios que tramitaron el expediente ni siquiera conocían la existencia del reglamento de Montes, y, como la Real Orden no contenía normas sobre el procedimiento a seguir, se habían sacado de la manga los trámites que buenamente les había parecido. Si a un zapatero, concertista de violín, payaso de circo, nutricionista, sacerdote, bombero, agente inmobiliario, estomatólogo, bibliotecario o ebanista lo hubieran puesto en una situación parecida ("invéntese usted un procedimiento de deslinde") habría llegado más o menos a los mismos resultados que los ingenieros de caminos, canales y puertos de la postguerra que se pusieron a improvisar y se inventaron los trámites que les vinieron en gana.

Era patético. La misma resolución que unos meses antes me había parecido respetable e intocable, se revelaba ante mí como una birria que debía venirse abajo con sólo soplarle.

¿QUIÉN TENÍA RAZÓN?

Tenía la solución, y por tanto la razón jurídica, pero ¿y la razón moral? Se pueden conseguir efectos perversos al exagerar los efectos de un vicio de forma (ahí tienen el caso de la ONG del señor de Valencia), y yo aspiraba a luchar no

sólo por los intereses privados de mis clientes, sino también por la razón y la justicia.

Al poner en marcha la maquinaria de defensa ¿no estaría ayudando a la consolidación de docenas de ocupaciones ilegales? Ese era el panorama que se desprendía de la postura oficial de la Demarcación de Costas, según la cual en 1947 se había delimitado como público un espacio abierto y desierto que efectivamente era zona marítimo terrestre y, si en los inicios del siglo XXI la zona se había convertido en una ciudad, las ocupaciones debían ser ilegales. Según ese punto de vista, yo estaba defendiendo a una tribu de listillos, despabilados, pícaros y pillastres, o a sus herederos, todos ellos con el dudoso mérito de haberse apropiado de bienes que nos pertenecen a todos.

Pero no era así. Las viviendas, aunque no fuera todas, estaban allí antes de que los ingenieros se pusieran a la tarea de aquel primer deslinde. El acta describía la ubicación de cada uno de los hitos, muchos de los cuales se situaban coincidiendo con la esquina de determinada vivienda, precisamente por su lado interior, es decir, dejando el edificio en la zona marítimo terrestre. Por tanto, no era cierto que cuando se deslindó la zona ésta fuese una playa desierta, y por tanto yo no estaba defendiendo usurpaciones, robos, truculencias, fraudes o apropiaciones ilegítimas, sino los intereses perfectamente rectos de unos ciudadanos por lo demás atónitos ante el abstruso comportamiento de la Administración. De hecho, la mera existencia previa de estas viviendas confirmaba la indefensión causada al no haberse

practicado notificaciones individuales: Ningún propietario consciente de lo que se estaba tramando habría permanecido indiferente.

El plazo para impugnar un acto administrativo, en este caso el deslinde, no empieza a contar sino desde que se practica la notificación personal, y la notificación no se había practicado nunca. Por tanto, no había o no debía haber problema para la impugnación, incluso sesenta años después. De otro lado, la anulación era perfectamente viable, puesto que el expediente se había tramitado unilateralmente y sin contar con nadie, en contra de las normas de aplicación.

Por tanto, podía conseguir lo imposible. Este fue más o menos el fin de una intensa aventura intelectual, un diálogo profundo conmigo mismo y un continuo desafío por superarme. Una aventura excitante, pero solitaria. A partir de ese momento tendría que iniciar un camino nuevo, como era llevar mi reclamación a los tribunales. Y ese camino nuevo ya no sería ni individual, ni interior, ni espiritual.

De este caso aprendí varias cosas. Una de ellas es que la audacia es una virtud que puede también aplicarse a una materia tan plana y previsible como aparentemente es el Derecho. Otra es que lo imposible seguirá siempre siendo imposible mientras alguien no decida lo contrario. En este caso, ese alguien no fui yo mismo, sino mi cliente, ese hombre exigente y abogado experimentado, que me puso en el aprieto de encontrar el modo de impugnar un deslinde firme en Derecho, más antiguo que la barba de Matusalén y más pacífico que un día de sol. Sin esa tensión, yo nunca me habría metido en aquel jardín. Habría dado

el deslinde antiguo por intocable, renunciando de antemano a alterar la paz de los legajos antiguos.

En 1986 había leído al filósofo alemán Max Frisch, que escribió algo así como que es preciso perseguir siempre la utopía. No importa que sea inalcanzable, lo que cuenta es que esa búsqueda nos dignifica. Creo que ese pensamiento había quedado archivado en alguna parte de mí, como un silencioso antídoto contra la cobardía y la renuncia. Yo también había buscado la utopía, y la había encontrado.

IX

NO MÁS PAELLAS

RECUPERANDO EL DOMINIO PÚBLICO

Cuando era adolescente creía en la justicia. Cuando estudiaba Derecho creía en la justicia. Cuando salí de la facultad con mi título creía en la justicia. Qué deliciosos esos juveniles templos de la teoría, donde las ideas, fijas e inamovibles, son además hermosas. Después de todo eso salí a la calle y mis ideas cambiaron. La vida me ha hecho escéptico con casi todo, pero la práctica de la profesión me ha hecho escéptico con el concepto de la justicia. No con el ideal, que es y seguirá siendo un valor superior, sino con lo que somos capaces de encontrar en la vida real.

He llevado asuntos para un número escandaloso de clientes, y los errores cometidos por la Administración en este tipo de asuntos resultan ampliados por dirigirse contra un auténtico ejército. También he defendido a familias

individuales y algunos son ejemplos inigualables de abuso. Pero uno de ellos sospecho que está destinado a convertirse en un clásico porque no creo que sea fácil encontrar tal acumulación de errores, mala fe, abuso y vulneración masiva de derechos. Este asunto tiene que ver con un expediente llamado de recuperación posesoria de oficio.

PIRATAS DE TIERRA FIRME

La ley de costas, con excelente criterio, privilegia extraordinariamente tanto el dominio público como su gestión y defensa. Entre otras cosas, inventando un expediente ultrarrápido llamado “recuperación posesoria de oficio”, que está destinado a expulsar de la playa a los vivales, enterados, pisaverdes, listos y usurpadores que, por unos u otros motivos, han decidido construirse una casita en la arena por todo el morro. Casos de este tipo los hay, y no pocos, por toda la costa. En parte por la rapacidad de unos cuantos, y en parte por ciertas corruptelas propias del antiguo régimen, que favoreció extraños privilegios de los que prefiero no hablar. El caso es que esas situaciones se fueron consolidando y la mentira se fue transformando en verdad, especialmente en la mente de los interesados. He visto cómo un impetuoso jubilado se dirigía a mí, rojo de indignación, mostrando un edicto publicado en el Boletín Oficial en los años cincuenta, y chillando “¿Es que esto no significa nada?”. La vehemente pregunta sólo tiene una respuesta posible y es un *no* redondo. Este señor mostraba el edicto de un expediente de concesión no resuelto como si fuera un

título de propiedad, y de aquí su desfase y el de todos los que, como él, creen que los dudosos orígenes de su caseta de baños transformada en vivienda de veraneo constituyen un título suficiente para apropiarse por más tiempo de lo que es de todos.

También los hay que se montan un negocio en la playa porque les da la gana, y pasan de todo control, conscientes de la lentitud de los trámites administrativos. Una vez vi hacer eso en la playa de El Puig, en Valencia. Un sujeto, que por lo demás era concejal de un pueblo vecino, tuvo la indecencia de colocar encima de la arena un chiringuito de verano sin ningún tipo de autorización, y pasaba de la Demarcación de Costas, del alcalde, de la policía local y del Sumsum Corda, porque a él lo que le interesaba era sacarse una pasta vendiendo cubalibre de garrafón y sabía que cuando la perezosa maquinaria administrativa se desperezara, ya sería octubre por lo menos, y él habría seguido esa consigna tan práctica que dice *toma el dinero y corre*.

La ley de costas establece el glorioso mecanismo de la recuperación posesoria contra este tipo de piratas de tierra firme. Nada de complicaciones, nada de burocracia, nada de pliegos de cargos, nada de informes. El Jefe de Costas decide iniciar el expediente, le da al listo de turno un plazo de ocho días para que alegue lo que le parezca y adiós muy buenas. Es justo, justísimo, que sea así para impedir los chanchullos, la política de hechos consumados y la chulería en general.

CÓMO ROBAR LA PROPIEDAD HACIENDO QUE LAS VÍCTIMAS PAGUEN LOS GASTOS

Qué pena que este estupendo instrumento haya caído en malas manos. Los ingenieros de costas hacen uso de él, y mucho. Pero además de aplicárselo a los malhechores, o en vez de, lo emplean contra esa gente honrada que se ha convertido en la víctima preferida de la Dirección General de Costas, sus secuaces, jefes y contramaestres.

Sí, porque esos instrumentos que nacieron contra los usurpadores se están dirigiendo contra los propietarios que tienen sus fincas inscritas como Dios manda en el Registro de la Propiedad y a los que un día el dominio público les viene a visitar. Es genial la retórica que emplean los encargados de estos crímenes en sus documentos oficiales. Dicen que se ha *detectado* una ocupación ilegal en el dominio público, cuando lo que sucede es que un deslinde ha hecho que el dominio público avance sobre una propiedad que siempre fue legal y se la trague. Y un día pasa por allí el vigilante de costas y lo “detecta”.

Siento un desprecio muy auténtico contra los concejales que se montan un chiringuito clandestino pasando de la autoridad competente, pero prefiero a este tipo de truhanes que a los que se sientan en un despacho con una camisa blanca y una corbata, o una faldita plisada, y con cara de chicos buenos arruinan la vida de las personas con una simple firma en un papel. Hay algo

fascinante en la caótica confusión de valores que afecta a estos funcionarios públicos, ya que están convencidísimos de que tienen razón y de que son la salvaguarda del Estado. Este equívoco está en la base de todas las guerras y todos los holocaustos. Todos los que se han metido con el prójimo enarbolando principios, creían que tenían razón. Los terroristas matan creyendo que tienen razón. Los inquisidores que quemaron vivo a Giordano Menéndez creían que tenían razón. Los oficiales de las SS que gaseaban personas con derecho a la vida creían tener razón. Perdón por estas comparaciones, pero los funcionarios de la Dirección General de Costas que ordenan la recuperación posesoria contra propiedades legales, legítimas, documentadas e inscritas en el Registro de la Propiedad, están en la misma situación, aunque guardemos las distancias. Están cometiendo crímenes contra los derechos civiles, pero creen tener razón. Están sembrando la desgracia, pero creen tener razón. Están esparciendo la sinrazón, pero creen tener razón.

Por supuesto que cuando las víctimas de esta barbarie acuden a los tribunales pierden todos los pleitos. En parte –perdón por decirlo así– por despiste de sus abogados y en parte porque el desafuero es de tal calibre que, como suele decirse, el bosque no permite ver los árboles.

No, no puede dirigirse contra probos ciudadanos un procedimiento sumario que está pensado para los usurpadores. Pero se hace así, y se hace mucho.

LA ISLA COLOMBINA

Es lo que se hizo, por ejemplo, con Valeriano Rodríguez, el carpintero jubilado entrañable y quisquilloso al que ya me he referido en anteriores capítulos.

Se empecinaba al frente de su carpintería ruinoso lo mismo que un viejo capitán en el puente de mando de un barco que se hunde, hasta que los corsarios de costas le echaron la nave a pique. Ya he contado que la finca está inscrita en el Registro de la Propiedad desde principios del siglo XX, y que fue el mar el que se acercó al edificio debido a los espigones y muelles del puerto.

La Demarcación de Costas de Tenerife tramitó contra este edificio un expediente de recuperación posesoria incluso antes de que se aprobase ningún deslinde en la zona, y con eso se dejó a Valeriano en una situación muy difícil, porque su única defensa al respecto era invocar su derecho a la concesión administrativa que la ley prevé cuando el dominio público se come una propiedad privada. Pero como esta petición no se podía hacer hasta que no quedase aprobado el deslinde, y no había ninguno aprobado, el carpintero quedó en una indefensión espantosa. La Administración lo trató como un ladrón y un delincuente cuando su único pecado era haber visto cómo poco a poco la tierra firme desaparecía delante de su edificio por culpa de las obras de la propia Administración.

Como en otros casos, cuando me llamó para echarle una mano el patíbulo ya estaba dispuesto para él. Había una sentencia firme desestimando su recurso contra la recuperación posesoria y el juzgado de lo contencioso administrativo había dado el visto bueno para la entrada en la propiedad a efectos de derribar.

Aquella mañana de julio de 2007, en San Sebastián de la Gomera, me costó hablar con él para explicarle lo que debíamos hacer. Estaba tan excitado que no me dejaba hablar. Tenía multitud de papeles perfectamente ordenados encima de varias mesas y me enseñaba uno tras otro, explicándome largas historias sobre los avatares pasados de la carpintería, sobre las sanciones que le habían impuesto, sobre las mafias que lo habían perseguido y sobre la injusticia que lo había acosado. Por suerte conseguí hacerme un hueco para decirle lo que necesitaba e inmediatamente me puse en marcha, escribiendo contrarreloj todo lo que debía escribir para poner las cosas en su sitio.

Mes y medio más tarde, en los últimos días de agosto, la guardia civil advirtió al interesado de que el trece de septiembre se iba a producir el derribo y le sugirió que no se pusiera borde. La familia pidió la intercesión del presidente del Cabildo de la Gomera. Los presidentes de los Cabildos Insulares suelen ser unos personajes muy socorridos en estos casos y no siempre útiles, aunque también conozco excepciones notables. En este caso, el Presidente de turno y yo estuvimos hablando por teléfono. Le expliqué la situación, le detallé por qué el derribo era ilegal y le especificué lo que le pedía que hiciera, especialmente hablar con Carlos González, el Jefe de Costas. No hizo nada, excepto el ridículo. Unos días más tarde se lamentaba con la esposa de Valeriano de que no había nada que se pudiera hacer, que el derribo era inevitable y era obligado resignarse. Tuvo mala suerte, porque para esa fecha yo ya había conseguido la suspensión.

Duró poco, desde luego. En el mes de enero, después de quedar claro que los tribunales no estaban dispuestos a entender el problema, las máquinas entraron en la propiedad y terminaron con esas cuatro paredes entre las que Valeriano se sentía tan extrañamente feliz. Al tribunal no le importó que al viejo carpintero la Administración le hubiera tendido una trampa, y no pudiera defenderse pidiendo la concesión hasta que no se aprobara el deslinde. Las máquinas hicieron su trabajo, la familia se sintió humillada, la fe en la justicia se fue disipando y los responsables del derribo se quedaron imaginando que muy orondos y muy satisfechos. Le puse una querrela criminal al Jefe de Costas. No por fastidiar, sino porque estaba convencido de que había cometido un delito. No hubo suerte. El juez de instrucción no pensaba igual y no la admitió a trámite. Presenté recurso. Me lo desestimó. Otro recurso a la Audiencia Provincial. El mismo resultado. Formulé demanda civil para conseguir una declaración del derecho de propiedad anterior al deslinde, imprescindible para reclamar la concesión de la transitoria primera. La jueza tampoco la admitió a trámite. Decía que no era competente. A Valeriano no le quedó más que sentarse sobre un pedrusco y contemplar la miseria que lo rodeaba.

A todo esto, cuando examiné el deslinde, comprobé que una parte importante de la parcela se había incorporado al dominio público porque pretendidamente en ella entraban los temporales. Era lo que me faltaba por ver. La parcela estaba dentro de un puerto y un puerto se hace justamente para evitar los temporales. Dentro de un puerto no hay temporales, no los puede haber. Es imposible. Pero

los ingenieros, acostumbrados a eso y a más, habían escrito aquello y se habían quedado tan anchos. Por descontado que no había una sola prueba. Sólo una declaración tan idiota como imposible. Y esa declaración sirvió de base para que los terrenos, poco después del derribo, fueran por fin <http://vimeo.com/21896503> declarados solemnemente dominio público.

EL BAR LOLA

Me confiaron este asunto en noviembre de 2004, mientras me encontraba asistiendo a una convención en Santiago de Compostela. Recibí la llamada de una compañera que me quería pasar el caso de unos clientes suyos, los hermanos Menéndez, a los que la Demarcación de Costas de Valencia les quería derribar el llamado restaurante Lola, en la playa de La Almardá (Sagunto). El asunto estaba ya muy avanzado. La Administración había dictado resolución acordando la recuperación posesoria, el recurso de alzada había sido rechazado y el contencioso administrativo estaba en trámite, pero mi compañera estaba convencida de que lo iba a perder, porque no tenía ningún motivo consistente de defensa. Me pidió que continuara con la tramitación, pero rechacé la propuesta. A mí me interesaba abrir una nueva vía. Una vía que consistía en la impugnación del deslinde para repetir mi experiencia de la playa de Otur, especialmente porque para ese momento ya sabía que el deslinde de la zona también se había aprobado por el desafortunado e ilegal procedimiento de ratificación del anterior.

La playa de La Almardá es como la joya de la corona de los ecologistas locales. Se trata de una zona muy extensa de dunas, que enlaza con la provincia de Castellón y que permanece aún dulcemente solitaria. Incluso en un fin de semana de agosto puede uno plantar la sombrilla a buenos metros del vecino más cercano, lo que es mucho decir en plena temporada y en plena Comunidad Valenciana.

Había recibido cierta información sensible que tenía que ver con los planes, más bien siniestros, que había para la zona. La playa de La Almardá estaba destinada a no ser nunca más lo que era. Según me decían, iban a cambiarle la cara y a transformarla en una especie de Benidorm actualizado, con un paseo marítimo, un buen ramillete de hoteles de lujo, los imprescindibles balnearios, un puerto deportivo y algo más que quizá sea mejor no revelar. Se trataba, según me aseguraban, de uno de esos movimientos imparables de un consorcio formado por el gran capital en busca de negocios, el Ayuntamiento, siempre dispuesto a lo que suelen llamar *fomentar la riqueza* y la Dirección General de Costas, muy complaciente cuando le piden colaboración para destruir la beatitud de las playas solitarias.

He visto muchas veces cómo a los alcaldes se les hacía la boca agua al oír hablar de las inversiones de la Dirección General de Costas en paseos marítimos o regeneración de playas. He visto cómo se transformaban en perritos falderos, obedientes, mansos y complacientes, ante la perspectiva de estas inversiones. He visto a menudo cómo daban la espalda a los vecinos afectados por las

medidas, los estafaban, engañaban y manipulaban para evitar que se convirtieran en un inconveniente para la deseada inversión.

No hay forma de parar a este consorcio de grandes capitalistas y funcionarios públicos, que es como un elefante sordomudo avanzando me da igual por dónde, sabana subtropical o tienda de cristal de Bohemia. Unos vecinos acudieron a consultar con la entonces alcaldesa de Sagunto, que no se limitó a tranquilizarlos, ni a darles largas, sino que les respondió que ella no sabía nada de ningún paseo marítimo. Esta declaración, por ejemplo, habría sido totalmente imposible para Pinocho.

Yo también pregunté en la Demarcación de Costas, sin resultado. Y la cosa no cambió cuando a los pocos meses comenzaron a aparecer topógrafos tomando datos y haciendo fotografías. Nadie sabía nada, nadie explicaba nada ni daba razón de nada. Había un pacto de silencio contra los vecinos, una conjura viscosa y antidemocrática. En enero de 2008, durante una entrevista con el Subdelegado del Gobierno y la Jefa de Costas a la que ya he aludido anteriormente, me quejé de esta conjura. La Jefa de Costas contestó muy rotunda diciendo que no había ningún proyecto de paseo marítimo en aquella playa. Su respuesta había sido clara, contundente y con vocación de ser la última palabra. Pero los vecinos habían tenido ya muchos encuentros y conversaciones con los topógrafos, y se lo dije. Y sobre todo le advertí que el propio ingeniero autor del proyecto, perteneciente a la Demarcación de Costas, me había confesado meses atrás que él mismo estaba dibujando el paseo. Ante

estas evidencias, su respuesta fue sensacional. Me dijo que lo que se estaba proyectando no era un paseo marítimo, sino una *senda peatonal*. Es la guerra semántica, de la que ya he hablado.

El nuevo alcalde de Sagunto volvió a descolgarse con la misma consigna unos meses después, hacia enero de 2008. Me llamó su secretaria diciendo que quería hablar conmigo y cuando llegué me encontré con que quería hablar conmigo y también con el resto de la Humanidad, porque junto a mí había citado a todos los vecinos de la playa, que deambulaban por los alrededores como rebaño desorientado. Después de subir en manada a la primera planta y ocupar ruidosamente los puestos de los concejales en el salón de plenos, el alcalde comenzó un debate muy constructivo con los vecinos. Muy constructivo porque, a la manera que yo ya conocía, les daba la razón en todo. Incluso cuando los más listorros planteaban cuestiones totalmente erróneas. Me daba cuenta de cómo el alcalde estaba alimentando esos errores, planteamientos inútiles y zarandajas. Pero él era abogado en ejercicio y si actuaba así no era por ignorancia, sino pensé que por otros motivos.

En medio del discurso hizo el típico ofrecimiento que tantas veces he escuchado: Ir a Madrid acompañando a los vecinos. Esto les gusta mucho a los alcaldes. Saben que en Madrid no van a conseguir absolutamente nada. Lo saben bien, pero les interesa esa escenografía hueca, poner el decorado de ese voluntarismo bondadoso y la oportunidad de pasar el viaje de vuelta

haciéndose la víctima e igualándose con sus vecinos y electores en la desazón y la pena.

La notaria Pilar Amigó estaba también allí y se le ocurrió decir en voz alta que quería escuchar la opinión del Sr. Ortega. Justo cuando estaba a punto de levantarme para hacer mutis por el foro. Le dije al alcalde que si realmente quería hacer algo por los vecinos podía poner fin a tres años de pesquisas inútiles desvelando el gran secreto del trazado del futuro paseo marítimo.

La respuesta de aquel hombre abnegado, que daba la razón a los vecinos en todo y estaba dispuesto a derramar su generosidad acudiendo con ellos a Madrid, fue simple: No sabía nada de ningún paseo marítimo.

INDIFERENCIA MEDITERRÁNEA

Me vacié en explicaciones en varias asambleas de afectados en aquel soleado invierno de 2005, pero no las recuerdo con agrado, porque algo no me convencía en la actitud de la gente, una especie de escepticismo mezclado con abulia. Lo confirmé cuando se puso en marcha una asociación de vecinos cuyo fin era exclusivamente la defensa contra el deslinde y contra aquel paseo marítimo que según todos los indicios iba a discurrir por encima de sus propiedades. La junta directiva se reunió una sola vez, y con tanta desgana que la sesión inaugural fue también la de clausura.

Dicen que la pequeña aldea llamada Roma se adueñó del mundo porque estaban convencidos de una cosa llamada *fatum*, es decir, que sabían que su

destino era adueñarse del mundo. El destino coincide más o menos con lo que deseamos y nos merecemos por nuestra energía y valentía. Cuando a principios del siglo XIX, en Móstoles, un alcalde bastante menos complaciente que los de ahora mandó al alguacil que le diera al tambor, y cuando la gente lo siguió, los objetivos se persiguieron y se consiguieron. Cuando en Ribadesella todo un pueblo se movilizó en contra del deslinde, consiguió cambiarlo. Pero ni los alcaldes de Sagunto eran como el de Móstoles (En lugar de levantarse contra el invasor le abrían las puertas de par en par, le ponían alfombra roja y lo invitaban a canapés) ni tampoco los vecinos de la playa de La Almardá eran como los de Ribadesella ni como los de ningún otro pueblo que se haya rebelado contra la injusticia. En su mayor parte decidieron refugiarse en esa indolencia mediterránea tan característica que en Valencia incluso le han puesto un nombre.

Recuerdo a una dama que venía a todas las asambleas, se sentaba en la primera fila, y luego dejó con mucha tranquilidad que fueran sus vecinos los que financiaran la impugnación del deslinde. Recuerdo también a otro caballero, universitario cultivado, que se tomó la licencia de predicar que todas aquellas reuniones no eran más que un artificio mío para sacarle el dinero a la gente. Y recuerdo que no fui capaz de movilizar a los cien o doscientos vecinos que pronto se iban a convertir en víctimas del elefante que ya se acercaba.

No obstante, unos pocos me encargaron la impugnación del deslinde y me puse a ello, absolutamente seguro de que iba a conseguir su anulación porque

me amparaban no sólo la ley y el derecho, sino también los contundentes precedentes judiciales de la playa de Otur.

Pero había un problema. El deslinde de ratificación del anterior implicaba que había otro anterior, y yo no quería conseguir una victoria pírrica, anulando el deslinde reciente sólo para que renaciera el viejo y que nos quedáramos igual.

El deslinde anterior databa de 1946, un momento poco propicio a los derechos individuales. No tenía necesidad de sesudos estudios para averiguar si era atacable, porque, como he comentado en el capítulo anterior, ya los había hecho con motivo de la impugnación de otro, primo hermano de éste, aprobado en 1947 para la playa de Oliva.

Creo que este pleito marcó el fin de una época y el principio de otra nueva, para mí y quizá para todos. La época que acababa era la que me había permitido derrotar repetidas veces en los tribunales a la Dirección General de Costas. La que comenzaba era una etapa de desespero, como si los tribunales hubieran cambiado repentinamente de orientación y ya no habláramos el mismo idioma.

Algún instinto agudo debió advertirme, porque no me limité a hacer lo mismo que había hecho en Otur, es decir, formalizar recurso judicial sin más, confiando en que no habría problema de plazos, puesto que ninguno de los dos deslindes había sido notificado a los afectados. En vez de eso me tomé la paciencia de presentar previamente una solicitud de revisión de actos firmes nulos de pleno derecho, que es un instrumento que establece la ley para impugnar los actos administrativos en cualquier momento. Lo hice para

prevenir que no me admitieran a trámite la impugnación directa, bajo pretexto del mucho tiempo transcurrido, especialmente desde el deslinde de 1946. Y estuvo bien pensado, porque lo primero que me encontré en la Audiencia Nacional fue lo que había temido, un auto desestimando a trámite los recursos por impugnación directa. Así que lo que finalmente se tramitó fue el recurso acumulado que también tenía interpuesto contra la desestimación de la solicitud de revisión.

La Audiencia Nacional me desestimó el recurso con una sentencia que me notificaron en diciembre de 2007 y que ya he comentado en un capítulo anterior, y ése fue el fin de la aventura.

LA IGNOMINIA

Los avatares del restaurante Lola fueron muy accidentados y creo que me hicieron madurar hasta hacerme comprender cuánta maldad, cuánta incomprensión, cuánta deformación y cuánta conciencia equivocada puede agruparse a veces en el corazón de los humanos, puede que con apariencia espontánea, pero considero que no tanto. Bajo mi punto de vista, las inimaginables violaciones de derechos que sufrieron los hermanos Menéndez debían haber tenido como causa remota el desembarco del gran capital en la playa de La Almardá. De igual forma que el primer paso para arruinar una zona de costa virgen como la Marina de Cope, en Águilas, consiste en construir una autopista que permita el acceso primero de las hormigoneras y luego de los

turistas, el primer paso para estropear una playa casi virgen, como La Almardá, es construir un paseo marítimo. Pero antes hay que limpiar la playa. Es lo que siempre hacen los ingenieros de costas. Pueden permitir que las viviendas ilegales permanezcan durante diez, veinte, cuarenta o cincuenta años, pero cuando hay un proyecto de obras de por medio entonces perecen todos, legales e ilegales, a semejanza de la devastación causada por los antibióticos, que no saben distinguir la bacteria amiga de la enemiga.

Estudié los documentos de propiedad de los hermanos Menéndez para llegar al convencimiento de que la familia podría tener acceso a una concesión de la transitoria primera, y por lo tanto seguir vendiendo paellas durante sesenta años en lugar de limitarse a contemplar las ruinas de su restaurante. Pero en abril de 2007 me encontré con una situación desesperada: El recurso contencioso administrativo contra la recuperación posesoria, que llevaba mi compañera, se había perdido, la sentencia no se había recurrido, la Demarcación de Costas se aprestaba a demoler las instalaciones, yo aún no tenía sentencia en mi pleito contra el deslinde, y aún así debía impedir el derribo.

Puesto ante este nuevo desafío, me di cuenta de varias cosas. La primera, que el edificio y el terreno eran propiedad de cinco hermanos, de los que tres habían constituido una sociedad para explotar el restaurante. La segunda, que la Demarcación de Costas de Valencia había incurrido en un error de bulto al dirigir el procedimiento de recuperación posesoria contra la sociedad, no contra

los propietarios. Esto es algo inaudito. Es como si tengo una casa alquilada, un día aparece una máquina que la tira al suelo y si protesto pasan de mí diciendo que el expediente lo han dirigido contra el arrendatario.

Tres de los hermanos Menéndez eran los propietarios de la sociedad, por lo que no podían alegar ignorancia, pero otros dos vivían totalmente alejados de las paellas y de la playa y no sabían nada de lo sucedido. Éstos tenían todo el derecho del mundo a impugnar la recuperación posesoria para forzar que el procedimiento comenzase de nuevo. Además, vi que la primera inscripción de la finca databa del siglo XIX. El título más antiguo referenciado emanaba de un auto judicial de adjudicación anterior a la primera ley de puertos, de 1880.

De todas las situaciones posibles en orden a poder acceder a un derecho de concesión de sesenta años, la más privilegiada es la de quienes habían obtenido a su favor una sentencia declarando sus inmuebles enclaves privados dentro del dominio público. Pero en aquella época previa a la ley de costas de 1968 había un protocolo muy claro de actuación de los jueces: Siempre que se pudiera acreditar la existencia de propiedad privada con anterioridad a la primera ley de puertos, de 1880, los particulares tenían derecho a que su terreno se considerase enclave privado dentro del dominio público. Aquéllos que están en una situación de hecho igual, es decir, pueden acreditar la propiedad anterior a 1.880, están en la segunda mejor posición posible para obtener la concesión. Así que con mucha probabilidad la familia tenía ese derecho, que era incompatible con la recuperación posesoria y con todo derribo. Y si era así, lo tramitado hasta

entonces era un error, un fraude y una vergüenza. Naturalmente, a los propietarios la Administración nunca les había informado de que podían pedir la concesión. Cómo iba a ser así, si nunca les habían informado de la existencia, tramitación y aprobación del propio deslinde.

Por tanto solicité la concesión de manera fundamentada y documentada. Y para que la cosa no quedara ahí, en junio de 2007 el Subdirector General de Costas, Ángel Muñoz, me atendió amablemente en su despacho. Yo quería que él se diera cuenta del disparate que estaban cometiendo al insistir en el derribo de unos bienes que tenían que permanecer para ser dados en concesión, pero no se mostró de acuerdo. Le parecía que la escritura de propiedad que habíamos aportado no era de esa zona, sino de otra distinta que nada tenía que ver con la playa.

Normalmente demostrar lo contrario es bastante difícil, pero en este caso era facilísimo, porque la parcela no es cuadrada ni rectangular, sino que tiene una extraña forma de trapecio, y además yo había aportado con la solicitud fotografías aéreas oblicuas y plano catastral certificado, y en ambos se veía que efectivamente la parcela con forma de trapecio que aparecía en el catastro era la misma de las fotografías. Le pedí que reclamara el expediente y lo estudiara, para comprobar que lo que le decía era cierto, y me aseguró que lo haría, pero nunca más supe de él. Imagino que una actuación consciente y responsable habría pasado por revisar la documentación, comprobar que él estaba equivocado en cuanto a la identidad de la parcela, dictar órdenes para que se

suspendiera el derribo e inmediatamente otorgar la concesión, o al menos tramitarla. Pero no hizo nada. Dejó que las cosas continuaran adelante con su triste inercia. Llegado el momento, y como de costumbre, se limitó a ignorar la solicitud de concesión, y a dejar que vencieran los plazos para el silencio administrativo negativo. Yo creo que ni llegó a abrir el expediente. Ni a pedirlo. Ni a encargar que alguien lo estudiara. Creo que cuando me marché se dedicó a otra cosa, olvidando por completo la conversación, el problema y el angustioso destino de las víctimas.

UN MANTRA IDIOTA

Sabía que no podía conseguir nada apelando a la racionalidad de los funcionarios. Con la Jefa de la Demarcación de Costas de Valencia había perdido el trato año y medio antes, cuando derribó la terraza de otro restaurante en Oliva. Y aunque lo hubiera tenido no habría acudido a hablar con ella, porque ya sabía que estaba abonada a un mantra idiota: *No tenemos más remedio que ejecutar la sentencia*. Ella siempre planteaba esos temas como si escaparan a su autonomía, y como si una decisión de suspender temporalmente el derribo fuera a suponer que los jueces la reprendieran por desobediencia o la procesaran por desacato. Este punto de vista es uno de esos errores que de tan claros permanecen invisibles a la mayoría, y aquí incluyo a algunos togados, si me disculpan. Todo el mundo está convencido de que ejecutar la sentencia es una obligación, y todo el mundo se refiere a la sentencia como algo sagrado y a

su ejecución como un deber, y todo el mundo se equivoca. Este tipo de sentencias, cuando se desestima el recurso, no se pueden ejecutar porque carecen de condena de dar, hacer o no hacer. La parte dispositiva de la sentencia que se pretendía ejecutar no decía *ordeno que se derribe el restaurante*. Se limitaba a declarar desestimado el recurso contencioso administrativo. Claro que la ley es muy severa en cuanto a la ejecución de las sentencias, y así debe ser, pero esa severidad se refiere sólo a las que contienen una condena. Si yo reclamo una responsabilidad patrimonial de la Administración y mi demanda pide una condena a pagar cierta cantidad, una sentencia estimatoria contendrá en su parte dispositiva esa condena, es decir, una obligación de dar, y por tanto, si la Administración no paga voluntariamente, se exigirá la ejecución. Pero si me desestiman un recurso, la sentencia se limita a declararlo así, sin más. Por tanto, no nos encontrábamos ante una ejecución de sentencia, sino ante la ejecución de un acto administrativo. Sin embargo, todo esto era demasiado complicado para explicárselo a una persona que no estaba dispuesta a escuchar y que, según me explicó una periodista, se disculpó pretextando que si no ejecutaba la sentencia ella misma podía ir a la cárcel. Una persona con ideas totalmente erróneas sobre su propia labor profesional no debería tener tanto poder, pero no olvidemos que estamos en España.

DESPLEGANDO A LAS FUERZAS

Por tanto, no podía apelar a conversaciones, reuniones ni peticiones. Debía confiar únicamente en mi propia habilidad. Por encima de la inflexibilidad de los funcionarios, por encima de sus prisas y su determinación, el Derecho debía ofrecer una solución para estas personas.

La rutina consistía en que los hermanos que habían permanecido en Babia formularan recurso de alzada contra la recuperación posesoria, pero esto resultaba pobre y podía ser insuficiente, porque la Dirección General de Costas nunca estimaría el recurso y si debía esperar los tres meses precisos para que se originase el silencio negativo, podría no llegar a tiempo.

Decidí dividir mis fuerzas, como un general en una guerra de papel. A Juan, uno de los hermanos que explotaban el restaurante, le había asignado la función de reclamar la concesión para toda la familia. María, una hermana de las que nada sabían hasta la fecha, inició el lento camino del recurso de alzada, para poder llegar algún día a los tribunales. Para otro hermano formulé un recurso contencioso administrativo directo, por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales de la persona. Este procedimiento sólo cabe cuando se han violado derechos fundamentales, entre ellos el derecho de defensa, y tiene la ventaja de no requerir recursos previos ni actos intermedios. Finalmente, formulé una demanda incidental para la sociedad, compareciendo en el procedimiento en el que había recaído sentencia para pedir la suspensión de su ejecución. En la demanda invocaba todas estas circunstancias que ya he contado y muy especialmente el derecho de los vecinos a obtener una concesión

administrativa que es incompatible con la recuperación posesoria y sobre todo con el derribo. Sí, acabo de decir que no estábamos ante una ejecución de sentencia, y yo pedía una suspensión de la ejecución de sentencia, pero la contradicción es sólo aparente. Yo sabía cómo eran las cosas y sabía también que los jueces no las veían como yo. No tenía más remedio que jugar a su juego, aunque fuera un juego idiota con el ruido de fondo de un diálogo de besugos.

DERECHOS POCO FUNDAMENTALES

A partir de entonces comencé a aprender que había pasado a vivir en un país distinto del que yo creía vivir, con un Derecho que no es el que yo había estudiado y una idea de la justicia ajena a la que yo conocía. Fue ese asunto el que tanto dañó la fe que había tenido en la justicia, en los jueces y en el derecho como instrumento para la defensa de los débiles.

El primer episodio de este viacrucis: El tribunal no admitió a trámite el recurso basado en violación de derechos fundamentales. El argumento: no se había violado ningún derecho fundamental. Añadían que lo que yo estaba planteando en realidad no era la violación del derecho de defensa, sino del derecho de propiedad, que no es susceptible de protección constitucional. Me sentí como si me hubieran lanzado en paracaídas sobre territorio bosquimano y me encontrase con unos negritos delgaduchos con taparrabos, hablándome en un idioma que yo no podía comprender. Porque efectivamente, no entendía nada, ni lo entiendo ahora, ni podré entenderlo aunque me obliguen a tragar aceite de

ricino. El señor al que yo representaba había sido ignorado durante la tramitación de todos los procedimientos, administrativos y judiciales. La Administración iba a meter unas máquinas para derribar su propiedad sin antes haberle dicho ni pío, y los jueces me decían que yo no estaba planteando la violación del derecho de defensa. Pero no recurrí la decisión, porque lo que yo necesitaba no era una discusión doctrinal que durase años, sino una suspensión rápida del derribo, y tenía aún otros resortes. Y así fue como accedí a mi primer tesoro intelectual de esta nueva España que estaba aprendiendo a conocer: la decisión judicial de que no es violación del derecho constitucional de defensa que la Administración decida derribar un edificio sin notificar nada al propietario ni mucho menos escucharlo.

CASTIGADA POR HABLAR

El resorte de María, la otra hermana ignorada, no me fue mucho mejor, por lo menos al principio. Como aperitivo, mis amigos de la Dirección General de Costas no admitieron a trámite el recurso de alzada, pretextando que no cabía porque ya había recaído un pronunciamiento judicial sobre el caso. El hecho de que hubiera un pronunciamiento judicial sobre el caso formaba parte del motivo del propio recurso de alzada, ya que todo el asunto se había tramitado a espaldas de la interesada, pero ellos no tuvieron inconveniente en darle la vuelta al razonamiento, transformando las causas de nulidad en motivos de inadmisibilidad, y me dejaron en ayunas. Con esto me estaban diciendo que es

estupendo tramitar un procedimiento para derribar la casa de una persona sin que se entere esa persona, y que si después de enterarse, esa persona formula una queja, más que una queja es una salida de tono y un pecado, y como castigo no se le admite a trámite. Recuerden el deslinde de Oliva de 1947 cuando se presentó aquella queja rechazada por improcedente y antirreglamentaria, en una época en la que no existía democracia y el poder público lo era todo. Una situación como la nuestra, con la diferencia de que ahora estamos en el siglo XXI y el intercambio de pareceres no fue verbal, sino escrito. Pero la esencia no cambia: A María, cuya única falta era no tener poderes extrasensoriales para saber que la Demarcación de Costas estaba tramitando un procedimiento para derribar su restaurante, también se le dijo que su queja era *improcedente y antirreglamentaria*, y por eso no se le admitió a trámite.

Todo esto desprende un evocador aroma a establo. No por tachar de equinos o algo peor a los funcionarios públicos, sino porque en el fondo parece que sigamos siendo el mismo ignorante pueblo de cabreros cuya máxima habilidad consiste en el ordeño exitoso de unas ubres y poco más. El tiempo pasa, y parece que no nos movamos del sitio.

Cuando acudí por fin a los tribunales con el asunto de María me encontré con que el Abogado del Estado jefe, un ciudadano llamado Fernando Llopis, presentaba un escrito pidiendo que el recurso no se admitiera a trámite, y de nuevo el motivo era que ya se había dictado una sentencia sobre el mismo asunto. Leí el escrito y lo primero que pensé fue que se había vuelto loco. Una

cosa es que unos ingenieros de caminos, canales y puertos, acuciados por la inmediata construcción de un paseo marítimo, o por lo que sea, hagan mangas y capirotos de los derechos individuales, y otra muy distinta que un señor cuya profesión es el derecho y cuya vida es la justicia haga exactamente lo mismo. Y encima en nombre del Estado. Ya conocen el ensayo de Ortega llamado *La deshumanización del arte*. Fue como si estuviera plantado delante de un cuadro de Tapies o de Miró, intentando en vano encontrar algo humano en ellos. No había en la pretensión del Abogado del Estado ni un sólo hilo de conexión con algo que yo pudiera considerar humano, entendible, racional o vinculado con el Derecho. Estaba pidiendo a los jueces que no admitieran a trámite el recurso de María porque ya había una sentencia anterior, y a mí la pretensión no me parecía siquiera decente. Pongamos por caso las sentencias dictadas en relación a los deslindes. Siempre son muchos los afectados, y habitualmente no se presenta uno, sino varios recursos contra el mismo acto administrativo. En el caso de los Arenales del Sol fueron muchísimos, y todos se admitieron, y se tramitaron como procedimientos separados. Quiere esto decir que el hecho de que ya exista una sentencia anterior no es motivo para que un litigante distinto plantee una impugnación distinta por motivos distintos. Así que imaginaba a los jueces esbozando una sonrisa irónica y desestimando la petición del Abogado del Estado con algo de condescendencia.

Tengo que aclarar aquí algo más, y perdón si me pongo un poco técnico, pero si hay alguien escuchándome, quizá pueda verse en una situación parecida en el

futuro. Todo el mundo está convencido de que una sentencia de la jurisdicción contencioso administrativa que desestime un recurso tiene la virtud de confirmar que el acto administrativo es conforme a derecho. Esto no es cierto. La sentencia se limita a desestimar los motivos de nulidad que se hayan alegado, no los que no se hayan alegado, porque en este caso incurriría en nulidad por incongruencia. Esto es algo que tiene enorme importancia práctica, porque, si se sabe entender, permite revisar en todo momento actos que contengan vicios de nulidad, incluso aunque haya una sentencia anterior desestimando otro recurso. Pero si no se sabe entender, que es lo que está sucediendo, a la sentencia se le otorga un valor omnímodo y universal, y se impedirá cualquier tipo de revisión del acto, sea éste legal o ilegal, lo que en la práctica significa que actos administrativos que perjudican a personas concretas deben prevalecer y desplegar todos sus efectos incluso a pesar de que sea público y notorio que son ilegales, y esto no sólo es inconveniente, sino además tonto. Por tanto, cuando la Dirección General de Costas y el Abogado del Estado declaraban que no se debía admitir a trámite el recurso de María por haber una sentencia anterior, estaban atribuyendo a esa sentencia la cualidad de declarar que el acto administrativo estudiado se ajustaba a derecho y era intocable, una cualidad que no tenía. Lo único que hacía la sentencia era desestimar el recurso en los términos en los que había sido planteado. En nuestro caso, la demanda que presentó la sociedad no opuso que los propietarios tuvieran derecho a una concesión administrativa de sesenta años, y

por lo tanto ese motivo no había sido estudiado. Yo pretendía que se estudiase, pero no conseguía que me dejaran explicarme. A cada paso que daba me encontraba con un enemigo que decía, no que me equivocaba, no que me faltara razón, no que la familia careciese del derecho a la concesión, sino mucho más allá, que yo *no tenía derecho a hablar*. No hay cosa más parecida a una mordaza, ese recurso, sea material o virtual, que resulta tan cotidiano en los regímenes totalitarios. Usted no puede hablar. Así me veía.

En el mes de diciembre de 2007 los jueces le dieron la razón al Abogado del Estado y dictaron auto por el que se declaraba inadmisibile el recurso de María. No es difícil adivinar el argumento: Ya se había dictado una sentencia anterior sobre el mismo asunto. Ya no eran unos fabricantes de puentes expertos en logaritmos, ni un Abogado del Estado un poco vencido del lado totalitario, sino los puros y auténticos jueces los que le decían a María que no tenía *derecho a hablar*. Y, por haberlo dicho los jueces, mi primera obligación profesional era reconocer que yo estaba equivocado. No eran los demás, sino yo quien sufría una visión errónea de la realidad y del derecho. Había sido un error mío creer que el Estado no puede demoler la vivienda de un ciudadano sin consultarlo ni decirle por qué. Sí que podía. Era un error mío pretender que un ciudadano que se entera por casualidad de una resolución administrativa que ordena el derribo de su vivienda, puede formular recurso contra esa resolución. No podía. Era un error mío creer que la Administración se equivocó al dirigir el procedimiento encaminado al derribo de los bienes contra quienes no eran

propietarios de esos bienes. Debía admitir que eso está muy bien hecho. Había vivido en el error y debía admitirlo. Y para parecerme más a Galileo (tuvo que confesar estar equivocado en sus teorías sobre el universo para no arder en la hoguera), no ya admitirlo, sino *confesarlo*. En caso necesario, y a fin de parecerme aún más a él, me ofrezco también a confesar que el sol gira gentilmente alrededor de la tierra. Este fue mi segundo tesoro intelectual de la España postmoderna y de diseño.

Pero por si acaso, al mismo tiempo había formulado un recurso contra la decisión, y en marzo de 2008, el tribunal me sorprendió estimándolo y por lo tanto admitiendo a trámite el recurso contencioso administrativo contra la recuperación posesoria para que el asunto se discutiera otra vez desde el principio. Grandiosa rectificación de los jueces, que me dispensaba de plagiar la confesión de Galileo y que por fin abría caminos de esperanza.

UNA GRACIA DEL JUEZ MANGLANO

El circo no había terminado con esto. Había dirigido un escrito al tribunal autor de la ya famosa sentencia, pidiendo motivadamente la suspensión de su ejecución, como he dicho antes. El vocal ponente fue el juez Manglano, que se había hecho famoso como instructor del caso Naseiro (escuchas telefónicas con fondo de financiación ilegal de un partido político) en una época en la que, por la más estricta casualidad, su tío era el director del CESID.

Cuando Manglano dio traslado de la petición al Abogado del Estado, el inevitable Fernando Llopis contestó en unos términos propios de la cinta de Fellini *Julietta de los espíritus*, que relata la neurosis de la protagonista, inmersa en un mundo imaginario habitado por personajes descabellados con actitudes carentes de sentido. Yo había planteado en mi demanda que el inmueble era propiedad de una herencia indivisa formada por los cinco hermanos, y no de la sociedad contra la que se había tramitado el expediente, por lo que los dueños no habían sido escuchados. El Abogado del Estado, nunca sabré por qué, contestó diciendo que si los hermanos tenían pleito civil sobre una herencia lo que tenían que hacer era aclararse entre ellos, y no acudir al tribunal contencioso administrativo. No es necesario hacer esfuerzos por entender este argumento. Es así y basta.

¿Qué creen que hizo el juez Manglano? Dictó un auto en el que, siguiendo las juiciosas propuestas del Abogado del Estado, me reprochaba la pretensión de suspender la ejecución de la sentencia debido a la existencia de pleitos civiles sobre una herencia, y dando a entender que todo obedecía a una maniobra dilatoria dirigida a no cumplirla, concluyendo que lo que había que hacer era proceder a su ejecución cuanto antes (ya saben que en el fondo tal cosa es imposible, porque la sentencia no se podía ejecutar). Recurrí la decisión y me volvió a decir que yo lo que quería era dilatar y que mis pretensiones no tenían fundamento. Siempre me pareció una maravilla que el juez Manglano se empeñara en que mis argumentos carecían de fundamento, cuando se negaba a

estudiarlos, pero nuevamente debo admitir que, habiéndolo dicho el juez, es preciso acatarlo. Y éste es mi tercer y más preciado tesoro intelectual de la España de monigotes, espantapájaros, gigantes y cabezudos en la que nos ha tocado la suerte de vivir.

NO PERO SÍ Y VICEVERSA

Animada por la sesuda decisión del juez Manglano, la Demarcación de Costas dio el último paso antes del desenlace final, solicitando al juzgado de lo contencioso administrativo autorización para la entrada en la propiedad, a efectos de su derribo. Cuando me dieron traslado, alegué que ello no era posible, porque tenía pedida la suspensión de la ejecución de la sentencia. En ese momento Manglano ya me había dicho que no, pero yo había formulado un recurso de súplica, y por lo tanto la decisión no era firme. No veía forma humana de que el juzgado me llevara la contraria esta vez, y efectivamente así fue. La jueza del siete dictó un auto en el que se denegaba la entrada porque la negativa a suspender la ejecución no era firme. Para ese momento ya estaba avisada la guardia civil, se habían cortado el agua y la luz y todo el mundo estaba listo. Todo tuvo que suspenderse.

Aquel otoño de 2007 fue muy intenso. De forma casi simultánea al auto de la jueza del siete, el juez Manglano me desestimó el recurso de súplica, como cabía esperar. Lo que no cabía esperar, y me escamó un montón, es que al pie del auto decía “esta resolución es firme”. Yo no sé por qué el Juez, o sus escribientes, o

quien sea, pusieron eso, porque no era cierto. La resolución no era firme, porque cabía contra ella recurso de casación. Nunca podré saber si fue un simple error involuntario o hay que buscar algún tipo de vinculación entre el error y la decisión del juzgado de lo contencioso, que daba a entender que no se autorizaría la entrada hasta que no fuera firme la desestimación de la suspensión.

Debo decir que he aprendido a desconfiar, y que, pese a la clara y rotunda decisión del juzgado de lo contencioso administrativo, no me sentía seguro. Estaba tan acostumbrado a recibir bofetones que no conseguía relajarme, incluso después de que Manglano (contradiendo su declaración de que el auto era firme) me admitió el recurso de casación, y por primera vez todo parecía ir sobre ruedas, porque el trámite iba a durar años en el Tribunal Supremo, y durante esos años yo tenía tiempo de conseguir sentencia en la Audiencia Nacional sobre la concesión y sobre el deslinde. Una vez las hubiera conseguido, si eran favorables, es evidente que el restaurante no se podría derribar.

Para asegurarme, acompañé al juzgado de lo contencioso administrativo una copia del anuncio del recurso de casación, y sobre todo de su admisión a trámite. Pero el retorno del medio ambiente jurídico a la normalidad y a la racionalidad había sido algo así como la súbita mejoría de un agonizante antes de la muerte. La Demarcación de Costas solicitó nuevamente la entrada, argumentando que el recurso de súplica sobre la suspensión había sido

rechazado, y aunque yo volví a alegar lo mismo que la primera vez, es decir, que la decisión *no era firme* al haber por medio recurso de casación, esta vez la jueza decidió en sentido contrario, autorizando la entrada. Por qué la primera vez dijo que no se podía autorizar la entrada debido a que el auto de Manglano no era firme, y la segunda vez autorizó la entrada aunque el auto de Manglano no era firme es algo que tampoco sabré nunca. Lo que sé es que la jueza dijo un día una cosa y al día siguiente la contraria, y se quedó tan tranquila. He aquí mi cuarto tesoro intelectual de esta España mísera e incapaz, que se pierde en discursos sobre la excelencia del Derecho y la democracia pero donde todo es fachada y embuste.

Yo aún podía tomar medidas de defensa, pero la Jefa de Costas no me dejó tiempo. Tenía tantas ansias de derribar el restaurante (o tanto temía nuevas órdenes de suspensión) que el día siguiente a las ocho ya estaban trabajando en ello. Y ni que decir tiene que el auto autorizando la entrada tampoco era firme.

UNA CONTRADICCIÓN MÁS

A pesar del derribo, formulé recurso de apelación contra el auto que autorizaba la entrada. El auto lo tenía que resolver el Tribunal Superior de Justicia, el mismo órgano que había resuelto la no suspensión de la ejecución de sentencia (siendo Manglano vocal ponente). El recurso se basaba en que, como se desprende del apartado anterior, el juzgado de lo contencioso administrativo no

podía autorizar la entrada hasta que no fuera firme la denegación del propio Tribunal Superior de Justicia de suspender la ejecución de la sentencia.

Este recurso de apelación fue resuelto también por sentencia. Al leerla, estaba al límite de mi resistencia emocional. Rechazaba el recurso porque toda su fuerza se fundamentaba en la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia y, según exponía, la sentencia, al ser desestimatoria, no se podía ejecutar. Estoy seguro de que esto les suena mucho. La sentencia desestimatoria desde luego que no se puede ejecutar. Yo había jugado al juego contrario por obligación, como ya he escrito. Lo que transformaba todo en algo patético es no ya que esa sentencia demostrase definitivamente la equivocación de la Jefa de Costas (que, al contrario de lo que pensaba, no iba a ir a la cárcel por no ejecutar la sentencia puesto que, como yo había afirmado, no se podía ejecutar), sino que evidenciaba el caos mental del propio Tribunal Superior de Justicia, que unos meses antes, por boca de Manglano, había resuelto que mis escritos eran maniobras para impedir el cumplimiento de una sentencia y que lo que había que hacer era ejecutarla cuanto antes. Sí, sí. El mismo tribunal. En una resolución decía que la sentencia había que ejecutarla cuanto antes y en otra posterior que la misma sentencia no se podía ejecutar.

Estos errores, estas contradicciones, siempre perjudican a los ciudadanos. No estamos ante un caso como el que describe Woody Allen en *Match Point*. Hay caos, hay incertidumbre, y esto ya es bastante escandaloso, porque todo eso

debería estar excluido del ámbito judicial, pero además aquí la pelota siempre cae en el campo de los ciudadanos.

Desde entonces ya no siento lo mismo cuando paso delante de esos pesados edificios consagrados a la Administración de justicia.

83.000 EUROS

La cosa no acaba ahí. La familia acudió en varias ocasiones a hablar con la Jefa de Costas, que les dio la oportunidad de no pasarles los costos del derribo siempre y cuando no se opusieran al mismo. En caso contrario, los gastos correrían de su cuenta. Es decir, que, en el fondo y bien mirado, les estaba ofreciendo dinero a cambio de que renunciaran a ejercer los derechos que la ley les reconoce. Creo que eso tiene un nombre.

La familia evidentemente no aceptó la oferta, y como castigo se encontró con una carta en la que se les daba traslado del presupuesto elaborado por la Demarcación de Costas para el derribo, por valor de más de 83.000 euros. Formulé alegaciones acompañando un informe alternativo de otro ingeniero, que reducía el importe aproximadamente a la mitad, pero más tarde la propia familia encontró a una empresa que hacía el trabajo por 8.000 euros, es decir, diez veces menos que lo presupuestado por la Administración. Poco después, la familia recibió otra carta dejando constancia de que había quedado aprobado el presupuesto de 83.000 euros, que el presupuesto alternativo presentado por la familia podía servirle en todo caso para derribar por su cuenta, y que le

otorgaba un plazo de diez días para abonar la cantidad, remitiéndose el expediente en caso contrario a la vía de apremio.

Les fabricaron un presupuesto desmedido y les coaccionaron exigiéndoles el pago inmediato sólo para socavar su voluntad de resistencia y hundirlos psicológicamente. Lo que pretendían por cualquier medio era que los hermanos dejaran de defenderse, que se portaran como esclavos, como marionetas, como autómatas, como siervos, y que renunciaran a su dignidad. Emplearon el terror psicológico para que renunciaran a ser personas y se transformaran en caniches. Aunque pueda parecer increíble, durante el transcurso de los trabajos de derribo, el responsable del presupuesto (también responsable del derribo) le dijo a Juan Menéndez que el mismo era provisional, y que tendrían que elaborar otro definitivo ¿No es extraño que se dé un plazo de diez días para pagar un presupuesto que es provisional y sujeto a variación? ¿No es cierto que esto confirma que la única función del presupuesto inflado era causar terror en los interesados? Más claro: Al cabo de unos meses recibieron un nuevo presupuesto, algo reducido, con un nuevo requerimiento de pago.

Y una más. En medio de la lucha, cuando mis iniciativas en los tribunales hacían temer a la Demarcación de Costas el fracaso de la operación, se sacaron de la manga nada menos que un expediente sancionador. La infracción: que el restaurante estaba allí. Nuevamente, el pecado de existir, como en el caso de Valeriano. Después del derribo, de este expediente no volvió a saberse nada,

pero si hubiera conseguido neutralizarlo, la Jefa de Costas de Valencia se habría preocupado de derribar el restaurante por este otro camino.

Los hermanos Menéndez concentran en su historia personal toda la bestialidad de que es capaz del poder público cuando está inspirado. Su caso es un símbolo de la moderna ignominia, que por fortuna ya no es la de los fusilamientos sumarios, ni la de los consejos de guerra, ni la de los delitos de opinión. La moderna ignominia forma parte del retroceso democrático que estamos experimentando a ojos vista, en el que el Estado es un gigante patoso que lo aplasta todo, en especial cuando trama alianzas con el gran capital para desembarcar en una playa virgen a fin de pervertirla, destrozarla, desnaturalizarla o, en su lenguaje, para crear riqueza y empleo.

VILLANÍAS

Cuando entré en la facultad de Derecho, el catedrático de Romano nos advirtió de que podía robar más y mejor un abogado con su maletín que toda una banda de ladrones pertrechados con armas de fuego. He visto algo así en el caso del restaurante Lola, en el que el Estado ha rebajado y ha pervertido el derecho hasta convertirlo en un instrumento de manipulación, generando falsas apariencias y creando una escenografía hueca a fin de conseguir unos fines a mi juicio ilegítimos.

A los hermanos Menéndez les hicieron de todo. En primer lugar se tramitaron en la zona no uno sino dos deslindes ilegales (con perdón de la reciente

sentencia, que dice lo contrario) que no les fueron notificados a ningún vecino. En segundo lugar la recuperación posesoria se dirigió contra personas equivocadas, distintas de los dueños. En tercer lugar, cuando los dueños quisieron protestar, no los dejaron hablar. En cuarto lugar no se hizo el menor caso de la solicitud de concesión. En quinto lugar, se les coaccionó ofreciéndoles una demolición sin coste a cambio de no defenderse. En sexto lugar, se les volvió a coaccionar tratando de infundirles terror con un presupuesto exagerado y exigiéndoles el pago en diez días, con la misma finalidad. En séptimo lugar, ni los señores planificadores urbanísticos ni los ingenieros de costas consienten informar sobre el paseo marítimo ni a los hermanos Menéndez ni a sus convecinos.

Lo que me queda de todo esto es algo que va más allá de las ruinas de un edificio. Me queda una sensación como si la justicia fuera un cubito de hielo que al principio podía retener entre los dedos, pero de pronto comienza a fundirse y se me escurre, dejándome con las manos espantosamente vacías.

La sociedad existe porque sus miembros así lo quieren, porque desean vivir juntos y en paz. La palabra Ayuntamiento significa literalmente *ajuntamiento*, es decir, la voluntad de estar y vivir juntos. Pero la sociedad puede también desmembrarse si sus integrantes dejan de sentirse cómodos en su seno. Si se convencen de que vivir en ella no merece la pena, esa sociedad está herida de muerte.

Llevamos mucho tiempo escuchando que la paz es un valor supremo, pero no es cierto. La paz es un valor superior, pero no un valor supremo. La justicia sí lo es. No se puede vivir sin justicia. El Estado, garante de los derechos y libertades, no puede conducirse como una empresa privada, pisoteando la dignidad de las personas para conseguir sus fines.

X

DELICIAS CANARIAS

UNA ORQUESTA DE VIEJOS EMPECINADOS

Los vecinos estaban dispersos por la plaza improvisada, sentados en el suelo, en los portales o en sillas sacadas de casa. Sobre el pobre escenario, una orquesta de ancianos armados con violín, violonchelo y guitarras, y también dos amigos más, en la edad madura, los dos con síndrome de Down, tocando la conga y orgullosos de pertenecer al equipo.

Música tradicional canaria. Conocía desde niño su tempo lento y esa forma de poesía popular de sus letras, empeñadas en obtener musicalidad mediante la repetición.

-En las orquestas de música canaria raras veces se ve un violín -comenta Miguel Cerdeña, el presidente de la asociación de vecinos, mirando al centro de

la orquesta, donde un músico con un resto de pelo plateado mueve las cuerdas de su violín.

Es Bernardo Monserrat, un hombre menudo, de apariencia inofensiva y edad proveya. Es el organizador de la orquesta y el padre de los dos chicos que acompañan con la conga. Hay algo que conmueve en este grupo donde cada uno, aunque sea obrero, jubilado, o pobre de solemnidad, alcanza el cielo rasgando la cuerda de un instrumento. La música une. La armonía que es capaz de crear empieza por los que tocan juntos.

-Bernardo es un agricultor y ahí lo tienes –añade Miguel Cerdeña, con admiración.

Aquella noche en el Puertito de los Molinos, escuchando la orquesta, comprendí que mi misión en aquel extremo perdido del mundo ya nada tenía que ver con las cosas materiales. Meses atrás me habían encargado la defensa de las casitas, pero la cosa iba mucho más allá del ladrillo, el cemento y la uralita. Si yo fallaba, la escena ya no volvería a repetirse. Si me equivocaba, nunca más se montaría aquel escenario, ni se volvería a escuchar la música tradicional, ni Bernardo tocaría su violín, ni los vecinos se sentarían a su alrededor.

LA PLAYA DE ROBINSON CRUSOE

El Puertito de los Molinos es un ejemplo de laboratorio de las distintas proyecciones mentales, opiniones y manías que pueden recaer sobre un mismo

espacio de costa. El único deslinde databa de 1992 y lo había fabricado ni más ni menos que D. José Fernández, el feroz lugarteniente de Narbona, en sus tiempos de jefe de costas de Las Palmas.

Siendo quien era su autor, cabía esperar una delimitación radical y extrema. Y así me lo pareció cuando visité la zona en febrero de 2008. La playa se forma en la desembocadura de un barranco, al pie de una zona de fuertes desniveles. José Fernández se llevó la línea a la coronación de aquellas pendientes y por tanto metió en el dominio público la totalidad de la playa, con todas sus viviendas. Aquella mañana de febrero de 2008, encaramado a los riscos, me forjé mi primera impresión de un deslinde indebido, aplicado en los primeros compases de la existencia de la ley de costas, cuando su adecuada interpretación estaba aún por definir, sobre unos vecinos a los que hay que suponer totalmente despistados e incapaces de plantear una defensa con mordiente.

De momento se me ocurría que subir el deslinde por el monte no venía al caso. Sin duda Fernández había hecho uso del nuevo concepto legal de *acantilado sensiblemente vertical*, pero de forma que no me pareció adecuada. Son acantilados sensiblemente verticales y por tanto dominio público, los de inclinación superior a sesenta grados que están en contacto con el mar o el propio dominio público. A simple vista la de aquellas pendientes no cumplían el requisito.

¿Entonces por qué se había puesto la línea por lo alto del monte? No lo sabía. Sólo podía confirmar que la ley les había caído encima a unos ciudadanos con toda su contundencia y todo su peso, y que el Estado los había aplastado imponiéndoles un criterio cuando menos dudoso.

EL MARIDO DE ROCÍO JURADO

Todo había comenzado en diciembre de 2007, después de que a los vecinos sus abogados les hubieran dicho que ya no podían hacer nada por ellos, y de que recorrieran después de eso cuatro bufetes más para escuchar lo mismo, la temida conclusión de que no había nada que hacer.

Sólo faltaban doce días para el primer derribo cuando me llamaron. Todo estaba dispuesto, incluso la autorización del juzgado de lo contencioso administrativo para entrar en la propiedad. Situación evidentemente definitiva, además de desesperanzada, pero la primera víctima de la carnicería era una abuela combativa llamada Carmen Guerra, que confiaba en mí porque había escuchado por ahí buenos comentarios y me llamaba erróneamente José Ortega *Cano* porque alguien muy bien informado, y con muchas horas de televisión, le había dicho que para no olvidarse de mi nombre debía acordarse del marido de Rocío Jurado.

Pero se trataba de recuperaciones posesorias aprobadas y firmes desde hacía quince años ¿cómo iba a luchar contra eso? Advertí a Doña Carmen Guerra, por este orden, de que el asunto era prácticamente imposible, de que no había

mimbres para la defensa y de que yo no había recibido habilitación para hacer milagros, pero ella se aferraba al abogado que había conseguido parar un derribo en la Gomera, recordaba que había acudido a mí como última esperanza, e insistía. El ímpetu moral de los desesperados, ya saben. Qué hermoso sentimiento es el coraje de los que no se resisten a perecer. Cómo nos dignifican esos pozos de esperanza, de rebeldía, que ni siquiera sabíamos que estaban ahí y que de pronto afloran.

Acepté el caso sin saber cómo resolverlo, colgué y me pregunté qué diablos podía hacer para parar a la Administración si Doña Carmen no tenía escritura de propiedad, la orden de derribo era firme y el juzgado ya había autorizado la entrada. Y parar a la Administración ¿para qué? Toda obstrucción podía aspirar sólo a aplazar el problema semanas o meses, pero no más.

PATOS, CABRAS Y GUIRIS

Fuerteventura es como un pedrusco árido poblado por cabras semisalvajes que de vez en cuando son recogidas por los pastores sólo para parir y para el ordeño. Te mueves por esa isla y nada alegra la vista, excepto que te gusten mucho el color pardo, los minerales y las naturalezas muertas. Entonces la carretera, solitaria como en el oeste americano, describe una curva, desciende con decisión, parece hundirse en la tierra, y uno accede a un rincón que no sabe bien cómo calificar, pero que en todo caso resulta una sorpresa. Los patos chapotean en un inusitado estanque natural, y más allá hay una suerte de

caserío de viviendas a partes iguales tradicionales y humildes. En el caserío hay también una placita, y en la placita un pequeño altar dedicado a la virgen del Carmen, la patrona de todos los marinos.

Un examen más atento revela que los patos acuden como perrillos a pedir comida por entre las mesas del rústico restaurante local, que a veces, por la mañana temprano, las cabras libertarias hacen algo parecido y que los alemanes y demás primos nuestros europeos flipan con todo ello. Les harta tanto complejo residencial hecho con tiralíneas al mismo tiempo que vibran con lo espontáneo, tradicional y pequeño, como las casas del Remo en la Palma o con el Puertito de los Molinos. Muchos compran casitas humildes y viven todo el año en esas aldeas.

En el Puertito de los Molinos no hay puerto alguno, pero el asentamiento fue creado en tiempos por los pescadores locales, que varaban sus barcos en la arena. Cuando las comunicaciones mejoraron, se marcharon a un puerto como Dios manda y vendieron sus casas a otras gentes con ganas de playa. Pero las viviendas se habían ido transmitiendo en documentos privados y no había forma de acreditar la propiedad por otros medios.

Ya conocía otros casos así en Canarias. En tiempos heroicos, durante el siglo XIX o incluso el XX, auténticos colonos de pelo en pecho habían abandonado las certezas de la ciudad y se habían internado en aquellos pedregales donde no habían ni médico, ni luz eléctrica, ni nada parecido a agua corriente, y donde la aventura de aquel tipo de vida sólo tenía sentido porque no hay nada tan osado

como la miseria. Habían plantado su casa sobre terrenos desconocidos, habitándolos y humanizándolos, como se hizo desde el principio de los tiempos, cuando la vida era una aventura y la tierra un misterio.

Jean Jaques Rousseau dejó escrito que la propiedad privada sobre la tierra se originó el día en que alguien tuvo la audacia de poner cuatro mojones delimitando un cuadro de terreno, proclamó que aquello era suyo, y los demás fueron tan ingenuos para creerlo. Algo tan alejado de la famosa carta del jefe indio Seattle al presidente de los Estados Unidos, cuando decía que los hombres no pueden ser dueños de la tierra, sino que pertenecen a ella. Podemos coger esparto, fabricar con él una alpargata, decir que es nuestra y poseerla o venderla. Pero no podemos hacer lo mismo con la tierra, que siempre estuvo ahí. Por más que pataleemos, el origen remoto de la propiedad privada sobre la tierra siempre es el mismo que describió Rousseau, con escritura o sin ella.

Pero la Dirección General de Costas se negaba a reconocer la efectividad de aquellas propiedades simplemente porque no había ni escrituras notariales, ni inscripciones registrales. Se había perdido un tanto el sentido histórico y olvidado que antes de que se inventara el Registro de la Propiedad, todas las viviendas y todos los inmuebles estaban documentados por medios tan sencillos como las viviendas del Puerto de los Molinos.

Canarias es más pobre y más retrasada que el resto de España. La época legendaria de los colonos que poblaron sus riscos desolados está más reciente, casi se percibe en poblados como aquél. En la Península el actual esquema de

propiedad sobre la tierra se formó con la repoblación tras la reconquista, en pleno medievo, cuando los reyes cristianos otorgaban amplios espacios a sus capitanes. En Canarias, con la aventura personal de los más osados, en tiempos aún recientes. Somos unos paletos sin sentido histórico si nos empeñamos en aplicar a Canarias los estándares de la Península. Y por supuesto que eso es lo que está haciendo la Dirección General de Costas con sus ya conocidos criterios de escuadra y cartabón. Y de esa inflexibilidad, de esa ausencia de comprensión, de esa merma de análisis, de esa falta de atención al caso concreto y las peculiaridades locales, no puede salir nada bueno. Especialmente si esas medidas duras que no se entienden provienen de Madrid. Nada bueno. Incluyendo el rebrote de sentimientos secesionistas latentes que los tarados mentales de la capital pueden despertar con sus torpezas.

NAVIDAD SIN LÁGRIMAS

Le había dado el sí a Carmen Guerra y con ella al resto de los vecinos amenazados por derribos inminentes y lo había hecho empujado por la extraña confianza de que iba a encontrar una solución. Era como si Doña Carmen hubiera logrado transmitirme a mí mismo su ilimitada fe en mis posibilidades. Y así fue. Después de colgar tardé menos de un minuto en encontrar el camino y me puse a ello con la fiebre de los que ayudan a los desesperados, luchan por la justicia y tratan de evitar un desastre inmediato. Perdonen que mantenga en el secreto profesional los complicados caminos que seguí para obtener mis

objetivos, y que pase de puntillas sobre el asunto. Acepté el caso y conseguí paralizar el derribo, que era el día 20 de diciembre. Carmen Guerra no pasó la nochebuena llorando. El cuatro de enero había otro derribo, que paralicé también, y otros previstos para marzo corrieron el mismo destino. Uno de los vecinos prefirió seguir con su abogado de Madrid: su vivienda fue derribada.

Pero en el transcurso de aquel invierno de 2008, comencé a encontrarme con los primeros bofetones. Formulé alegaciones con toda mi artillería contra la petición del abogado del Estado de autorización judicial para entrar a derribar una vivienda más. La jueza no las leyó, pero las desestimó. Tuvo un desliz desafortunado al dejarse llevar por una rutina indecente que debería estar prohibida al personal que viste la toga. Estos asuntos, las autorizaciones de entrada, prácticamente no tienen defensa posible y los abogados suelen presentar alegaciones que deben ser parecidas a lo que Séneca llamaba *quejillas de ánimo mareado* y que por lo visto aburren a María Santísima. La jueza, que seguramente a lo largo de su carrera se había metido ya unas cuantas docenas de estas homilías entre pecho y espalda, por lo visto creyó que lo mío era más de lo mismo y no perdió el tiempo en leerlo. Lo sé porque me endilgó un auto en el que desestimaba argumentos, peticiones y pretensiones que yo nunca había formulado, y en cambio de las mías no me decía nada.

Ni uno sólo de los vecinos que me confiaron la buena salud de sus casitas tuvo que llorar por el derribo. Ellos estaban asombrados y yo más. Esa primavera, en un debate televisado, el conductor del programa lanzó una

pregunta. Cómo era que José Ortega era el único abogado que conseguía detener los derribos. Lo mismo me preguntó aquel verano, pero de forma mucho más inquisitiva, una periodista de la primera cadena de TV francesa. Ella no era abogada ni española, pero incluso así quería saber. Parecía mosqueadísima, como si aquella especie de milagros tuvieran un truco, como si no pudiera ser cierto, como si la vida no pudiera ser tan bonita.

Pero incluso así, los vecinos querían más, y yo también. Querían sobrevivir, querían mantener sus viviendas, querían volver a montar cada año su escenario en la placita y volver a escuchar el violín de Bernardo.

Con el tiempo que había ganado pensé en la forma de revisar todos los expedientes desde el principio. Para ello preparé una escenografía que los ingenieros de costas no esperaban y que salió a la perfección. Ellos consiguen hasta la última gota de eficiencia de la ley, como si fuera fruta en una exprimidora. Yo hago lo mismo, pero para ayudar a la gente.

LA SUERTE DEL VIOLINISTA

Sólo una semana después del concierto en la plaza del Puertito de los Molinos, en julio de 2008, recibí un auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, anulando otro del juzgado de lo contencioso administrativo, que había autorizado la entrada en domicilio para derribo de una vivienda. Justo el auto de la jueza que no tenía ganas de leer.

El beneficiado por aquel auto era el mismísimo Bernardo Monserrat, el conductor de aquella banda de viejos tan bien avenidos como empecinados, dispuestos a seguir tocando incluso en vísperas del apocalipsis, lo mismo que la orquesta a bordo del Titanic, que, según cuentan, siguió interpretando *Más cerca de ti, Dios mío*, mientras la embarcación se iba a pique.

Pero aquella decisión judicial significaba mucho más. Mucho y bueno para aquel pueblito del extremo del mundo. En la práctica, significaba la victoria para todos. Durante todos aquellos meses había estado haciendo un trabajo sordo, tejiendo una especie de tela de araña pegajosa en la que por fin había conseguido enredar e inmovilizar a la Dirección General de Costas. Y en verano el trabajo comenzó a dar fruto.

Cuando excepcionalmente el juzgado denegaba la autorización judicial de entrada, la Administración se limitaba a reproducir la petición, pero con Bernardo, y con el resto de sus vecinos, no podía ya hacerlo. Gracias a mi tela de araña, se necesitaba un acto previo de la Ministra, pero antes de proceder a ello, la propia Ministra tenía que cumplir a su vez con otro trámite más. Los había paralizado. Había hecho caer al Ministerio en la trampa de su propia arrogancia. Ellos no contestaban a mis escritos, seguramente porque los encontraban demasiado abstrusos, y el Tribunal Superior de Justicia decidió que mientras no lo hicieran no podrían seguir adelante. De nuevo como en el judo, empleando la fuerza del contrincante. En este caso eran su prepotencia, su chulería y su desprecio las fuentes de las que me nutría. No era yo el que los

había pegado a la tela de araña. Eran ellos mismos los que se habían quedado allí, por su mal carácter. Como en los cuentos piadosos, un simple acto de humildad les habría liberado. Pero esto era demasiado para ellos.

UN MODO DE VIDA

Poco antes, a mi llegada al minúsculo pueblo, había percibido una vida armónica, primitiva e integrada, tal como debía haberse podido ver en cada comunidad años atrás, cuando la sociedad era otra.

Los chicos jugaban al fútbol en la playa. Unas niñas bailaban espontáneamente sobre el escenario, los padres y abuelos hacían tertulia en corrillos. Todos se conocían, todos eran vecinos y habían decidido vivir en común. Se sentían felices de estar allí y no pedían otra cosa. No eran especuladores ni negociantes. Sólo querían que los dejaran en paz. Aquel modo de vivir la vida era primitivo y en cierto sentido iba contra el sistema. Sin televisión, sin consignas, sin dirigismo, sin publicidad, sin aislamiento individual, manteniendo los fuertes vínculos propios de la sociedad ancestral y al margen de lo que sucedía más allá de aquella montaña, aunque sólo fuera en el corto espacio del verano.

¿Y yo? ¿Por qué estaba entre ellos? Me habían invitado a compartir la fiesta del Carmen porque, según decían, de no ser por mí el pueblo no existiría ya. Y al asomarme a la plaza vi que la cosa iba aún más allá, que lo que había salvado no eran sólo unas viviendas, sino aquella armonía y aquel modo de vida.

En aquel único foco de vida de aquella desértica parte de la isla donde ni los saltamontes te dan la bienvenida, la intención de los ingenieros de costas era no dejar piedra sobre piedra para que la playa se transformase en una prolongación del desierto. Después vendrían vertiendo cemento para sus zonas de servicios, sus centros de interpretación y sus espacios diseñados desde una mesa de dibujo en el paseo de la Castellana. Gracias a la suerte que tuve en aquella defensa, el urbanismo primordial y espontáneo del pueblo no tendrá que ceder frente al dibujito de un ingeniero de caminos de la capital.

Toda España hierve de angustia. Por toda España se cometen atropellos. Pero ninguno como los que he visto en Canarias. Es como si la Administración creyera que allí la gente es medio tonta, que no sabe defenderse o que está pendiente de las plataneras. Algo sucede, porque no creo que lo que he visto allí pudiera tener parangón (con sonoras excepciones) en la Península.

EL BESUGO, SU HIJA Y EL SALVAJE DE SU NIETO

El Besugo es un pescador jubilado, delgado, pequeño y poca cosa, con un aspecto de inofensivo que se ve de lejos. Vive en una casa tradicional, de toda la vida, en una playa de Fuerteventura. El paraje donde vive el Besugo se llama Puerto Lajas, en total unas ochenta viviendas más o menos. Y ya está. El resto es un paisaje mineral de textura africana sin árboles ni alegrías. Puerto Lajas parece plantado en medio de la nada y seguramente durante mucho tiempo a nadie le importó si existía o no.

Al Besugo le vino un día a ver la mala suerte, porque, creo que después de que ciertos señores del puro y el mercedes le echaran un ojito al paraje, se enteró de que la Dirección General de Costas le iba a tirar abajo su casa, junto con las de sus vecinos. No es que esté en el dominio público. Ocupa la zona de tránsito y parte de la de protección y tiene derecho a permanecer porque se construyó con anterioridad a la ley de costas, pero iba al suelo sin remedio, como iban las otras casas de toda la vida.

El Besugo tiene una hija. Se llama Carmen. Carmen tiene un hijo. El hijo de Carmen era en aquella época un niño semisalvaje que crecía más o menos como debieron crecer los antiguos guanches, aunque él hacía algo que no hacían los guanches: cogía olas con la tabla, y con eso pasaba más tiempo en el agua que al seco. Está muy bien que haya un niño que en vez de bizquear con la cabeza gacha y una videoconsola en las manos se entregue al mar con esa inocencia, a la que estoy tentado de ponerle el adjetivo de bendita.

Doy fe de que Carmen se mataba a trabajar para darle un futuro a su hijo. Era camarera en un restaurante y por la noche, en vez de dormir, ponía copas en un local. Me llamó en junio de 2007 para pedirme ayuda. No se trataba de un deslinde, sino de un proyecto de paseo marítimo peor que un maremoto, porque chafaba todas las casas de la primera línea.

Un día, cuando estaba en Santa Cruz de Tenerife, Carmen me llamó pidiéndome por favor que encontrara la forma de ir al día siguiente a Puerto del Rosario para asistir a una reunión con el alcalde. El avión salía a una hora

disparatadamente temprana. Cogí un taxi en medio de la lluvia que me dejó en el aeropuerto de los Rodeos con noche cerrada, y volé con las primeras luces del alba hacia una isla donde nunca antes había estado.

Así fue como conocí a Carmen, al Besugo y de paso a un personaje llamado el Colorao, músico famoso que iba haciendo bolos por el mundo, recalaba en Puerto Lajas cuando podía y también estaba afectado por el proyecto. La reunión se celebró sin el alcalde, pero el concejal de urbanismo nos deleitó con una exposición en la que quedó claro que nada estaba claro, y donde se percibía ese acostumbrado y difícil equilibrio de los políticos municipales en activo, que no quieren dejar pasar la inversión de la Dirección General de Costas pero al mismo tiempo necesitan salvar la cara con los vecinos. En el fondo todo se redujo a una escenografía manida y más bien casposa, en la que el alcalde le endilgó al pobre concejal la tarea imposible de convencer a los vecinos de que el proyecto era estupendo incluso para ellos. Hubo mucha de la retórica que ya conozco del orden de que *vamos a intentar, vamos a hablar y vamos a procurar*, pero debajo no había nada. Era puro parloteo. Yo dije unas palabritas para tratar de meterle susto al concejal, pero en realidad estaba en ayunas. Me faltaban asideros para presentar una postura contundente.

Ese asidero era, como siempre, el expediente. Hasta entonces no había podido acceder a él, pero ese día pude hacerlo en las oficinas de urbanismo. La auténtica utilidad de mi viaje relámpago no fue asistir a la triste homilía de un tío que ni siquiera creía en lo que decía, sino meterle mano a los papeles.

Supe con horror que el paseo no iba a tener los seis metros de anchura de costumbre, sino veinte, lo que para el solitario caserío era algo así como colocar una autopista de tres carriles en el Kalahari, y leí con atención que la justificación del proyecto era la previsión que el PGOU del municipio hacía de un gran crecimiento de población en la zona, lo que aconsejaba un paseo marítimo y además no de dimensiones ñoñas, sino de anchura generosa, para que los muchísimos futuros habitantes de Puerto Lajas pudieran caminar por él con holgura. Esto es rigurosamente cierto: La justificación de la anchura extra del paseo era la elevadísima densidad de población que se avecinaba en aquel pedazo de la nada, entonces miserable y solitario.

Y se me ocurrió que la tan cacareada densidad de población obedecía a la construcción masiva, y tanto ladrillo junto podría ser ilegal por vulnerar las limitaciones de la llamada *zona de influencia*.

LA POCA INFLUENCIA DE LA ZONA DE INFLUENCIA

La zona de influencia es una institución jurídica muy poco conocida (y no muy aplicada) que establece que en los primeros quinientos metros desde la costa no podrán formarse pantallas constructivas y la edificabilidad no superará la media del suelo urbanizable programado o apto para urbanizar. El reglamento de costas asigna el control de esta zona precisamente a los planes de ordenación urbana, mandando que estas limitaciones queden incorporadas a ellos.

El motivo por el que nadie habla nunca de la zona de influencia es un misterio, aunque quizá no tanto si tenemos en cuenta que en la práctica esta limitación, puesto que se concentra en la edificabilidad nueva, no va dirigida a los ciudadanos que tienen una casita por la playa, sino a las constructoras deseosas de decorar con nuevas construcciones esos primeros quinientos metros, o, para emplear la expresión del magistrado del Tribunal Supremo Martín Pallín, que con tanto ímpetu se empeñan en *tapar el suelo*.

No sé cómo se ha puesto en pie la famosa ciudad de vacaciones de Marina d'Or, pero doy por hecho que la Dirección General de Costas no estuvo fina en su momento y evitó exigir la aplicación de las limitaciones propias de la zona de influencia. Esto es algo más que sospechoso precisamente porque la Dirección General de Costas tiene a su disposición un estupendísimo instrumento de control, como es el informe vinculante que la ley le reserva previo a la aprobación de los planes de ordenación urbana de los municipios costeros. Los ingenieros de costas abusan hasta extremos asfixiantes del privilegio de que estos informes sean vinculantes, y se lo pasan genial obligando a los planificadores urbanísticos a que incluyan ciertas determinaciones incluso derivadas de deslindes en trámite, cuya delimitación no es más que una simple propuesta. En Santa Pola, pongamos, se seguía una modificación de su PGU coincidiendo con el momento en que la Demarcación de Costas de Alicante tenía en marcha un deslinde en Playa Lisa y Gran Playa, con una propuesta que se comía toda la primera línea y la incorporaba al

dominio público. Los vecinos se lamentaron de que el Ayuntamiento había declarado la zona fuera de ordenación sin estar el deslinde aprobado, lo que les sabía a rayos, y a mí también, así que fui a ver a la arquitecta municipal, que se lamentó aún más al confesarme que no era cosa suya, sino de Costas, que les obligaba y que les habían advertido de que hasta que no se declarase la zona fuera de ordenación no se daría el informe favorable, lo que es lo mismo que decir que hasta que a ellos no les pareciese no se podría aprobar el plan.

Después de eso, el expediente de deslinde entró en caducidad por inactividad recalcitrante de la Demarcación de Costas de Alicante, y se archivó (lo que habría debido tener como efecto que no produjera efecto alguno en el PGU), pero esto se la trae al fresco a los ingenieros de costas, que actúan como si los procedimientos administrativos no fueran más que una molestia y un incordio, y por eso saben que lo que figure en su propuesta es lo que se va a aprobar, chillen los vecinos o pataleen.

La Dirección General de Costas, pues, usa al límite su derecho a informe vinculante y preceptivo, y no permite que ni un palmo de costa escape a su control del urbanismo. Siendo esto así, es raro, rarísimo, que se les haya escapado el pequeño detalle de Marina d'Or, cuyas torres en primera línea de playa más que pantallas constructivas parecen una adaptación de la muralla china, y que por ese motivo, a mi parecer vulneran la ley de costas en sus determinaciones relativas a la zona de influencia.

Algo parecido sucedía en Puerto Lajas, en cuyo PGU la Dirección General de Costas no había hecho hasta el momento ni media observación sobre la zona de influencia y eso desprendía un tufillo como agrio, de algo en descomposición, ya que, teniendo en cuenta el entusiasmo mesiánico con que los ingenieros de costas saludaban la futura exorbitada densidad de población, era poco probable se pusieran serios y dieran la lata con la zona de influencia cuando llegase el momento de informar el plan. En resumen: El deber de la Dirección General de Costas es preservar la integridad del litoral frente a la presión urbanística, y aquí parece que estaba contribuyendo a lo contrario.

Un pajarito muy bien relacionado me pasó una información confidencial. Me dijo que hacía años que el Ayuntamiento intentaba arrancarle a la Dirección General de Costas un paseo marítimo en la zona y que sólo lo consiguió a cambio prestarse a colaborar en una trama más o menos secreta para derribar todo lo que había construido en las servidumbres de tránsito y protección.

Debo advertir muy seriamente que la ley de costas, en sus disposiciones transitorias, garantiza el derecho a la permanencia de las viviendas legales ya existentes en ambas servidumbres antes de su entrada en vigor, y añadir que la competencia sobre la servidumbre de protección no corresponde al Estado, sino a los gobiernos autónomos. Por lo tanto no hay nada que la Dirección General de Costas pueda hacer legalmente para derribar esas viviendas. No directamente, pero desde luego que sí por esas vías indirectas que resultan ser parientes cercanos del chantaje y la manipulación. Según la información de

aquel pajarito bien relacionado, los ingenieros de costas conseguían extralimitarse en sus competencias, meterse donde no los llaman, coger vela en entierro ajeno, arruinar la vida de personas humildes y pisotear derechos consagrados en la ley de costas mediante la construcción del paseo. Explicado de otra forma: ¿Cómo podemos conseguir limpiar la servidumbre de protección de unas viviendas incluso cuando esas viviendas tienen derecho a permanecer y cuando nosotros no somos nadie para decidir lo que vive o muere en esa servidumbre, porque no tenemos competencia? Haciendo un paseo marítimo cuya anchura coincida fatalmente con la de la servidumbre de protección: Veinte metros. Así tiramos al suelo las cochambrosas viviendas de pobres y decimos que es porque los terrenos son necesarios para el paseo. Y decimos que el paseo debe tener veinte metros no porque queramos usarlo como herramienta contra esos pobres, sino porque en la zona se prevé muchísima densidad de población. Ellos tienen una solución para cada problema.

Y lo que en el fondo de todo esto parece claro es que, una vez más, la Dirección General de Costas se alía con un Ayuntamiento y con el gran capital ladrillero y cementero para desgraciar una zona de la costa, promoviendo su desarrollo mediante la construcción masiva en lugar de su conservación, y empleando para ello como instrumento la ley de costas, a pesar de que su fin es justamente el contrario, es decir, evitar o limitar la presión urbanística sobre el dominio público.

Si ven al Besugo y hablan con él verán que es un hombre sencillo y amable. Mientras viva, lo podrán ver sentado delante de su casa, hablando con sus vecinos mientras mira al mar. Los tíos de los maletines y los talonarios de cheques imagino que no pueden tolerar que el Besugo y sus amigos, y sobre todo sus viviendas, ocupen el futuro frontis marítimo, esa primera línea delante del paseo. Cómo van a tolerar un diseño turístico en el que la primera línea esté ocupada por estos pobres de solemnidad, el Besugo, su hija Carmen y el salvaje de su nieto, y afeada por sus decrepitas casitas de pescadores. No es así como se hacen las cosas en turismo. A los pobres es mejor quitarlos de en medio, a ver si con un poco de suerte se los lleva el diablo. Como cantaba Nacha Guevara:

Así los pobres a misa de once irán

Y con la gente no se confundirán

LA ISLA BONITA

Me sentía como un explorador cuando el pequeño avión de Binter descendía sobre aquella isla escarpada que había comenzado a aparecer como una mancha gris en el océano y en la que apenas quedaba espacio para el desangelado aeropuerto rodeado de plataneras. Me disponía a descubrir paisajes nuevos, gente nueva y también problemas nuevos, y me sentía rejuvenecido.

Efraín era el maestro jubilado que presidía la asociación de vecinos, un palmero fornido, sensible y, como pude averiguar en largas conversaciones, culto. Me llevó a Los Llanos de Aridane atravesando el corazón de la isla de la Palma. El

camino fue como un sueño, a través de una selva frondosa hasta las cumbres de bruma donde parecía anochecer en plena tarde. El túnel daba al poniente. Al atravesarlo fue como entrar en otro país. El sol brillaba allí, y al fondo vi el océano, rutilante y lejano.

Como suelo hacer, antes de llegar había procurado documentarme. El deslinde de la Bombilla ocupaba dos términos municipales, Los Llanos de Aridane y Tazacorte. El primero de los expedientes lo había estudiado en Madrid, el segundo en Santa Cruz de Tenerife. Había leído cosas extrañas en esos papeles, pero aún tenía que meditar sobre ellas. Debía pasar un tiempo hasta que me impregnara del problema para después buscar una solución.

El problema era un poblado increíble de chabolas al borde del mar, en un espacio al que todo el mundo llama *playa*, pero que en realidad no lo es. En Canarias abundan las superficies volcánicas llamadas *callados*, formadas por fragmentos redondeados, a veces muy grandes, de lava solidificada. Es un territorio poco hospitalario y poco practicable, que no guarda el menor parecido con una playa. Eso era La Bombilla que yo vi, con el espacio ocupado por un barrio que más parecía un campo de refugiados, donde se agrupaba sin orden un enorme número de chabolas junto a algunos pocos edificios sólidos y decentes.

La Dirección General de Costas había comenzado las operaciones para echar de allí a los vecinos, tramitando los tradicionales expedientes de recuperación posesoria. Había en marcha un proyecto para reordenar la zona, lo que a

primera vista no me parecía mala idea, porque lo menos que podía decirse era que el área necesitaba un repaso. Precisamente ése era el motivo de mi viaje. El llamado proyecto de acondicionamiento medioambiental era la fuente de todos los males de aquellos vecinos.

Esto, por lo demás, es algo muy común. La Administración no suele reaccionar después de la aprobación de un deslinde. Las viviendas existentes en la zona recalificada como dominio público suelen permanecer indiferentes, lo mismo que sus propietarios y los propios funcionarios públicos. Los edificios no se derriban, pero tampoco se les otorga la preceptiva concesión. Simplemente no sucede nada. Conozco casos de viviendas carentes por completo de título que desde hace cincuenta años se mantienen en pie, en plena arena, a vista y paciencia de la Administración, por motivos que para mí permanecen ocultos por el misterio.

Pero todo cambia cuando hay de por medio un proyecto, sea una regeneración de playas, un paseo marítimo o un “acondicionamiento medioambiental integral”, como sucedía en la Bombilla. Lamentablemente, en mi reciente visita a Madrid apenas había tenido tiempo para estudiar el proyecto. Solamente pude ojearlo un poco bajo la atenta mirada del jefe de servicio, sin encontrar los errores que iba buscando.

Pero al día siguiente de mi aterrizaje, en el Ayuntamiento de Tazacorte, me senté frente a una antigua mesa de madera y me quedé sólo con el mamotreto inmanejable en din A3, repleto de documentos y planos. El desafío, como

siempre, encontrar un error invalidante. Cualquiera podía examinarlo y de hecho la asociación había tenido otros abogados y abogadas, pero no habían visto nada. Era como si los errores estuvieran escritos en un lenguaje secreto que sólo yo conociera.

Era esto, naturalmente, lo que hacía que me llamaran de todas partes de España. Era esa capacidad para detectar las meteduras de pata de los ingenieros de costas lo que me hacía saltar de playa en playa y de isla en isla. De la misma manera que los medium dominan el lenguaje inaudible de los espíritus, yo dominaba el lenguaje invisible de los errores de la Administración. De la misma manera que los médium podían comunicarse con las almas errabundas, yo me podía comunicar con ese lado tonto de los funcionarios que les hacía equivocarse o pasarse de la raya.

No tardé mucho. Estaba allí, claro como el agua. Tan claro que era imposible no verlo. No era un error, era un inmenso error. Tan inmenso que no solamente me iba a permitir impugnar el proyecto medioambiental, sino también los deslindes aprobados en la zona, y con ellos, las recuperaciones posesorias. Ese único error era, como en un cuento de hadas, la llave maravillosa que abría la puerta del castillo encantado, el instrumento mágico con que resolver todos los problemas de los vecinos de la Bombilla.

Cuando me pregunto cómo fue posible aquel despiste, imagino que es debido a la impunidad con la que trabajan los ingenieros de costas. Se relajan porque

nadie controla sus desmanes. Creen que pueden hacer cualquier cosa, por ilegal que sea, y la hacen.

¿Quién pidió una palanca para mover el mundo? Yo había encontrado mi palanca, y a partir de ahí todo debía ser más o menos mecánico.

LA IMPORTANTE INCIDENCIA DEL HOMBRE DE CROMAGNON

Existe un instrumento científico para medir el alcance máximo de la ola en un tramo determinado de costa. Es el llamado estudio de cota de inundación, que permite establecer sobre un plano topográfico la altura máxima a la que llegará el temporal para periodos de retorno muy extensos, como de cincuenta años. Estos datos se extraen de las boyas y mareógrafos, que registran constantemente la altura de la ola en el mar, y su adaptación a cada espacio de costa concreto es un misterio matemático accesible sólo para los ingenieros de caminos, canales y puertos.

Por algún extraño motivo, la Dirección General de Costas nunca usa este instrumento científico en sus expedientes de deslinde. Prefiere acudir a procedimientos de pintoresca tosquedad, como limitarse a determinar el alcance de los temporales por *observación directa*, o hacer fotos de los charcos que han quedado después de un temporal extraordinario. Por supuesto que tampoco se usó un informe de cota de inundación en los deslindes de la Bombilla, donde, además, se echó mano de uno de los argumentos más ridículos que me haya encontrado nunca para justificar un deslinde.

Como se sabe, uno de los problemas graves que está dando la Dirección General de Costas es la aplicación retroactiva de la ley. Ellos dicen que no es así, pero no deberían negar la evidencia. La Bombilla constituye el caso más extremo, patético y extraño de aplicación retroactiva de la ley.

Como he dicho, el paraje no es una playa, sino una superficie de *callaos*. Por tanto, la delimitación interior del dominio público no obedeció a la presencia de materiales sueltos constitutivos de playa, sino al alcance de los temporales. Ahora bien, ni remotamente los temporales alcanzan hasta donde los situó el deslinde, al pie de un gran acantilado que se conserva bien seco, a cien o doscientos metros del agua y a cotas como de doce metros.

Esto puede resultar difícil de creer, pero el informe geomorfológico pretende que el dominio público debe extenderse hasta el pie del acantilado porque éste último es el producto de un modelado costero que tuvo lugar al final de la glaciación Würm, cuando el nivel del mar subió treinta metros. Esto sucedió hace entre doce mil y catorce mil años, poco tiempo después de que unos virtuosos anónimos hicieran las pinturas rupestres de Altamira. Y con esto la Administración nos está diciendo que hoy allí no llega el agua, pero llegó en los tiempos del magdalenense, poco después de aparecer en la Dordoña el hombre de Cromagnon, *ergo* los terrenos son dominio público. Incluso así ellos insisten en que no hacen aplicación retroactiva de la ley.

Después de esto puede que para comprar una vivienda haya que consultar con un arqueólogo experto en paleolítico, o si acaso con un paleontólogo, para

excluir la posibilidad de que en algún periodo interglaciar se haya producido un modelado costero capaz de transformar la zona en dominio público aún hoy. Así es como están las cosas en esta España que no deja de sorprendernos y de sorprender a nuestros conciudadanos europeos con sus gracias y sus chistes.

En cualquier caso, como consecuencia de este singular modo de proceder, la línea de deslinde penetra monstruosa y antinaturalmente en el interior de la tierra firme, donde el agua ni llega ni puede llegar.

COTA +8

Y ahora veamos qué descubrí en el proyecto medioambiental. Se trata de un estudio de cota de inundación. El mismo que no hicieron para tramitar el deslinde porque les habría fastidiado su *hipótesis del mamut*. Ese estudio, que tan ingenuamente la Administración incorporó al proyecto, establece una cota de inundación de 8 metros, es decir, que el mar ni con sus mareas más sofocantes ni con sus temporales más temibles puede alcanzar más allá de esa altura. Esto indica que los deslindes están mal hechos, ya que incorporan terrenos situados en cotas superiores, que por lo tanto no son inundables.

Yo iba buscando un simple motivo, un apoyo, no un rayo desintegrador multiusos que lo mismo sirviera contra los deslindes que contra el proyecto. Pero eso era lo que había encontrado. Podía impugnar los deslindes basándome en un documento que la Abogacía del Estado nunca podría discutir, porque había sido elaborado por la propia Administración, y podía también impugnar

el proyecto, porque el estudio también revelaba que el paseo marítimo incluido en el mismo discurría en parte por cotas inferiores a la +8, lo que significa que estaba trazado sobre terrenos inundables que constituyen por naturaleza ribera del mar. Y la cuestión es que los paseos marítimos están *prohibidos* en la ribera del mar.

Como he adelantado, los tribunales tienen dicho que un deslinde no es constitutivo, sino meramente declarativo del dominio público natural. Esto significa que el dominio público lo es por sus características naturales, y lo es incluso antes de ser declarado como tal por un deslinde. Por lo tanto, las zonas inundables del paseo son ribera del mar simplemente por ser inundables, al margen de que un deslinde lo declare así. Y aquí estaba mi llave para impugnar el proyecto: Contenía determinaciones totalmente ilegales al trazar un paseo marítimo por zona prohibida.

No suelo dejarme llevar por la rutina en el ejercicio de mi profesión. Normalmente, al rastreo de causas de nulidad sigue una estrategia que no se limita a presentar un escrito de alegaciones, sino que significa hacer la guerra con palos, piedras, tirachinas y todo lo que sirva para lanzarlo a la cabeza del contrario, dicho sea en términos metafóricos. En esta ocasión mi artillería consistió en lo siguiente: El proyecto de acondicionamiento medioambiental ya lo tenía impugnado en plazo. Solicité nuevo deslinde para que se declarase el dominio público por la cota +8 y pedí la revisión de los deslindes en vigor, pidiendo su nulidad en cuanto a los terrenos incorporados al dominio público

más allá de la cota +8. Pero como la solución no podía ser la simple permanencia del poblado tal como estaba, también puse en marcha, o lo intenté, una ofensiva política y mediática, intentando complicar al gobierno de Canarias, al Cabildo y al Ayuntamiento en una iniciativa que habría agradado mucho a la Dirección General de Costas, como es la reubicación de los vecinos en un poblado marinerlo lo más cerca posible de la playa, aunque fuera de la servidumbre de protección.

Pero esto no lo conseguí. Antes de volver a coger el avión tuve una entrevista telefónica totalmente decepcionante con el Presidente del Cabildo y ninguna autoridad respondió a la solicitud de audiencia. El pueblo no cuenta. Ellos hacen sus planes, sus proyectos, sus estudios económicos, en los que los ciudadanos son poco más que mercancía. Piensan en el pueblo que hay que quitar de en medio como piensan en los *callaos* que hay que retirar o en la arena que hay que verter en la zona. Lo que cuentan son los números, la macroeconomía, las curvas, las cuentas de resultados, no las personas. Funcionan como los gerentes de una empresa enorme que no se mueve más que por el beneficio.

EL FIN DE LA ISLA BONITA

Para desenvolverse bien en esta vida es preciso distinguir la realidad de las apariencias, sobre todo de las apariencias intencionadamente falsas. En el vasto e interesante campo de la manipulación, el uso del lenguaje resulta de gran

importancia, y aquí los que bautizaron el proyecto se lucieron. Llamar a un proyecto “acondicionamiento medioambiental integral” es bastante mejor que llamarlo “destrucción del paisaje para sustituirlo por otro que sea más turístico”, o bien “alteración del paisaje natural para crear otro artificial”. Y sin embargo así es como se tenía que haber denominado el proyecto en cuestión, porque la iniciativa no tenía nada que ver con el medio ambiente, y sí con una ofensiva turística en la que quizá estuvieran complicados los constructores, los hoteleros y todo ese tipo de personas nacidas con la santa habilidad de hacer grandes negocios en poco tiempo.

No había tal acondicionamiento medioambiental. Lo que había era la intención de cambiarle la faz al paisaje para fabricar una playa artificial sobre la antigua superficie de *callaos*, con una operación traumática que comprendía el machaqueado de los pedruscos y también de las casas existentes en la zona hasta transformarlos en un sucedáneo de la arena. La Isla de la Palma prácticamente carece de playas naturales. Lo reconoce así el propio proyecto. Su economía depende mucho aún del plátano y otras actividades tradicionales, y poco del turismo, y eso se quería cambiar. Además, apenas existen zonas llanas en las que establecer hoteles, edificios de apartamentos y todo ese paquete integrado de ladrillos, cemento y turistas que nos resulta tan familiar. La única parte de la isla un poco llana es la de la Bombilla, justamente por eso el nombre de su municipio, los Llanos de Aridane. Y por eso creo que fue la Bombilla el paraje elegido para destruir el paisaje natural y cambiarlo por una playa

artificial. Nadie pretendía un acondicionamiento medioambiental, eso no es más que una leyenda urbana. Lo que querían era lo contrario, una des acondicionamiento medioambiental para favorecer el turismo y la presión sobre el litoral, es decir, para los fines contrarios a los que inspiraron la ley de costas.

Puede que éste sea un fin adecuado y decente, pero no hay nada de malo en emplear el lenguaje de forma paralelamente adecuada y decente. Creo que es mejor reconocer públicamente que la Palma merece un desarrollo turístico comparable al de otras islas, explicarle a los ciudadanos la realidad de que van a quitar de en medio a los habitantes de la Bombilla para promover la construcción de hoteles y divulgar la idea de que esto redundará finalmente en beneficio de todos. Pero al pueblo parece que es mejor darle esquinazo. Especialmente a los pacientes y pacíficos canarios.

ANGULOS Y RAYITAS

Bajo la Cuesta es un barrio peculiar, situado en el municipio de Candelaria (Tenerife), al pie de un acantilado y sobre una berma litoral. Las viviendas se construyeron en los años setenta, después de que en 1969 un deslinde fijase la línea de la zona marítimo terrestre. Como en muchos otros casos, los propietarios, por si acaso, no se habían atrevido a hacer nada en los terrenos hasta que un deslinde fijó con certeza el límite entre lo privado y lo público.

Una vez la frontera quedó clara, se construyó en los terrenos que habían sido confirmados como privados, más allá del deslinde.

Visité por primera vez el barrio en septiembre de 2006, cuando la Administración acababa de aprobar en la zona una nueva delimitación que no sólo remetía la línea hacia el interior, acaparando prácticamente todo el barrio, sino que además la hacía escalar como cabra montés acantilado arriba.

Recuerdo haber leído ya en el coche que me había recogido en el aeropuerto el exiguo estudio geomorfológico, que hacía la sorprendente afirmación de que la línea de deslinde se había fijado coincidiendo con el alcance de los temporales, lo que quedaba determinado por “observación directa”. Me quedé maravillado ante un deslinde que parecía un mirlo blanco para impugnar, porque si toda la prueba practicada era la observación directa, y si cuarenta y cinco familias tenían que perder sus viviendas únicamente debido a la “observación directa” de un funcionario, el caso parecía chupado. Lo mismo que a nadie se le ocurriría acudir al juzgado a formular una acción reivindicatoria del dominio basada en la observación directa, creía que los tribunales harían trizas un deslinde basado en esa birria de prueba, ya que al fin y al cabo el deslinde y la acción reivindicatoria del dominio tenían el mismo efecto: la pérdida de la propiedad.

Las cosas empezaron a no cuadrarme cuando poco tiempo después, con motivo de un proyecto de paseo marítimo que había hecho el Cabildo para la zona, la Demarcación de Costas informó desfavorablemente, vertiendo improprios

contra los vecinos al decir que no se podían hacer obras públicas que beneficiaran a personas que habían construido ilegalmente sobre lo que es de todos.

Al indagar me enteré de la extraña realidad de que la Demarcación de Costas, al aprobar el deslinde nuevo, creía estar ratificando el antiguo, es decir, que creía que el deslinde de 1969 ya venía escalando el acantilado, y que por lo tanto las viviendas no se habían construido sobre terrenos privados, sino públicos. Esto originaba problemas muy serios, en especial si tenemos en cuenta la severidad de los servidores de la Demarcación de Costas de Tenerife. Básicamente la cuestión es que yo creía que los vecinos podían estar tranquilos incluso a pesar de la aprobación del deslinde, puesto que en el peor de los casos, al tratarse de terrenos comprendidos entre la primitiva y la nueva delimitación de un deslinde, tenían un derecho claro a la concesión administrativa de treinta años prorrogables por otros treinta. Pero como la Administración se empeñaba en que los terrenos siempre habían sido públicos, y se había construido alevosamente dentro de ellos, su visión era muy distinta, y lo que había que tramitar no eran concesiones administrativas, sino recuperaciones posesorias para derribar las viviendas.

¿Cómo se podía haber llegado a este extremo? ¿Cómo es posible que no se pueda saber con exactitud por dónde iba la línea antigua? Para empezar, aquella línea se había señalado con mojones de piedra. Los vecinos los tenían muy vistos, a unos metros delante de sus casas, pero desaparecieron. Por

encima del acantilado discurre la autopista que circunvala la isla, y con motivo de su ampliación se hicieron obras de las que se desprendieron unos escombros que no sólo obligaron a desalojar las viviendas por motivos de seguridad, sino que cubrieron completamente los mojones. Cuando las palas se llevaron los escombros, arrastraron también los mojones, y así se perdió toda huella física del trazado del deslinde.

Eso nos dejaba solamente con el plano. Pero lamentablemente, y de forma algo contradictoria, el plano decía poco. Los deslindes de aquellos años no podían contener las coordenadas geográficas de cada hito, por no existir ni GPS ni las demás excelencias electrónicas de hoy, por lo que la ubicación de cada uno de estos hitos se determinaba por referencia al anterior según dos variables: ángulo y distancia. Esto significa que el error en la determinación de una marca arrastra a las demás. Para evitar estos errores, se establecían determinados puntos fijos e indubitados sobre el terreno, que a menudo coincidían con esquinas de edificaciones existentes. Pero con el tiempo estas edificaciones habían desaparecido, y con ellas los puntos fijos.

Esto es lo que sucedía en Bajo la Cuesta, donde los dos puntos fijos más cercanos (puntos "I" y "J") habían sido arrasados para construir encima una central térmica. Cuando el topógrafo de la Demarcación de Costas estaba dibujando el replanteo de la línea antigua y se encontró con que no podía apoyarse en estos puntos, trató de puentearlos y cometió un error totalmente detectable en el cálculo de un ángulo. El error se fue arrastrando y

magnificando en dirección a las viviendas, de forma tan horrible que al llegar a ellas la línea ya escalaba la montaña en cotas que en algunos casos alcanzaban los 42 metros.

Teniendo en cuenta que además estos puntos se encuentran a más de 20 metros tierra adentro desde la línea de agua, y considerando que el deslinde de 1969 señalaba sólo la zona marítimo terrestre, es decir, el alcance de los temporales, esas cotas tan elevadas necesariamente tendrían que haber indicado la presencia de un tsunami que no solamente no podría haber pasado desapercibido en el resto de la isla, sino que tendría que haberla anegado, causando una gran catástrofe natural de la que sin embargo no ha habido noticia. Es más: la línea de 1969 responde a una definición de zona marítimo terrestre que consiste en el espacio abarcado por los temporales ordinarios, lo que significa que el tsunami no fue ocasional, sino que era cotidiano, es decir, que Candelaria se había anegado y muchos de sus habitantes habían perecido no una sino varias veces.

Esperen, que aún hay más: La ratificación en 2006 de la línea de 1969 significa que después de la ley de costas de 1988 las olas alcanzaron la cota señalada por esa línea, es decir, que los tsunamis se prolongaron hasta épocas recientes.

¿Quieren más? La vecina central térmica está protegida por una escollera de unos cinco metros de altura. La línea de deslinde se colocó por la coronación de esa escollera, lo que significa algo realmente grandioso: No solamente hubo tsunamis invisibles e imperceptibles, sino que de forma milagrosa tuvieron un

efecto selectivo: en el barrio pobre de Bajo la Cuesta, habitado por trabajadores de la clase media que sudan tinta para llegar a fin de mes, lanzó un huracán con olas que alcanzaron cuarenta y dos metros de altura a veinte metros tierra adentro. Pero sólo cien metros más allá, en la central nuclear de UNELCO, propiedad de una de las empresas más poderosas, ricas e influyentes del país, la ola sólo alcanzaba cinco metros al borde del mar. Ante el capitalismo industrial hasta el dios de los mares puede volverse tísico, y sus pulmones, incapaces de algo que no sea un tímido eructo involuntario.

TRURL Y CAPLAUCIO

Todos podemos sufrir un error, especialmente cuando las condiciones técnicas no son favorables, como sucedía en Bajo la Cuesta, al estar ausentes los puntos fijos imprescindibles para el replanteo. No es cosa de criticar estos errores, pero me admiro de la actitud hierática, imperturbable, majestuosa, pero sobre todo robótica, de la Demarcación de Costas de Tenerife, incapaz de reaccionar incluso viendo que la línea dibujada por su topógrafo daba resultados imposibles. Es esto lo que me causa un mar de sensaciones encontradas, que van desde la sorpresa hasta el escándalo, sin olvidar la decepción, y es esto lo que justifica mi forma de apreciar la lógica de los ingenieros de costas como una lógica de escuadra y cartabón. Ellos han hecho sus rayitas y sus ángulos, y como son técnicos, las han hecho bien. Si los resultados son absurdos esto es algo que no pertenece a su mundo. Las cosas del mundo real, de la

racionalidad, de la prudencia, de la ponderación, de la inteligencia, de las personas, todo esto creo que debe parecerles más pesado que el *Ulises* de Joyce.

Todos hemos padecido cáncer muchas veces. Es más o menos rutinario que algunas células se vuelvan idiotas de repente y se transformen en malignas, pero el sistema inmunológico las suprime sin que nos enteremos. De la misma manera, en el seno de la maquinaria social también se cometen errores que no por ello deben provocar ni catástrofes ni consecuencias irreparables, precisamente porque la sensatez, la cordura, los controles, la buena voluntad y toda una serie de filtros propios de la civilización, impiden su crecimiento desmesurado.

El error cometido por la Demarcación de Costas de Tenerife es pequeño, pero su maquinaria administrativa no es un cuerpo sano capaz de detectarlo y eliminarlo. El cáncer por regla general se instala en serio sólo en los tejidos que ya están enfermos y debilitados, y cuyo sistema inmunológico es incapaz de defenderse. La maquinaria administrativa de la Dirección General de Costas no es a mi juicio un tejido sano, sino enfermo, debilitado y corrompido por la arrogancia. Sus representantes con capaces de derribar todo un barrio, dejar a las familias en la calle y proclamar que las olas de cuarenta y dos metros eran pura rutina, sólo para no reconocer que se habían equivocado.

El extraordinario escritor polaco Stanislaw Lem cuenta las hazañas de dos ingenieros llamados Trurl y Caplaucio, que habían construido una especie de computadora definitiva, omnisciente e infalible, además de voluminosa.

Terminado el montaje y la puesta a punto, Caplaucio se dirigió a la computadora y le preguntó cuál era el resultado de sumar uno más uno. La computadora respondió con un claro *tres*. Volvió a preguntar, y la computadora no cambió la respuesta. Insistió, pero la máquina erre que erre. Se enfadó con ella y la golpeó. Como la máquina era además una computadora con patas, salió corriendo y escapó del laboratorio, ofendida. En su estampida se dio un golpe, resbaló por una ladera y le cayeron encima unos pedruscos que la averiaron de gravedad. Caplaucio se acercó a la computadora agonizante y le susurró.

-¿Cuánto es uno más uno?

-Tres -respondió débilmente la computadora.

Y sus circuitos se apagaron definitivamente con un soplo. Así es la Demarcación de Costas de Tenerife, empeñándose hasta el límite en el error, aunque en este caso el que resulte destruido y muerto sea el prójimo.

XI

UNA DEL OESTE

LA PRINCESA Y EL ABOGADO

En Lanzarote hay un hotel llamado Princesa Yaiza, un nombre que sugiere viajes, aventuras, y sobre todo una princesa, claro. Yaiza es también el municipio de Lanzarote a donde volé en septiembre de 2006 para defender un deslinde. Allí me enemisté seriamente con los políticos municipales, y en las noticias y notas de prensa, el Ayuntamiento solía referirse a sí mismo como *Yaiza*: Yaiza se defiende, o Yaiza no tolera. Así es como esta princesa exótica y yo nos hicimos enemigos, con la imprescindible intermediación del alcalde.

Viajé al sur, pero también al oeste. Mi destino era el Golfo, un pueblito de casas blancas, aislado en medio de los inmensos campos de lava estéril, que había sido colonizado al más puro estilo clásico, por viajeros y pescadores que se habían internado en las montañas y habían establecido allí sus reales, al parecer sin encomendarse a Dios ni al diablo, sin permiso ni cuidado, en una

época en la que había poco control y mucha extensión de campo inculto que a nadie pertenecía y que nadie quería.

En algún momento de aquella visita recordé el poblado de Tabernas, en Almería, donde aún se mantienen en pie los polvorientos decorados de madera donde Sergio Leone y unos amigos suyos filmaban sus *spaghetti western* con unos malos muy malos, vinculados a la especulación, al dinero, al ferrocarril y a los negocios turbios, y unos buenos muy buenos, en especial la inocente población que soportaba los abusos de los primeros.

La aventura que me tocó vivir en Yaiza fue una aventura de este estilo, una historia del Oeste con celos e intrigas como los del spaghetti western. Fue también una aventura un poco contradictoria, porque con el tiempo, al abrirme paso entre la maraña de titulares de prensa, declaraciones de los políticos, iniciativas desafortunadas y resistencias numantinas, llegué a la sorprendente conclusión de que el problema que había dado lugar a todo ello simplemente no existía.

EL HECTÓMETRO PERVERSO

Muchos pueblos en España tienen el mismo problema que tenía el Golfo. La servidumbre de protección es una franja de cien metros a continuación de la ribera del mar, donde no se puede construir ni ampliar lo construido y donde si quieres hacer una obra de mantenimiento, primero has de dejar que te coma la burocracia, porque necesitas un permiso especial.

Esta zona puede tener veinte metros en lugar de cien a condición de que con anterioridad a la entrada en vigor de la ley ya tuviera la calificación de suelo urbano, es decir, que en esos ochenta metros sobrantes se tuviera consolidado el derecho a construir sin más restricciones que las derivadas del planeamiento. En la práctica habitual, la Dirección General de Costas pregunta a la autoridad urbanística qué calificación tenían los terrenos a la entrada en vigor de la ley. Si fuese de suelo urbano, la servidumbre se fija en veinte metros. En caso contrario se aplica la extensión ordinaria.

Esta era la parte más importante del problema del Golfo, que también tenía unas cuantas viviendas dentro del dominio público recién aprobado. A principios de septiembre de 2006 me telefoneó Almudena Martín, una mujer joven y disconforme con la perspectiva de soportar toda una vida la lata de la servidumbre de protección. Junto a ella estaba Hildebrando, un topógrafo un poco taciturno con la vivienda comida de pronto por el dominio público. Ambos habían asumido la tarea de movilizar a todo el pueblo en la defensa común.

Recibí por correo electrónico fotografías de la zona y al verlas entendí que los ingenieros de costas se hubieran apropiado de él, porque era un núcleo tradicional de gente trabajadora. Un ramillete de casitas blancas, cuadrangulares, en el borde de una playa de arenas negras y en medio de un desierto rojo. Ni hoteles de lujo, ni chalés pareados, ni urbanizaciones de vanguardia: sólo viviendas humildes de gentes pegadas al suelo, de las que en

principio sólo cabe esperar resignación. Creo que nadie podía sospechar la reacción que iba a tener el pueblo del Golfo bajo la dirección de Almudena e Hildebrando.

YAIZA EN LA INOPIA (Y EL GOBIERNO DE CANARIAS TAMBIÉN)

Primeramente decidí un rápido viaje a Madrid, al objeto de examinar el expediente en la Dirección General de Costas y valorar las posibilidades de defensa. Desafortunadamente el procedimiento no estaba completo, aunque pude enterarme de varias cosas interesantes: Tanto el Ayuntamiento como el Gobierno de Canarias debían haber estado ocupadísimos con otros menesteres, porque ninguno de ellos había emitido el informe *preceptivo* que les había sido reclamado por la Demarcación de Costas en enero de 1994 (Sí, 1994. La tramitación del expediente había durado doce largos años, lo que, aunque parezca escandaloso, más o menos se corresponde con la media). Como he adelantado, se pidió también al Gobierno de Canarias el acostumbrado informe sobre el régimen urbanístico de los terrenos anterior a la entrada en vigor de la ley de costas. La respuesta: según el Plan de Ordenación de 1973, el área del Golfo era suelo urbano. De conformidad con ello, la servidumbre de protección quedó fijada en veinte metros. Pero Costas pidió aclaraciones sobre uno de los planos recibidos, y entonces el Gobierno de Canarias reconoció que su primer informe había sido un error y acompañó otro de dos páginas en el que,

contradiciendo el anterior, dejaba constancia de que el Golfo nunca había tenido la calificación de suelo urbano, sino de reserva urbana. Consiguientemente, la servidumbre de protección se fijó definitivamente en cien metros.

Para cambiar las cosas yo no podía sacar nada más del planeamiento urbanístico (o eso creía entonces, porque en realidad podía sacarse *todo*, como veremos). Pero hay otra forma de demostrar que los terrenos eran urbanos. Dentro del caos general de la edificación en España, por todas partes encontramos núcleos de población, incluso con servicios urbanísticos, que sin embargo no han recibido en los planes la calificación de urbanos. Para estos casos el reglamento de costas admite que tal carácter se acredite mediante una declaración de la autoridad urbanística, y eso era lo que había que conseguir. Pero a la autoridad urbanística había que proporcionarle pruebas.

Según la ley, los terrenos pueden ser urbanos (al margen de los planes) bien porque constituyan un núcleo de población o bien porque cuenten con los servicios urbanísticos (suministro de agua y energía eléctrica y evacuación de aguas residuales). Los vecinos ya me habían adelantado que en 1988 al Golfo le faltaba alguno de esos servicios, por lo que ni me molesté en investigar más y me concentré en su carácter de núcleo de población. El procedimiento era sencillo: En la actualidad el Golfo está recogido en el plan como suelo urbano. Tomemos una fotografía aérea anterior a la ley de costas y otra posterior para demostrar que en ambas el pueblo tenía el mismo aspecto, es decir, que ya constituía un núcleo de población desde antes de la ley.

Fue fácil y rápido. Hildebrando me mandó las fotos e hice la comprobación. Enseguida tenía en mi ordenador la evidencia de que todas las Administraciones implicadas habían cometido errores: La Dirección General de Costas, por aprobar el deslinde con esa indolencia funcionarial de quien conoce la realidad pero está dispuesto a ignorarla excepto que alguien le traiga un documento para demostrársela. El Ayuntamiento de Yaiza y el Gobierno de Canarias por olvidarse de que debían aportar al expediente informes preceptivos, pero sobre todo por dejar pasar la solución del problema de la servidumbre de protección, que tenían a su alcance mediante la emisión de una declaración simplísima, de sólo media página, que dejase constancia de que el Golfo ya era un núcleo consolidado por la edificación, y por tanto suelo urbano de hecho, antes de la entrada en vigor de la ley de costas.

LA MORENA Y EL CREPÚSCULO

Cuando el día 19 de septiembre bajé del avión en el aeropuerto de Arrecife, ya tenía casi todas las claves del asunto, pero no sabía que el Golfo estaba en el ojo de huracán. Incluso antes de subir al coche, Almudena e Hildebrando me plantaron un titular chillón de primera plana que decía que Costas iba a derribar todo el poblado. Nada que ver con la realidad, pero en cualquier caso era el detonante de un despliegue mediático como no he conocido en ninguno de los muchos deslindes en los que he intervenido.

Cuando entré en el Golfo me di cuenta de su singularidad: Una playa con un poco de arena y bastantes pedruscos (callaos volcánicos), un racimo de las casas blancas que había visto en la foto y entre una y otras una cinta de terrazas al servicio de los restaurantes de la playa. Todo dentro de la normalidad, de no ser porque el Golfo está totalmente orientado al poniente y porque los turistas llegan aquí para cenar con la puesta de sol, aunque sea a media tarde. Se sientan en las terrazas, piden morena frita y lapas a la lancha y se dejan llevar por las sensaciones. De forma tan paradójica como desacostumbrada, una vez cae la noche los restaurantes cierran. Nadie viene aquí para cenar, en el sentido común del término.

Un lugar como éste, donde los horarios de la cena no los dicta el estómago, sino el crepúsculo, es distinto del resto del mundo. Alivia saber que alguien hace algo diferente, mantiene un carácter propio y se muestra ajeno a las pautas de comportamiento uniformes. Lo que tenía ante mí era algo más que unas cuantas casas de estampa modesta. Era un valor, el valor de lo peculiar y único, el valor de ser distinto. Un valor, si cabe la redundancia, nada valorado, porque aún estamos en trance de advertir los inconvenientes de la aldea global, el pensamiento único y demás basura contemporánea.

Qué mala pata que una de las consecuencias del deslinde fue que la Demarcación de Costas de las Palmas ordenase el levantamiento de todas esas terrazas que constituyen el alma del Golfo, porque aunque sirviesen a la contemplación del crepúsculo, al mismo tiempo obstaculizaban la servidumbre

de tránsito. No importa que la servidumbre estuviera también obstaculizada por edificios y que por tanto despejar la zona de mesas y sillas fuera inútil. Ellos querían quitar de en medio las terrazas y nada más aprobarse el deslinde abrieron un expediente sancionador por cada restaurante, algo que no he visto hacer nunca y que los vecinos creen que guarda relación con el sinnúmero de titulares de prensa a que dio lugar el deslinde y el mal talante que se les puso a los ingenieros de costas.

En todo caso, ni siquiera creo que éstos últimos supieran que con esto estaban asesinando esa realidad invisible que es el espíritu del pueblo. Ellos no entendían nada de esas cosas.

GLOBALIZANDO

El Ayuntamiento de Yaiza, al que pertenece el pueblito, había encargado a un arquitecto holandés un proyecto que diera “impulso” al Golfo. El arquitecto recetaba piscinas naturales (que son artificiales), acuataxi (que debe ser un taxi marítimo casi seguro), y la transformación de esa calle central donde se encuentran lo que podríamos llamar los restaurantes del crepúsculo en un bulvar bordeado de tiendas de artesanía. Todo sería muy lindo, pero ya no sería igual. Pienso, por ejemplo, en una localidad hiperturística como Denia, a donde acuden todo tipo de gentes de interior, ansiosos no sólo de encontrarse con el mar, sino también de probar algo del pescado fresco local. Pero el progreso que somos capaces de crear lo vuelve todo artificioso y en la mayoría

de los restaurantes de Denia el pescado es congelado y no se sabe de dónde viene. He trabajado para su cofradía de pescadores y lo sé bien. Quizá el artificio propuesto por el Ayuntamiento de Yaiza fuera también el fin de lo auténtico.

En el curso de mi visita pude ver el proyecto del arquitecto en cuestión. Me llamó la atención que en una de las vistas en 3D de las piscinas naturales-artificiales, el diseñador había añadido un globo aerostático flotando en la lejanía. Un adorno, me dijeron, pero francamente parecía un sello, el sello de la casa. Quizá el globo como símbolo de la globalización, es decir, uniformidad, artificio, y por encima de todo, negocio. Todo menos dejar en paz a la gente del Golfo.

Habrá que ver qué dicen los vecinos cuando el Ayuntamiento les comunique que, por decreto de un señor holandés, a partir de ahora tendrán que vender alpargatas y botijos en los márgenes del nuevo bulvar. A lo mejor no quieren. Puede que sólo les interese entregarse a esa actividad tan poco acorde con el progreso y los negocios como es sentarse a mirar el mar, y si acaso rascarse de la barriga con descuido.

Por el momento yo conseguí una foto fija de aquel remoto paraje, familiar, quieto y afable, y de paso probé por primera vez la morena frita. Mientras rodaba mi serie de televisión Senderos en la mar, sobre la pesca de bajura en la Comunidad Valenciana, tuve ocasión de conocer lo que sucede a las morenas que muerden los anzuelos del palangre: los pescadores las devuelven al mar

después de muertas porque en la lonja no se pagan bien. La morena presenta un aspecto poco tranquilizador, pero en la mar, no en el plato. Por lo demás, tiene espinas. Pero en el Golfo son un plato muy apreciado, quizá porque el pueblo aún tiene mucho de salvaje oeste, la gente no es tan pija, todavía no ha llegado el engañoso progreso de los acuataxis con sus acuataxistas y el Ayuntamiento aún no ha obligado a los paisanos a ponerse a vender figuritas de arcilla con forma de camello.

INVESTIGANDO

El edificio de planta baja que hacía las veces de oficina en la isla de la Demarcación de Costas de Las Palmas necesitaba una pareja de pintores, un cerrajero, un fontanero y un carpintero. Queríamos ver el expediente, y estábamos en un ay, porque este trámite siempre es incierto. A veces los funcionarios te dejan, a veces no. Depende del momento, del talante, de la persona. En este caso hubo suerte y me permitieron sumergirme en la parte del procedimiento que no había podido examinar en Madrid. De todos modos, allí tampoco estaba todo. Alguien parecía haber fragmentado el procedimiento y archivado cada parte en una oficina distinta, como nos cuenta Plutarco que se hizo con los huesos del asesinado Osiris.

Leí un escrito de alegaciones que parece que fue facilitado a los vecinos por el Ayuntamiento. Decía que los terrenos eran suelo urbano consolidado, o algo parecido, antes de la ley de costas. Me interesó, y me servía, pero no dejaba de

chocarme que el Ayuntamiento se limitase a esa lacónica referencia, sin acompañarla de una prueba como es el certificado emitido por el propio Ayuntamiento que, no solamente le era especialmente fácil de aportar, sino que además debía haber sido definitivo en orden a conseguir que la servidumbre de protección bajase a veinte metros. Me daba la sensación de que el Ayuntamiento había tratado de ayudar a los vecinos, pero tan flojito que ni se notaba. Y me espantó comprobar lo simple que era todo en realidad. Fue como si te preparas durante meses para asaltar una fortaleza, procurándote todo tipo de medios, y cuando te dispones a ello te encuentras con que se han dejado la llave olvidada en la cerradura, y sólo tienes que girarla y abrir. Así era, o me lo parecía, el problema de la servidumbre de protección en el Golfo. Demasiado fácil. Demasiado tonto.

En esas estábamos cuando una llamada de teléfono inauguró el circo mediático en el que instantáneamente me vi envuelto. Laura Ramírez, periodista de Crónicas de Lanzarote, un diario modesto al que debo mucho porque en el transcurso de aquella aventura me ayudó a conseguir cosas que no había podido conseguir de otro modo. O más bien se lo debo a Laura.

Me preguntó por el deslinde y le dije lo que pensaba, básicamente que estaba flipando con el despiste que tan armónicamente compartían Gobierno de Canarias y Ayuntamiento. Añadí que estaba perplejo y que había volado a la isla para resolver un problema que nunca debía haber existido. Creo que fueron

estas declaraciones las que me granjearon la enemistad del alcalde, cosa que me parece razonable.

También visité las oficinas del Cabildo Insular para consultar el Plan de Ordenación Urbana de 1973. Como he explicado, en el expediente de deslinde había un informe que decía que según ese plan los terrenos del Golfo eran suelo urbano, pero un informe posterior desmentía el primero, tachándolo de erróneo y dejando constancia de que el Golfo era suelo de reserva urbana. Pero a mí me había llamado la atención el desliz de la Administración, y quería asegurarme por mi mismo, así que debía estudiar el PGU y sacar mis propias conclusiones.

Me chocó leer algo así como que la zona ya era un núcleo de población que sin embargo no se declaraba urbano para evitar su crecimiento desordenado. Aquel mensaje quedó dentro de mí y fue madurando como una semilla hasta que en la primavera siguiente le llegó el turno de germinar, con unos resultados sorprendentes.

RAMILLETES DE MENTIRAS

Inés Rojas, la entonces presidenta del Cabildo Insular de Lanzarote, era una mujer alta, elegante y bien plantada. Se expresaba con una gravedad seria y un tono confidente que hacía pensar que estabas en buenas manos.

Quiso mostrar que estaba perfectamente al tanto de la situación y comenzó la reunión desplegando un discurso que me pilló desprevenido. Comentó que se había entrevistado con el Consejero de Política Territorial del Gobierno canario,

Domingo Berriel, quien a su vez se había entrevistado con el Director General de Costas. El Sr. Berriel le pedía que trasladase a los vecinos un mensaje de tranquilidad, puesto que, según las conclusiones de su entrevista con el Director General, las viviendas del Golfo no se iban a derribar. Añadió, haciendo algo de historia, o intentándolo, que Berriel le había trasladado la siguiente novela rosa: Que cuando Costas pidió informe sobre el régimen urbanístico de los terrenos antes de la entrada en vigor de la ley de costas, el Gobierno de Canarias informó que según el plan era suelo urbano. Sin embargo, Costas insistió, y entonces se tuvo que reconocer que no, que no era suelo urbano, sino de reserva urbana, y por eso la servidumbre de protección se había fijado en cien metros, y no en veinte. Yo alucinaba. Tal como Inés lo contaba, el Gobierno de Canarias, en un arranque de complicidad con los vecinos que no venía a cuento, había estado tratando de engañar a la Administración del Estado, mintiendo sobre el régimen de los terrenos e incluso incurriendo en delito de falsedad al informar por escrito, pero como en Madrid no se dejaban engañar, habían insistido y el Gobierno de Canarias no había tenido más remedio que cantar la Traviata. Es decir, que sin mediar requerimiento, sin una súplica llorosa de los vecinos, sin una manifestación a la puerta con muchas pancartas, sin estímulo alguno, el Consejero de Política Territorial había decidido jugarse su honor, su cargo y su libertad mintiendo a Madrid a lo burro. Y esto no sólo no era cierto, sino que tampoco era verosímil. Lo sucedido fue mucho más pueril, y yo lo sabía: Como he explicado, simplemente el Gobierno de Canarias cometió un error en su

primer informe, que fue subsanado con otro posterior. Y de ese error por lo que se ve el Consejero Berriel pretendía sacar una novela bizantina de heroísmo, desvelo, renuncia y sacrificio en pro de unos vecinos a quienes ni siquiera conocía. La improvisación me sorprendió, la torpeza me maravilló y la mentira me escandalizó. Mi conclusión: todo el mundo cree que a los canarios se les toma el pelo con más facilidad que el resto. En todas partes los políticos son como son, pero no me imaginaba una escena así en la península.

No dije nada. Continué escuchando con cara de bueno. La Presidenta continuó explicando que en todo caso podría ser que las viviendas que se encontraban en el dominio público quedasen sometidas a ciertas restricciones, como pedir autorización para las obras de reforma, pero las emplazadas en la servidumbre de protección no tendrían ningún problema. También comentó que se estaba tratando de conseguir que la competencia para la delimitación de la servidumbre de protección fuera del Gobierno de Canarias. Y que había hablado con la Dirección General de Costas, donde una vez más habían asegurado que no se iba a derribar nada. La dejé hablar, pero entretanto iba quedándome poco a poco más alucinado, porque nada de lo que decía era cierto. Estaba hablando con gran autoridad, pero realmente no tenía ni idea. Se mostraba preocupada y seria, y a mí se me ocurrió pensar en el efecto que producirían sus palabras en los simples ciudadanos sin conocimientos del tema. Seguramente la creerían a pie juntillas y se volverían a casa con el alivio fantasmagórico de los engañados. Seguramente esparcirían por su barrio

aquellos mensajes sedantes que no eran más que viento, y se sentirían timadísimos cuando llegase la hora de la verdad.

Cuando concluyó, le dije lo que pensaba. Añadí, con cortesía, que suponía que el Sr. Consejero de Política Territorial le había informado mal, o que alguna parte del mensaje se había corrompido espontáneamente, como un yogur fuera del frigorífico. Pero yo en realidad suponía que el Consejero estaba intentando hacer llegar un mensaje de tranquilidad totalmente ficticio, sin ninguna base, sólo porque la agitación y el desasosiego de los ciudadanos es veneno para los políticos, y más en un periodo preelectoral, como era aquél.

Nada era cierto, le dije. Los efectos del deslinde están previstos en la ley de costas, y normalmente son la demolición de las ocupaciones incompatibles con el dominio público. Por tanto, ni el Consejero, ni el Director General de Costas ni la Ministra, ni el Rey ni nadie, estaba en condiciones de mandar ningún mensaje de tranquilidad, y menos de garantizar que las viviendas que habían pasado al dominio público no se iban a derribar. Lllaman la atención los extraños resortes mentales de muchos responsables administrativos, que se conducen como si el país fuera de su propiedad, a la manera de esos antiguos hacendados, dueños no sólo de la tierra, sino también de sus súbditos. Como si no fuera cierto que lo que administran pertenece a todos. Como si no fuera claro que a la vuelta de unos años, unas nuevas elecciones podrían apearlos del cargo. Como si no fuera algo cotidiano que los nuevos responsables no quieren

-y tampoco deben- ni oír hablar de los compromisos verbales a que hayan podido llegar sus antecesores.

En resumen: no era fiable el mensaje de tranquilidad. No era cierto que las viviendas que habían quedado en dominio público únicamente se vieran afectadas por la obligación de solicitar autorización para hacer reformas, porque este régimen corresponde a las viviendas en servidumbre de protección. Y no era cierto que las viviendas situadas en servidumbre de protección no fueran a tener ningún problema, porque son éstas las que no pueden reformarse sin autorización, no pueden ampliarse de ninguna manera y porque los propietarios de solares sin construir ya no podrían hacer en ellos nada sino cultivar una o dos hileras de cebollas.

A continuación expuse mi fórmula para resolver el problema, a base de la ya famosa certificación de que los terrenos eran urbanos antes de la entrada en vigor de la ley de costas, y le entregué un modelo para el Consejero, apenas media cuartilla. Hildebrando le mostró también las dos ortofotografías que evidenciaban cómo antes y después de 1988 el Golfo era igual, el mismo núcleo urbano. Ella ni pestañeó cuando yo le decía que todo lo que nos acababa de trasladar era un cuento, y en cuanto a la propuesta, la entendió bien. No era de esas personas con las que también he tenido que bregar, a las que el cerebro apenas se les mueve. Nos dijo, además, que iba a llamar al Consejero para trasladarle todo lo hablado y en especial para ponerlo en contacto conmigo. A

pesar del equívoco comienzo de la entrevista, Inés Rojas pareció muy atenta todo el tiempo y con ganas de ayudar.

BAÑO MEDIÁTICO

Decidimos dar una rueda de prensa, porque todo el mundo estaba opinando sobre el deslinde en los medios de comunicación, y causando una gran confusión. Por una parte, se anunciaba el derribo de toda la población, lo que era absurdo (aunque vendía periódicos). Por otra, llegaban continuos mensajes a la calma de parte de los políticos, como el Consejero del Cabildo, Carlos Espino, que hizo un viaje relámpago a Madrid para una enésima entrevista con el Director General de Costas, y nada más salir del despacho llamó por teléfono a los medios de comunicación para transmitir el consabido, vacío y artificioso mensaje de calma. Calma, mucha calma, era la consigna que repetían todos los políticos aquellos días. También había quien daba el asunto por perdido de antemano, como el Senador Marcos González, y en consecuencia dejaban pública constancia de sus intentos de buscar una solución *política*. Todo esto me abrumaba, porque cada uno de estos políticos daba por hecho que el deslinde era inatacable, que Costas tenía razón, y que la orden ministerial aprobatoria era una especie de mala suerte intangible que les había tocado a los vecinos del Golfo, lo mismo que antes, cuando moría alguien por causas desconocidas, se decía que le había dado un mal aire. Eso era por lo visto lo que opinaban del deslinde el senador, los consejeros y todo el mundo, que era un mal aire, una

fatalidad, como al que le cae encima una maceta. Y a todo esto, esa opinión no se había formado después de estudiar el expediente. Simplemente se había formado. Porque la realidad era que nadie, o casi nadie, lo había leído y por tanto todo el mundo opinaba en función de lo que había oído opinar a otro que tampoco sabía nada, y daba por muertos a los vecinos por puro gusto. En resumen, que aunque todo el mundo estaba *in albis*, nadie paraba de cacarear.

Yo estaba allí, asombrado en medio de aquel espectáculo multicolor, viendo cómo unos dictaban actas de defunción y otros trataban de sacudir al enfermo para ver si aún respiraba. Y sentí que no eran sólo los vecinos del Golfo quienes necesitaban una explicación de lo que pasaba y lo que no pasaba, sino también el conjunto de la sociedad de Lanzarote, a la que se estaba mareando con tanta noticia contradictoria.

Dije a los periodistas que solamente eran dieciocho las viviendas afectadas por un posible derribo, que en la servidumbre de protección sólo había restricciones para construir edificios nuevos, que había un procedimiento simple y rápido para hacer que ésta última se fijara en veinte metros, y no en cien, liberando así docenas de viviendas de toda afección, que no entendía el motivo por el que ni Gobierno canario ni Ayuntamiento habían puesto en marcha ese procedimiento y que el deslinde, en cuanto fijación de la ribera del mar, estaba mal hecho, era arbitrario y no aparecía justificado. Con esto esperaba atajar a los espontáneos que se lanzaban al ruedo para decir lo que fuera, porque al parecer lo importante era *decir*.

Imagino que estas declaraciones de un peninsular sabihondo hicieron que les cayera gordo a todos y cada uno de los gallos del gallinero. Entonces no lo sabía, pero por lo visto los que se consideraban más ofendidos ya estaban empezando a tomar medidas contra mí. En la soledad de ciertos despachos se dieron ciertas consignas y se impartieron ciertas instrucciones. Podría parecer tenebroso si los intrigantes no se hubieran limitado a dejar pública constancia de su incapacidad firmando un auténtico guión de Chaplin.

DOMINGO BERRIEL

Visité el Ayuntamiento de Yaiza, hablé con el concejal del ramo y con el técnico municipal, les mostré la pareja de ortofotos, les instruí en lo que habían de hacer y les encargué una declaración escrita de que los terrenos eran ya núcleo de población antes de la entrada en vigor de la ley de costas.

Y como todo estaba tan convulsionado, el mismísimo Consejero decidió cogerse un barco y venir a verme a Arrecife. Con prisas, según me pareció entender, porque Inés, al presentarlo, añadió como un mérito singular que acababa de comerse un bocadillo en su despacho.

De nuevo en el salón de reuniones del Cabildo, el Sr. Berriel, licenciado en derecho como yo, inició un discurso sobre su enfoque de la ley de costas, y comenzó a especular con un futuro rosado, afirmando que en el nuevo estatuto de autonomía de Canarias, que había sido aprobado por el Parlamento Canario e iba a ser remitido al de Madrid, se había introducido una norma según la cuál

las competencias de gestión del dominio público marítimo terrestre corresponderán al gobierno de Canarias, y no al Estado, como hasta ahora. Dijo que creía que “esto es posible que salga, y si sale los problemas se resolverán aquí, y no en Madrid”. También nos informó de que le había trasladado al Director General de Costas que la competencia para la delimitación de la servidumbre de protección debía ser de las Comunidades Autónomas, puesto que también lo es la gestión de dicha servidumbre. Añadió unas cuantas perlas cultivadas de este estilo mientras yo me quedaba como clavado en la silla al contemplar aquella situación algo patética, y al comprender que los políticos canarios parecen acostumbrados a enfocar este tipo de reuniones anulando la voluntad de lucha del enemigo con una ristra de verdades imaginarias que suenan estupendamente, pero que no son más que verdades imaginarias. Malo si el político que las larga sabe que lo son (por borde), y malo también si lo ignora (por tonto). El caso es que, como antes había pasado con Inés, Berriel no tenía razón en nada. No fui tan lejos como para decírselo, pero le advertí de que no iba a ser posible quitarle al Estado las competencias para fijar la extensión de la servidumbre de protección, puesto que éstas vienen claramente señaladas en la ley de costas, cuando regula los deslindes. La ley ya pasó por el filtro del Tribunal Constitucional, que declaró contrarias a la Constitución las competencias que primitivamente se habían adjudicado al Estado en materia de servidumbre de protección, por ser una materia relativa a ordenación del territorio, cuya competencia es de las Comunidades Autónomas. Pero esa

misma sentencia no dijo en cambio nada sobre las competencias para fijar la servidumbre, por lo que no parecía ni razonable, ni probable ni constitucional volver sobre la cuestión. Ingenuidad a raudales. O quizá simple escenografía. Por lo demás, le entregamos también al Sr. Berriel el modelo de certificado con las ortofotografías de rigor, y le pedimos que nos redactara un documento indicando que el suelo ya era urbano antes de 1988. Yo no quería ni necesitaba discursos, y menos vacíos. Lo que quería era un certificado. Sólo eso. Y en aquel entonces no tenía ni idea de la guerra que iba a dar el asunto.

VECINOS VERSUS ALCALDE

El día 27 de septiembre, el mismo que yo regresaba a la península, los vecinos tenían una cita con su alcalde que resultó un fiasco y casi concluyó en tumulto. Por lo visto se soliviantaron porque desde la tribuna se especulaba sobre si había o no había que formular un recurso de reposición. De nuevo la misma situación, me parece. Los de arriba manejando un discurso que presupone que la gente es corta, porque el plazo para el recurso ya había concluido y toda discusión sobre el tema estaba de sobra. Por lo demás, el recurso estaba presentado. Me había preocupado de redactarlo con muchísima urgencia, en los últimos compases del plazo. Hubo de todo, aplausos para Almudena cuando le contó todo esto a los que presidían el acto, excesiva tensión en la tribuna y cierta incontinencia verbal del alcalde, con un fin de fiesta de reproches al Ayuntamiento. Los vecinos le recriminaban, entre otras cosas, haber tardado

tanto tiempo en organizar aquel acto, más de un mes después de recibirse las notificaciones. Desde la tribuna a alguien se le ocurrió justificarse diciendo que el pueblo de Yaiza tenía problemas más importantes que el deslinde del Golfo. Al oír esto, la gran mayoría de los presentes se puso en pie y abandonó la sala.

ACOSO SIN DERRIBO

El alcalde y su equipo habían acabado completamente corridos. Ellos ofrecían a los vecinos los servicios de un abogado con carácter gratuito y pensaban que la oferta sería irresistible. No entendían que la gente prefiriese pagar cuando podían disponer de defensor sin desembolsar un sólo euro. Y debió parecerle muy humillante todo esto si hemos de juzgar por la decisión que tomó en esos días, bien el propio alcalde o bien algún asesor despabilado: Nada menos que investigar a aquel abogado que, aunque fuera de modo involuntario, lo había dejado medio tocado. Y como lo único que tenían a disposición era mi página web, algunos funcionarios públicos, pagados por los contribuyentes, fueron transitoriamente destinados a estudiarla para ver si allí encontraban algo que echarse a la boca, es decir, algo que reprocharme, algo de lo que yo tuviera que avergonzarme o algo que pudiera interpretarse, o al menos venderse, como una contradicción. Aunque esta iniciativa proporciona a mi historia un lejano sabor de melodrama cinematográfico, nada más profundizar, ese sabor resulta más parecido a una comedia bufa.

Empezaron a llegarme rumores. Yo había publicado en prensa un artículo llamado *El Golfo: sociedad versus políticos*, en el que hacía una semblanza de cómo los ciudadanos le habían pasado por encima a sus políticos como una apisonadora. El artículo se publicó en papel, pero también en la edición digital, donde un ciudadano anónimo dejó un comentario en el que me advertía que el Ayuntamiento estaba tratando de desprestigiarme. También me comentó algo parecido Hildebrando. La noticia, o más bien el rumor, me sorprendió, pero sólo por mi poco conocimiento de los modos y procedimientos habituales en la isla, como después me comentarían varios periodistas. De hecho, el archipiélago me había sorprendido por sus increíbles niveles de corrupción política. El periódico parecía más bien el tablón de anuncios de un juzgado: las noticias e informes sobre comisiones ilegales, sobornos, dimisiones forzadas, transfugismo sospechoso, políticos ante los tribunales, y demás, eran continuas.

El caso es que llamé a algunos periodistas con los que había trabado una buena relación y me enteré de cuál era la intriga que *Yaiza* había tramado contra mí: Remitir a todos los medios de comunicación de la isla una nota de prensa en la que se ponía en duda mi honestidad. Conseguí una copia, y fue entonces cuando me di cuenta de a quién me estaba enfrentando: no a un equipo de sesudos asesores apiñados en torno a su jefe, no a una organización malvada además de mafiosa, no ante una camarilla adecuadamente vengativa, sino ante un colectivo con ajustadísimo coeficiente intelectual a la baja. Sólo de esa manera pueden entenderse los hechos.

La nota de prensa se metía conmigo a cuenta de que en mi página web advierto que es inútil pretender liberar las propiedades de la calificación de dominio público bajo pretexto de que el suelo está calificado como urbano. Es completamente inútil venir con argumentos de este tipo, que los tribunales han rechazado cientos de veces, y creo que es un valioso servicio el que hago advirtiéndolo. Pero las eminencias grises del Ayuntamiento, cogiendo el rábano por las hojas, entendieron, vaya usted a saber por qué, que ese punto de vista contradecía mis propuestas para reducir a veinte metros la servidumbre de protección, que, como se sabe, pasa por el certificado acreditativo de que el área era suelo urbano antes de julio de 1988. Una cosa y la otra nada tienen que ver, cualquiera lo entiende. Pero se ve que la perplejidad y confusión mental que el alcalde y los suyos sufrieron la tarde del 27 se prolongó por unos días, como una gripe insidiosa. Así que no hice nada al respecto, excepto publicar un nuevo artículo en *Crónicas de Lanzarote* titulado *Don Nicolás Maquiavelo en el Golfo*, en el que ponía a los conspiradores a caer de un burro y me regodeaba recordándoles que a mí no podían ni influirme, ni asustarme, ni coartarme, porque yo no era un abogado de la isla y por lo tanto carecía de compromisos, intereses, pactos, clientelismos y obediencias debidas. Tenía total libertad para defender a mis clientes como me diera la gana y me daba igual a quién incomodara con ello. Los intrigantes de pacotilla ni replicaron.

EL PAPELITO DE BERRIEL

En el mes de febrero de 2007 Berriel volvió a reunirse con los vecinos para hablarles del famoso certificado. Después de tanta idea de coordinarse conmigo y de tantos mimitos, nunca más pude volver a hablar ni con él ni tampoco con los colaboradores que había puesto para encargarse de nuestro asunto. Pero lo había intentado. Y con preocupación, porque pasaban un mes y otro mes, y me escamaba la tardanza en firmar un certificado de dos o tres párrafos. Fue Inés quien me dio la lamentable noticia de que estaban revolviendo en el Ayuntamiento para localizar antecedentes sobre los servicios urbanísticos, y eso me mató.

Como ya he dicho, yo ya supe desde el primer día que en 1988 el Golfo carecía de los servicios urbanísticos, por lo que ni me cansé en avanzar por ese camino, pero en cambio ya era un núcleo de población, y eso era más que suficiente. Por eso el modelo que le dejé a Berriel aludía únicamente a la preexistencia de núcleo de población. Le puse un fax advirtiéndole que estaba totalmente equivocado y reclamándole una vez más la declaración que le había pedido en septiembre relativa sólo y exclusivamente a la formación de núcleo de población. Nunca respondió.

Yo creo que todos los políticos que mojaban pan en el asunto, tanto del gobierno de Canarias como del Ayuntamiento, estaban celosos y querían ser protagonistas. Supongo que no les hacía gracia que llegase un pistolero de la península a decirles cómo debían conducirse, y a resolver el problema sin

despeinarse, como en los *spaghetti western*. Y tampoco creo que ninguno de ellos se sintiera a gusto haciendo los deberes que yo les había puesto (*nene, hazme este certificado*). Aspiraban a ser ellos los que resolvieran el problema y no un forastero al que no podían controlar y que además no se cortaba al llamarlos burros en público. Y para ello, con su peculiar capacidad de análisis, por lo visto pensaron que el mejor camino era perder el tiempo miserablemente durante cinco meses en busca de unos documentos que nunca les servirían para nada, excepto para hacer el ridículo y demostrar su incompetencia. Y eso es lo que hicieron. Me quedé tieso cuando me llegó una copia de lo que pretendidamente iba a ser el certificado. Tieso perdido, porque era la cosa más boba que había pasado por mis manos en mucho tiempo. Se afirmaba que el Golfo contaba en 1988 con “suministro de agua y con suministro de energía eléctrica por medios propios”. Era para mondar. Esos medios propios no eran otra cosa que cubas y generadores de gasoil, y el documento, con aquella redacción cerril, no solamente no iba a ayudar a los vecinos, sino que iba a hundirlos en la miseria.

Como no tenía comunicación con Berriel, hice varias cosas urgentes. Una fue escribir un artículo en la prensa, para tratar de llegarle. Entre otras cosas preguntaba si tenía que cortarme las venas para conseguir el certificado que había pedido en septiembre. Yo reclamaba un certificado con un contenido concreto y claro y ellos se consideraban con derecho a redactarme un texto que nada tenía que ver con lo pedido y que resultaba más hilarante que *La venganza*

de Don Mendo. La otra fue redactar un nuevo modelo de certificado, éste extenso, motivado, argumentado y justificado, con unos resultandos y considerandos muy convincentes. El motivo era que semanas antes había visitado la Dirección General de Costas para interesarme por mi recurso de reposición, y en el expediente vi un informe negativo que proponía no dar valor alguno al certificado emitido por el Ayuntamiento de Yaiza. El informe exponía como precedente una sentencia de la Audiencia Nacional de 2003 en la que se rechazaba un certificado parecido, censurando que el mismo no se apoyara en informes técnicos y en otros documentos. El informe, por lo demás, también tenía la desvergüenza de afirmar que el certificado municipal no se basaba en documentos probatorios, lo que era rigurosamente incierto, ya que habíamos acompañado las ortofotos y además un plano oficial basado en ellas, pero eso es otra historia. El caso es que yo entendía que la Dirección General de Costas no tomara en serio un papelito emanado del Ayuntamiento de Yaiza, en especial si tenemos en cuenta su errática actitud durante la extensa tramitación del expediente: En primer lugar había desaprovechado su oportunidad de emitir el informe preceptivo que le fue requerido en su momento, y así hacer valer su opinión como autoridad pública. En segundo lugar, y de forma contradictoria, había comparecido para formular alegaciones contra la propuesta de deslinde como cualquier otro afectado, es decir, que se había bajado voluntariamente del pedestal de autoridad pública. En tercer lugar, se había limitado a alegar vagamente que los terrenos eran suelo urbano consolidado, sin acompañar

pruebas ni otros documentos. Si después de esos precedentes el Ayuntamiento emitía el certificado, no parecía muy imparcial. Era como si un particular afectado se redactase a sí mismo un certificado para dejar constancia de que tenía razón.

Así que lo que hacía falta era un documento extenso y fundamentado, para que no nos lo rechazaran. Pero Berriel no hizo el menor caso de mi nuevo borrador. En la reunión que mantuvo con Ayuntamiento y vecinos les mostró lo que había hecho. Era un documento casi tan breve como mi texto del mes de septiembre, y bastante parecido, en el que milagrosamente había desaparecido toda alusión a los servicios urbanísticos inexistentes, no sé si por efecto de mi artículo o por otros motivos que ignoro. Y había también algo realmente crispante. En el encabezamiento se decía que el certificado había sido solicitado por el Ayuntamiento de Yaiza en el mes de diciembre.

Se ve que, pese a pertenecer a partidos distintos, la convivencia en los sótanos donde debieron estar arremangados buscando los legajos, había forjado estrechos lazos de amistad entre el Alcalde y el Consejero. Tan estrechos como para ningunear a los vecinos, ignorando que fueron éstos quienes dieron la idea, quienes tuvieron la iniciativa, quienes impulsaron el proceso, quienes entregaron el borrador y las ortofotografías y quienes solicitaron el certificado, no el Ayuntamiento. Todo lo que había hecho el Ayuntamiento de Yaiza había sido copiar mi estrategia. Durante doce años ni el gobierno regional ni la corporación local habían hecho otra cosa que atrapar moscas al vuelo. Ahora

llegaba un peninsular, les decía lo que tenían que hacer y como premio lo desacreditaban en público, lo ignoraban y fingían al tiempo que la idea era de ellos y que ni al peninsular ni a los vecinos había que tomarlos en cuenta.

Y bien, éste era el aprecio que el Consejero Berriel hacía de los ciudadanos. Los consideraba como el hombre invisible. Habíamos estado conversando amigablemente en el Cabildo, le habíamos entregado el modelo, le habíamos pedido el certificado, pero por lo visto él no se acordaba. A saber de qué sería el bocadillo que se comió ese día. Quizá contenía alguna toxina cerebral.

Tuvimos que pedir al propio Cabildo una copia del certificado, porque el que había traído Berriel era para su amigo el alcalde y a los vecinos ni siquiera tuvo la deferencia de entregarles un ejemplar. Pero cuando aporté la copia para su unión al recurso de reposición sucedió algo simplemente maravilloso. José Fernández no sólo no estaba de acuerdo, sino que estaba tan sumamente en desacuerdo como para presentar al gobierno de Canarias un requerimiento de nulidad del documento, el paso previo para formular un posterior recurso contencioso administrativo. Estaba dispuesto a impugnar el papelito de Berriel ante los tribunales de justicia, tan en serio se lo había tomado.

El motivo era fastuoso: Berriel había querido no apoyar, sino entrar a matar de una sola estocada, pero la bestia tenía caparazón de galápago y la espada resbaló. El reglamento de costas no especifica la forma que debe adoptar la declaración de la autoridad urbanística, y al interesado le pareció que la más oportuna no era ni un informe ni un certificado, como hasta la fecha había

hecho todo el mundo, sino una resolución administrativa vinculante, que procedió a publicar con mucha prosopopeya en el Boletín Oficial de la Provincia.

La decisión era un desafío a Fernández. Tú quieres trastearme *mi* servidumbre de protección, pues ahora te vas a enterar. Yo no informo, yo *resuelvo*, que los terrenos eran suelo urbano. Yo no certifico, yo *decido*. Y además lo publico en el boletín, así que tienes que tragar y callar.

Aún me pregunto quién diablos le había dado a Berriel vela en aquel entierro, cuando lo único que le pedimos fue un certificado que nos podía haber firmado al día siguiente y habría quedado divinamente. Quién le mandaba meterse en esos jardines a donde nadie lo había llamado. Y sólo se me ocurre que lo que quería Berriel era entrar en el Golfo con la cara pintada de rojo y en olor de multitudes, como los cónsules que regresaban a Roma después de una sonora victoria militar cuando el Senado accedía a otorgarles un *triunfo*. Lo que quería era decir algo así como *dejadme solo, que esto lo resuelvo yo*. Aquí no hacen falta ni abogados, ni procuradores, ni vecinos, ni nada.

Pero lo único que consiguió fue engendrar el mayor lío judicial en el que me he visto nunca. Fernández cumplió su amenaza y llevó a Berriel y a su papelito ante los tribunales. Con esto nos encontramos disfrutando de dos pleitos paralelos e interdependientes entre sí, el del deslinde y el del papelito, de tal forma que la sentencia que se dictara en uno podía decidir indirectamente el resultado del otro, y no estoy seguro de tener la solución ni jurídica ni lógica

para este galimatías. De hecho, al escribir estas líneas, el Ayuntamiento de Yaiza ya ha tenido la mala sombra de perder no uno, sino dos recursos contencioso administrativos en los que pedía la servidumbre de protección de veinte metros. Y el único motivo es que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias aún no ha dictado sentencia sobre el papelito de Berriel, por lo que hoy por hoy carece de todo valor. El iluminado del alcalde seguramente no pensó en esto cuando conspiraba muy convencido con su amigo, el dichoso Consejero.

Nada más enterarme de lo que pasaba, reclamé por escrito a Berriel que nos diera aviso de la interposición del recurso contencioso administrativo interpuesto por Fernández, para personarnos como codemandados. La petición era innecesaria porque está ya prevista en la ley. Todo recurso de esta clase obliga a emplazar a los interesados en el expediente para que puedan reclamar el mantenimiento del acto administrativo con el carácter de codemandados. Pero ni la ley ni tampoco nuestra reclamación fue motivación suficiente para Berriel, que incluso así nunca remitió comunicación alguna a los vecinos. Tuvimos que montar guardia delante del Boletín Oficial para captar el edicto al vuelo. Yo no sé qué mosca le había picado a este hombre que tantísimo celo ponía en defender a los vecinos pero al mismo tiempo no quería ni oír hablar de ellos hasta el extremo de negarse a reconocerles derechos garantizados por la ley.

TODOS CIEGOS (INCLUSO YO)

Vi que estaba siendo víctima de una guerra entre políticos, que el asunto estaba absolutamente enquistado y que además se había transformado en una trampa procesal, porque con tanto esperar una solución benévola de Fernández se me habían pasado los plazos para hacer valer el silencio negativo en el recurso de reposición.

No sé cómo fue que se me encendió la bombilla, pero de alguna manera encontré una solución incluso más clara y directa que la que había estado manejando en todos aquellos meses. Sucedió un día de aquel invierno de 2007.

El plan de ordenación urbana de Yaiza se había elaborado en 1973, al amparo de la ley del suelo de 1956. Al poco, en 1976, se publicó el texto refundido de la ley del suelo, que introdujo un cambio de filosofía muy importante en cuanto a la calificación de los terrenos. Hasta esa fecha, sólo era suelo urbano el que estrictamente viniera así clasificado en el plan. A partir de entonces se otorgó valor jurídico a la realidad material, de forma que los terrenos que estaban consolidados por la edificación o contaban con los servicios urbanísticos eran suelo urbano, lo dijera el plan o no, y el planificador no tenía sino que reconocer esa realidad y asignarles cuanto antes la calificación.

Yo había leído en el Plan de Yaiza que el Golfo era ya un lugar donde existían edificaciones, y que si no se lo había calificado como suelo urbano era para evitar un crecimiento desordenado. Por eso la calificación fue de reserva urbana. Lo primero que se me ocurrió fue que una cosa así (reconocer que existe

núcleo de población y sin embargo no asignarle carácter de suelo urbano) no habría sido posible con la ley del suelo de 1976. Pero eso solamente podía significar una cosa: que el plan estaba afectado de ilegalidad sobrevenida. Al ponerme a investigar no solamente confirmé mi impresión, sino que me encontré con que lo que le pasaba al plan de Yaiza le pasaba también a muchos otros en toda España. El cambio en la ley había transformado de pronto en ilegales a montones de planes de ordenación que, reconociendo la realidad urbana, sin embargo no calificaban el terreno como tal suelo urbano, sino como suelo de reserva urbana.

Me quedé pasmado, además de complacido, al saber de la existencia de un decreto de adaptación de los planes de ordenación urbana anteriores a la ley del suelo que decía nada más y nada menos que en todos aquellos terrenos calificados en planes anteriores a la ley como suelo de *reserva urbana*, debían entenderse como *suelo urbano*. Así de fácil y así de simple. Y eso sólo significaba una cosa: que todos los titulares de prensa, todos los viajes de los políticos a Madrid, todas las reuniones de trabajo, todos los escritos de alegaciones, todo eso era innecesario porque el problema del Golfo, al menos la parte relativa a la servidumbre de protección, no existía. El deslinde había asignado al terreno una servidumbre de cien metros, y no de veinte, porque la calificación de los terrenos no era de suelo urbano, sino de suelo de reserva urbana. Pero las dos cosas eran lo mismo. El real decreto de adaptación tenía establecido que los terrenos calificados como de reserva urbana antes de 1976 son suelo urbano. Ni

siquiera exigía un instrumento de adaptación. La conversión era automática. Por tanto, nunca debió asignarse a la servidumbre de protección una anchura de cien metros. El problema del Golfo en realidad era ficticio y lo había sido siempre.

La cerrazón, la arrogancia y todo eso son censurables como estilo de discutir en torno a un problema. Pero es mucho peor inventarse un problema cuando no existe, y eso es lo que había hecho la Dirección General de Costas. Ni yo mismo había sido capaz de verlo en los primeros compases, pero ahora lo veía claro.

Corrí a ampliar al recurso de reposición para hacer valer estos argumentos. Le pasé una comunicación a D. José Fernández para advertirle de la nueva situación y esperé, no sin incertidumbre.

Fue muy amable. Me llamó a mi despacho. No por deferencia hacia mí, me parece, sino hacia Olivia Cedrés, la diputada del partido socialista que poco antes me había organizado una entrevista con él.

Me llamó para decirme que no, y ahí naufragó definitivamente mi ambición de una solución para el Golfo rápida, limpia y sin necesidad de pasar por los tribunales. El recurso de reposición fue desestimado y nos tuvimos que ir a contarle lo mismo a la Audiencia Nacional.

En aquella época no conocía yo aún suficientemente a D. José Fernández y su marcadísimo interés en despejar la servidumbre de protección. En los meses siguientes lo fui viendo. En Puerto Lajas, como ya he comentado, la anormal anchura del paseo parecía diseñada especialmente para quitar de en medio todo

lo construido en esa servidumbre. En Candelaria, los informes de José Fernández al PGU se empeñaban en ofrecer inversiones del Ministerio a cambio de que el Ayuntamiento derribara todos lo construido en la servidumbre de protección. No era un asunto de su competencia, pero por lo visto él tenía esa obsesión personal y para llevarla a buen fin le gustaba movilizar la influencia económica de su departamento. Cómo iba a decirme que sí en un asunto que minimizaba la extensión de la servidumbre, lo que sí era de su competencia. Ni la racionalidad ni la ley significaban por lo visto nada en aquella casa.

PROBLEMAS QUE NUNCA EXISTIERON

Mi experiencia en el Golfo es densa y plena de enseñanzas. Pero en este caso resulta deslumbrante como en ningún otro la capacidad de los políticos para generar problemas que no existen y para enredarlo todo, haciendo que el problema inexistente no sólo se vuelva existente, sino que crezca como un bizcocho impulsado por la levadura.

Nunca debió existir el problema porque José Fernández debió entender desde el primer día que en el Golfo reserva urbana era lo mismo que suelo urbano y por tanto debía haber asignado a la servidumbre de protección una anchura de veinte metros. Por si acaso le faltaban luces, los expertos en urbanismo del Gobierno de Canarias, al responder a las peticiones de información, deberían haber visto lo mismo y tendrían que haber informado que el Golfo tenía la calificación de suelo urbano ya antes de la entrada en vigor de la ley de costas.

Si la actitud de Fernández pudo deberse a su afán imperialista, la del Gobierno de Canarias es simple: se limitó a dejarse llevar por la rutina entre bostezos.

Haber formado un problema de la nada ya debería ser suficiente, pero no. Para eso estaba Berriel, dispuesto a una extraña cruzada que en apariencia era a favor del pueblo pero que en la práctica era a favor de sí mismo, ya que al pueblo no le daba ni los buenos días. El enredo que organizó este hombre fue de antología y aún colea como un ejemplo patético de lo que a mi juicio no hay que hacer. Y en cuanto al alcalde de Yaiza, el que había organizado aquella ridícula campaña de acoso contra mí, un buen día la policía entró en su domicilio y lo sacó esposado rumbo primero al calabozo y luego a la cárcel, donde imagino que continúa.

ⁱ Una meritoria excepción es la Demarcación de Costas de Cádiz, que, por lo que sé, se preocupó desde el principio, y mucho, de justificar el trazado de las nuevas líneas.

ⁱⁱ La Administración de justicia tiene siempre la función de revisar los actos administrativos, pero las decisiones sobre el derecho de propiedad son adoptadas en primer lugar por el Director General de Costas.

ⁱⁱⁱ Sólo en los casos en los que los particulares que construyeron habían comprado las parcelas al Estado.